



LA SOCIEDAD ARGENTINA EN LA POSPANDEMIA

radiografía del impacto del covid-19 sobre la
estructura social y el mercado de trabajo urbano

agustín salvia

santiago poy

jésica lorena pla

compiladores

sociología y política

LA SOCIEDAD ARGENTINA EN LA POSPANDEMIA

radiografía del impacto del covid-19 sobre la
estructura social y el mercado de trabajo urbano

agustín salvia
santiago poy
jésica lorena pla
compiladores

autores:

camila alfageme, nara alvarez, lucía bagini, danila borro,
eugenia dichiera, eduardo donza, maría noel fachal,
silvana galeano alfonso, gabriela gómez rojas, sofía jasín,
valentina ledda, diego masello, miguel oliva, maría albina pol,
manuel riveiro, ramiro robles, rodrigo segovia, martina zubarán

argentina

siglo xxi editores

www.sigloxxieditores.com.ar

capital intelectual

www.editorialcapitalintelectual.com.ar

guatemala 4824, c1425bup, buenos aires

méxico

siglo xxi editores

www.sigloxxieditores.com.mx

cerro del agua 248, romero de terrors, 04310, ciudad de méxico

españa

clave intelectual

www.claveintelectual.com

calle recaredo 3 - 28002, madrid

La sociedad argentina en la pospandemia / Agustín Salvia; Santiago Poy; Jéscica Lorena Pla [comps.].- 1ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2022.
240 p.; 23x16 cm.- (Sociología y Política)

ISBN 978-987-801-185-1

1. Sociología. 2. Sociedades. 3. Pandemias. I. Título.
CDD 303.490982

Este libro ha sido realizado con el apoyo financiero de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Agencia I+D+i), en el marco de los proyectos PICT 2016-4641, bajo la dirección del Dr. Agustín Salvia, Pisac Covid-19 n°14, bajo la dirección de la Dra. Leticia Muñiz Terra, y PICT 2018-3355, bajo la dirección de la Dra. Jéscica Lorena Pla

© 2022, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.

Diseño de cubierta: Ariana Jenik

ISBN 978-987-801-185-1

Impreso en Latingráfica // Rocamora 4161, Buenos Aires
en el mes de septiembre de 2022

Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina // Made in Argentina

Índice

Presentación	9
<i>Agustín Salvia, Santiago Poy, Jéscica Lorena Pla</i>	
Introducción. Coordenadas teórico-metodológicas para el estudio de las consecuencias sociales de la pandemia de covid-19 en la Argentina	13
<i>Santiago Poy, Jéscica Lorena Pla</i>	
1. Sobre el desarrollo fallido, los regímenes políticos y las políticas sociales	33
<i>Agustín Salvia</i>	
2. Heterogeneidad de la estructura ocupacional y calidad del empleo	57
<i>Eduardo Donza</i>	
3. Estructura ocupacional y calidad del empleo en las regiones urbanas	73
<i>María Albina Pol, Valentina Ledda, Lucía Bagini</i>	
4. Pobreza y desigualdad: el papel del mercado de trabajo y las políticas sociales	93
<i>Ramiro Robles, María Noel Fachal</i>	
5. Movilidad ocupacional: transiciones de la informalidad estructural y la pobreza entre 2018 y 2020	109
<i>Miguel Oliva, Diego Masello, Martina Zubarán, Rodrigo Alejandro Segovia, Nara Alvarez</i>	
6. Trabajadores pobres en tiempos de pandemia (2019-2021)	125
<i>Santiago Poy, Camila A. Alfageme</i>	

7. Dinámicas de la estructura de clases	141
<i>Jésica Lorena Pla, Manuel Riveiro, Eugenia Dichiera</i>	
8. El trabajo doméstico de varones y mujeres	159
<i>Gabriela Gómez Rojas, Danila Borro, Sofía Jasín, Manuel Riveiro</i>	
9. Clases sociales y brechas digitales	175
<i>Silvana Galeano Alfonso, Jésica Lorena Pla</i>	
Epílogo	193
<i>Agustín Salvia, Santiago Poy, Jésica Lorena Pla</i>	
Referencias	201
Acerca de las y los autores	235

Presentación

La irrupción de la pandemia de covid-19 en la Argentina a partir de marzo de 2020 abrió un escenario inédito. El desconocimiento acerca de las características del virus SARS-CoV-2, su gran capacidad de propagación y la inexistencia de estrategias ya sea de atención o de vacunación requirieron de duras medidas de aislamiento y distanciamiento humano que trastocaron las formas de trabajar, de estudiar, de organizar la vida cotidiana de los hogares y, prácticamente, todas las dimensiones de la vida social. A más de dos años de la instalación de ese escenario inédito, aún resulta una tarea compleja comprender cuáles han sido cambios coyunturales y cuáles fueron transformaciones duraderas que modificarán tanto nuestra imagen de la sociedad argentina como la propia realidad que atraviesan millones de personas a diario.

Todas las disciplinas científicas debieron adecuar sus agendas para tratar de aportar a una mejor comprensión de las consecuencias de este incierto escenario. En ese marco, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), junto con el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (Pisac), lanzaron la convocatoria a proyectos de investigación en ciencias sociales para generar conocimientos sobre los efectos de la pandemia en la sociedad argentina y para aventurar reflexiones acerca de la “pospandemia”.

Este libro presenta los resultados de un trabajo de investigación encarado por seis nodos universitarios de distintas regiones del país en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14 “Heterogeneidad estructural y desigualdades persistentes”. En este ámbito se conformó una subred de investigación cuantitativa integrada por investigadores e investigadoras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Catamarca, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Universidad Católica Argentina.

Durante más de un año, quienes participamos en la elaboración de este libro establecimos una dinámica de trabajo periódica bajo la mo-

dalidad de sesiones plenarias. Para llevar a cabo la tarea fue necesario no solo discutir la orientación teórica, sino también encarar problemas metodológicos y técnicos. El objetivo general de este libro es entonces analizar los impactos de la coyuntura abierta por el covid-19 en términos de desigualdad social. Para ello se toman como ejes de indagación los efectos sobre el mercado de trabajo, la pobreza y la desigualdad de ingresos y los cambios en la estructura social y la organización del trabajo doméstico y de cuidados. Se utilizó una metodología cuantitativa con información proveniente de encuestas de hogares bajo un enfoque teórico-metodológico coherente y compartido. Los capítulos terminaron de redactarse en diciembre de 2021.

Este libro se compone de una introducción, nueve capítulos y un breve epílogo. La introducción presenta algunas coordenadas teóricas que orientaron la investigación, información relevante sobre el contexto socioeconómico argentino antes y durante el período 2020-2021, el diseño metodológico y las características de las fuentes de datos. Los capítulos presentan resultados de investigación y reflexiones que aportan a una mejor comprensión del período analizado. El epílogo propone un balance de los resultados y ofrece algunas claves para pensar el tiempo por venir. Si bien el libro es un producto integral, los capítulos pueden leerse de manera independiente.

Agradecemos la confianza académica y el apoyo institucional de la Agencia I+D+i y de Pisac, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Católica Argentina y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Agradecemos en especial a Juan Ignacio Piovani, Leticia Muñoz Terra y Agustina Coloma, así como a todas aquellas personas que participaron en las distintas actividades académicas y seminarios que posibilitaron la realización de este libro. También agradecemos muy especialmente a los y las colegas que oficiaron de evaluadores anónimos y colaboraron de manera generosa con la calidad académica de esta publicación. A través de sus dictámenes, hicieron que los capítulos que componen la obra mejoren ostensiblemente, sean más claros en su redacción, en los objetivos plausibles de alcanzar y en la descripción de los resultados encontrados.

Este libro ha significado un esfuerzo colectivo en un contexto inédito y adverso, del cual no hemos estado exentos como personas. Ese esfuerzo implicó horas de trabajo en contextos de aislamiento y distanciamiento social, la reconversión de nuestros hogares en espacios de trabajo y la transformación de las rutinas familiares en sentidos imposibles de imaginar antes de la pandemia. Significó también “conocernos” y aprender a

trabajar en espacios virtuales, pues al momento la mayoría de los colegas con quienes compartimos esta aventura no nos conocíamos cara a cara (y en muchos casos seguimos sin hacerlo).

No sabemos si salimos mejores de esta pandemia, pero sí hemos emergido como un grupo de trabajo que ha puesto lo mejor de nuestras herramientas, trayectoria y experiencias para producir información rigurosa que aporte a la construcción de un conocimiento propio, retomando las tradiciones más ricas de las ciencias sociales latinoamericanas. La publicación de los resultados de este proyecto busca también poner en discusión nuestro enfoque, nuestras herramientas conceptuales y metodológicas y nuestras hipótesis, en una apuesta a la construcción de un conocimiento colectivo. Asimismo, la difusión de los resultados tiene por objeto visibilizar las principales problemáticas de nuestra sociedad, para que quienes diseñan e implementan políticas públicas puedan tomarlos como insumo y pensar intervenciones que permitan construir un país más justo e igualitario. Esos son los objetivos del Pisac que nos convocó en primera instancia. Esperamos que los aportes de este libro sean leídos en ese sentido.

AGUSTÍN SALVIA, SANTIAGO POY, JÉSICA LORENA PLA
Buenos Aires, abril de 2022

Introducción

Coordenadas teórico-metodológicas para el estudio de las consecuencias sociales de la pandemia de covid-19 en la Argentina

Santiago Poy, Jélica Lorena Pla

Si bien la pandemia tiene un sustrato biológico y ha adquirido un carácter global, pocas dudas caben acerca de que la forma en la cual los países la transitaron –y, al parecer, la seguirán transitando– no puede desligarse de sus particulares configuraciones históricas y sociales. En América Latina se han observado nuevos retrocesos en un corto período de tiempo en materia de bienestar social y económico (Cepal, 2021c). De acuerdo con las evidencias disponibles, el impacto sin precedentes de las medidas de restricción sobre la dinámica económica y el funcionamiento del mercado de trabajo fue el principal canal de transmisión de esta situación crítica (Maurizio, 2021). En el caso argentino, el escenario abierto por la pandemia de covid-19 ha profundizado las preocupaciones sobre los problemas vinculados a la pobreza, la marginalidad y las desigualdades sociales, que históricamente se han asentado sobre desequilibrios económicos estructurales.

El libro que aquí presentamos sintetiza los aportes de investigadores e investigadoras de distintas regiones de la Argentina que procuraron analizar en tiempo real los efectos de la irrupción de la pandemia de covid-19 sobre la desigualdad, a partir de las herramientas de la estadística social y el uso de dos encuestas de hogares: la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).

Esta introducción plantea una serie de claves teórico-metodológicas que organizaron de manera general las discusiones y el plan de trabajo, y ofrece así un marco contextual en el que inscribir los capítulos que componen el libro. El supuesto que organiza estas contribuciones es que la desigualdad socioeconómica se ha constituido en una matriz estructural del sistema social argentino en las últimas décadas, con consecuencias en términos de integración productiva, social y territorial de la fuerza de trabajo, y que el ciclo covid-19 implicó una acentuación de los desequilibrios preexistentes.

PATRONES ESTRUCTURALES DE LA DESIGUALDAD

A poco de iniciarse la pandemia de covid-19, algunos autores postulaban que el virus sería un factor “igualador” (Milanovic, 2020). A partir de las lecciones de otras pandemias y grandes guerras, se conjeturaba que la enfermedad provocada por el nuevo SARS-CoV-2 podría propiciar procesos de igualdad económica en el largo plazo. Sin embargo, esta impresión fue perdiendo sustento de manera relativamente rápida (Bull y Robles Rivera, 2020). Incluso en términos sanitarios está claro que las probabilidades de contagio y de muerte han sido muy disímiles entre sectores, clases sociales y regiones (Alsan, Chandra y Simon, 2021; Benitez, Courtemanche y Yelowitz, 2020; Canales, 2021), y posteriormente la evolución de las campañas de vacunación evidenció fuertes disparidades entre países y regiones de diverso grado de desarrollo.

América Latina ha sido la región más golpeada por la pandemia de covid-19 en múltiples dimensiones. De acuerdo con las cifras de *Our World in Data* y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en diciembre de 2021 la región concentraba las mayores tasas de fallecidos por millón de habitantes y el 28,4% del total de muertos por covid-19 del mundo, con solo el 8,4% de la población mundial. En términos económicos, mientras que en 2020 el producto bruto interno (PBI) mundial se contrajo 3,3%, el PBI regional se redujo casi el doble (-7%) (FMI, 2021), lo que reveló la fragilidad estructural de la región con respecto a los flujos comerciales y financieros globales. Por último, en materia laboral, las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo indican que la región latinoamericana es la que más empleo perdió entre 2019 y 2020 (-9,5%) en comparación con otras regiones con distintas configuraciones institucionales de sus mercados laborales, como Europa (-2%) o América del Norte (-5,8%).¹

El aporte de las ciencias sociales en este peculiar contexto tiene que ver con la posibilidad de arrojar luz sobre los mecanismos que explican estos disímiles impactos de la pandemia en relación con las configuraciones estructurales e institucionales específicas de nuestros países. En este sentido, en este libro se propone articular los procesos de desigualdad social emergentes de la pandemia en nuestros países con los fuertes clivajes socioeconómicos, productivos y tecnológicos que se expresan en términos de

¹ La información epidemiológica está disponible en: <ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer>, mientras que los datos laborales provienen de <ilo.org/wesodata>.

concentración de rentas, recursos, poder y privilegios. Recogemos la tradición del estructuralismo latinoamericano, que propone vincular los desequilibrios económicos y productivos con la dinámica socioocupacional y los modelos de bienestar. Siguiendo este enfoque, el patrón de desarrollo de los países periféricos se caracteriza por la coexistencia de estratos de productividad muy diferenciados y la insuficiente capacidad de los sectores de mayor productividad para absorber al conjunto de la fuerza laboral disponible (Bárcena y Prado, 2016; Pinto, 1976; Prebisch, 1981).

Esta “heterogeneidad estructural” propicia desigualdades socioeconómicas a partir de la fragmentación estructural que opera sobre los mercados de trabajo. La existencia de una heterogeneidad ocupacional extendida en los países periféricos expresa las condiciones productivas típicas del subdesarrollo y se manifiesta en la configuración de situaciones laborales muy disímiles en materia de productividad, calidad y remuneraciones. Entre los rasgos arquetípicos de esta configuración se encuentra la prevalencia que mantiene el sector de microunidades o informal de muy baja productividad, las actividades de autoempleo de baja calificación y las actividades informales de subsistencia. A los vectores tradicionales de fragmentación de los mercados laborales periféricos se suman los cambios económicos provocados por la globalización y la deslocalización productiva, que alteraron las relaciones laborales y promovieron la inseguridad laboral y la precarización del empleo, en particular en economías con baja competitividad sistémica. En síntesis, la perspectiva estructuralista subraya la reproducción de una segmentación estructural del mercado de trabajo y la cristalización de procesos de exclusión laboral, los cuales se acentúan frente a dinámicas de bajo crecimiento o crisis en el capitalismo periférico.

En esta clave teórica, la nueva crisis generada por la irrupción del covid-19 representaría para el caso argentino una acentuación de los desequilibrios sociolaborales preexistentes, con consecuencias en términos de cristalización de trayectorias de marginalidad sociolaboral.

Desde esta mirada, es posible argumentar que los procesos de heterogeneidad ocupacional se imbrican con las condiciones de vida y el acceso al bienestar por parte de trabajadores y hogares. La existencia de fuerza de trabajo inserta en estratos de productividad muy diferenciados es determinante de la matriz de desigualdad socioeconómica, al tiempo que el amplio volumen de empleo en actividades de muy baja productividad se liga con la persistencia de la pobreza (Salvia, 2012). Dichos efectos están mediados por los comportamientos sociodemográficos, reproductivos y laborales de los grupos domésticos en los que vive la población ocupada (Oliveira y Salles, 2000; Torrado, 2006 [1982]) y por una trama más am-

plia en la que se intersecan el Estado, las relaciones de mercado y la comunidad (Esping-Andersen, 1999; Filgueira y Kaztman, 1999; Martínez Franzoni, 2008b). Por lo tanto, es en esta compleja red de interacciones que proponemos inscribir el análisis de las desigualdades generadas por el covid-19 en la estructura social.

La fragmentación económico-ocupacional se relaciona con otras dimensiones de la desigualdad social. La segmentación estructural de los mercados de trabajo, derivada de la heterogeneidad productiva, se articula con las brechas de género en el trabajo remunerado y no remunerado (Bárcena y Prado, 2016). Los procesos de segregación ocupacional por género suelen expresarse en la existencia de ramas o sectores altamente feminizados que concentran peores condiciones laborales y de ingresos. Es decir que los procesos de segregación que experimentan las mujeres se agravan en el contexto de mercados de trabajo heterogéneos. Específicamente, las mujeres tienen una mayor probabilidad de tener ocupaciones inestables, precarias y de baja intensidad horaria. Pero estas desigualdades se ven profundizadas, además, por la escasa oferta de sistemas de cuidados que posibiliten una mayor participación laboral femenina en actividades remuneradas.

Otra dimensión relevante de análisis se refiere a las disparidades regionales. La concentración productiva y tecnológica típica de las estructuras económicas periféricas tiene consecuencias en el plano territorial. Las disparidades se expresan en la relevancia que adquiere la cuestión territorial para explicar el acceso al bienestar, a la calidad de los empleos y al progreso material. En América Latina, las diferencias de PBI per cápita entre regiones son muy superiores a las que existen en los países desarrollados (Cepal, 2016b: 62), de manera que el lugar de residencia se torna un aspecto estructurante de la pauta de desigualdad. En cierto punto, la heterogeneidad territorial reproduce la heterogeneidad estructural, en tanto que sistemas económicos territorialmente situados capturan o concentran el progreso tecnológico y la productividad, mientras que otros sistemas son dependientes de aquellos o bien no tienen capacidad para promover y dinamizar el cambio tecnológico.

El aporte característico de este libro es presentar información rigurosa que analice los modos en que estos procesos estructurales se han expresado en el marco de la crisis provocada por el covid-19. El conjunto de capítulos que lo componen plantea que las desigualdades sociales estructurales que caracterizan al capitalismo periférico argentino en la actual etapa de globalización y estancamiento constituyen una matriz a través de la cual se procesó la irrupción de la pandemia y las medidas restrictivas implementadas.

Una tesis general que atraviesa a estas contribuciones es, por consiguiente, que el ciclo covid-19 tuvo efectos diferenciados que acentuaron la inequidad de corto y mediano plazo ligada a las condiciones de heterogeneidad estructural, segmentación laboral, las brechas territoriales y de género, empobreció de forma selectiva las capacidades de reproducción social de los grupos más vulnerables y propició, por lo tanto, un nuevo ciclo de acumulación de desventajas. Las contribuciones que reúne este libro evalúan los impactos de esta coyuntura inédita en términos de desigualdad social, y procuran identificar nuevos clivajes que marcarán el tránsito hacia la pospandemia.

PANDEMIA DE COVID-19 EN LA ARGENTINA: LA CRISIS DENTRO DE LA CRISIS

Como señalamos anteriormente, la expansión por todo el planeta del covid-19 en diciembre de 2019 instaló una nueva realidad económica y social.² La rápida velocidad de los contagios y del número de fallecidos obligó a tomar inéditas medidas de prevención y aislamiento. Estas medidas permitieron disminuir la velocidad de los contagios y limitar el colapso de los sistemas sanitarios, pero paralizaron la actividad económica. A partir de 2021, la vacunación masiva posibilitó una mayor circulación humana, lo cual viabilizó la recuperación de la economía mundial en 5,9% (FMI, 2021).³

Ante los primeros casos de covid-19 el gobierno argentino decretó la “emergencia sanitaria” el 12 de marzo de 2020 (DNU 260/2020) y el 20 de marzo puso en vigencia el “aislamiento social preventivo y obligatorio” (ASPO) (DNU 297/2020). Este período de confinamiento incluyó el cierre de todo tipo de actividades y la prohibición de la circulación, del que solo quedó eximido un conjunto de personas definidas como “esenciales” (particularmente quienes desempeñan sus tareas en activi-

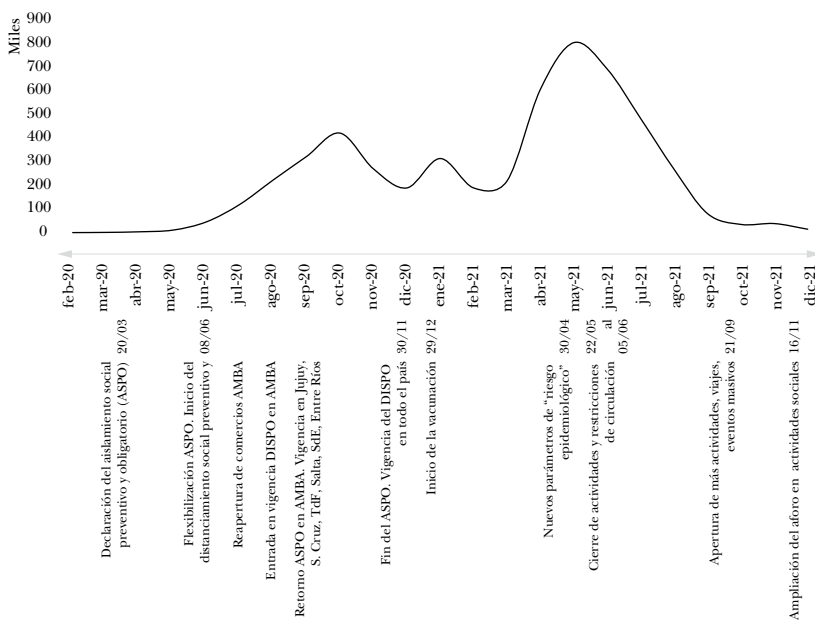
2 El covid-19 fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.

3 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 55% de la población mundial estaba vacunada contra el covid-19 con al menos una dosis en diciembre de 2021. Sin embargo, persistían grandes desigualdades: mientras que más del 70% de la población estaba vacunada en países del Norte Global (como los Estados Unidos, Canadá o Alemania), en África se registraban tasas inferiores al 10%.

dades tales como servicios de salud, cuidados, transporte y comunicaciones, así como las fuerzas de seguridad).

A partir de entonces, se sucedieron medidas de restricción a la circulación con distinto alcance territorial, que tuvieron efectos sociales y económicos dispares. El 8 de junio, se introdujo la figura del “distanciamiento social preventivo y obligatorio” (DISPO) (DNU 520/2020), que comenzó a flexibilizar las restricciones. Estas medidas no rigieron sobre todo el territorio nacional, y algunos aglomerados como el Área Metropolitana de Buenos Aires, Bariloche y General Roca (Río Negro), San Fernando (Chaco), Rawson (Chubut) y la ciudad de Córdoba permanecieron bajo el ASPO. Recién en noviembre de 2020, el DISPO se extendió a casi todo el país (gráfico I.1). El inicio de la campaña nacional de vacunación a partir de diciembre de 2020 hizo posible una creciente flexibilización de las medidas implementadas, si bien fue necesario reintroducir severas restricciones entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 2021 para frenar una nueva ola de contagios.

Gráfico I.1. Número de casos confirmados de covid-19 por mes y medidas de restricción implementadas



Fuente: Elaboración propia a partir de Organización Mundial de la Salud, Boletín Oficial y diarios *La Nación* y *Clarín*.

El efecto más sustantivo de la irrupción de la pandemia en términos económicos fue la reducción del producto bruto interno (PBI) de 9,9% en 2020. La caída del PBI se concentró sobre todo en el segundo y el tercer trimestre del año (-19% y -10,1%, respectivamente) (Indec, 2021b). La tasa de actividad tuvo una inédita caída de 8 puntos porcentuales y se perdieron más de 2,5 millones de empleos, y se registró un índice de recuperación recién en el cuarto trimestre del año (Indec, 2020b). La tasa de desocupación se incrementó de forma más moderada (pasó de 10,4% a 13,1% entre el primer y el segundo trimestre de 2020), lo que evidenció que muchos trabajadores pasaron directamente a la inactividad.⁴ A partir de 2021 se apreciaron indicios de fuerte recuperación: de acuerdo con cifras preliminares del Indec, al tercer trimestre la economía crecía 9,8% interanual en promedio (Indec, 2021c) y se recuperaban las tasas de empleo y de actividad (Indec, 2021b).

En el caso argentino, el escenario socioeconómico abierto por la pandemia de covid-19 constituye una crisis dentro de la crisis más general que venía transitando el régimen de acumulación a partir de la segunda década de los 2000. Tras la salida de la convertibilidad, en un contexto mundial favorable por la mejora de los términos de intercambio (derivada del *boom* de las *commodities*), la economía argentina se expandió de forma sostenida, se redujo el desempleo, la pobreza y la desigualdad de ingresos. Sin que se operase un cambio estructural en el perfil productivo del país (Castells y Schorr, 2015), a partir de 2012 reapareció la “restricción externa” (es decir, la insuficiencia de divisas para sostener el ritmo de crecimiento), debido a la contracción de exportaciones por la reversión de los términos de intercambio y por un deterioro de la balanza energética. Hasta 2015, la política económica estuvo dirigida a imponer regulaciones financieras en el acceso a divisas para limitar este desequilibrio externo. A partir de 2016, en cambio, se liberalizó el sector externo, lo que redundó en un nuevo proceso de valorización financiera que no implicó un ciclo de acumulación sostenible (Wainer, 2021).

De esta forma, el ciclo de estancamiento tuvo episodios cortos de crecimiento y recesión entre 2013 y 2017, hasta que, en 2018, se trastocó en cri-

4 Se trata de tendencias similares a las que se verificaron en el resto de América Latina, con mayor o menor grado de intensidad (Acevedo y otros, 2021; Maurizio, 2021).

sis abierta y general. A partir del segundo trimestre de 2018, el PBI argentino se contrajo de manera sistemática (2,5% en 2018 y 2,2% en 2019). La fuerte retracción económica de los últimos años estuvo acompañada de la devaluación del peso y de una aceleración de la inflación, que pasó de 23,3% a 51,2% interanual en el cuarto trimestre de 2017 y 2019, respectivamente. En 2020 y con fuerte caída del PBI la inflación fue de 36,1%, pero ya en 2021 se ubicó otra vez en 50,9%. Y, por último, la pandemia de covid-19 encontró al país en una frágil situación sociolaboral, caracterizada por un estancamiento en la creación de empleo y por un deterioro de la calidad del empleo existente. En los últimos años se consolidó una caída del poder adquisitivo, profundizada a partir del segundo trimestre de 2018. Si bien se aprecia una leve recuperación de los salarios en el primer trimestre de 2020, estos eran, en promedio, 12,9% inferiores que los de similar período de 2017 (y 14,1% más bajos que en 2010).

Cuadro I.1. Medidas de política social, laborales y socioeconómicas ante la pandemia de covid-19

Nombre de la medida	Instrumentación	Fecha
Medidas de protección social		
Refuerzos en la política alimentaria, planes sociales y AUH	DA 443/2020	3/2020
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)	DCTO 310/2020	3/2020
Bonos a jubilados y pensionados y titulares AUH	DCTO 309/2020	3/2020
Refuerzo Tarjeta Alimentar	s.d.	4/2020
Medidas productivas y laborales		
Créditos a MiPyMEs para el pago de sueldos	Comunicación BCRA 6937	3/2020
Prórroga de vencimientos de deudas para MiPyMEs	Decreto 316/2020	3/2020
Prohibición de despidos y suspensiones	Decreto 329/2020	3/2020
Fondo de garantías para la MiPyMEs	Decreto 326/2020	3/2020
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción	Decreto 332/2020 y 376/2020	4/2020
Créditos a tasa 0% para trabajadores independientes	DA 1133/2020	6/2020
Créditos a tasa subsidiada empresas de menos de 800 empleados	Resol. 4831/2020	10/2020
Otras medidas socioeconómicas		
Suspensión temporaria del corte de servicios públicos por falta de pago	DNU 311/2020 y 426/2020	3/2020
Pagos extraordinarios al personal sanitario y de seguridad	DNU 315/2020 y 318/2020	3/2020
Congelamiento de alquileres y prohibición de desalojos	DNU 320/2020	3/2020
Congelamiento de cuotas hipotecarias y suspensión de ejecuciones	DNU 319/2020	3/2020
Extensión del período de gracia de créditos Anses	Resol. Anses 1/2020	4/2020
Programa "Previjaje"	Resol. 305/2021	10/2020
Aporte Solidario y Extraordinario (Grandes fortunas)	Ley 27 605	12/2020

Fuente: Adaptado de Salvia y Poy (2020).

El gobierno argentino implementó una serie de medidas dirigidas a atender el efecto económico de las restricciones (cuadro I.1). Entre las medidas de política social más tempranas, se dispusieron refuerzos presupuestarios para comedores escolares y comunitarios, un bono especial para jubilados y pensionados y para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) (el equivalente a una asignación) y un refuerzo especial de la Tarjeta Alimentar (de monto variable según la composición familiar). La medida de protección social más relevante implementada por el gobierno fue el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El IFE fue un pago de \$ 10 000⁵ dirigido a personas de 18 a 65 años desocupadas, ocupadas en la economía informal, o monotributistas de las categorías más bajas (A y B). En una primera etapa, 2,4 millones de personas recibieron el pago de forma automática por ser beneficiarios de la AUH (IFE 1); en una segunda etapa, 5,5 millones de personas fueron seleccionadas para cobrarlo según el cumplimiento de los requisitos estipulados (IFE 2). Se estima que, en total, cobraron el IFE unos 9 millones de personas (Anses, 2020).

Por último, el gobierno implementó medidas dirigidas al mercado de trabajo y la actividad productiva. Se prohibieron los despidos y las suspensiones y hubo iniciativas dirigidas a estimular el consumo, créditos para las microempresas y pymes para el pago de sueldos y distintas facilidades fiscales. La iniciativa más relevante fue el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El programa priorizó a las empresas más afectadas por las consecuencias del ASPO, e incluyó la postergación del pago de contribuciones patronales y su reducción de hasta el 95% durante el mes de abril (con posibilidad de prórroga), así como la introducción de un “salario complementario”. Mediante este instrumento, el Estado se hizo cargo de hasta el 50% del salario neto de los trabajadores, hasta un máximo de dos salarios mínimos. Por otra parte, el Programa ATP también incluyó créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos y una ampliación de la prestación por desempleo.

5 Al momento de la aplicación del IFE significaba alrededor de 150 dólares al tipo de cambio oficial.

FUENTES DE DATOS

En términos metodológicos, los trabajos que se presentan en este libro responden a un enfoque global compartido. Como ya se dijo, se trabajó con dos fuentes de datos: la EPH del Indec y la EDSA del ODSA-UCA (con módulos específicamente relevados para este proyecto de investigación).

La EPH es un programa de producción de información estadística periódica que brinda datos sobre actividad, ocupación, ingresos y condiciones de vida a nivel de personas y hogares residentes en 31 aglomerados urbanos (representativos de alrededor del 62% de la población del país). Si bien la EPH mantuvo su esquema de relevamiento trimestral durante el período de ASPO y DISPO, se cambió la forma del relevamiento, que pasó de la modalidad presencial a la telefónica. Ello acarreó sesgos asociados al modo de administración del cuestionario, pero también otros vinculados con el muestreo. Con este propósito, el Indec realizó correcciones en la forma tradicional de cálculo de los factores de expansión, tomando en cuenta la propensión a responder el cuestionario (Indec, 2020b). El organismo indicó que “el cambio en el modo de recolección de la información en las encuestas puede traer consigo sesgos en las estimaciones [...] [y que] las estimaciones no son estrictamente comparables con las de trimestres anteriores” (2020: 20).

En esta investigación resultó central el carácter temporal del diseño. Al respecto, se apeló a dos estrategias. Por un lado, se implementó un diseño de sección cruzada a partir de los microdatos de la EPH correspondientes a todos los trimestres comprendidos entre 2019 y 2021 que se encontraban disponibles al momento de elaborarse los capítulos en su versión final. Por otro lado, se utilizó –en algunos casos– un diseño de tipo longitudinal, explotando el panel de la EPH. La EPH tiene una estructura de solapamiento muestral que permite seguir a individuos y hogares durante un año y medio (Indec, 2003). Para este estudio, se construyeron paneles de individuos que fueron entrevistados con un año de diferencia. Esta aproximación se empleó para el estudio de cambios ocupacionales de corto plazo y transiciones hacia la pobreza.

Adicionalmente, se utilizaron los bloques de preguntas sobre participación en las tareas del hogar y sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación. El bloque de preguntas sobre la participación de las tareas en el hogar de sus diferentes miembros, así como de otros ajenos a él, consta de dos preguntas que indagan sobre la realización y la ayuda en las tareas del hogar. Esta fuente tiene sus limitaciones y sus ventajas. En cuanto a las limitaciones, se trata de indicadores que descansan

en la percepción de cada persona encuestada y no dan cuenta del número de horas, el tipo de tareas desarrolladas, ni de aspectos ideológicos o valorativos sobre ellas. Entre las ventajas, destaca que se trata de una pregunta relevada periódicamente desde 2003 en la principal encuesta a hogares del país, por lo que constituye una fuente imprescindible dada la escasez (y nula periodicidad) de encuestas de uso del tiempo. Además, a diferencia de buena parte de las encuestas de uso del tiempo argentinas, permite medir clases socioocupacionales y ponerlas en relación con las otras variables de la EPH.

El módulo de acceso y uso de tecnologías de la información y la comunicación, por su parte, se aplica los cuartos trimestres de cada año y releva indicadores sobre el acceso a computadora e internet en el hogar, así como sobre el uso de computadora, internet y teléfono móvil de las personas mayores de cuatro años.

Como ya señalamos, la investigación contó también con una fuente primaria, la EDSA. Para este libro se dispuso de la EDSA correspondiente a tres relevamientos: julio-octubre de 2019, 2020 y 2021. La EDSA es una encuesta multipropósito aplicada a una muestra de 5700 hogares en áreas urbanas de más de 80 000 habitantes, con información correspondiente a tres unidades de análisis: hogares, población total y población económicamente activa.⁶ Esta encuesta tiene un diseño polietápico probabilístico estratificado. Un primer criterio de estratificación está definido por los dominios de análisis de acuerdo con la región y el tamaño poblacional de los aglomerados incluidos en la muestra. El segundo criterio consiste en la elaboración de un índice socioeconómico simple (a partir de información del censo 2010 a nivel de radio censal) que se organiza en deciles y se resume en seis estratos (A, que equivale al decil 10; B, deciles 8 y 9; C, deciles 6 y 7; D, deciles 4 y 5; E, deciles 2 y 3; y F, decil 1), sobre los cuales se selecciona una muestra aleatoria sistemática de radios censales. En total se seleccionan 836 radios (PM), sobre los cuales se relevan 5016 hogares totales. Esta muestra de hogares se distribuye de acuerdo con afijación no proporcional y el error global es inferior a ± 3 , con un nivel de confianza de 95% bajo la hipótesis de máxima dispersión (p y $q=0.5$), teniendo en cuenta un efecto de diseño igual a 2. Para mejorar la precisión en ambos extremos socioeconómicos, se asigna a este

6 Los aglomerados incluidos son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Conurbano, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, Mar del Plata, Salta, Paraná, Resistencia, San Juan, Neuquén, Zárate, Goya, La Rioja, San Rafael, Comodoro Rivadavia y Ushuaia-Río Grande.

diseño una sobremuestra de 124 puntos de relevamiento y, a partir de información censal, se identifican los radios censales más pobres y más ricos y se seleccionan 744 hogares adicionales.⁷

Al igual que en el caso de la EPH, el relevamiento de la EDSA debió adaptarse a las condiciones impuestas por el ASPO. Durante 2020, se realizó íntegramente de manera telefónica.⁸ Durante 2021, por su parte, el relevamiento contempló modos mixtos de implementación. Asimismo, tanto en 2020 como en 2021 el relevamiento de la EDSA se aplicó sobre una muestra panel. Esto ha permitido disponer de información transversal y longitudinal. Al respecto, se cuenta con dos paneles anuales de hogares y de respondientes mayores de 18 años (uno para 2019-2020 y otro para 2020-2021). Estos paneles incluyen alrededor de 1500 observaciones cada uno, con información sobre empleo, bienestar y condiciones de vida.

Las bases de microdatos de la EDSA se encuentran disponibles, de manera pública, para su utilización por parte de la comunidad académica. Se trata de tres bases de datos, correspondientes a las unidades de análisis relevadas. Asimismo, se incluyen materiales adicionales como el diseño de registro y una síntesis metodológica. Cabe destacar que este es un producto del proyecto que enmarca esta publicación.

PRINCIPALES VARIABLES DE ANÁLISIS

Cada uno de los capítulos que conforman el libro plantea marcos analíticos específicos que se expresan en la construcción de variables complejas e indicadores particulares. Sin embargo, el enfoque global del proyecto otorga prioridad a una serie de constructos teóricos que se abordaron de manera transversal en las distintas contribuciones presentadas.

7 Como en cualquier encuesta de hogares, se trata de una etapa de posstratificación que considera las diferencias entre la muestra observada y la esperada de acuerdo con los atributos sociodemográficos de los hogares y/o las personas que componen los hogares seleccionados. El procedimiento que se utiliza se denomina “calibración por marginales fijos” y se realiza para la base del total de personas, de respondientes y de hogares. En cuanto a la estimación de errores, la EDSA estima las varianzas mediante la técnica de linealización por series de Taylor.

8 Se encuentran bajo estudio los sesgos que este cambio en el relevamiento podría haber introducido. De todos modos, se sugiere considerar con reservas la información proporcionada en términos de comparabilidad con las series precedentes (Salvia, Bonfiglio y Robles, 2021).

Una forma aproximada de medir las condiciones de heterogeneidad estructural del sistema ocupacional implica considerar la forma de inserción económico-ocupacional de la fuerza de trabajo en términos de categorías y sectores y los diferentes tipos de ingresos monetarios según fuentes (Salvia, 2012; Salvia y Vera, 2013). Utilizamos una tipología de inserciones económico-ocupacionales empleada en las investigaciones que han venido desarrollando el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social (PCEyDS-UBA) y el Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), dirigidos por Agustín Salvia. Esta tipología da prioridad a la pertenencia a diferentes “estratos de productividad” –aspecto central en esta perspectiva–, a las características de las unidades productivas en que se inserta la fuerza de trabajo y a la “categoría ocupacional” como aproximación a las diferentes modalidades que asumen las relaciones sociales de producción (cuadro I.2). En esta tipología se considera la pertenencia a diferentes *estratos de productividad* (diferenciando entre microestablecimientos, empresas medianas y grandes y establecimientos del sector público); la *calificación de la tarea* (distinguiendo entre profesionales y no profesionales); y la *categoría ocupacional* (lo que delimita asalariados de empleadores y cuentapropistas).

Como aproximación a la calidad del empleo se distingue entre puestos del segmento primario o “regulado” y empleos del segmento secundario o “no regulado”. Operativamente, el *segmento regulado* incluye a los asalariados con trabajo permanente e integrados a la seguridad social (con descuento jubilatorio), a los patrones o empleadores que trabajan en esa ocupación hace más de tres meses, y a los trabajadores por cuenta propia con más de tres meses de antigüedad en la ocupación que trabajaron más de 35 horas y no buscaron trabajar más horas.⁹ El *segmento no regulado* incluye a los asalariados no integrados a la seguridad social o sin trabajo permanente, a los trabajadores independientes que tienen ocupaciones inestables (menos de tres meses en su ocupación o que están subocupados y desean trabajar más horas). Este segmento incluye también a trabajadores familiares sin salario y a todos los ocupados cuyo ingreso de la ocupación principal es inferior a la línea de pobreza individual (Salvia, Vera y Poy, 2015).

9 Por limitaciones de la EPH, que no recoge la realización de contribuciones por parte de los trabajadores independientes, se utiliza un criterio de horas trabajadas y estabilidad ocupacional como *proxy* de la calidad de la inserción. En el caso de la EDSA, se utiliza una variable de calidad del empleo cuya operacionalización se presenta en Donza, Poy y Salvia (2019).

Cuadro I.2. Matriz económico-ocupacional: tipos de inserción económico-ocupacional de la fuerza de trabajo y su definición operacional

Sector	Inserción económico-ocupacional		Definición operativa
Formal privado Actividades laborales de elevada productividad que conforman el mercado más concentrado o estructurado.	No asalariados del sector formal privado	Patrones y empleadores de establecimientos formales	Empleadores en establecimientos de más de 5 ocupados o en microestablecimientos (hasta 5 ocupados) pero con calificación profesional
		Profesionales independientes	Trabajadores por cuenta propia con calificación profesional
	Asalariados del sector formal privado	Asalariados de establecimientos formales	Asalariados en establecimientos privados de más de 5 trabajadores
Público Actividades vinculadas al desarrollo de la función estatal en sus distintos niveles de gestión.	Empleados del sector público	Empleados del sector público	Asalariados en establecimientos del sector público
Microinformal Actividades laborales de baja productividad, fácil entrada, alta rotación de trabajadores, inestabilidad y escasa vinculación con mercados estructurados.	No asalariados del sector microinformal	Patrones de microempresas	Empleadores en establecimientos de hasta 5 ocupados sin calificación profesional
		Trabajadores por cuenta propia (TCP) informales	Trabajadores por cuenta propia sin calificación profesional
	Asalariados del sector microinformal	Asalariados de microempresas	Asalariados en establecimientos de hasta 5 trabajadores
		Trabajadoras del servicio doméstico	Trabajadoras que prestan servicio doméstico en hogares particulares
Desocupación y programas de empleo	Desocupados y beneficiarios de programas de empleo	Beneficiarios de programas de empleo	Ocupados cuya ocupación principal es un plan de empleo
		Desocupados	Personas que declaran buscar activamente un empleo

Fuente: Adaptado de Salvia y Vera (2013).

Una aproximación complementaria a las desigualdades estructurales se realiza a partir del análisis de la estructura de clases sociales. Los debates teóricos y metodológicos en torno a la operacionalización de la clase social se asientan en tres corrientes: los neomarxistas, los neoweberianos y los funcionalistas, en cada una de las cuales se propone una operacionalización específica. Sin embargo, aun frente a las diferencias teóricas, la mayoría de los esquemas de clase se basan en la ocupación, aunque

luego consideren otras variables que entran en juego para la elaboración final de los esquemas clasificatorios (Francés García, 2009).

Este debate ha estado en los orígenes de las ciencias sociales argentinas, y ha atravesado las discusiones que se dieron a nivel internacional sobre la medición de las clases sociales, los modelos, grados de desarrollo y las dinámicas de acumulación del capitalismo global. Se distinguen entre los trabajos germinales los aportes de Germani (1963), De Ípola y Torrado (1976) y Torrado (1992), Acosta y Jorrat (1991) y Sautú (1992). Los aportes nacionales han estado destinados a discutir la especificidad del desarrollo capitalista en la Argentina y, por ende, las dinámicas propias de la estructura social. Sin desmerecer la importancia de estos trabajos, en los capítulos que parten de una perspectiva de la clase social, se utiliza el esquema propuesto por Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Erikson y Goldthorpe, 1992). El uso del esquema EGP se basó no tanto en su adecuación al contexto latinoamericano, sino en su potencial comparabilidad internacional (Torche, 2014), así como en una mayor capacidad de difusión de los resultados en regiones o países no familiarizados con los debates y las especificidades de los esquemas locales.¹⁰

En este esquema, las clases distinguen posiciones dentro de los mercados de trabajo y de las unidades de producción en términos de las relaciones de empleo que involucran. En particular, pretenden dar cuenta de dos distinciones: entre aquellos que poseen los medios de producción y aquellos que no y, entre estos últimos, en cuanto al tipo de relación con su empleador. De este modo, la diferencia central radica entre posiciones que son reguladas por un contrato de trabajo y aquellas que se regulan por una relación de “servicio”. En la primera, hay un intercambio específico de salarios por un esfuerzo y el trabajador es supervisado en forma relativamente cercana; mientras que la relación de servicio involucra un intercambio más difuso. Las dimensiones que permiten diferenciar un tipo de relación de otro son el grado de calificación, o *expertise*, y la dificultad de monitoreo de la actividad. La relación de servicios involucra incentivos hacia los empleados: seguridad laboral, oportunidades de carrera, etc.

10 Sin embargo, creemos necesario señalar que han sido identificadas ciertas dificultades de este esquema para capturar las particularidades de la estructura social de la región (Solís, Chávez Molina y Cobos, 2020). Recientemente hemos encarado un examen de la validez del esquema para analizar las estructuras sociales latinoamericanas –con aplicación al caso argentino–, a partir de examinarlo con relación a la informalidad y la precariedad laboral (Pla, Poy y Salvia, 2021).

La construcción del esquema en las dos fuentes de datos utilizadas requirió de una serie de decisiones metodológicas. Para la construcción de los estratos se partió de la recomendación de Ganzeboom y Treiman (1996), que utilizan el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones versión 2008 (CIUO). Para ello, se procedió a corresponder las ocupaciones del Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO), a partir de las recomendaciones de Indec (2018). En el caso de la EDSA, esto implicó codificar manualmente las preguntas abiertas en las que se interroga por la tarea desarrollada por la persona ocupada. Este proceso permitió disponer de las ocupaciones clasificadas según el CIUO y elaborar el esquema de clases sociales (Pla, Poy y Salvia, 2022). Se construyeron 11 estratos de clase socioocupacional reagrupados en 5 clases o 3 clases, según el caso.

Cuadro I.3. Estructura de clases socioocupacionales y su definición operacional

Clase socioocupacional	5 clases	3 grandes clases
I. Clase de servicios nivel superior: profesionales, administradores y gerentes	Clase de servicios	Clase de servicios
II. Clase de servicios nivel inferior: profesionales, administradores y gerentes de nivel inferior, técnicos, gerentes de pequeños establecimientos industriales		
III.a. Empleados no manuales rutinarios de nivel superior (administración)	Trabajadores no manuales rutinarios	Clases intermedias
III.b. Empleados no manuales rutinarios de nivel inferior (ventas y servicios)		
IV.a. Pequeños propietarios con empleados	Pequeños propietarios y cuentapropistas	
IV.b. Pequeños propietarios sin empleados		
V. Técnicos de nivel inferior y supervisores de trabajadores manuales	Trabajadores calificados	Clase trabajadora
VI. Trabajadores manuales calificados	Trabajadores no calificados	
VII.a. Trabajadores manuales no calificados (no agrícolas) ^(*)		
VII.b. Trabajadores manuales no calificados (agrícolas) ^(*)	Trabajadores agrícolas	
IV.c. Pequeños propietarios y otros trabajadores por cuenta propia en la producción primaria		

^(*) Al ser encuestas basadas en muestras urbanas, los estratos rurales tienen poca representatividad y se han utilizado solo cuando el equipo de investigación lo consideró relevante para su objeto de estudio.

Fuente: Adaptado de Goldthorpe y Heat (1992).

La clase socioocupacional se construyó en personas activas: ocupadas y desocupadas, para quienes se cuenta con datos sobre ocupación actual y última ocupación. En el caso de los capítulos que trabajan a nivel hogar, la clase social del hogar se construyó con el criterio de dominancia (Erikson, 1984): la del miembro del hogar con la clase social más alta,

que no siempre se corresponde con la persona definida como principal sostén del hogar (Lombardi y otros, 2016).

LA ESTRUCTURA DEL LIBRO

Este libro incluye nueve capítulos y un epílogo, además de la presente introducción. En el primer capítulo, Agustín Salvia analiza la relación entre las características del modelo de desarrollo periférico argentino, los ciclos políticos recientes y los instrumentos de política social que han venido predominando. Aborda el contexto de la pandemia de covid-19 en un marco de mayor duración que abarca, al menos, las últimas cuatro décadas de desarrollo político-económico y recupera el enfoque clásico de la marginalidad como una clave para pensar los dilemas que enfrenta la sociedad argentina actual en términos de convergencia socioeconómica, integración social y equidad.

A continuación, dos capítulos abordan las transformaciones del mercado de trabajo en el marco de la irrupción de la pandemia de covid-19, tanto a nivel nacional como regional. En el segundo capítulo, Eduardo Donza analiza los efectos del ASPO, su flexibilización y las diferentes etapas que se sucedieron sobre el mercado de trabajo. A partir de los datos de la EDSA, encuentra una contracción de la estructura ocupacional por pérdida de puestos de trabajo, aumento de la inactividad forzada y empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Explotando los datos de panel de la EDSA halla un deterioro de las posibilidades de mantener el empleo de los segmentos más vulnerables de la fuerza de trabajo.

En el tercer capítulo, a cargo de María Albina Pol, Valentina Ledda y Lucía Bagini, se ponen en evidencia las disparidades regionales de las principales tendencias verificadas en el primer capítulo. A partir de un enfoque comparativo a nivel regional de los datos de la EPH-Indec, demuestran que el mayor impacto de la crisis económico-sanitaria se observó en los aglomerados urbanos con mayor incidencia relativa del sector informal y/o en aquellos que sufrieron restricciones más prolongadas a la movilidad.

Siguen tres capítulos que abordan la cuestión de la desigualdad de ingresos, la pobreza y el papel de la política social en el bienestar. En el cuarto capítulo, Ramiro Robles y María Noel Fachal reconstruyen las principales características de la desigualdad por ingresos y la evolu-

ción de la pobreza monetaria a partir de la irrupción de la pandemia de covid-19. Para ello reponen el vínculo entre las unidades domésticas, el mercado de trabajo y los sistemas de protección social. Concluyen que el contexto de pandemia vino a potenciar un proceso de deterioro iniciado con la crisis macroeconómica que tuvo lugar en 2018. La pandemia impactó de manera regresiva en la desigualdad y la pobreza, profundizó la erosión de los ingresos reales de los hogares y al mismo tiempo afectó la capacidad de las unidades domésticas para preservar sus vínculos con el mercado de trabajo.

El quinto capítulo, elaborado por Miguel Oliva, Diego Masello, Martina Zubarán, Rodrigo Alejandro Segovia y Nara Alvarez, parte de la explotación de los datos de panel de la EPH. Los autores concluyen que se encuentra una fuerte estabilidad de los grupos más desfavorecidos: informales y pobres, pero no tan alta como la de quienes trabajan en el sector moderno. De esta manera, se argumenta que existe una fractura en la estructura socioocupacional según la cual trabajadores y trabajadoras del sector dinámico tienen crecientes ventajas, mientras que los informales y pobres se alejan cada vez más de la posibilidad de mejorar.

En el sexto capítulo, Santiago Poy y Camila Alfageme abordan distintos procesos subyacentes a la dinámica del empobrecimiento entre la población ocupada entre 2019 y 2021. Encuentran que la irrupción de la pandemia implicó un aumento de la pobreza entre ocupados y que se acentuaron las desigualdades estructurales en las condiciones de vida. A partir del análisis de panel de la EDSA muestran que los trabajadores informales y en ramas altamente perjudicadas por las restricciones tuvieron más propensión a entrar en la pobreza. Además, exhiben los perfiles de trabajadores pobres crónicos, que evidencian un perfil de vulnerabilidad socioeconómica: trabajadores de bajo nivel educativo, inserción en ramas de actividad ligadas al comercio y los servicios personales y tasas de dependencia altas al interior de los hogares.

Los tres capítulos siguientes tienen como hilo conductor los procesos de fragmentación y heterogeneidad social a partir de la perspectiva de las clases sociales y con fuerte énfasis en lo ocurrido con el bienestar de los hogares. En el séptimo capítulo, Jélica Lorena Pla, Manuel Riveiro y Eugenia Dichiera afirman que la excepcionalidad de la pandemia permitió observar en un período corto de tiempo una serie de transformaciones de la estructura de clases que suelen observarse en el largo plazo. A partir de los microdatos de la EPH y de la EDSA, analizan los cambios en la composición y la morfología de las clases sociales a nivel de las personas y los cambios en la capacidad de reproducción so-

cial de las personas trabajadoras, en relación con las posibilidades de desenvolverse en el mercado de trabajo y las condiciones en que lo hacen durante la pandemia.

En el octavo capítulo, Gabriela Gómez Rojas, Danila Borro, Sofía Jasín y Manuel Riveiro analizan las continuidades y rupturas en las pautas de participación en las labores domésticas a raíz de la pandemia. El capítulo muestra que los cambios en las pautas de organización del trabajo doméstico y de cuidados fueron efímeros. La irrupción de la pandemia generó una participación mayor de todas las personas del hogar en las tareas domésticas, pero las mujeres continuaron siendo quienes se hicieron cargo de esas tareas en mayor medida. La intersección de clase social y género arroja alguna luz: en la clase de servicios la brecha de participación entre mujeres y varones se redujo como efecto de la pandemia, mientras que en las clases intermedias y trabajadoras las diferencias tendieron a profundizarse. El capítulo concluye que sigue vigente una pauta tradicional de participación en el trabajo (remunerado y no remunerado) entre los géneros, que se da desde temprana edad.

Silvana Galeano Alfonso y Jéssica Lorena Pla son las autoras del noveno capítulo, en el que se analizan las brechas digitales de acceso y uso de TIC según clase social y género a partir de los datos disponibles en la EPH. Las autoras concluyen que, aunque se observan brechas digitales de acceso y uso entre hogares de diferentes clases, los tipos de tecnologías presentan sus propias dinámicas y tendencias. La pandemia podría explicar algunas de las modificaciones. En particular se destaca la tendencia de reducción notoria de la brecha en relación con el acceso a internet: las clases más bajas han ido incorporando internet en sus hogares y utilizado en mayor medida los teléfonos móviles. Las clases más altas se benefician en el acceso y la utilización de la computadora. Las diferencias en el acceso material impactan en el tipo de uso y las apropiaciones que se puedan realizar en cada caso.

Entre que se inició la investigación que da sustento a este libro y la actualidad han transcurrido dos largos años en los que la sociedad argentina pasó por fases de fuerte aislamiento y destrucción de empleos, la progresiva liberación de las restricciones y una importante reactivación. Con esto en mente, hemos querido hilvanar en un epílogo las principales conclusiones de los capítulos presentados. En él incluimos algunas reflexiones que sintetizan las evidencias acerca de los impactos de la pandemia en la sociedad argentina y abren interrogantes para pensar el futuro.

1. Sobre el desarrollo fallido, los regímenes políticos y las políticas sociales

Agustín Salvia

La imposibilidad de emprender un sendero de crecimiento equilibrado que supere pobreza crónica y desigualdades estructurales que atraviesan a la sociedad argentina no parece constituir un fenómeno accidental. Al respecto, son extensas las investigaciones que describen los alcances de ese derrotero, así como los tratados acerca de cómo superar este fracaso y avanzar hacia modelos de desarrollo con convergencia social. Sin embargo, no existe un único diagnóstico, ni mucho menos una compartida perspectiva alrededor del qué hacer para superar nuestro fallido modelo de desarrollo. En este marco, diferentes programas de modernización de orientación ortodoxa o heterodoxa han tenido más de una oportunidad para construir las soluciones prometidas, al mismo tiempo que el manifiesto fracaso de estos intentos ha sumado complejidad al problema. Cada uno continúa acusando al otro de ser la causa de todos los males y demandando una agenda de reformas estructurales.

Por ello, descifrar los procesos sociales que se esconden detrás de esta situación constituye un tema relevante de investigación. De manera paradójica, cabe observar que nuestro desarrollo fallido no puede ser imputado a la falta de agentes capitalistas –nacionales o internacionales– interesados en la acumulación, ni tampoco a la ausencia de voluntades y de condiciones –nacionales o mundiales– favorables a que se despliegue –con más o menos regulaciones– el capitalismo de mercado (Cepal, 2011, 2014, 2016c). Y que, con cada nuevo experimento político-económico, el aumento de las asimetrías sociales gana tanto vigencia como complejidad.

En este contexto, la pandemia de covid-19 introdujo la discusión sobre los horizontes esperables de desarrollo con equidad en países con un “desarrollo fallido”, que se expresa en altos y crecientes desequilibrios estructurales. Asimismo, cabe tener en cuenta que la pandemia golpeó a una región sometida a casi una década de estancamiento económico, en donde un año antes tuvieron lugar intensos y generalizados conflictos sociales. En este marco, ¿en qué medida el ciclo de crisis agravado por

la pandemia de covid-19 provocó una acentuación de los desequilibrios económicos y asimetrías que atraviesan a nuestros sistemas sociales? Y, en este contexto, ¿podrán los gobiernos de la región asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, incrementar el crecimiento y hacerlo de una manera que mantenga la cohesión social?

Algunos autores postularon que la pandemia iba a tener un efecto “igualador” (Milanovic, 2020). Sin embargo, esta hipótesis ha ido perdiendo sustento y las evidencias dan cuenta de que no solo la pandemia favoreció una mayor concentración de rentas, sino también que la pospandemia aventura procesos más agresivos de concentración de riqueza (World Inequality Lab, 2022), con mayores desigualdades entre los países y, más tarde o más temprano, al interior de los países, sobre todo en regiones como América Latina y el Caribe (Cepal, 2022; OIT, 2021). Los disturbios sociales siguen representando para los gobiernos un alto riesgo. Abordar estos retos, sin encarar reformas estructurales que reduzcan las desigualdades sociales, exige a los regímenes políticos una más generalizada y eficiente gestión social de los excedentes de población que ha generado la crisis.

En este sentido, el caso argentino constituye un particular “modelo social” a partir del cual intentar descifrar las fallas sistémicas subyacentes que parecen operar de manera interactiva con el régimen político. Esto debido sobre todo al hecho de que las principales coaliciones políticas de la Argentina continúan ofreciendo a la sociedad un supuesto destino de progreso, pero hasta ahora han sido incapaces de generar dicho resultado. A manera de ejemplo, durante buena parte de las últimas décadas del siglo XX, más un corto interregno reciente (2015-2019), el régimen político “(neo)liberal” se esforzó sin éxito en producir un cambio de rumbo; del mismo modo que durante buena parte de las dos primeras décadas del siglo XXI, más los últimos años recientes, le ha correspondido a un régimen político “(neo)populista” fracasar en el intento. En cualquier caso, ni a través de la férrea mano invisible de los “mercados” ni a través de la estratégica mano visible del Estado fue posible revertir un ciclo largo de muy bajo crecimiento, creciente pobreza y alta desigualdad social.¹¹

11 Los términos “(neo)liberal” y “(neo)populista” son usados para este ensayo en un sentido económico. En este marco, un régimen “(neo)liberal” es aquel cuyas políticas socioeconómicas en un contexto de globalización de la economía mundial maximizan las relaciones de mercado, priorizan los equilibrios fiscales, minimizan las intervenciones del Estado y abren las economías nacionales a la competencia internacional (Williamson, 1990). Mientras que

Si bien los efectos desencadenados por el escenario de pandemia están todavía en fase de maduración, y no es fácil hacer inferencias en cuanto a sus alcances más estructurales, esto no justifica que tales procesos no deban ser objeto de investigación. Por ello, aunque con información limitada, creemos que es clave introducir al menos sospechas fundadas sobre el modo en que la dinámica económica, social y política del ciclo covid-19 continúa reproduciendo excedentes de población, variadas formas de marginalidad económica y nuevas asimetrías sociales.

De igual forma cabe preguntarse en qué grado las nuevas desigualdades que ha promovido este ciclo de crisis agravado por la pandemia alimentan la reproducción de una estructura social del trabajo con bajo grado de integración sistémica. Y, en ese marco, ¿en qué medida la eventual recuperación económica –tal como se evidencia actualmente– logrará revertir los procesos regresivos generados por la pandemia? Si bien el escenario covid-19 aún no ha concluido, parece crucial tratar de ofrecer algunos indicios que permitan aventurar respuestas, repensar instrumentos y establecer prioridades de intervención. A este cometido apuntan los trabajos aquí reunidos, los cuales han puesto especial foco en la dinámica de las condiciones económico-ocupacionales, en clave a los efectos del período covid-19 sobre la estructura social del trabajo, los procesos de movilidad social y los recursos de inclusión social de la población.

Al respecto, si bien estas contribuciones ponen foco en el impacto sobre la segmentación laboral, la marginalidad económica y la desigualdad social, es a partir del análisis de estos fenómenos que se hace posible objetivar procesos de empobrecimiento estructural que son previos a esta crisis. En este sentido, gana valor una pregunta adicional: ¿cómo explicar que el incremento o, al menos, la persistencia de una masa de población afectada por procesos de exclusión de largo aliento no se haya convertido en un factor disruptivo del orden político?

En este marco, la política social del Estado –en tanto encargado de regular los mercados y garantizar la cohesión social– y las estrategias de

el “(neo)populismo” configura un régimen político que, bajo el actual orden fiscal y financiero mundial, estructura su funcionamiento a través de políticas socioeconómicas que enfatizan el crecimiento y la redistribución del ingreso, restando importancia al equilibrio primario de las cuentas públicas y a sus efectos inflacionarios, siguiendo en general políticas opuestas a los mercados de capital (Dornbusch y Edwards, 1991).

aprovechamiento de recursos productivos que movilizan los hogares asumen un papel central en la gestión social de los excedentes de población.

Llegado a este punto, cabe hacer explícito que las investigaciones en que se basan los trabajos aquí reunidos comparten la perspectiva de que el desarrollo social requiere como condición una reducción estructural de las brechas de desigualdad social. Algo que, se sabe, no depende solo ni fundamentalmente del crecimiento económico ni de la extensión de las políticas sociales, sino del modo virtuoso en que un modelo de acumulación a través de un régimen político de gobierno logra alinear a los diferentes sectores e intereses detrás de un proceso de integración productiva e integración social sistémica.

En esta línea, este capítulo procura ofrecer un marco general de interpretación, sin por ello comprometer a los autores a una coincidencia forzada con este particular punto de vista. Se retoma para ello las tesis del estructuralismo latinoamericano, a partir de la cual, a manera de supuesto fundante, considera que el subdesarrollo socioeconómico bajo una economía periférica no es independiente de la relación que tiene lugar entre la dinámica de acumulación, sus efectos sobre la heterogeneidad estructural¹² del sistema productivo y el mercado de trabajo, el grado de integración social al que pueden acceder los excedentes de población generados por este modelo, y, por último, el modo en que el régimen político –y las coaliciones de poder– gestiona estos conflictos de manera funcional a la reproducción general del sistema social.¹³

12 El concepto apunta a identificar y explicar cómo las asimetrías inter e intra-sectoriales del aparato productivo se traducen en disparidades de productividad, calidad y remuneración entre los puestos de trabajo disponibles para la población activa y hacia la distribución general del ingreso entre los hogares y las personas (Di Filippo, 2009; Rodríguez, 2001). La heterogeneidad estructural se expresa en la reproducción en el tiempo de brechas significativas de productividad y remuneraciones que imponen limitaciones a la convergencia socioeconómica (Prebisch, 1949; Pinto, 1970a, 1970b, 1976).

13 Un temprano aporte hecho por José Nun y otros intelectuales a los estudios sobre los procesos de cambio social en América Latina tuvo como eje una heterodoxa revisión de la teoría marxista sobre la superpoblación relativa en el contexto de un sistema capitalista periférico, y dio lugar a la tesis de la “masa marginal” (Nun, Marín y Murmis, 1968; Nun, 1969, 1999, 2001). Este concepto pasó a formar parte de los intensos debates que tenían lugar sobre el desarrollo en América Latina en los años sesenta del siglo XX. La premisa central de esta tesis era que la marginalidad social no era en esencia un problema asociado a la falta de integración social de poblaciones afectadas por las transiciones a la modernidad, sino que era un factor sociopolítico constitutivo del modo en que tenían lugar los procesos de ordenación económica,

UN ESCENARIO DE PANDEMIA CON DESEQUILIBRIOS CRECIENTES

Las sociedades de América Latina y del Caribe están conformadas por extensas capas de población sumergidas en la marginalidad, la pobreza y la pobreza extrema, pero también por clases medias consolidadas o en ascenso, así como nichos de riqueza superlativa. Estos altos niveles de desigualdad se explican por un conjunto de factores, entre los que se destaca la segmentación de la estructura productiva que ha caracterizado históricamente a las sociedades latinoamericanas.

A las limitaciones productivas se suman distintos mecanismos institucionales de inclusión, exclusión y control social¹⁴ que están arraigados en la cultura social del privilegio y fomentan la reproducción de la desigualdad en el tiempo. En el caso de nuestra región, estos desequilibrios se manifiestan en una desigual concentración del ingreso y en elevadas tasas de pobreza (Cortés y Salvia, 2019).

En ese marco, una amplia gama de actores sociales y buena parte de la opinión pública –aunque variable según el ciclo económico y el clima de demandas sociales en cada país– reclaman por una solución política frente a la persistencia de estos desequilibrios. Desde un punto de vista argumental, este reclamo se fundamenta en el supuesto de que la pobreza económica y sus efectos sobre la desigualdad rompen el principio de equidad que subyace a las sociedades democráticas, debilitan la cohesión social y por esta vía avivan el conflicto social, y constituyen un obstáculo que atenta contra el desarrollo socioeconómico-ambiental de los países (ONU, 2015).

Sin embargo, a la hora de la formulación de políticas no existen coincidencias, y las diferencias programáticas esconden perspectivas teóricas en competencia acerca de cuáles son las leyes que organizan los procesos

social y política en economías capitalistas periféricas. Esta tesis inspirada en estos antecedentes ha sido retomada en numerosos trabajos propios, ampliándose y extendiendo su validez al contexto de fin del modelo sustitutivo de importaciones, y el desarrollo de la globalización como contexto ha dado origen a experimentos político-económicos tanto (neo)liberales como (neo)populistas (Salvia, 2007, 2012, 2015b, 2019).

- 14 El concepto de control social aborda la compleja cuestión del orden social sobre el que está conformada una comunidad política. En este caso, bajo la noción de control social haremos referencia a los diversos procesos que intervienen en la naturalización de un tipo constituido de organización socioeconómica. Estos procesos son conflictivos, complejos e inestables, e implican ordenamientos provisorios en constante redefinición (Pitch, 1996; Pegoraro, 1995).

y sus consecuencias en términos de hechos sociales, los pilares en que apoyarse para su superación y los obstáculos por vencer, todo lo cual deriva –en el campo político-académico– en diferentes diagnósticos, agitados debates, pugna de intereses y orientaciones divergentes en materia de políticas de desarrollo.

Incluso las mejoras que tuvieron lugar en materia de bienestar y equidad, de manera casi generalizada en la región durante la primera década del siglo XXI, son también objeto de disputa. Al respecto, una abundante literatura ha documentado desde diversos enfoques teóricos la reducción de la pobreza y de la desigualdad económica durante este período (Birdsall, Lustig y McLeod, 2013; Cepal, 2014; Gasparini y Lustig, 2011; Gasparini, Cruces y Tornarolli, 2016; Messina y Silva, 2019; Cortés y Salvia, 2019, entre otros).¹⁵ Pero, al contrario de lo que cabría esperar, los progresos alcanzados se estancaron primero, para luego retroceder, y esto mucho antes del impacto generado por la pandemia del covid-19. En efecto, a partir de la segunda década del siglo XXI se produjo la parcial reversión de todas las tendencias positivas que se habían verificado en materia de crecimiento, distribución del ingreso y bienestar, sin que este proceso pueda ser incontestablemente explicado por los enfoques teóricos en competencia.¹⁶

15 Según la Cepal, con un enfoque económico heterodoxo, las mejoras registradas habrían tenido lugar en países cuyos gobiernos habrían dado mayor prioridad a los objetivos de inclusión social, promoviendo para ello el crecimiento del mercado interno, la demanda agregada de empleo y las políticas activas laborales y sociales de carácter redistributivo (Cepal, 2016a, 2017). Sin embargo, a pesar de estos avances, según este organismo persisten altos niveles de desigualdad, que la mayor parte de la bibliografía contemporánea plantea que se erigen como una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos, así como para la gobernabilidad democrática. Por otra parte, según la perspectiva económica ortodoxa que sigue el Banco Mundial, a través de autores como Birdsall, de la Torre, Menezes (2008), Ferreira y otros (2013), Lustig y López-Calva (2010), la explicación se centra sobre los procesos de liberalización económica, flexibilización de los mercados e integración a la economía mundial que tuvieron lugar a partir de los años ochenta y noventa, los cuales habrían dado sus frutos. En particular, a partir de los excedentes económicos logrados en el comercio mundial, sus efectos sobre la demanda agregada de empleo, los cambios en la calificación educativa de la oferta laboral y la mayor penetración que han tenido los programas sociales de transferencia de ingresos.

16 La Cepal explica este nuevo ciclo de estancamiento económico con efectos distributivos ocurrido durante la segunda década del siglo XXI como consecuencia de la caída en los precios relativos internacionales de productos primarios y la volatilidad del sistema financiero mundial, con efectos sobre

El caso argentino también responde a esta descripción, pues tras el agotamiento de las mejoras económicas y sociales ocurridas durante la primera década del siglo XXI se inició un ciclo de estancamiento económico, con reaparición de restricciones externas, creciente déficit fiscal, alta inflación y una nueva ola de endeudamiento externo. Por supuesto, este escenario se agravó en 2020 a partir de la pandemia y las medidas de confinamiento social que afectaron a actividades productivas, laborales y sociales. Este trasfondo amplificó los efectos provocados por el escenario covid-19 en materia de empleo y bienestar, a la vez que limitó la capacidad y sostenibilidad de las respuestas de política implementadas.

En efecto, en 2020, la pandemia de covid-19 provocó una crisis sin precedentes en el mercado laboral argentino. Esta generó una caída del 10% en el PBI, la triplicación del desempleo, la inactividad forzada por desaliento, así como aumentos críticos en la tasa de indigencia y de pobreza. Como se ha constatado en distintos informes, el impacto de la crisis sanitaria prolongada en el empleo ha sido desigual en los distintos grupos poblacionales, lo que ha exacerbado los problemas estructurales. La contracción generalizada del empleo y la salida de las personas de la fuerza de trabajo impactaron con mayor intensidad en las ocupaciones informales que en las formales.

En este contexto, la desigualdad distributiva creció en el momento más crítico de las restricciones sanitarias, pero con el correr de la crisis, el ingreso medio de los más pobres se contrajo menos que el del resto de la estructura social. Esto generó una mayor equidad en el marco de un proceso de mayor pobreza que afectó sobre todo a amplios sectores de clase media. Este proceso estuvo acompañado de un papel activo en materia de políticas públicas orientadas a acotar o aliviar el impacto social, laboral y económico de la crisis. Por una parte, con el fin de mitigar los efectos regresivos sobre el mercado laboral, el gobierno argentino –al igual que la mayor parte de los gobiernos de la región– implementó una serie de medidas de alivio –aunque insuficiente– dirigida a trabajadores y empresas del sector formal afectados por la parálisis económica. Por

el ritmo de crecimiento regional y la demanda de empleo (Cepal, 2019a). Mientras que, para los enfoques ortodoxos cercanos al Banco Mundial, el proceso se explica debido al freno que experimentó la liberalización económica a nivel regional, lo que generó rezagos tecnológicos y productivos u organizacionales, con efectos sobre la productividad, las remuneraciones laborales y la pobreza, en un contexto de mayor inestabilidad monetaria mundial (Cord y otros, 2014; Rodríguez-Castelán y otros, 2016; Messina y Silva, 2018).

otra parte, se multiplicaron las medidas de transferencia de ingresos direccionadas a los sectores más pobres e informales con el fin de ampliar el sistema de protección social y alimentaria no contributiva.

Fue esta dinámica la que provocó un efecto de movilidad social cruzada en materia de bienestar. Por una parte, la crisis económica generó una nueva capa de hogares pobres formada por sectores medios de trabajadores desvinculados de los sistemas de protección no contributivos; al mismo tiempo que hogares pobres o indigentes formados por desocupados crónicos o trabajadores informales, asistidos tradicionalmente por los programas de protección social, lograron mejorar de manera transitoria su nivel de bienestar gracias al aumento que experimentaron las transferencias públicas de ingresos. En este sentido, la crisis por covid-19 también puso en evidencia la particular vulnerabilidad que presentan los estratos de ingresos medios, caracterizados por sus bajos niveles de cotización en la seguridad contributiva e insuficiente cobertura de protección social no contributiva (Bonfiglio, Robles, Salvia y Vera, 2021; Donza, Poy y Salvia, 2021; Ledda y otros, 2021).

En 2021, en un contexto de avance en los procesos de vacunación contra el covid-19, si bien se registró en la economía argentina una fuerte recuperación del PBI y del empleo, esta no parece haber sido suficiente para mitigar los efectos regresivos en materia de bienestar e inclusión social, y esto debido no solo a las críticas condiciones económicas previas a la pandemia. Detrás de este escenario, antes y después de la crisis por covid-19, los problemas observados parecen estar más asociados a una serie de desórdenes macroeconómicos crónicos –desequilibrios comerciales, financieros y fiscales, incluyendo un permanente endeudamiento externo–, junto con problemas estructurales que los explican. Por ello, el deterioro social continúa pese a la fuerte reactivación económica y recuperación de la tasa de empleo, con índices de pobreza y desigualdades sociales mayores a los observados antes de la pandemia (ODSA, 2021).

Un rasgo histórico particular del desarrollo económico argentino es haber dejado de ser una sociedad de ingreso medio alto con relativamente alta integración socioeconómica, para pasar a ser una sociedad mucho más desigual, atravesada por procesos de empobrecimiento asociados a una mayor fragmentación socioproductiva (Salvia, Fachal y Robles, 2018; Pla, Poy y Salvia, 2022; Salvia, Poy y Vera, 2020). En este sentido, si bien el ciclo económico-sanitario covid-19 afectó la dinámica social de manera regresiva, detrás de este proceso es posible identificar desequilibrios socioeconómicos crónicos que se agravan con cada nueva crisis.

SUBDESARROLLO POLÍTICO-ECONÓMICO SUBYACENTE

Por detrás de la histórica grieta presente en el sistema político argentino, y que viene acompañando desde hace tiempo a este derrotero, surge una pregunta por lo general soslayada: ¿por qué, bajo el contexto de un sistema con alta concentración de capitales, recursos primarios y fuerza de trabajo calificada, ninguna de las coaliciones político-económicas en pugna –ni las políticas inspiradas en la “mano invisible” del mercado ni las que reivindican las virtudes de las “fuerzas reguladoras” del Estado– ha sido capaz de generar condiciones para un desarrollo económico equilibrado con creciente equidad social?

Una línea posible de explicación alternativa se encuentra en el marco de las teorías estructuralistas sobre el desarrollo.¹⁷ Aquí, la noción de heterogeneidad estructural se vuelve fundamental para explicar el patrón de desigualdad.

Según esta perspectiva, la matriz de la desigualdad social en América Latina y el Caribe está muy condicionada por la heterogeneidad estructural de la matriz productiva. El mercado laboral es el eslabón que vincula esa estructura productiva heterogénea (y la desigualdad que le es inherente en términos de productividad, acceso y calidad de los empleos) a una acentuada desigualdad de ingreso en los hogares. Esa estructura productiva expulsa capacidades de trabajo, y debe generar su propia demanda, en general, a través de empleos de baja calidad e informales, con bajos ingresos y escaso o nulo acceso a mecanismos de protección social. Esto conlleva un acceso estratificado a la seguridad social, una elevada vulnerabilidad social y niveles de bienestar muchas veces insuficientes para los ocupados y sus dependientes (Cepal, 2012b). La matriz social surgida de este modelo de reproducción social organiza la distribución de la propiedad y del poder, de los recursos y activos productivos; una de sus manifestaciones más claras y evidentes es la desigualdad de ingresos, que constituye, a la vez, la causa y el efecto de otras desigualdades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo.

17 Al respecto, cabe recordar que el concepto “dualismo” se construye sobre la base de la noción de “asimetrías” –en términos de productividad– entre sectores de una misma economía; el problema del desarrollo es cómo integrar –hacer converger– al sector rezagado con el moderno.

La reproducción ampliada de sectores concentrados con bajo encadenamiento sobre el resto del sistema socio productivo se expresa en una estructura económico-ocupacional heterogénea, la cual se caracteriza por la coexistencia de:

- a) sectores altamente capitalizados, con uso de tecnología y niveles de productividad próximos a la frontera internacional, que ocupan fuerza de trabajo en empleos regulados y de relativamente alta remuneración;
- b) franjas productivas rezagadas, orientadas al consumo doméstico, con escasa capacidad de alcanzar niveles asimilables a la productividad media global, pero con cierta capacidad para proveer a la existencia de franjas de empleo regulado; y
- c) un amplio segmento de microempresas y establecimientos en el sector informal, de fácil acceso, con ingresos de subsistencia, caracterizados por el autoempleo, el trabajo doméstico, el empleo con técnicas rudimentarias y regulación precaria o extralegal (Salvia, 2007, 2012).

De esta manera, en formaciones sociales nacionales con un desarrollo heterogéneo, desigual y combinado, los ciclos de estancamiento o retracción del producto tienen consecuencias particulares sobre el empleo, la distribución del ingreso y el bienestar. Los diferenciales de productividad entre sectores producen brechas de ingresos relativamente rígidas que se profundizan durante las recesiones o en períodos de inestabilidad (Salvia, 2012; Ffrench-Davis, 2015). La dinámica ocupacional resultante combina un progresivo incremento de excedentes de fuerza de trabajo en el sector informal, del desempleo abierto o la inactividad forzada, a la vez que se produce un deterioro de ingresos de los sectores informales. El resultado final en términos de bienestar y desigualdad también dependerá de la capacidad redistributiva del Estado, vía las políticas sociales (sistemas de subsidios, seguridad o protección social), pero de ello también se derivará –dada la ausencia de una integración sistémica sostenible– la capacidad del régimen político para sostener su legitimidad y garantizar el control social.

En este sentido, los quiebres en los procesos de movilidad social en países como el nuestro se asocian a la persistencia de la heterogeneidad estructural, la cual se expresa en formas segmentadas de inserción laboral, altas brechas de dispersión en las remuneraciones, crecientes excedentes de fuerza de trabajo y, a manera de compensación, expansivas

políticas de protección y asistencia social. En este contexto, el régimen político debe garantizar la reproducción ampliada de un modelo de acumulación, en condiciones de “paz social”, más allá de sus efectos sociales regresivos. Todo lo cual vuelve particularmente funcional la emergencia de regímenes (neo)populistas, a partir de los cuales se vuelve sostenible dicho funcionamiento.

Esta argumentación no hace más que recordar y actualizar algunas de las herramientas teóricas del pensamiento estructuralista crítico latinoamericano. Dichas contribuciones proveyeron de manera temprana supuestos, fundamentos y evidencias que avalan una lectura alternativa de los procesos económicos, distributivos y sociopolíticos ocurridos en nuestro país, tanto antes o después del programa (neo)liberal como antes o después de los programas (neo)populistas ortodoxos o heterodoxos con funciones de gobierno en la Argentina del siglo XXI.

REGÍMENES POLÍTICO-ECONÓMICOS EN FALSA COMPETENCIA

En términos históricos, hace medio siglo que entró en colapso en la región el modelo industrial sustitutivo de importaciones, así como los intentos de construir el Estado de bienestar. Los factores intervinientes en la fase de globalización alteraron las condiciones económicas y las relaciones de fuerza internacionales, en buena medida introduciendo términos de intercambio más favorables para las producciones primeras. En ese marco, se reinstaló en la región un campo conocido de disputas político-ideológicas con efectos político-programáticos: ¿emprender las transformaciones “neoliberales”, orientadas a la liberalización y re inserción de las economías nacionales a los mercados mundiales a partir de sus ventajas comparativas; o, por el contrario, resistir o emprender una reacción de inspiración “desarrollista”, fundada en políticas de mayor intervención y regulación estatal, particularmente orientada a fortalecer la demanda en el mercado interno, apoyándose en los excedentes provistos por el sector externo?

Al menos durante las últimas décadas, detrás de uno u otro programa de gobierno –no importa el signo partidario– lograron legitimidad social suficiente como para emprender sus respectivos proyectos modernizadores. Pero estos intentos no hicieron más que agravar los desequilibrios socioeconómicos regionales, sectoriales y sociales. La intención de superar los problemas de la pobreza, la marginalidad económica y la

desigualdad distributiva continúa siendo objeto de debate en la agenda política nacional.¹⁸

En este marco, las condiciones internacionales y los factores estructurales que hicieron históricamente posibles –y necesarias– una u otra estrategia político-económica siguen vigentes, quizás mucho más fortalecidos en el contexto de la pandemia y la pospandemia de covid-19. En este sentido, el actual escenario parecería dar cuenta de una “nueva ola” de exclusiones estructurales; aunque su existencia bajo tales condiciones ofrece al mismo tiempo renovadas oportunidades de legitimación política a programas (neo)liberales o (neo)populistas, sean estos ortodoxos o heterodoxos en materia de teoría económica.

Pero si bien estos procesos son de alcance regional, en el caso argentino resultan paradigmáticos. Su estudio presenta especial relevancia en la medida en que nuestro país fue modelo durante gran parte del siglo XX del ideario heterodoxo fundado en políticas de industrialización sustitutiva y ampliación del mercado interno. A la vez que agotado ese programa, a mediados de los años setenta, fue también un modelo exitoso, en diferentes pero puntuales momentos, de la aplicación de políticas ortodoxas de liberalización económica promovidas por el Consenso de Washington; las cuales lograron muy rápidamente una extendida implementación en la región a partir de finales de los años ochenta y durante casi todos los noventa.¹⁹

Ya entrando en el siglo XXI, el sistema político-económico argentino, estimulado por condiciones internacionales favorables (términos de intercambio positivos), hizo un giro en materia de estrategia de crecimiento económico, y puso en marcha un programa de contrarreformas y políticas heterodoxas que apuntaron a transferir excedentes de exportación hacia el mercado interno. Se sumaron aquí discursos, políticas y medidas

18 Un poco antes de la irrupción en el mundo de la pandemia de covid-19, paradójicamente tanto la Cepal (2010, 2011, 2014) como el Banco Mundial (Birdsall, de la Torre y Valencia, 2010; Lustig y López-Calva, 2010; Ferreira y otros, 2013) coincidían, aunque con diferentes supuestos, en que el crecimiento económico, el equilibrio fiscal y el gasto social habrían de generar una significativa reducción de la pobreza y, aunque en menor medida, de la desigualdad en la distribución del ingreso. Para una revisión tanto de los acuerdos como de las diferencias teóricas que subyacen a estas consideraciones y a sus propuestas en materia de política económica y social, se pueden consultar Cortés (2013) y Cortés y Salvia (2019).

19 Para un análisis de la denominada “trampa (neo)liberal” generada en materia de crecimiento y desigualdad por las reformas estructurales de los años noventa para el caso argentino, véase Salvia (2012).

supuestamente orientadas a combatir las causas estructurales del subdesarrollo y la pobreza, pero con escaso éxito a la luz de los desequilibrios macroeconómicos, las barreras del sector externo, la creciente inflación y la falta de inversión productiva en que cayó el sistema económico durante la segunda parte de este programa (2009-2015). En efecto, más de una década de políticas heterodoxas permitieron recuperar parte de la distribución del ingreso perdido con la crisis del régimen anterior, pero no brindaron fruto en darle sostenibilidad a un modelo de crecimiento con estabilidad económica y distribución progresiva del ingreso.

Ante el fracaso de esta experiencia, volvió a la escena política –aunque mucho más débil y matizado– un proyecto de restauración cuasi ortodoxa en el marco de una coalición de gobierno sin una misma orientación ni un programa estratégico coherente. Pero, a pesar del fuerte respaldo internacional y de relevantes sectores de poder económico nacional, también esta nueva propuesta fracasó, tanto en el campo político como en el económico y social. Un fracaso que tiene como principal origen las limitaciones de la nueva coalición política, más que la capacidad de daño de las fuerzas opositoras, y que se explica sobre todo por la imposibilidad de dar respuesta a las aspiraciones de trabajo y de progreso real a sectores populares y medios desencantados. Como saldo de esta experiencia se profundizó la estanflación y se dejó en herencia una extraordinaria crisis de deuda internacional. Esto mismo abrió las puertas a una vuelta a un régimen político (neo)populista, pero ahora a cargo de una coalición heterodoxa mucho más difusa, sin programa estratégico y con graves problemas de gestión. En este contexto político-económico hizo su aparición la pandemia de covid-19.

Los hechos hacen evidente que, lejos de cumplirse las promesas de mayor desarrollo con superación de la pobreza y menor desigualdad, durante las últimas décadas, tanto las estrategias (neo)liberales como las políticas (neo)populistas no han logrado resolver –incluso en los mejores momentos del ciclo económico– las trampas estructurales que imponen heterogeneidad productiva, la segmentación de los mercados de trabajo y la marginalidad económica, en tanto que la gestión social de los excedentes de población exige sacrificar expectativas de integración sistémica a cambio de mecanismos de subsidiariedad que puedan mantener bajo control político la exclusión social (Salvia, 2007, 2012).²⁰

20 En este contexto, resulta relevante observar cómo, si bien el sistema político no ofrece diferencias sustantivas en términos de resultados, los diferentes

En clave con la perspectiva estructuralista, los altos niveles de pobreza y de desigualdad en nuestro país tienen como una de sus principales fuentes la segmentación de la estructura productiva. A esta heterogeneidad productiva se suman mecanismos institucionales de inclusión, exclusión y control social que están arraigados en el sistema político, y que –independientemente de los programas económicos– mantienen inalteradas las desigualdades estructurales. Una de las principales expresiones de la desigualdad es la concentración del ingreso, porque este determina las posibilidades de acceso a bienes y servicios esenciales e influye en las oportunidades que las personas tienen para desarrollar sus potencialidades y alcanzar un mayor bienestar. Ahora bien, para que sea posible una progresiva redistribución del ingreso con caída de la pobreza, es fundamental que los sectores económicos –tanto la economía exportadora como la vinculada al mercado interno– crezcan de manera equilibrada y articulada, absorbiendo e integrando a los segmentos informales y marginados de la fuerza de trabajo.

Según esta perspectiva, coexisten en nuestro sistema social no solo dos coaliciones político-ideológicas enfrentadas y en competencia, sino también, y sobre todo, un sistema socioeconómico dual. Justamente, es esta una de las principales causas que permite descifrar el fracaso que han tenido los diferentes programas político-económicos durante las últimas décadas, e incluso en la actualidad.

Por una parte, la reproducción ampliada y creciente de desigualdades estructurales en materia de productividad, salarios y efectos de bienestar entre regiones, sectores y unidades económicas, no como resultado de fallencias en materia de políticas regulatorias, sino económico-productivas, propias del régimen de acumulación vigente, el cual depende de un sector primario-industrial exportador proveedor de divisas altamente dinámico vinculado al mercado mundial. Por otra parte, el rezago que experimentan los rendimientos productivos en las regiones, sectores y unidades económicas menos dinámicos –mucho más vinculados a los mercados del modelo industrial sustitutivo–, situación que genera excedentes de fuerza de trabajo y mantiene estancada o en retroceso la productividad

formatos partidarios –sean ortodoxos/neoliberales o heterodoxos/(neo)populistas– permanecen inalterados, así como la composición de las principales coaliciones políticas y bloques de poder asociados. Aunque no sin conflictos internos y algunas mutaciones, los principales actores del sistema político no han experimentado cambios importantes en sus identidades, orientaciones, comportamiento y símbolos de representación ciudadana.

media de la economía argentina, al mismo tiempo que –desde una política heterodoxa– se promueven iniciativas para lograr un aumento en la cobertura de los sistemas de seguridad y protección social.

En este marco, tanto el “(neo)liberalismo” como el “(neo)populismo” son formas de ejercer un poder sometido a una matriz social atravesada por pobreza y desigualdades estructurales. Es decir, más allá de los efectos que generen los procesos de crecimiento y las políticas sociales de transferencias de ingresos, la integración sistémica como fuente de convergencia a través de estos regímenes sigue siendo un horizonte poco probable, en tanto no está en matriz de legitimación política alcanzar efectivamente dicho objetivo.

Aplicando aquí la tesis de Nun (1969, 2001), en países de desarrollo fallido como el nuestro, un régimen político de dominación –cualquiera sea el signo político ideológico– que haga base en la reproducción de un modelo concentrado de acumulación requiere establecer mecanismos de neutralización de los excedentes de población (*masa marginal*, en términos de Nun),²¹ que dicho modelo genera y que pueden ser disfuncionales a este. Para ello, el régimen político debe dar cabida y promover formas alternativas, pero “empobrecidas” de subsistencia (informalidad laboral, auto-explotación familiar, sistema de protección social de baja densidad, economías comunitarias, etc.). De este modo, desde el propio Estado se propicia la autonomía relativa de subsistemas de reproducción social menos productivos, manteniendo el atraso y ampliando brechas de desigualdad social, pero obteniendo a cambio reducir los riesgos de deslegitimación y fractura del orden económico, político y social (Salvia, 2007, 2012).²²

Esta interpretación del papel que pueden asumir los excedentes relativos de fuerza de trabajo ofrece al menos tres consecuencias relevantes para este ensayo: a) permite objetivar la relación estructural que existe entre los procesos de acumulación en economías capitalistas periféricas y los

21 En palabras de José Nun: “Llamaré ‘masa marginal’ a esa parte afuncional o disfuncional de la superpoblación relativa. Por lo tanto, este concepto –lo mismo que el de ejército industrial de reserva– se sitúa a nivel de las relaciones que se establecen entre la población sobrante y el sector productivo hegemónico. La categoría implica así una doble referencia, al sistema que, por un lado, genera este excedente y, por el otro, no precisa de él para seguir funcionando” (Nun, 1969: 201).

22 Nun (2001: 265-266) señala que las estrategias políticas más difundidas para lograr un papel afuncional en la masa marginal implican disminuir las capacidades de desarrollo e integración real del sistema para sostener el control social.

fenómenos de la pobreza y desigualdad social; b) destaca la heterogeneidad y fragmentación creciente de la estructura socioocupacional, con las consecuencias que ejerce en la conformación de identidades sociales; y c) señala los modos en que incide sobre la integración social la necesidad de “neutralizar” a los excedentes de población para evitar que tales emergentes se vuelvan “disfuncionales” a la reproducción del sistema económico.

En este sentido, cabe suponer la existencia de una estrecha relación entre la dinámica de acumulación, los procesos de reproducción social, la formación de excedentes de población y la reproducción de una “economía de la pobreza”. Esto no solo se expresa en términos de desempleo sino sobre todo en la proliferación de variadas formas de subempleo vinculadas a actividades informales de subsistencia. Por lo mismo, en ausencia de políticas de desarrollo capaces de generar aumentos significativos de empleos productivos, sistemas de seguridad social universales y políticas públicas efectivamente redistributivas de los recursos materiales y simbólicos en juego, cabe esperar que la reproducción social de los excedentes de población dependa en buena medida de las estrategias defensivas llevadas a cabo por los hogares pobres, afectados por la marginalidad económica, las cuales a su vez dependen de la intensidad del “goteo” que tengan los sectores formales sobre las economías informales de subsistencia y, en igual sentido, las políticas públicas destinadas a brindar asistencia económica a dichos sectores.

De esta manera, la política social del Estado y las tácticas de aprovechamiento de recursos productivos que los hogares crean, asumen un papel central en la gestión social de los excedentes de población. En lo fundamental, tal vinculación lleva a potenciar el impacto que pueden tener los programas sociales a cargo del Estado y las estrategias domésticas de subsistencia²³ sobre los procesos sociodemográficos, la organización del mercado de trabajo, el patrón de distribución del ingreso y la evolución de la pobreza, e, incluso, los niveles de estabilidad social y control político interno que logra alcanzar el sistema (Salvia, 2007, 2012).

23 Se sigue aquí la tesis ampliamente aceptada de la existencia de una estrecha relación entre las estrategias de subsistencia de las unidades domésticas y los procesos de reproducción social a nivel de formaciones periféricas. Estas estrategias, en general desplegadas por fuera de los procesos de acumulación e integración social más avanzados, constituyen un mecanismo fuertemente asociado a las capacidades de supervivencia de los sectores excluidos de los procesos de modernización. Para una confirmación de esta tesis en el caso argentino, pueden consultarse los trabajos de Isla, Lacarriou y Selby (1999), Hintze (2004), Svampa (2005) y Gutiérrez (2004).

Ahora bien, este proceso encuentra diferenciales importantes según se trate de una fase expansiva o recesiva del ciclo económico. En condiciones de expansión económica, si bien la mayor demanda de empleos formales reduce la desocupación de los sectores intermedios o informales, al mismo tiempo este proceso garantiza la reproducción de la masa marginal afuncional alrededor de un sector informal en crecimiento. De esta manera, se hace mucho más factible tanto la subsistencia económica como el control social de los excedentes de población, sin que sea necesario establecer conflictivas negociaciones políticas ni económicas con los sectores concentrados de la estructura económico-ocupacional. La dinámica económica hace su trabajo, lo cual, si bien no garantiza mayor integración social ni equidad distributiva, sí al menos una relativa paz social.

En cambio, en los momentos de crisis –el ciclo covid-19 es un ejemplo palpable– la intervención directa del Estado es imprescindible. Por su intermedio resulta fundamental que los excedentes de población puedan ser “asistidos” en función de garantizar la cohesión social que requiere el régimen de gobernabilidad vigente. Pero dado que la retracción económica genera un fuerte aumento de los excedentes de población y una mayor precariedad laboral, los sectores excluidos se movilizan demandando al régimen político mejores condiciones de subsistencia. Cada vez más, ello se hace siguiendo estrategias sociopolíticas “extralegales” que tienden a poner en riesgo la estabilidad sociopolítica.

FICCIONES EN MATERIA DE DESARROLLO

Sabemos que una menor desigualdad distributiva promueve un mejor funcionamiento de los mercados, fortalece el sistema político y aumenta la cohesión social. Sin embargo, si se combinan altos niveles de desigualdad con políticas inconsistentes con el crecimiento con equidad, tienden a repercutir de manera regresiva sobre el bienestar social. No solo en materia de empleo, sino también de educación, salud, vivienda, medio ambiente y calidad de vida en general. Bajo tales condiciones, los estratos sociales tienden a segregarse, la salud se estratifica y lo mismo ocurre con las escuelas, los medios de transporte y los lugares de entretenimiento. Las sociedades sometidas a tales condiciones se transforman poco a poco, concentrando el poder, la riqueza y los ingresos, pagando el costo de la pérdida de cohesión social.

La pandemia de covid-19 provocó una crisis sin precedentes en la estructura del empleo, las regulaciones laborales, el nivel de bienestar, la reproducción doméstica y las oportunidades de movilidad social. Todo lo cual no solo incrementó de manera significativa la pobreza y la desigualdad distributiva, sino también la heterogeneidad productiva, la segmentación laboral y el deterioro de los mecanismos institucionales de protección social. Pero nada de esto constituye un hecho excepcional o un accidente inesperado para la historia económica y social de la región ni para la Argentina.

Según el enfoque de la heterogeneidad estructural que aquí seguimos, una de las manifestaciones más claras y evidentes de estas desigualdades es la que aqueja a la distribución de los ingresos, que es, a la vez, la causa y el efecto de otras inequidades en ámbitos como la educación, la salud y el mercado de trabajo.

El sendero seguido por el patrón de desarrollo social argentino parece fortalecer la hipótesis de que bajo el actual régimen de acumulación poco o nada puede hacerse sin una adecuada resolución de los problemas macroeconómicos que imponen barreras a la inversión y el crecimiento (reducción de la pobreza), así como en materia de heterogeneidad estructural y selectividad de las políticas de distribución del ingreso y de la riqueza acumulada (reducción de la inequidad distributiva). Esto, incluso, a pesar de la creciente intervención en materia redistributiva de los gobiernos –cualquiera fuese su ideología–, los cuales han implementado –bajo el auspicio de los organismos financieros multilaterales– una serie de políticas y programas de transferencia condicionada de ingresos en función de aliviar la situación de las poblaciones más pobres, sin cambios sistémicos estructurales, aunque con el fin relativamente legitimado de mantener un efectivo control de la paz social.

Es evidente que ninguna de las opciones polares aplicadas fue capaz de revertir la marginalidad estructural que alimenta a los excedentes absolutos de población no “necesarios” al desarrollo de nuestro capitalismo periférico. En definitiva, al menos el problema al que nos enfrentamos no parece devenir del campo “superestructural”, sino “estructural”: el desarrollo capitalista argentino continúa siendo dependiente de una división internacional del trabajo y de patrones internos de concentración y distribución del ingreso que hacen imposible que el conjunto de su población logre participar del desarrollo económico y de un sistema de seguridad social universal. Sin embargo, sería muy arriesgado afirmar que el campo superestructural de lo político queda al margen de este derrotero.

Los límites estructurales del actual proceso de modernización deben ubicarse a partir de la emergencia y profundización de una matriz económico-institucional –inclusive política– más heterogénea, desigual y débil que la vigente cuatro o cinco décadas atrás. Esta matriz ha sido capaz de fluctuar siguiendo los ciclos económicos, pero alrededor de una tendencia de claro retroceso en términos de pobreza y movilidad para las diferentes capas sociales de excluidos, generados tanto por la modernidad “inconclusa” como por el “exceso” de modernidad en el contexto de la globalización.

Las consecuencias directas de estos procesos de cambio estructural en el modelo de desarrollo se hacen visibles a través de dos hechos relevantes, y cada día menos novedosos para la sociedad argentina: a) el desarrollo de una marginalidad económica asociada a un aumento de excedentes absolutos de una población excluida de todo progreso; y b) la proliferación de estrategias, planes, programas y acciones en materia de política social centralmente orientada a proveer de una transferencia monetaria de ingresos hacia los sectores más necesitados y conflictivos de esa masa marginal.

En este marco, una variable interviniente no menos importante es que los momentos de crecimiento económico han estado acompañados de un estancamiento o, incluso, un aumento de la desigualdad, a la vez que la exclusión social ha seguido reproduciéndose de la mano también de un aumento de las capacidades de consumo de los hogares más pobres. Asimismo, durante los momentos de baja del ciclo (crisis), ambos tipos de fenómenos han tendido en general a agravarse, incluida la pobreza extrema, mientras se le exigen al Estado políticas cada vez más comprometidas en materia de transferencias monetarias, a la vez que insuficientes para resolver los problemas de exclusión estructural.

En este marco, tanto el aumento de la pobreza como el del clientelismo político, asociado a la marginalidad social, forman parte de la misma matriz de reproducción social. En ese sentido, un régimen (neo)populista, no importa su signo –liberal o desarrollista–, requiere para su funcionamiento la existencia de una masa marginal con demandas crecientes de subsidiariedad. Ahora bien, más tarde o más temprano, dicha subsidiariedad dependerá de las capacidades productivas, el modo en que se regulan los desequilibrios macroeconómicos, la contabilidad fiscal y las políticas distributivas del modelo de acumulación. Precisamente, si la eficacia de la economía no logra trascender la política social redistributiva, la contradicción tenderá a agravarse, afectando la sostenibilidad del propio modelo de acumulación y su potencial crecimiento.

Por lo tanto, si nada cambia en el campo del patrón de desarrollo productivo, lo más factible es que ocurra lo que ha venido aconteciendo durante las últimas décadas: las demandas de empleo, bienestar y ciudadanía plena habrán de subordinarse a objetivos devaluados de progreso, los cuales tienen en su arsenal mecanismos de control (cohesión) social que reproducen la pobreza. A través de estos mecanismos se procurará mantener la paz interna a un mínimo costo económico y represivo. Y esto mientras sea posible mantener alguna o varias fuentes de financiamiento activas –no importa el costo– que eviten o posterguen el colapso de la administración económica del Estado –sea vía endeudamiento, emisión monetaria o recaudación impositiva expiatoria–.

En este marco, las políticas públicas orientadas a distribuir el gasto social –en tanto instrumentos que procuran subsidiar la reproducción social con un mínimo de paz social y bajo costo represivo–, así como las estrategias de aprovechamiento de recursos productivos personales, sociales y comunitarios que movilizan los hogares, cumplen un papel clave en la administración política de los excedentes de población, con efectos directos sobre una serie de variables sociodemográficas, el funcionamiento de los mercados de trabajo y, por ende, en el patrón de distribución del ingreso y de evolución de la pobreza.

Bajo este contexto, un hecho relativamente novedoso se describe a partir de que los excedentes de población encuentran en las políticas sociales “(neo)populistas” un extenso mercado de subsistencia asociado a reglas de intercambio político-institucional. En este sentido, el Estado es cada vez más receptivo a las demandas de subsistencia y autonomía de las economías de la pobreza, y es cada vez más eficiente en cuanto a arbitrar en los conflictos que los propios actores excluidos demandan. De tal manera, lo relevante de la actual matriz social no parecen ser los emergentes de la “economía popular”, sino la creciente legitimación e institucionalización que se logra –a través del accionar de reclamadores pobres– del derecho a una asistencia social, lo cual no permite salir de la pobreza, pero sí capturar beneficios o compensaciones en tanto se cumplan reglas de compromiso político clientelar.

Todo lo cual logra ser particularmente funcional al control social que requiere cualquier programa de concentración económica para que la exclusión social no se convierta en “disfuncional” al pacto de dominación vigente. En este punto, no deja de sorprender cómo la historia parece volver sobre sus propios pasos, enriquecida de nuevos observables, mostrando una sociedad fragmentada donde los excedentes de población continúan reproduciendo economías de la pobreza para garantizar

su subsistencia, sometidos a las grietas simbólicas y en los favores sociales que ofrece el (neo)populismo. Y, en ese contexto, un escenario como el covid-19 contribuye a fortalecer dicho mecanismo y a proyectar su continuidad, o, incluso, su eventual quiebre político (dando lugar a una nueva coalición, con o sin cambio de signo), pero sin que nada sustantivo cambie en materia de reproducción de la matriz social empobrecida y desigual que atraviesa a nuestra sociedad.

UNA NUEVA MATRIZ SOCIAL DE MARGINALIDAD ECONÓMICA

Este persistente subdesarrollo parece estar asociado principalmente a factores económicos, sociales y políticos estructurales antes que a factores culturales, como los educativos, e, incluso, político-normativos. Ahora bien, esto no quiere decir que el campo superestructural no intervenga. Nuestra sociedad ha venido acumulando promesas, ambiciones y voluntades de progreso que a manera de grandes olas expansivas han probado suerte sin éxito en materia de convergencia hacia un desarrollo con equidad social. A pesar de dichos procesos, o debido a ellos, al mismo tiempo que algunos grupos de la sociedad han logrado acceder a posiciones modernas de “élite económica” y de “clase media”, están ampliamente extendidos los grupos poblacionales que continúan excluidos del progreso social.

En este marco, el control social naturalizado en el contexto del primer cuarto del siglo XXI constituye un desafío político-institucional más complejo y difícil que décadas atrás. En principio, los tradicionales procesos de modernización experimentaron profundos fracasos que, entre otros efectos, acentuaron el atraso, la pobreza y la desigualdad distributiva, incumpléndose de este modo la prometida transición hacia la modernidad. Por otra parte, aquellos aspectos estructurales que ponían límites a la integración social –la dependencia al mercado mundial y la heterogeneidad estructural interna– se habrían profundizado bajo el modelo de economía “abierto” surgido a partir de los procesos de expansión financiera y de las reformas estructurales muy difundidas en la región durante las últimas décadas del siglo XX.

En el pasado, bajo el modelo de desarrollo industrial sustitutivo de importaciones, el crecimiento estaba acompañado de niveles relativamente bajos de desempleo, que favorecían la movilidad del sector informal de subsistencia hacia actividades cuasi informales o modernas de productividad media. Pero muy pronto esta movilidad social resultó seriamente

clausurada, debido tanto al cierre de estas empresas ante la competencia de sectores concentrados –nacionales o internacionales– como a la presencia de una larga “cola de espera” generada por los cesanteados de las actividades reconvertidas o en crisis, quienes pasaron a competir en los mercados secundarios y terciarios por oportunidades laborales escasas y de menores ingresos.

De ahí que la marginalidad económica ya no adopte la forma piadosa de excedentes sociales eventualmente necesarios para el programa de modernización, sino que se constituya, de forma más clara y abierta, en la expresión de sectores sobrantes, a los que –a través de políticas sociales eficientes– se hace necesario someter bajo un orden político-económico legitimado. Para ello, incluso, cabe servirse de los propios recursos de subsistencia que en condiciones de pobreza ofrece la economía informal a través de las estrategias doméstico-comunitarias de subsistencia. Esto implica la introducción por parte del Estado de formas más eficientes de control social en función de descomprimir la conflictividad generada por la dinámica de acumulación, dados sus efectos regresivos sobre la desigualdad y la exclusión. De tal modo que la nueva modernidad parece haber dado a luz –al menos en el caso argentino– a una nueva matriz social de marginalidad económica y control social institucionalizado con amplia capacidad de autorreproducción y legitimación.

De esta manera, el proceso de dualidad económica parece inducir problemas de diversidad en la integración de los mercados laborales: concentración económica, diferenciales de productividad intersectorial, aumento permanente de las actividades marginales de subsistencia y, eventualmente, regulaciones laborales, mayor emigración laboral y asistencia pública. No son estos comportamientos el resultado de una falta de crecimiento, sino del propio proceso de concentración, lo cual hace muy factible que elevados ritmos de crecimiento logren que la desigualdad estructural se profundice en vez de retraerse, incluso a pesar de que logre bajar la tasa de pobreza.

Si bien los trabajadores técnico-calificados logran mejores oportunidades de integración laboral, su utilización como fuerza de trabajo no llega a ser plena, al menos para la mayor parte de los sectores expulsados de actividades modernas concentradas o rezagadas o del sector público reconvertido. Una parte de los segmentos modernos sufre la caída en el sector informal de menor productividad, lo cual incrementa la competencia en el mercado secundario y terciario de subsistencia, y agrava aún más la desprotegida situación económico-ocupacional de la población que depende de la economía informal.

En cuanto a la génesis económico-social de estos excedentes de fuerza de trabajo, es posible reconocer una serie de mecanismos de tipo “estructural” –intrínsecos a un contexto de heterogeneidad estructural– que hacen posible y necesaria bajo un modelo de economía “abierta” la constitución de una “masa marginal”, sea como masa desocupada, subocupada, emigrante, economía de la pobreza, o, con mayor frecuencia, como expresión de una situación de intermitencia entre estas diferentes condiciones.

La necesidad por parte de grandes y medianas empresas del sector moderno de aumentar la productividad (en función de incrementar su capacidad competitiva), a través de la incorporación de nuevas tecnologías y cambios en la organización del trabajo, genera la incorporación de fuerza de trabajo altamente especializada. De este proceso también participa como agente expulsor el Estado, mediante el cierre de empresas públicas deficitarias y de empleados de baja calificación o con calificación tradicional (como resultado de las políticas de reducción del gasto público).

La apertura comercial y la desregulación de los mercados en los sectores modernos –antes protegidos–, tecnológicamente rezagados y con baja capacidad competitiva, afectan de manera negativa la sustentabilidad de numerosas actividades productivas tradicionales. En caso de superar la quiebra o cierre de la actividad, las empresas sobrevivientes no están en condiciones de reconvertir sus estructuras tecnológico-productivas, lo hacen en general a través de una reducción del nivel de actividad, a la vez que extienden el desempleo y la precariedad laboral. Los expulsados de estos segmentos, por lo general con niveles medios de calificación, aumentan su presión sobre los segmentos secundario y terciario del mercado de trabajo.

Las actividades empresarias cuasi informales preexistentes enfrentan amplias limitaciones para su reabsorción en mejores condiciones, incluso en un escenario de crecimiento de la demanda agregada de empleo. Esto tiene que ver con la expansión de empresas de servicios que operan en cadenas formales, las cuales limitan, recortan o, incluso, marginalizan las operaciones de microempresas familiares que procuran insertarse en los mercados de bienes y servicios formales.

Por último, la demanda agregada de consumo bajo un modelo de economía heterogénea no solo depende de los procesos de inversión, acumulación y reproducción capitalista que afectan tanto al sector concentrado como a los sectores de capital intermedios. Se debe considerar además que –bajo un modelo de subdesarrollo dual y combinado– los

excedentes generados por los procesos anteriores se desplazan de manera forzada hacia un mercado terciario de actividades de subsistencia de productividad nula –o, incluso, negativa–, lo cual se ve condicionado por el marco general que imponen tanto la dinámica de acumulación como las condiciones de reproducción social, donde las unidades domésticas cumplen un papel activo y crucial. Esto, a su vez, no deja de tener impacto sobre los comportamientos macro sociodemográficos y socioeconómicos.

Siguiendo la línea argumental hasta aquí trazada, cabe esperar que, bajo un modelo de acumulación capitalista periférico, sometido a un contexto de crisis económica sistémica –y global como la del covid-19–, la generación de excedentes de fuerza de trabajo sea principalmente una función de elásticas capacidades de creación y destrucción de empleos que ofrece el sector informal urbano-tradicional o de subsistencia, más que de la limitada capacidad que tiene el sector moderno regulado de modificar su estructuras de empleo pleno.

En tales condiciones, los sistemas de transferencias de ingreso y los programas de empleo social constituyen piezas claves del proceso de control social, en tanto alimentan, producen y reproducen una economía de subsistencia. El avance sociopolítico de la llamada economía popular o social constituye una cabal expresión de este proceso. En efecto, la existencia de una economía social de la pobreza hace posible que los excedentes de población participen de manera relativamente integrada de los procesos de reproducción social. Es decir, sin que infrinjan riesgos significativos al régimen político-institucional ni al pacto de intereses que sostiene el patrón de acumulación económica. En este contexto, un régimen político (neo)populista –sea ortodoxo o heterodoxo en materia de orientación económica– es el modelo sistémico de gobernabilidad que mejor se ajusta a lógica de reproducción social descripta.

2. Heterogeneidad de la estructura ocupacional y calidad del empleo

*Eduardo Donza*²⁴

Este capítulo tiene como objetivo dar cuenta del impacto, en algunos indicadores socioocupacionales, de la crisis económico-sanitaria desatada por las restricciones a la producción, la comercialización y la prestación de servicios que debieron implementarse en la Argentina para enfrentar el covid-19.

Como se señaló en la introducción, la irrupción de los casos de covid-19 en la Argentina, en marzo de 2020, se generó en un contexto previo de desigualdades estructurales del mercado de trabajo y de la estructura productiva de las cuales nuestro país no pudo salir en las últimas décadas. Desde 2016 las medidas de ajuste macroeconómico, el contexto internacional adverso, la política de elevada inflación, la insuficiente inversión privada y la limitada inversión pública en el marco de un incremento del déficit han generado un escenario recesivo y desfavorable en materia de empleo. Entre 2017 y 2019 se suman a esta situación, estructuralmente adversa, los efectos recesivos del proceso de devaluación, las implicancias que generó una abultada deuda pública y la posterior aceleración de la inflación que produjo pérdida en los ingresos y en la capacidad de consumo de los hogares (Beccaria y Maurizio, 2012; Benza y Kessler, 2020; Neffa, 2020; Bertranou y otros, 2013; Poy, 2019; Salvia, Fachal y Robles, 2018).

El trabajo focaliza el análisis sobre el nuevo escenario socioeconómico de crisis generado por las políticas de aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y en su flexibilización en la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO). Los datos recabados sirven para confirmar algunas hipótesis sobre el deterioro generalizado –pero al mismo tiempo segmentado– del mercado de trabajo urbano de la Argentina anterior al covid-19, así como para cuantificar el impacto que la inactividad en vastos sectores de la economía generó tanto en emplea-

24 Se agradecen los comentarios de las evaluadoras y evaluadores anónimos, que ayudaron a mejorar significativamente este trabajo.

dos como en patrones, empleadores y trabajadores por cuenta propia (Delfini y otros, 2020; Ernst y otros, 2020; Maurizio, 2021; OIT, 2021).

Ya se ha mencionado en la introducción de esta compilación que, en la Argentina, durante 2020 se observó una caída del PBI del 9,9%. A nivel general, según datos de todo el país relevados por el Indec, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una variación de -2,4% durante 2020 y una recuperación del 6,7% en 2021 (hasta el mes de septiembre). Por su parte, en los tres primeros trimestres de 2021, el PBI acumuló una suba del 10,8% interanual (Indec, 2021d). Es importante tener en cuenta que las variaciones generales de ambos indicadores difieren marcadamente según las actividades, por lo cual no tienen un impacto lineal en la situación general de empleo (Indec, 2021b, 2021d).

La seria problemática del escenario laboral de 2020 quedó en evidencia por informes de coyuntura del primer semestre; en los datos oficiales referidos al total del país se expresaba que el 2,8% de las empresas habían dejado de presentar declaraciones juradas al Sistema de Seguridad Social (representando 15 000 empresas no declarantes). El sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado por la inactividad y presentó una disminución del 8% en la cantidad de empleadores que realizaron declaración (CEP-XXI, 2020). Asimismo, un informe de la cámara que reúne a las pequeñas y medianas empresas del país expresó que la producción de las pymes industriales había caído 34,9% en mayo de 2020 frente a igual mes del año anterior, y que en los primeros cinco meses de 2020 se había acumulado una baja de 23,6%. En el mes de mayo de 2020, si se consideraba solo a los rubros definidos como actividad no esencial en la cuarentena, la disminución fue del 45,8%. Esto se dio con el uso de solo el 47,4% de la capacidad instalada y con rentabilidad positiva solo en el 15,3% de las empresas (CAME, 2020).

Los relevamientos realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS, 2021) por medio de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), referida a empresas privadas formales a partir de 5 y 10 trabajadores (según aglomerado) de 12 centros urbanos, expresan que la disminución del empleo registrado durante 2020 fue del 2%. Luego, la incipiente recuperación en 2021, al mes de septiembre, solo había alcanzado al 1% del empleo registrado medido por la EIL. Estas informaciones nos adelantan que en los comienzos de la crisis económico-sanitaria se generó una preocupante pérdida de puestos de trabajo y que su recuperación está muy lejos de ser suficiente.

Como también se menciona en la introducción de este libro, el gobierno nacional implementó políticas de protección y estímulo dirigidas

prácticamente a todos los sectores sociales y productivos (empleadores, trabajadores en relación de dependencia, cuentapropistas, trabajadores informales e inactivos) por un monto que en 2020 llegó aproximadamente al 5,6% del PBI. La implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) fueron las principales estrategias desarrolladas por el Estado para reforzar los programas de transferencias condicionadas que se realizan a las familias más necesitadas. Estas se complementaron con la prohibición de despidos, la ampliación del plazo de la emergencia ocupacional con doble indemnización ante despidos, la modificación del régimen de suspensiones, la creación de un fondo de garantía y el incentivo de préstamos para las micro, pequeñas y medianas empresas, el incentivo para préstamos a monotributistas y autónomos, el desarrollo de crédito a tasa cero, la constitución de un banco de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social, la implementación del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, la aprobación del trámite de emergencia para la constitución de cooperativas y mutuales, la ampliación de la asistencia económica para el trabajo autogestionado, el desarrollo de facilidades de pago de tarifa de electricidad, la profundización del Programa de Recuperación Productiva (Repro) y la promoción del teletrabajo en los ámbitos público y privado (Cepal, 2021a; MJyDH, 2020).

Según información del Ministerio de Desarrollo Productivo (CEP-XXI, 2020: 5), las transferencias realizadas por medio del IFE a asalariados informales, cuentapropistas de bajos ingresos, desocupados e inactivos permitieron que las ayudas lleguen “a los hogares pobres no cubiertos por la Asignación Universal por Hijo”. Pero si bien estas medidas ayudaron a amortiguar el impacto de la crisis sobre las condiciones de vida, no bastaron para compensar la retracción económica, la destrucción de empleo y la pérdida de capacidad de compra de los hogares ante el elevado aumento de precios. De este modo, se generó una suba del porcentaje de población general y de trabajadores y trabajadoras en situación de pobreza.²⁵

Se consideran las siguientes preguntas: ¿cómo fue la distribución del empleo entre los sectores económico-ocupacionales (entendidos como *proxy* de las condiciones de heterogeneidad estructural) durante el pe-

25 Para un análisis detallado de la incidencia de la pobreza en los hogares de los trabajadores véase el capítulo 4.

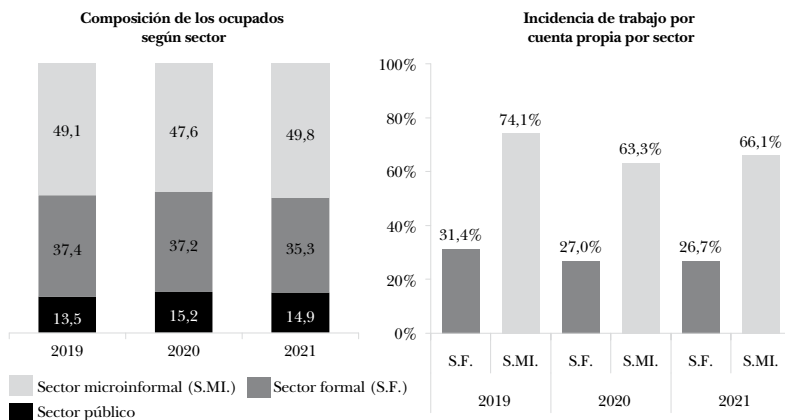
río de prepandemia y pandemia? ¿Cómo evolucionó la calidad del empleo? ¿Cuál fue el efecto originado por el desaliento en la búsqueda de empleo y por las licencias y suspensiones por la pandemia? ¿Cómo afectó la crisis económico-sanitaria a las trayectorias laborales? ¿Cómo impactaron las restricciones en los ingresos laborales? Para contestar estas preguntas se utilizaron los microdatos de la EDSA, relevada por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina. El diseño combinó el análisis de datos de estática comparada, microsimulación y análisis longitudinales por medio de bases panel 2019-2020 y 2020-2021.

HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL Y PANDEMIA

El concepto de “heterogeneidad estructural”, planteado por Prebisch (1949, 1981) y luego profundizado por Pinto (1970a, 1976), se aplica al estudio de los problemas de desarrollo de los países periféricos. La teoría expresa la existencia de un modo desigual en que se distribuye el progreso técnico al interior del sistema económico de un país y las diferencias de productividad que esto genera. En este sentido, Octavio Rodríguez (1998: 315) expresa que “la estructura productiva se dice heterogénea cuando coexisten en ella sectores, ramas o actividades donde la productividad del trabajo es alta o normal (es decir, alcanza los niveles que permiten las tecnologías disponibles), con otras en que la productividad es mucho más baja”. Estas desigualdades se cristalizan en la existencia de un sector privado formal (dinámico, con alta productividad relativa, que paga buenas retribuciones y con preminente utilización de mano de obra calificada) y otro microinformal (muchas veces de subsistencia, de baja y hasta nula productividad, con una utilización intensiva de mano de obra no calificada o de tipo familiar, con bajos ingresos y con escasa relación con los mercados formales). A esta estructura se agregaría un sector público que involucra al Estado nacional, provincial o municipal, que tiende, por lo general, a comportarse bajo las reglas del sector más dinámico de la economía (Salvia, 2015b).²⁶

26 Si bien el desarrollo de los conceptos de la teoría de la heterogeneidad estructural es de mediados del siglo XX, su aplicación continúa vigente en la Cepal (Abeles, Lavarello y Montagu, 2013; Bárcena y Prado, 2016; Cimoli, Porcile, Primi y Vergara, 2005; Cepal, 2010, 2012a, 2012b; Infante,

Gráfico 2.1. Composición de los ocupados según sector e incidencia del trabajo por cuenta propia. En porcentaje de la población económicamente activa y de la población de referencia, de 18 años y más. 2019-2021



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Según los datos relevados por la EDSA-Agenda para la Equidad, en 2019, antes de los efectos de la crisis económico-sanitaria generada por el covid-19, el 49,1% de los trabajadores se encontraba ocupado en el sector microinformal de la estructura productiva. Esta proporción de trabajadores, que incluye ocupados en actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal (Donza, 2021), disminuyó en el período con mayores restricciones de movilidad y luego se incrementó. En 2020 representó el 47,6% de los ocupados y en 2021 el 49,8%. La relativamente baja proporción de trabajadores en el sector microinformal de 2020 se debe, en principio, al cambio de composición en el empleo por la mayor pérdida de puestos de trabajo en las actividades asociadas con el sector microinformal (Benza y Kessler, 2020; Delfini y otros, 2020; OIT, 2020c). En 2021, los ocupados en el sector público representaban el 14,9% (se incluye en este grupo tanto a los empleados que cubren las necesidades operativas del Estado

2011, entre otros) y en algunos especialistas de la Argentina (Chena y Pérez Candreva, 2008; Dvoskin, 2022; Poy, 2019; Salvia, 2013, entre otros).

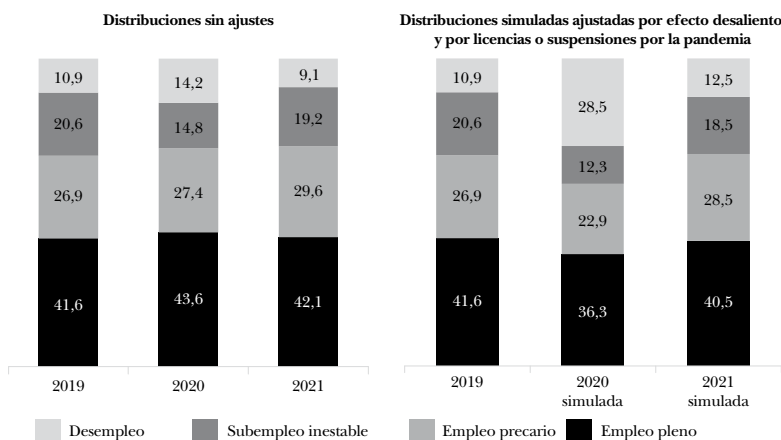
como a los trabajadores que realizan contraprestación en los programas de empleo directo) y el 35,3% de los ocupados realizaba actividades en el sector privado formal (actividades laborales profesionales o en unidades económicas de media o alta productividad e integradas a los mercados formales) (gráfico 2.1).

Además, el cambio en la composición del empleo por efectos de la crisis económico-sanitaria también se observa en la disminución de la proporción de trabajadores por cuenta propia. Esto se debe a que la parte más precarizada de estos trabajadores fue la más afectada (Benza y Kessler, 2020; Delfini y otros, 2020; OIT, 2020c). En 2019 el 31,4% de los ocupados en el sector privado formal eran cuentapropistas; las limitaciones para el desarrollo de sus actividades disminuyeron este porcentaje al 27% en 2020 y al 26,7% en 2021. El decrecimiento relativo del trabajo por cuenta propia también se observa en el sector microinformal: en 2019 los cuentapropistas representaban el 74,1% del total de trabajadores de este sector, en 2020, el 63,3% y en 2021, el 66,1% (gráfico 2.1).

CALIDAD DEL EMPLEO EN EL CONTEXTO DE COVID-19

Con anterioridad a la aparición del covid-19, en 2019, el escenario laboral de la Argentina ya presentaba marcados niveles de precariedad laboral y exclusión. Según los datos de la EDSA-Agenda para la Equidad correspondientes a ese año, solo el 41,6% de la población económicamente activa de 18 años y más contaba con un empleo pleno de derechos. El 10,9% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 20,6% sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Al mismo tiempo, el 26,9% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social) (gráfico 2.2).

Gráfico 2.2. Composición de la población económicamente activa. Distribuciones sin ajustes y distribuciones ajustadas por efecto desaliento y por licencias o suspensiones generadas por la pandemia. En porcentaje de la población económicamente activa de 18 años y más. 2019-2021



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

En los años de crisis económico-sanitaria generada por el covid-19, se alteró fuertemente, en especial en 2020, la estructura del empleo. La gravedad de la situación queda velada por la generación de un cambio de composición (al perderse en mayor proporción los puestos de trabajo de mano de obra no especializada; Benza y Kessler, 2020; Delfini y otros, 2020; OIT, 2020c), por las suspensiones remuneradas o no remuneradas por la pandemia y por un marcado efecto desaliento en la búsqueda de empleo, tanto por la imposibilidad de circular libremente por las disposiciones del ASPO o del DISPO como por la creencia de que no se iba a conseguir trabajo²⁷ (Cepal, 2021b; Maurizio, 2021). Debido a esto,

²⁷ Cabe destacar que la contracción en la ocupación se dio mayoritariamente en los jóvenes, en las mujeres y en los puestos informales. Se potenció así la incidencia en las mujeres jóvenes, lo cual genera un preocupante efecto desigualitario en desmedro de la ampliación de la puesta en valor de los derechos de las mujeres en el escenario laboral. Esto pone en peligro los logros conseguidos en materia de igualdad de género (Cepal, 2021b; OIT, 2021).

en 2020, el año de mayor crisis económico-sanitaria, la proporción de empleo pleno de calidad se incrementó al 43,6% de la población económicamente activa de 18 años y más y pasó en 2021, luego del comienzo de la incipiente reactivación, al 42,1% del mismo grupo de población. El efecto desaliento redujo de manera marcada la potencial desocupación, que en 2020 fue de solo el 14,2%, y al ampliarse las posibilidades de movilidad y las de producir, comercializar y brindar servicios, disminuyó a 9,1%, en 2021. Entre 2020 y 2021 el subempleo inestable pasó del 14,8% al 19,2% de la población económicamente activa, lo que expresa las mayores posibilidades de realizar changas y actividades por cuenta propia de mano de obra no especializada. También aumentaron las probabilidades del empleo precario, que realizaron el 27,4% de las personas activas en 2020 y el 29,6% un año después (gráfico 2.2).

La realización de un ejercicio de microsimulación permite establecer que, de anularse el efecto desaliento y las licencias o suspensiones, el nivel de desocupación de 2020 se hubiera incrementado del 14,2% al 28,5% y el de 2021, del 9,1% al 12,5%. De manera complementaria, la proporción de la población económicamente activa con un empleo pleno de derechos hubiera disminuido en su peso relativo del 43,6% al 36,3% en 2020 y del 42,1% al 40,5% en 2021, siempre respecto de la población económicamente activa (gráfico 2.2).

IMPLICANCIAS DE LA CRISIS ECONÓMICO-SANITARIA EN LAS TRAYECTORIAS LABORALES

La crisis económico-sanitaria por covid-19 generó un impacto en las trayectorias laborales de la población. En 2020 se produjo una importante pérdida de puestos de trabajo que golpeó, sobre todo, a los ocupados con mayor precariedad laboral. Esto se dio, entre otros factores, por la imposibilidad de los trabajadores no esenciales de realizar actividades, por la escasa proporción de trabajadores con potencialidad de desarrollar teletrabajo, por las limitaciones a los comercios, por las restricciones de los servicios y por las extremas limitaciones a la movilidad (Cepal, 2021a; Delfini y otros, 2020; Ernst y otros, 2020).

Con el fin de evidenciar el agravamiento de las trayectorias laborales, a partir de los datos de la EDSA-Agenda para la Equidad de los años 2019, 2020 y 2021, se construyeron dos paneles independientes que permiten evaluar lo ocurrido en el período 2019-2020 (máximo impacto de las

medidas por la vigencia del ASPO) y en el período 2020-2021 (vigencia del DISPO e incipiente recuperación).

Según los datos del panel 2019-2020, el 23,7% de los ocupados en 2019 perdió su empleo o no pudo realizar su actividad por cuenta propia un año después. Una parte de ellos, el 12,1% de los ocupados en 2019, pasó a la inactividad, presumiblemente por efecto desaliento en la búsqueda de empleo. Este efecto también se observa en el 37,6% de las personas desocupadas en 2019 que abandonaron la búsqueda de empleo y aumentaron la población inactiva (cuadro 2.1). Resulta importante remarcar que la crisis impactó con fuerza en los desocupados y, dentro de ellos, en los recientemente cesanteados, lo que generó un efecto desaliento en la búsqueda de empleo y un pase a la inactividad (Cepal, 2021b). Esto alteró, como ya se adelantó, la propensión de las personas a participar del mercado de trabajo y morigeró el incremento de la tasa de desocupación en un contexto de destrucción de puestos de trabajo.

Por el contrario, una proporción de los desocupados e inactivos en 2019 pudo insertarse en el mercado laboral, el 42% de los primeros y el 24,8% de los segundos (cuadro 2.1). Sin embargo, estas nuevas contrataciones o actividades por cuenta propia no pudieron compensar la pérdida general de empleo, como se observó en el apartado anterior.

Además, continuando el análisis del panel 2019-2020, se observa que la mayor pérdida de empleo y de paso a la inactividad se generó en los grupos laboralmente más precarizados. En 2020 se encontraban desocupados el 22,7% de los trabajadores que en 2019 tenían subempleos inestables, el 9,7% de los que poseían empleo precario en ese año y el 6,6% de los trabajadores con empleo pleno de derecho en 2019. Por otra parte, al perder su trabajo pasaron a la inactividad, probablemente por la crisis económico-sanitaria, el 13,8% de los ocupados que tenían un subempleo inestable, el 21,2% de los que poseían empleo precario y el 4,8% de los trabajadores con empleo pleno de derecho, siempre en referencia a la situación en 2019 (cuadro 2.1).

Asimismo, en 2020 poseían un empleo de calidad el 69,4% de los que ya lo tenían en 2019, más el 17,8% de los que antes tenían un empleo precario, el 10,8% de los que presentaban un subempleo inestable, el 3,7% de los desocupados y el 5% de los inactivos; todos estos grupos en referencia a la situación de 2019 (cuadro 2.1).

Cuadro 2.1. Transiciones de la calidad del empleo, el desempleo y la inactividad, según etapa. Panel 2019-2020 y 2020-2021. Población de 18 años y más. En porcentaje de población de referencia

Etapa de ASPO						
Calidad del empleo y condición de actividad, 2020	Calidad del empleo y condición de actividad, 2019					
	Ocupado	Empleo pleno	Empleo precario	Subempleo inestable	Desempleo	Inactivo
Empleo pleno	38,8%	69,4%	17,8%	10,8%	3,7%	5,0%
Empleo precario	27,7%	17,5%	40,6%	30,4%	17,3%	10,9%
Subempleo inestable	9,7%	1,7%	10,6%	22,3%	21,0%	8,9%
Desempleo	11,6%	6,6%	9,7%	22,7%	20,4%	12,5%
Inactivo	12,1%	4,8%	21,2%	13,8%	37,6%	62,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Etapa de flexibilización de restricciones						
Calidad del empleo y condición de actividad, 2021	Calidad del empleo y condición de actividad, 2020					
	Ocupado	Empleo pleno	Empleo precario	Subempleo inestable	Desempleo	Inactivo
Empleo pleno	44,9%	76,0%	16,2%	9,4%	15,6%	4,7%
Empleo precario	23,1%	12,0%	32,8%	37,4%	16,8%	10,6%
Subempleo inestable	14,1%	6,8%	17,5%	29,5%	22,5%	7,1%
Desempleo	5,4%	0,7%	12,3%	5,0%	23,7%	4,7%
Inactivo	12,5%	4,5%	21,1%	18,7%	21,4%	72,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

En 2021, la disminución de las medidas de aislamiento generó un paulatino regreso a las actividades con una recuperación insuficiente y desigual del escenario laboral (Maurizio, 2021). Según los datos de la EDSA panel 2020-2021, el 82,1% de los ocupados en 2020 continuó en esta situación un año después y solo un 5,4% se encontró desocupado en 2021. Otra porción de ellos, el 12,5% de los ocupados en 2020, pasaron a la inactividad en 2021 (cuadro 2.1).

Por otra parte, considerando a los desocupados en 2020, un año después el 54,9% logró tener una trayectoria a la ocupación, el 23,7% continuaba en la desocupación y el 21,4% pasó a la inactividad. Además,

un año después, el 22,4% de los que se encontraban inactivos en 2020 lograron una inserción laboral, el 4,7% buscaban trabajo y el 72,9% continuaban en la inactividad (cuadro 2.1).

Al analizar en forma detallada la incipiente recuperación laboral por medio del panel 2020-2021 de la EDSA se observa que el 76% de las personas con empleo pleno de derechos en 2020 mantuvo esa situación un año después. En 2021 pudieron acceder a este empleo de calidad el 16,2% de los integrantes del panel que en 2020 poseían empleo precario, el 9,4% de los que tenían subempleo inestable, el 15,6% de los desocupados y el 4,7% de los inactivos. Se observa también una transición de movilidad ascendente²⁸ en el 46,8% de los integrantes del panel ocupados en subempleos inestables en 2020 que lograron un empleo pleno de derechos o un empleo precario en 2021 (cuadro 2.1).

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS LABORALES EN LA CRISIS ECONÓMICO-SANITARIA POR COVID-19

En un contexto de precariedad laboral y marcada desigualdad salarial, la crisis también generó una disminución de los ingresos laborales reales (Jacovkis y otros, 2020). Esto se dio por la disminución de las horas trabajadas (OIT, 2021) y por la persistencia de elevados índices de precios al consumidor (53,8% en 2019, 36,1% en 2020 y 45,4% acumulado entre enero y noviembre de 2021; Indec, 2020a, 2021a, 2021c).

Los ingresos laborales se vieron marcadamente afectados en el período de mayor limitación para el desarrollo de actividades productivas, de comercialización y de prestación de servicios. Entre 2019 y 2020 la media de ingresos laborales mensuales disminuyó un 7,4%, y pasó de \$ 54 560 a \$ 50 518 (en todos los casos en pesos constantes del tercer trimestre de 2021). En el período de leve recuperación, 2020-2021, la capacidad de compra del total de trabajadores se estabilizó, y culminó en una media de \$ 50 534 (gráfico 2.3).

28 Se debe tener en cuenta que la “movilidad ascendente” a la que se hace referencia expresa una recuperación respecto de la situación de 2020, año de mayor incidencia de la crisis económico-sanitaria. Es decir, por no haberse realizado un panel 2019-2021, se desconoce si las mejoras son con respecto a la situación de prepandemia o solo a 2020.

Es importante tener en cuenta que estas variaciones de promedios generales no solo ocultan desigualdades entre los trabajadores, tanto en lo concerniente a la disminución como a la recuperación de ingresos, sino también y, sobre todo, encubren los efectos de la variación en la composición del empleo. Como ya se expresó, en el período de mayor incidencia de la crisis económico-sanitaria se perdieron, sobre todo, empleos de mano de obra no especializada. El cálculo de la media se ve afectado por un cambio de composición en la población ocupada, específicamente, por una pérdida de empleos entre los trabajadores ubicados en la cola inferior de la curva de distribución de ingresos. Esto genera una “amortiguación” en la caída de la media de ingresos general. De este modo, los promedios generales observados encubren una pérdida de capacidad de compra aún mayor que la relevada. Más allá de esta aclaración, se observa que la evolución de ingresos fue muy dispar según la calidad del empleo. En el primer año de la pandemia en la Argentina, entre 2019 y 2020, la media de ingresos de los trabajadores con empleo pleno de derechos disminuyó un 12,6% (\$ 79 346 a \$ 69 356). Existen evidencias que dan cuenta del incremento de las suspensiones y de la disminución de las horas trabajadas (MTEySS, 2021, 2022), situaciones que pueden haber generado una baja en las retribuciones mensuales. Aparecen como características positivas de este grupo la capacidad de negociación colectiva de los asalariados registrados, que les permite recuperar poder adquisitivo, y las cláusulas de anticrisis que ya poseían los convenios (MTEySS, 2020) (gráfico 2.3).

Por su parte, entre 2019 y 2020, la media de ingresos mensuales de los ocupados con empleo precario descendió un 20,5% (\$ 45 088 a \$ 35 823). La imposibilidad de desarrollar actividades a tiempo completo para muchos asalariados no registrados, las restricciones en las actividades de los cuentapropistas no profesionales, la limitada posibilidad de desarrollar tareas en forma virtual, entre otros factores, llevaron a que en este grupo de trabajadores se observe la mayor pérdida de salario real (Cepal, 2021b; CEP-XXI, 2022) (gráfico 2.3).

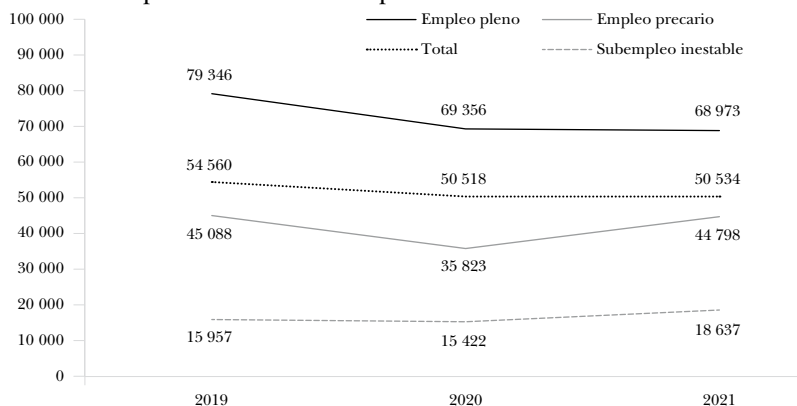
Por último, en el caso de los ocupados con subempleo inestable la media de ingresos mensuales decreció, entre 2019 y 2020, un 3,4% (\$ 15 957 a \$ 15 422). La imposibilidad de trabajar y de realizar changas de pocas horas, que generan escasos ingresos, pero posicionan al trabajador en situación de ocupado, fue uno de los factores fundamentales que generaron un cambio de composición al pasar a la desocupación o inactividad los trabajadores de menores ingresos (CEP-XXI, 2022). Se presume que la pérdida de los puestos de trabajo menos remunerados “amortiguó” la

caída del promedio de ingresos laborales de este grupo. Además, puede haber existido un efecto compensatorio por medio de las ayudas realizadas por el Estado,²⁹ lo que generó un efecto “sostén” en los ingresos mensuales de los trabajadores más precarizados (gráfico 2.3).

Por otra parte, en la leve reactivación del período 2020-2021, la media de los ingresos laborales mensuales de los trabajadores con empleo pleno casi no se alteró, solo disminuyó 0,6% (\$ 69 356 a \$ 68 973). En este caso, puede considerarse que cambió de manera muy leve la composición del empleo por la recuperación de puestos de trabajo de ramas de actividad de menor nivel de retribución media (CEP-XXI, 2022) (gráfico 2.3).

Con respecto a los ocupados en empleos precarios, el ingreso laboral medio se incrementó entre 2020 y 2021 en un 25,1% (\$ 35 823 a \$ 44 798), y el de los ocupados en subempleos inestables aumentó un 20,8% (\$ 15 422 a \$ 18 637). Esto se debió básicamente a la posibilidad de aumentar las horas trabajadas y se verificó en todos los sectores, pero en especial en las ramas que más se retrajeron en 2020: hoteles y restaurantes; servicio doméstico, y transporte y comunicaciones (CEP-XXI, 2022) (gráfico 2.3).

Gráfico 2.3. Ingresos laborales mensuales según calidad del empleo. 2019-2021. En pesos del tercer trimestre de 2021



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

29 Dos de los tres pagos del IFE coincidieron con el período de relevamiento de la EDSA 2020.

A raíz de los cambios de composición observados en el empleo y otras particularidades ya expresadas en el análisis de los subperíodos, entre 2019 y 2021 la media de los ingresos laborales mensuales del total de ocupados disminuyó un 7,4%, la de los ingresos de los trabajadores con empleo pleno decreció un 13,1%, la de los ocupados en empleo precario casi no se alteró (-0,6%) y la de los trabajadores con subempleo inestable se incrementó en 16,8%. A pesar de ser el único grupo que en promedio recuperó levemente la capacidad de compra, la brecha de ingresos entre los trabajadores con subempleo inestable y el resto es muy significativa. Se sigue corroborando que el bajo nivel de calificación de las actividades que realizan y, en algunos casos, las limitaciones forzadas en la cantidad de horas trabajadas, generan bajos ingresos (Neffa, 2020; Poy, 2019, entre otros). En 2021, el ingreso medio mensual de los trabajadores con subempleo inestable fue un 63,1% menor que el ingreso del total de ocupados. Para el mismo año, siempre con respecto al total de ocupados, la media de ingresos mensuales de los trabajadores con empleo precario fue menor en un 11,4% y la de los ocupados con empleo pleno de derechos, en un 36,5% mayor (gráfico 2.3).

UNA MEDICIÓN DE LA CRISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

La evidencia indica que la pandemia y su correlato en la necesidad de aplicar políticas de aislamiento y distanciamiento social generaron alteraciones de gran magnitud en el escenario laboral de la Argentina, el cual presentaba, desde hacía varias décadas, un alto nivel de precariedad, segmentación y exclusión. La pérdida de puestos de trabajo y la disminución de la capacidad de compra de los ingresos laborales fueron hechos verificados que alteraron en forma desigual la vida de los trabajadores en el período 2019-2020.

Las observaciones a partir del panel 2019-2020 de la EDSA se convierten en una medición indirecta de la crisis de la estructura productiva. Sus resultados convergen con los de informes oficiales (MDP, 2020; CEP-XXI, 2020, 2022) referidos a los momentos de mayor aislamiento social para luchar contra el covid-19. La recuperación observada en el período 2020-2021 es leve y aún no compensa los efectos de la crisis.

Sin duda que los efectos de la pandemia y de la necesaria cuarentena implicaron un aumento de las desigualdades laborales y pérdidas de puestos de trabajo, de ingresos y de capacidad de compra del salario. Las

generales de la ley se agravan en la Argentina por su heterogeneidad estructural de décadas, la falta de inversiones, el persistente déficit fiscal y la agobiante deuda pública. Se suma a esto el contexto altamente inflacionario en medio del cual las negociaciones colectivas tendrían que recuperar una pérdida del poder adquisitivo cercana al 50% correspondiente al año anterior. Un escenario difícil para la negociación colectiva y aún más para el ajuste salarial de los trabajadores no registrados.

La gravedad de la situación impone la necesidad de políticas persistentes en el tiempo; que sean consensuadas entre el sistema político, empresarios, empleadores, formadores de precios, inversores, representantes sindicales, organizaciones de base, referentes de universidades y del sistema de ciencia y tecnología para que pueda desarrollarse un incremento de la producción que apunte al mercado (interno y externo), que genere valor agregado y puestos de trabajo genuinos con respeto a los derechos laborales y al medio ambiente.

3. Estructura ocupacional y calidad del empleo en las regiones urbanas

María Albina Pol, Valentina Ledda, Lucía Bagini

Si bien la crisis desatada por la irrupción del covid-19 afectó a la economía en su conjunto, la histórica fragmentación socioterritorial que caracteriza a nuestro país (Longhi y Osatinsky, 2016) y el carácter fuertemente espacial de las dinámicas impulsadas por la pandemia permiten presumir un impacto heterogéneo en las distintas regiones argentinas.

Desde el enfoque teórico asumido, las persistentes desigualdades socioeconómicas dentro de un país son el correlato de un modelo productivo desigual y heterogéneo que se imbrica con factores territoriales (concentración y dinamismo de la actividad económica, tamaño y capacidades de la población, etc.), lo que genera una estructura espacialmente desequilibrada. En otras palabras, y como se argumenta en la introducción de este libro, la heterogeneidad territorial reproduce la heterogeneidad estructural.³⁰ De ahí que la cuestión espacial sea fundamental para explicar la condición socioeconómica de la población y el acceso desigual al bienestar y la calidad de los empleos.

En ese marco, este capítulo tiene como objetivo analizar el comportamiento de los mercados de trabajo regionales en la Argentina en el período 2019–2020, con el fin de identificar el impacto de la crisis económico-sanitaria sobre las estructuras económico-ocupacionales y su efecto de precarización al interior del país.

Los antecedentes empíricos analizados (Trujillo Salazar y Villafañe, 2021; Longhi y Osatinsky, 2016; Boffi, 2015 y Jiménez, 2010, 2014) seña-

³⁰ De acuerdo con Bárcena y Prado (2016), dentro del estructuralismo latinoamericano, la preocupación por la dimensión territorial se remonta a los años sesenta, cuando se planteó que las estructuras productivas que se observaban en la organización espacial interna de los países reproducían, aunque no de manera idéntica, el esquema centro-periferia que se observaba entre los países. De este modo, dentro de un mismo país, coexisten sistemas económicos territorialmente situados que capturan o concentran el progreso tecnológico y la productividad, mientras otros sistemas son dependientes de aquellos o bien no tienen capacidad para promover y dinamizar el cambio tecnológico.

lan para el caso argentino la acumulación de barreras productivas que han configurado un escenario de significativas asimetrías socioterritoriales. Ese contexto enmarca el carácter estructural de los déficits laborales en las regiones del país. Las estimaciones de estos estudios muestran, como consecuencia de esos desequilibrios, una gran disparidad regional en los indicadores laborales y en la calidad del empleo y un recrudescimiento de esas desigualdades en tiempos recientes. El rasgo principal es la persistencia de altos niveles de informalidad laboral, que se magnifican en períodos de recesión económica, especialmente en regiones donde el sector microinformal es preponderante, como en los casos del Noreste (NEA) y Noroeste argentino (NOA).³¹

La crisis iniciada en marzo de 2020 como consecuencia de la llegada del covid-19 a nuestro país muestra rasgos inéditos por su gravedad y por los diferentes componentes que intervinieron en su dinámica. En el segundo trimestre del año se produjo la mayor contracción de la historia de la que se tiene registros estadísticos en la Argentina; la caída interanual del producto bruto fue de 19,1%, superior a la contracción del 16,3% registrada en el primer trimestre de 2002 tras la crítica salida de la convertibilidad (Niembro y Calá, 2021). Por su parte, la paralización total o parcial de las actividades económicas que resultó de la aplicación de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO y DISPO) generó un crecimiento inusitado en la proporción de población en situación de inactividad, con caída en los ingresos, reducción de la informalidad –como resultado de la mayor pérdida de puestos de trabajo desprotegidos– y, en cambio, fluctuaciones menores en los empleos formales (OIT, 2020a y 2020b; Manzanelli, Calvo y Basualdo, 2020; Beccaria y Maurizio, 2020).

En términos regionales, los resultados obtenidos por Niembro y Calá (2020, 2021)³² revelan un mayor impacto de la crisis, entre abril y junio

31 Los estudios sobre el tema demuestran que trabajadores y trabajadoras encuentran ubicación en el sector formal en épocas de expansión económica y entran al sector microinformal en períodos de depresión o crisis económica. Esto sugiere que el sector microinformal absorbe relativamente más trabajo durante las recesiones, aunque las tasas de salida del empleo se incrementan por los movimientos hacia el desempleo (Bosch y Moloney, 2006, en Jiménez, 2010).

32 Los autores construyen un índice de “afectación” económica territorial por covid-19 (IAET-Covid) que tiene en cuenta: a) la estructura productiva de las diferentes AEL en términos de empleo asalariado registrado en el sector privado; b) el grado de operatividad de cada sector; c) la movilidad de los trabajadores en las diferentes AEL; y d) la posibilidad de trabajo remoto en

de 2020, sobre las áreas económicas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las especializadas en turismo y en varias industrias (no esenciales) que se vieron fuertemente restringidas. La afectación también fue significativa en algunas provincias de la Patagonia que poseen un perfil extractivo de recursos naturales, como petróleo y minerales, actividades que se vieron limitadas tanto por la pandemia como por la crisis sectorial en el caso de los hidrocarburos. En el otro extremo, observan que la especialización en sectores agropecuarios y de alimentos ha sido esencial para minimizar los efectos de la pandemia, por lo que el impacto económico inicial fue algo más reducido en algunas provincias del norte del país, Cuyo y la región Pampeana.

Ese particular contexto permite aventurar como hipótesis de nuestro análisis que la crisis del covid-19 tuvo un efecto regresivo sobre todos los mercados de trabajo al interior del país, pero diferenciado según las estructuras productivas regionales en combinación con las medidas de aislamiento y distanciamiento social que impidieron que el sector microinformal actuara de manera contracíclica. De este modo, se habría registrado una mayor contracción del empleo durante el segundo trimestre de 2020 en las regiones con mayor peso del sector microinformal y en aquellas con mayores restricciones a la movilidad. Este proceso se habría revertido en los últimos meses del año a partir de la flexibilización de las medidas de confinamiento y una recuperación traccionada por el empleo precario. Así, las estructuras ocupacionales de todas las regiones se habrían reconfigurado hacia una mayor participación relativa del sector microinformal y un incremento en la proporción del empleo desprotegido.

Para realizar el análisis se aplica un diseño cuantitativo comparativo regional a partir de los datos proporcionados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para los años 2019 y 2020. El criterio de regionalización adoptado es el que utiliza el Indec, que distingue seis regiones económicas: Gran Buenos Aires (GBA),³³ Pampeana, Noroeste (NOA), Noreste (NEA), Cuyo y Patagonia.

las distintas actividades. El cálculo toma como unidad espacial de referencia la Áreas Económicas Locales (AEL) del MTEySS (Niembro y Calá, 2020).

33 De acuerdo con Salvia, Fachal y Robles (2018) es importante señalar que esta región se compone de dos áreas muy distintas en materia político-administrativa y de condiciones de vida: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y los 24 partidos del conurbano bonaerense que la rodean. Esta salvedad sirve a los fines de recordar que la heterogeneidad de los mercados laborales también repercute al interior de las grandes aglome-

PARTICIPACIÓN ECONÓMICA Y DESOCUPACIÓN A NIVEL REGIONAL

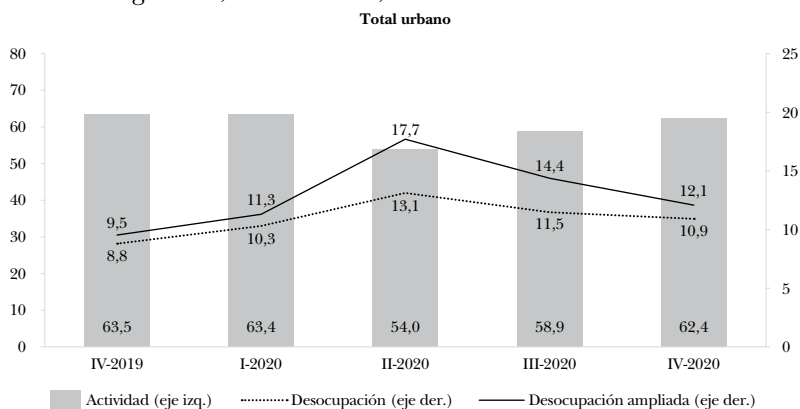
La oferta de fuerza de trabajo y los excedentes relativos generados por la demanda agregada de empleo que presentan los mercados laborales para diferentes regiones constituyen una primera aproximación a la heterogénea estructura económico-ocupacional argentina, y brindan un panorama inicial sobre el impacto de la crisis generada por la pandemia al interior del país. Esta situación se describe a continuación mediante tres indicadores: la tasa de actividad, la tasa de desocupación y la tasa de desocupación ampliada.³⁴

Según los datos de la EPH relativos a la población de 18 años y más (gráfico 3.1), durante 2020 se produjo una disminución de la participación laboral, que fue pronunciada sobre todo en el segundo trimestre del año. En esos meses, la reducción de la tasa de empleo fue más profunda que la de la tasa de actividad y el desempleo alcanzó al 13,1% de la población económicamente activa del conjunto de aglomerados. Sin embargo, dada la naturaleza de la crisis, parte de la caída en la tasa de participación se explicó por el retiro forzado o involuntario de un grupo de trabajadores y trabajadoras del mercado laboral, situación que en buena medida contuvo lo que en otras circunstancias hubiera sido una incidencia mayor en la tasa de desocupación. A partir de los cálculos realizados, al incorporar el efecto desaliento en la búsqueda de empleo, la desocupación abierta trepó en el segundo trimestre de 2020 al 17,7% para el total de aglomerados urbanos.

raciones urbanas. Sin embargo, es sabido que buena parte de las personas ocupadas en la CABA tienen residencia en el conurbano bonaerense, y también, aunque en menor medida, a la inversa. Esto hace que un análisis que discrimine geográficamente ambos aglomerados no refleje necesariamente las diferencias estructurales que atraviesan la región. El índice de movilidad muestra para esta región el efecto de medidas de aislamiento y restricción a las circulaciones más intensivas y prolongadas en el tiempo que en el resto de las regiones del país, en especial en el caso de la CABA.

34 Para calcular la tasa de desocupación ampliada a partir de la EPH, se considera como desocupadas a las personas que durante los últimos treinta días del momento de realización de la encuesta no buscaron trabajo porque referencian haberse cansado de hacerlo y por el poco trabajo que hay en esa época del año, es decir, se encuentran “desalentadas”. Esta búsqueda no activa de empleo, en la operacionalización “clásica”, clasifica a estas personas como inactivas.

Gráfico 3.1. Tasas de actividad, desocupación y desocupación ampliada para población de 18 años y más. En porcentaje, Argentina, total urbano, IV-2019 - IV-2020

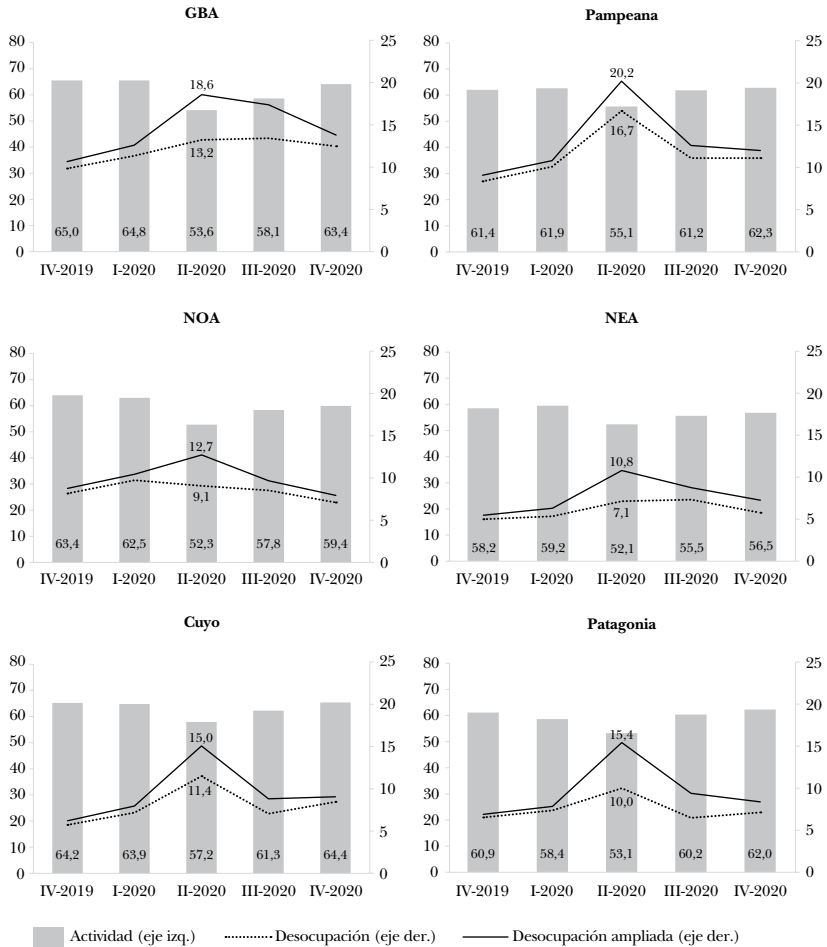


Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

A partir del tercer trimestre del año, y como resultado de la paulatina reversión de las medidas de confinamiento, se observó un regreso de las personas trabajadoras al mercado, por lo que las tasas de actividad y empleo tendieron a recuperarse. A pesar de ello, a fines de 2020 la propensión de las personas a participar en el mercado de trabajo se mantuvo en el total nacional por debajo de lo observado en el cuarto trimestre del 2019, con una diferencia de -1,1 puntos porcentuales (pp).

Si bien todas las regiones del país experimentaron una fuerte contracción en su oferta y demanda laboral en el segundo trimestre de 2020 y el inicio de una recuperación parcial a partir de la segunda mitad del año, la magnitud ha sido distinta y ello ha repercutido en los mercados laborales con diferentes intensidades. Por ello, el gráfico 3.2 muestra los niveles de participación económica y sus excedentes relativos a escala regional para el período comprendido entre los cuartos trimestres de 2019 y de 2020.

Gráfico 3.2. Tasas de actividad, desocupación y desocupación ampliada para población de 18 años y más por región. En porcentaje, Argentina, regiones, IV-2019 - IV-2020



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

El GBA fue la región que experimentó la mayor retracción en la participación laboral en el segundo trimestre de 2020, con una pérdida de 11,2 pp respecto del trimestre anterior. El NOA y el NEA, que históricamente han registrado las tasas de actividad más bajas a nivel nacional, también manifestaron una significativa reducción del número de personas que buscaban incorporarse al mercado de trabajo, con una variación

trimestral negativa de 10,2 pp y 7,1 pp respectivamente. Aunque las tasas de actividad de esas regiones mostraron cierta recuperación en la segunda mitad del año, los valores del cuarto trimestre se ubicaron por debajo de los registrados en igual período de 2019.

En el otro extremo, la Patagonia fue la región con la menor caída en la tasa de actividad (-5,3 pp) durante el segundo trimestre de 2020, seguida por Cuyo y la región Pampeana, con reducciones de 6,7 pp y 6,8 pp respectivamente. Las regiones Pampeana y Patagonia mostraron a su vez una mayor recuperación en los niveles de participación, con incrementos interanuales de 0,8 pp y 1,1 pp en el último trimestre de 2020, mientras que Cuyo registró un valor similar a 2019.

La disminución de las probabilidades de conseguir un empleo en el contexto de crisis provocó además un aumento en las tasas de desocupación en la mayoría de las regiones durante el segundo trimestre de 2020. Las subas más pronunciadas se registraron en las regiones Pampeana y Cuyo. En el caso del NOA, la comparación trimestral mostró una leve caída en el número de personas en busca de empleo (-0,7 pp), lo que fue resultado de una mayor salida del mercado de trabajo hacia la inactividad en esa región (la tasa de actividad pasó de 62,5% a 52,3% entre los segundos trimestres de 2019 y 2020).

La relativa recuperación iniciada a mediados de 2020 hizo que algunas de las personas que estaban fuera de la fuerza de trabajo pasaran directamente a trabajar, pero también que otras que habían perdido su trabajo al comienzo de la pandemia iniciasen una búsqueda activa. Esos movimientos generaron que la mayoría de las regiones permaneciera en el cuarto trimestre de 2020 con valores de desempleo por encima de los observados a finales del año anterior, con excepción del NOA, que cerró 2020 con un desempleo menor al del cuarto trimestre de 2019 –resultado de una recuperación más baja del nivel de actividad en esa región–, y Patagonia, donde la tasa permaneció casi sin variaciones.

Por su parte, la propensión a desistir en la búsqueda de un empleo tuvo un mayor impacto en GBA y Patagonia que en el resto de las regiones. De no haberse generado el efecto desaliento, que –como se señaló en el capítulo 2– redujo marcadamente la potencial desocupación, esta habría ascendido en el segundo trimestre de 2020 a 18,6% y 15,4% en GBA y Patagonia respectivamente (5,4 pp por encima de la tasa de desocupación en ambos casos). Asimismo, la región Pampeana fue la que alcanzó el valor más alto de desempleo ampliado, con un 20,2% (3,5 pp por encima de la tasa de desocupación) para el trimestre más ál-

gido de la pandemia,³⁵ y el NEA presentó el valor más bajo, con un 10,8%. En todas las regiones se observó, hacia el tercer trimestre de 2020, una reducción del efecto desaliento, con excepción del GBA, donde la caída recién se registró hacia el último trimestre del año.

Estas dinámicas mantienen relación con las heterogéneas estructuras productivas de cada región y la incidencia que sobre ellas tuvieron las medidas de restricción que se aplicaron en las distintas jurisdicciones al interior del país. En el caso específico del GBA, y como ha sido señalado, vio muy afectada la operatividad de sus actividades, ya que tuvo durante 2020 mayores restricciones, lo que en buena medida explica la mayor caída en la tasa de participación y la persistencia del desaliento laboral.

DESIGUALDADES SECTORIALES A NIVEL REGIONAL

Con el propósito de observar los efectos regresivos de la pandemia a nivel territorial, se analizan a continuación los cambios en las estructuras socioocupacionales y en el volumen de empleo en las distintas regiones geográficas del país para el período 2019-2020. Se aplica para ello la perspectiva teórico-metodológica desarrollada por el enfoque de la heterogeneidad estructural, mediante un análisis de la segmentación de los mercados regionales.

De acuerdo con los datos de la EPH, a fines de 2019 el trabajo en relación de dependencia explicaba el 65,9% de los empleos del conjunto urbano del país. Patagonia era la región con mayor peso del empleo asalariado (73,3%) y el NEA presentaba la menor proporción de trabajadores y trabajadoras en esa condición (63,4%).

La tendencia previa a la crisis del covid-19 mostraba una caída del empleo asalariado tanto a nivel nacional como regional,³⁶ situación que se agudizó durante 2020. La participación de las personas asalariadas en el total nacional alcanzó en el cuarto trimestre de ese año el 64,6%, lo que

35 Los aglomerados de mayor tamaño comprendidos dentro de la región Pampeana fueron los que arrojaron en el segundo trimestre de 2020 los valores más elevados de desempleo ampliado: Mar del Plata, 26%; Gran Santa Fe, 20,3%; Gran Córdoba, 19,2% y Gran Rosario, 17,9%.

36 En el cuarto trimestre de 2018, el trabajo asalariado en el total de los aglomerados urbanos representaba el 67,1% y para fines de 2019, el 65,9%. En todas las regiones se redujo la proporción de personas asalariadas entre esos años.

expresa una reducción de 1,3 pp respecto de igual trimestre de 2019. Las mayores contracciones se registraron en las regiones Patagonia (-2,7 pp), NOA (-2 pp) y GBA (-1,7 pp), y las menores, en la región Pampeana (-0,8 pp) y en Cuyo (-0,7 pp). El NEA, por el contrario, experimentó durante el período un aumento en el porcentaje de asalariados y asalariadas (1,8 pp), lo que estaría asociado a la fuerte caída del empleo independiente, que tiene en esta región una mayor importancia relativa.

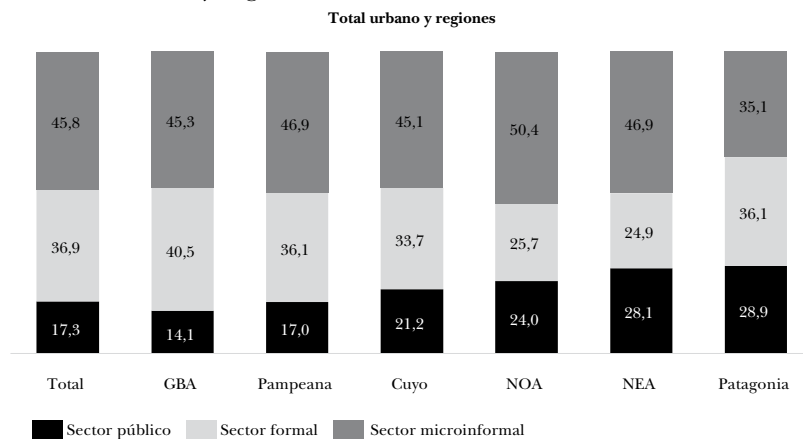
Como resultado de esos cambios, en el cuarto trimestre del año Patagonia se mantenía como la región con mayor participación del trabajo asalariado (70,6%), mientras que la región Pampeana desplazaba al NEA para ubicarse como la de menor porcentaje de fuerza de trabajo asalariada (63,8%). De esta manera, a finales de 2020 se observó una disminución de la brecha entre regiones en relación con el peso del segmento asalariado y no asalariado en el empleo.

En el gráfico 3.3 se expone la composición del empleo según sectores ocupacionales³⁷ de la fuerza de trabajo de 18 años y más para el cuarto trimestre de 2019 en el total nacional y las regiones, a fin de observar las estructuras en el período previo a la pandemia. Los datos muestran que el sector microinformal era el de mayor incidencia, con una participación del 45,8% en el total de empleos del conjunto urbano del país, mientras que el sector formal representaba el 36,9% y, el público, el 17,3%.

En la comparación interregional se observan algunas disparidades que reflejan las heterogeneidades al interior del país. Las regiones NOA, NEA y Pampeana presentaban los mayores porcentajes de ocupaciones en el sector microinformal, mientras Patagonia era la región con menor incidencia de ese sector en el conjunto del empleo. Al mismo tiempo, la ocupación en el sector privado formal era más alta en GBA, secundada por la región Pampeana y la Patagonia, mientras que el peso de ese sector era significativamente menor en el NOA y el NEA. En cuanto al sector público, su participación se ubicaba por encima del promedio nacional en Patagonia, NEA, NOA y Cuyo, y mostraba una menor importancia relativa en la región Pampeana y GBA.

37 En la introducción del libro se presenta una matriz con los tipos de inserción económico-ocupacional de la fuerza de trabajo en los distintos sectores (formal privado, público y microinformal) y su definición operacional.

Gráfico 3.3. Participación de los sectores económico-ocupacionales en la composición del empleo para población de 18 años y más. En porcentaje, Argentina, total urbano y regiones, IV-2019



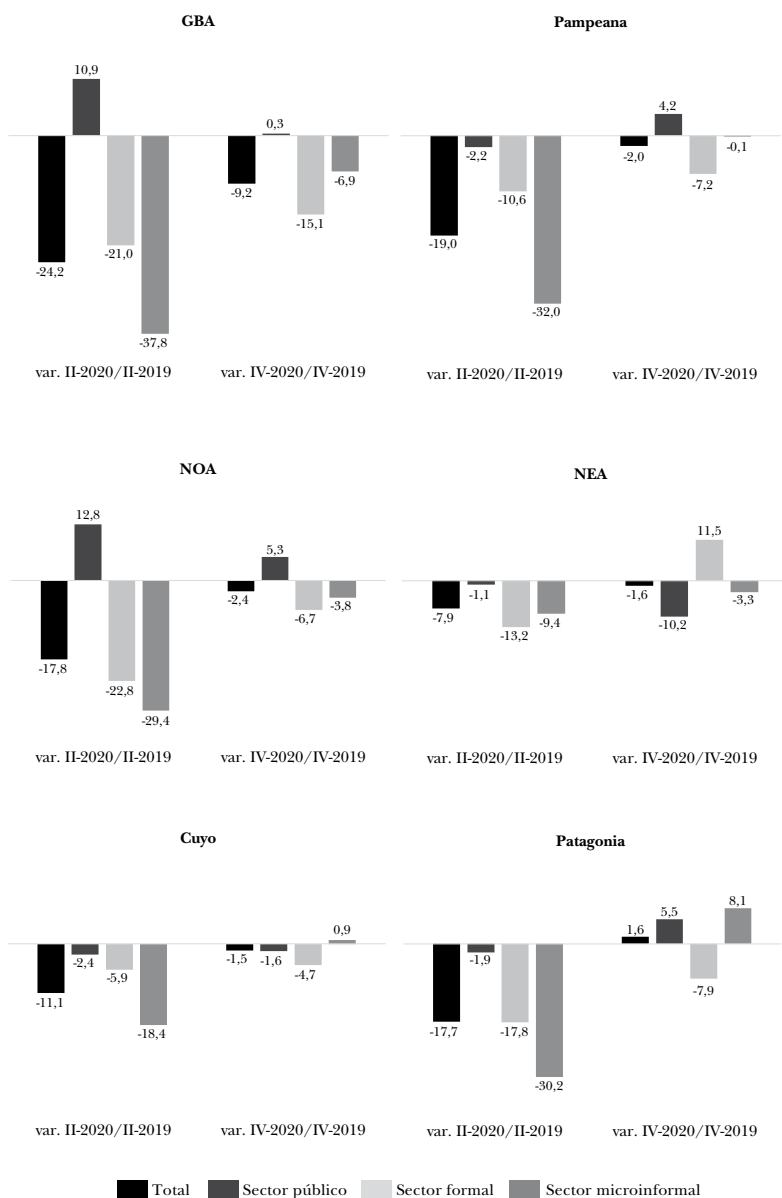
Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

En el gráfico 3.4 se exponen las variaciones en el volumen del empleo total y sectorial entre los segundos y cuartos trimestres de 2019 y 2020,³⁸ lo que permite observar los cambios en las estructuras económico-ocupacionales al interior del país como consecuencia de la pandemia.

A partir del análisis de los datos, se verifica una fuerte contracción en el número total de empleos en todas las regiones durante el segundo trimestre de 2020. La comparación con igual trimestre de 2019 muestra que en el total urbano nacional la cantidad de personas trabajadoras se redujo un 20,8%. GBA fue la región que registró una mayor pérdida relativa de puestos de trabajo, seguida por la región Pampeana, el NOA y la Patagonia. NEA y Cuyo, por su parte, arrojaron variaciones negativas muy por debajo del promedio nacional y de las demás regiones.

³⁸ La selección de esta ventana temporal se realizó para comparar el momento más crítico de la pandemia, dado por las mayores restricciones a la circulación en el segundo trimestre de 2020, con el mismo trimestre correspondiente al año anterior. A su vez, interesa estudiar lo sucedido durante el cuarto trimestre de 2020 y su variación respecto del mismo período en 2019, ya que en los últimos meses del año comenzaron a manifestarse signos de recuperación económica a partir de la salida paulatina del ASPO y el DISPO.

Gráfico 3.4. Variaciones porcentuales en el volumen de empleo por sector y región para población de 18 años y más. En porcentaje, Argentina, regiones, II-2019 - II-2020, IV-2019 - IV-2020



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

En la descomposición sectorial se observa que ese comportamiento contractivo del empleo estuvo sobre todo explicado por la pérdida de puestos de trabajo vinculados al sector de baja productividad. En el conjunto de aglomerados el número de ocupaciones del sector microinformal se redujo un 33% respecto del período abril-junio de 2019, dinámica que estuvo principalmente traccionada por GBA, donde la caída interanual fue mayor al promedio nacional, mientras que el resto de las regiones se ubicó por debajo de ese promedio.

En cuanto al empleo privado formal, en el segundo trimestre de 2020 el número de ocupados y ocupadas del sector también disminuyó en el conjunto del país (-17,8%) y en todas las regiones, aunque en magnitudes menores a las observadas en el sector microinformal. En este caso el NOA aparece como la región más afectada, seguida por el GBA y la Patagonia. En el otro extremo, Cuyo fue la región con menor pérdida interanual de personas trabajadoras del sector privado formal.

Por otro lado, al observar lo que sucede con el volumen de la ocupación en el sector público, se puede indicar que, entre los segundos trimestres de cada año, aumentó en el conjunto de los aglomerados (5,4%), con incrementos significativos en NOA y GBA y leves caídas en el resto de las regiones.

A partir del tercer trimestre de 2020, en correspondencia con la paulatina reapertura de actividades y el aumento de los niveles de participación económica, se registró una expansión del empleo en todas las regiones sostenida sobre todo en la creación de puestos de trabajo del sector microinformal, aunque las variaciones interanuales de los cuartos trimestres muestren una disminución en el volumen de empleo del sector en algunas de las regiones, como se analiza a continuación.

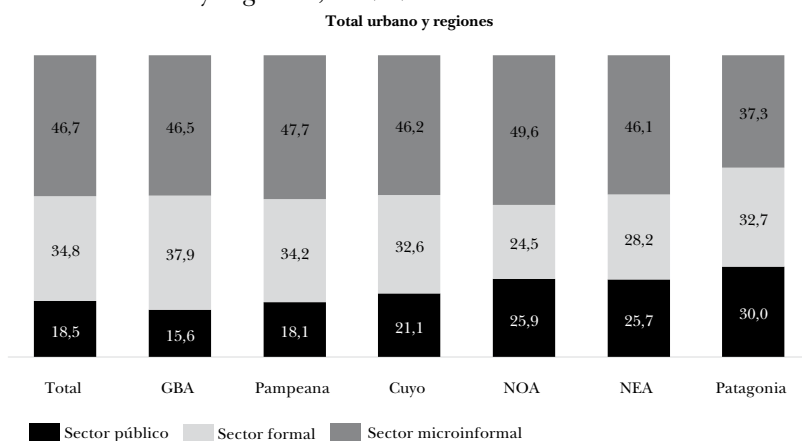
La comparación de las variaciones en el volumen de empleo sectorial entre los cuartos trimestres de 2019 y 2020 permite ver el impacto en el corto plazo que las transformaciones provocadas por la pandemia y las medidas de aislamiento tuvieron sobre la estructura socioocupacional de cada región. Ese análisis muestra que, en el total nacional, el número de ocupados y ocupadas del sector microinformal se redujo 4%, traccionado por GBA, NOA y NEA. En Cuyo, por el contrario, esas ocupaciones crecieron levemente, mientras que en Patagonia el aumento fue aún más significativo. En la región Pampeana, por su parte, los empleos del sector microinformal se mantuvieron relativamente estables en relación con el cuarto trimestre de 2019.

En cuanto al sector privado formal, las cifras del cuarto trimestre de 2020 exponen una caída en el número de empleos privados en el total país (-11,2%) y en todas las regiones, excepto en NEA, donde creció en

relación con el cuarto trimestre de 2019.³⁹ Las mayores contracciones se produjeron en GBA, Patagonia y la región Pampeana.

El empleo del sector público evidenció un comportamiento algo más estable a lo largo del período, con variaciones anuales negativas en NEA y Cuyo e incrementos en Patagonia, NOA y la región Pampeana. En GBA el volumen de empleo público no mostró variaciones significativas entre los últimos trimestres de 2019 y 2020.

Gráfico 3.5. Participación de los sectores económico-ocupacionales en la composición del empleo para población de 18 años y más. En porcentaje, Argentina, total urbano y regiones, IV-2020



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

En síntesis, los cambios en los sectores económico-ocupacionales a nivel regional muestran el desigual comportamiento de las estructuras productivas del país frente a la crisis. Al comparar los gráficos 3.3 y 3.5 surge que, en el cuarto trimestre de 2020, las actividades del sector microinformal incrementaron su participación en la distribución de la fuerza de trabajo en Patagonia (2,2 pp), GBA (1,2 pp), Cuyo (1,1 pp) y la región Pampeana (0,9 pp) y perdieron peso en los aglomerados del norte del país (-0,8 pp). La proporción de ocupados y ocupadas del sector formal, por su parte, se redujo en todas las regiones, con excepción del NEA.

³⁹ Según los datos de la EPH-Indec, Gran Resistencia tuvo un crecimiento del 33% interanual, Corrientes 6,2% y Posadas 4,8%.

En ese contexto el empleo del sector público ganó participación en NOA (1,9 pp), GBA (1,5 pp), la región Pampeana (1,1 pp) y Patagonia (1,1 pp) y disminuyó su peso en NEA (-2,5 pp), mientras que en Cuyo se ubicó en los mismos valores del año anterior.

De esta manera, en el cuarto trimestre de 2020, NOA continuaba siendo la región con mayor porcentaje de personas trabajadoras en el sector microinformal, pero con una incidencia relativa más baja que a finales de 2019, mientras que Patagonia permanecía como la región con menor participación de los sectores de baja productividad en el conjunto del empleo, pero, en este caso, con un mayor peso que el observado a finales del año anterior. En otras palabras, el sector microinformal incrementó su participación en las regiones que tenían un menor peso de este sector a fines de 2019. Esto generó una disminución de la brecha territorial en términos de la participación del sector de baja productividad en la composición del empleo.⁴⁰

LA CALIDAD DEL EMPLEO EN LAS DISTINTAS REGIONES URBANAS

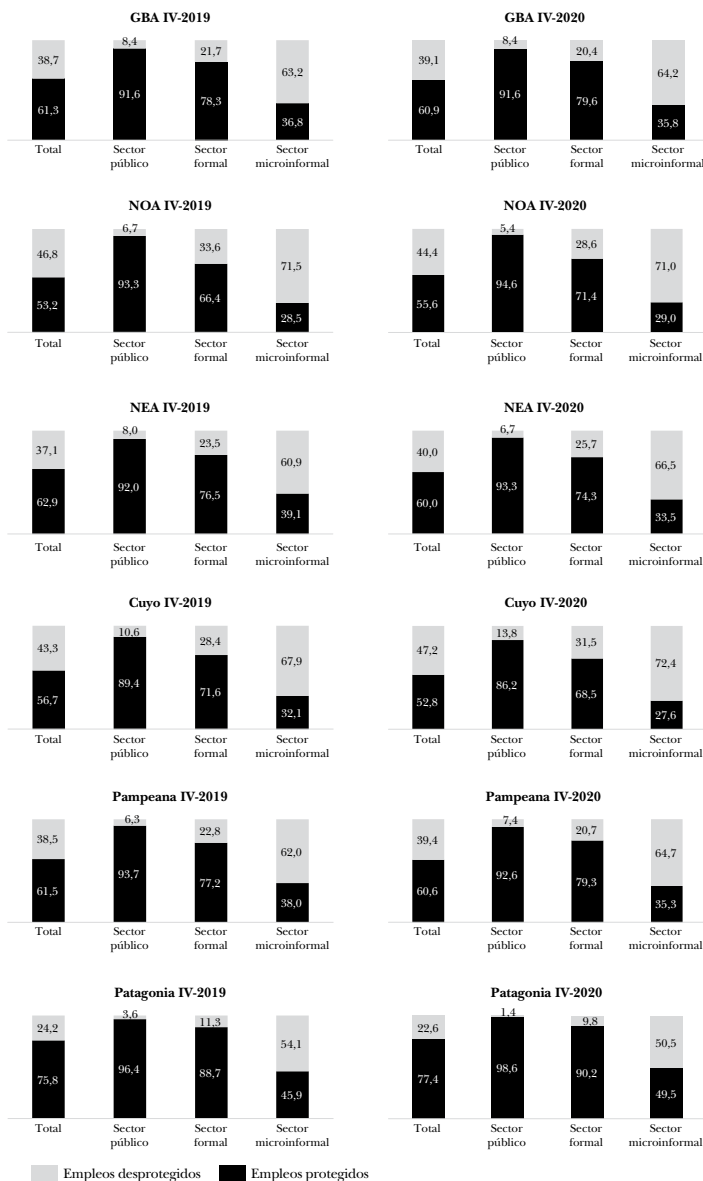
De acuerdo con la perspectiva teórica que enmarca este estudio, la estructura sectorial no predica de manera directa sobre la calidad de los empleos a los que puede acceder la fuerza de trabajo, dado que, si bien cabe esperar una relación estructurante entre las desigualdades productivas de cada sector y los niveles de precariedad de una ocupación, esta última estaría fuertemente determinada por el tipo de mercado o segmento laboral en el cual está inserta.

Por tanto, para analizar el efecto de precarización que la crisis generada por el covid-19 tuvo sobre las estructuras regionales, en el gráfico 3.6 se presenta la participación de los segmentos primario (empleos regulados) y secundario (empleos no regulados, desprotegidos o precarios)⁴¹ en el conjunto del empleo de cada región y por sector de inserción para los cuartos trimestres de 2019 y 2020.

40 Para el cuarto trimestre de 2019, NOA registraba una participación del 50,4% y Patagonia, del 35,1%, lo que implica una brecha de 15,3 pp. Para fines de 2020, esta brecha se había reducido a 12,3 pp.

41 En la introducción del libro se presenta la distinción entre puestos del segmento primario o “regulado” y empleos del segmento secundario o “no regulado” y su respectiva definición operativa como una aproximación al estudio de la calidad del empleo.

Gráfico 3.6. Participación de la calidad del empleo en los sectores económico-ocupacionales por región. En porcentaje, Argentina, regiones, IV-2019 - IV-2020



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Píscas Covid-19 n° 14.

En primer lugar, la participación del empleo precario en las diferentes regiones, para el cuarto trimestre de 2019, muestra una amplia dispersión en relación con el promedio nacional (39,1%): los valores oscilaban entre 46,8% para el caso del NOA y 24,2% para la Patagonia. En la comparación interanual se observa un incremento en la participación de los empleos no protegidos en todas las regiones excepto en NOA y Patagonia, donde cae, probablemente por una destrucción de esta clase de empleos durante el segundo trimestre que, para el cuarto trimestre, aún no se recuperaban. Cuyo fue la región que registró el mayor incremento en la proporción de empleo desprotegido sobre su estructura ocupacional, lo que se explica por la mayor generación de este tipo de empleos en la recuperación económica de los últimos meses del año.

Como resultado de esos movimientos, a finales de 2020 se advierte un aumento de la brecha de precariedad entre regiones, con valores extremos de 47,2% para el caso de Cuyo y 22,6% en Patagonia.

En segundo lugar, el análisis por sectores ocupacionales indica que la Patagonia presentaba en el cuarto trimestre de 2019 una mayor participación del segmento regulado en los tres sectores en relación con las demás regiones. Este comportamiento se hace más significativo hacia finales de 2020, al registrar los aglomerados del sur del país una caída interanual en el peso del segmento secundario principalmente en el sector microinformal, pero también en el formal y en el público, lo que estaría relacionado con la interrupción de las actividades extractivas durante el segundo trimestre (Niembro y Calá, 2021), que perjudicó sobre todo al empleo desprotegido que aún no se recuperaba en los últimos meses del año.

En GBA se observa una caída interanual en el peso del segmento secundario dentro del sector formal y un aumento en el microinformal, mientras que se mantiene sin cambios en el sector público. La región Pampeana experimenta una dinámica similar, aunque en este caso también se registra un aumento de la precariedad laboral dentro del empleo público.

Por su parte, el NOA, que en el período prepandemia presentaba los mayores valores de precariedad laboral en los sectores formal y microinformal de su estructura productiva, experimentó durante 2020 una merma significativa del peso del segmento secundario en el empleo privado formal, posiblemente causada por una mayor destrucción de esos puestos de trabajo, mientras que se mantuvo la alta proporción de fuerza de trabajo precaria en el sector microinformal. Por el contrario, en el caso del NEA, aumentó la participación del segmento secundario en el empleo privado formal y también hubo un fuerte incremento de la participación

del empleo desprotegido en el sector de menor productividad. En las dos regiones el empleo no regulado en el sector público se vio reducido.

Por último, la región Cuyo, que ya presentaba altos niveles de precariedad en el conjunto de su estructura productiva en el período previo a la pandemia, experimentó durante 2020 un aumento en la participación del empleo no protegido en los tres sectores, por lo que, hacia finales del período, era la región que presentaba la mayor desigualdad dentro de su estructura económico-ocupacional.

LAS DESIGUALDADES REGIONALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La evidencia reunida en este capítulo confirma que el efecto regresivo de la pandemia sobre el mercado de trabajo argentino durante 2020 tuvo intensidades y magnitudes diferentes al interior del país. Esas disparidades estuvieron relacionadas con las heterogéneas estructuras económico-ocupacionales que presentan las regiones y con el impacto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social aplicadas para evitar la propagación del virus.

En tal sentido, dado que las políticas de confinamiento golpearon de manera más significativa a las ocupaciones del sector microinformal, la hipótesis de partida indicaba una mayor contracción del empleo durante el período más crítico de la pandemia –segundo trimestre de 2020– en las regiones con mayor incidencia de ese sector y en aquellas con mayores restricciones a la movilidad, y que, en los últimos meses del año, las estructuras ocupacionales regionales se habrían reconfigurado hacia una mayor participación relativa del sector microinformal y un incremento en la proporción del empleo desprotegido.

Las tendencias estudiadas demuestran un comportamiento contractivo de todos los mercados de trabajo regionales entre los meses de abril y junio de 2020, con una caída en la participación económica, un aumento del desempleo y del desempleo ampliado. En la comparación interregional pudo observarse que la disminución de la tasa de actividad fue más significativa en los aglomerados del GBA, el NOA y el NEA, mientras que los mayores aumentos del desempleo se registraron en GBA y la región Pampeana, áreas que aglutinan a los aglomerados urbanos más grandes del país. Así, el retroceso del mercado de trabajo, durante el segundo trimestre de 2020, parece haber sido efectivamente más alto en las regiones que tenían mayor peso del sector microinformal hacia fines de 2019,

como NOA, NEA y la región Pampeana, y también en GBA que, durante 2020, tuvo mayores restricciones a la movilidad de sus residentes.

Los datos sobre volumen del empleo señalan durante el segundo trimestre de 2020 una fuerte retracción en el número de trabajadores y trabajadoras en todas las regiones, con magnitudes mayores en GBA, la región Pampeana y NOA, no así en NEA, que fue la región con menor reducción en el volumen de empleo. Este último comportamiento de NEA se vincula a que tiene la tasa de actividad más baja del país y no tanto a un menor impacto de la pandemia. En la descomposición sectorial del cambio en el volumen de empleo se observó en todas las regiones un comportamiento contractivo del empleo tanto formal como microinformal, pero que fue de mayor magnitud en este último. Nuevamente, esta dinámica estuvo sobre todo traccionada por GBA, donde la caída interanual del empleo microinformal fue mayor al promedio nacional, mientras que el resto de las regiones se ubicaron por debajo de ese promedio. Respecto del empleo formal, NOA, GBA y Patagonia fueron las regiones que más puestos de trabajo perdieron. Además, se registró un incremento del empleo público en especial en NOA y algo más leve en GBA.

Como resultado de esas dinámicas y de los desiguales procesos de reactivación económica que se iniciaron en la segunda mitad del año, hacia fines de 2020 las actividades del sector microinformal habían incrementado su participación en la distribución de la fuerza laboral en todas las regiones excepto en los aglomerados del norte del país, donde los mercados de trabajo mostraron mayores dificultades de recuperación. Al mismo tiempo, la proporción de personas ocupadas del sector formal se redujo en todas las regiones con excepción del NEA, donde se incrementó, mientras que el empleo del sector público ganó participación en todas las regiones, menos en NEA y Cuyo. De esta manera, en el cuarto trimestre de 2020, el NOA continuaba siendo la región con mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras en el sector microinformal, pero con una incidencia relativa más baja que a finales de 2019, mientras que Patagonia permanecía como la región con menor participación de los sectores de baja productividad en el conjunto del empleo, aunque con un mayor peso que el observado a finales del año anterior. En otras palabras, el sector microinformal no registró un incremento en las regiones que presentaban una mayor participación de ese sector, pero sí en aquellas que tenían una participación menor al promedio nacional a fines de 2019. Esto generó una disminución de la brecha territorial en términos de la participación del sector de baja productividad en la composición del empleo.

Por último, a propósito de la precarización del empleo, la crisis impulsó un incremento en el peso de los empleos no protegidos en todas las regiones excepto en el NOA y en la Patagonia, donde cayó probablemente por una destrucción de esos empleos durante el segundo trimestre, que, para el cuarto trimestre, aún no se recuperaban. Cuyo fue la región que registró el mayor incremento en la proporción de empleo desprotegido sobre su estructura ocupacional. Como resultado de esos movimientos, a finales de 2020 se observó un aumento de la brecha de precariedad laboral entre regiones.

4. Pobreza y desigualdad: el papel del mercado de trabajo y las políticas sociales

Ramiro Robles, María Noel Fachal

¿Cuáles son las principales tendencias de la desigualdad económica y la pobreza en la Argentina para los períodos ordenados por el antes (2019) y el durante (2020-2021) de la pandemia de covid-19? ¿Qué circuitos de renta tuvieron mayor o menor relevancia a lo largo de la distribución del ingreso para definir el trayecto de las disparidades y las privaciones entre los hogares? ¿En qué medida la capacidad económica de los hogares se trastoca, o preserva, para afrontar su reproducción cotidiana, ante el desplome macroeconómico del período reciente?

En este capítulo, que intenta responder estas preguntas a través del análisis tripartito de las unidades domésticas urbanas, el mercado de trabajo y los sistemas de protección social, se parte de un supuesto que retoma algunos de los lineamientos del enfoque estructuralista latinoamericano para el caso argentino. A saber, los efectos distributivos regresivos recientes están moldeados principalmente por el impacto que los *shocks* tienen sobre dos características de la relación entre los hogares y los circuitos de ingreso en la Argentina:

- a) el acceso dispar a un mercado de trabajo persistentemente heterogéneo; y
- b) la vinculación con sistemas de protección social fragmentarios.

En conjunto, estas relaciones entre inserción, unidad doméstica y políticas estatales son prioritarias en la regulación cotidiana de la reproducción económica de la población, y posibilitan los cambios en el bienestar de las personas y las familias. En este sentido se postula que, a pesar del carácter general de las crisis económico-sociales recientes, los movimientos en el ingreso de los hogares argentinos, la incidencia asimétrica de déficits de pobreza monetaria y el nivel general de desigualdad distributiva siguen de cerca ambas características referidas a la inserción laboral y a las entradas de dinero del sistema de protección social.

Al igual que en otros países de la región y el resto del globo, distintos rasgos del panorama socioeconómico nacional han sido directamente afectados por la pandemia de covid-19, en particular los niveles de bienestar económico de los hogares y la configuración distributiva argentina en general (Cepal, 2021a). En 2020, la necesidad de contener la propagación viral impulsó al Estado nacional a disponer, como se adelantó en la introducción, una batería de medidas sanitarias inéditas y políticas sociales destinadas a mitigar en parte el impacto económico y social de aquellas medidas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los desequilibrios propios de una matriz productiva heterogénea no solo persistieron, sino que se acentuaron, en el marco del nuevo contexto que introdujo la pandemia.

Al igual que el resto de la región, los procesos de aislamiento social afectaron de manera significativa la actividad económica, laboral y la vida reproductiva de los hogares, por lo que se trastocó el acceso a recursos y el vínculo estrecho entre estas dimensiones (Filgueira y otros, 2020; Maurizio, 2021). Los efectos regresivos del *shock* económico y social que acarrió la pandemia para la sociedad argentina arribaron a un escenario complejo que antes había transitado por: a) mejoras significativas en la distribución y el bienestar en la primera década del siglo XXI (Beccaria y Maurizio, 2012); b) desaceleración y estancamiento de esta tendencia virtuosa en el siguiente lustro (Salvia, Poy y Vera, 2020); y c) crisis abrupta en indicadores distributivos y de bienestar, al ritmo de la creciente inestabilidad macroeconómica y la crisis externa más reciente. En este sentido, la pandemia de covid-19 encontró un escenario distributivo sensiblemente más deteriorado que el que se registraba casi una década atrás y un contexto de elevado endeudamiento externo que limitó aún más la capacidad estatal para afrontar el *shock* derivado de la crisis sanitaria.

LOS HOGARES, EL MERCADO DE TRABAJO Y EL ACCESO A LA PROTECCIÓN SOCIAL

Los atributos del mercado de trabajo adquieren primacía en la configuración de la distribución del ingreso y en el acceso al bienestar entre los hogares, específicamente, a través de la inserción ocupacional de sus miembros, en carácter de fuerza de trabajo, y del acceso a los recursos monetarios que se originan a partir de dicha inserción. En el contexto latinoamericano, las asimetrías distributivas originadas en el acceso de-

sigual a las remuneraciones laborales se refuerzan por la presencia de heterogeneidades ocupacionales, derivadas de la estructura productiva, que vigorizan otras formas de desigualdad social entre la fuerza de trabajo y los hogares (Cepal, 2016b). A pesar de ciclos expansivos en materia económica o redistributiva, impulsar un proceso de convergencia social resulta esquivo. De acuerdo con la perspectiva estructuralista latinoamericana, la noción de la heterogeneidad estructural aporta un punto de partida útil para analizar la desigualdad económica a nivel de los hogares (Salvia, 2012; Cepal, 2016b). Según este enfoque, las economías periféricas presentan brechas elevadas en sus niveles de productividad. Esto último conduce a la presencia de un sector de microactividades de baja productividad, o informal, de magnitud relevante, y escasa capitalización y remuneraciones (Tokman, 2007; Salvia, 2012). Aquellas personas cuyas oportunidades de acceso a los estratos productivos más dinámicos resultan vedadas quedan en gran medida relegadas a ocupaciones informales (Tokman, 2007; Di Filippo, 2009).

Las fronteras estructurales del aparato productivo resultan un rasgo central de la desigualdad en la inserción ocupacional y en el patrón de estratificación social (Tokman, 2007; Salvia, 2012). Para el caso de nuestro país, diferentes contribuciones han provisto evidencias acerca de la consolidación de estos rasgos sobre la estructura económico-ocupacional urbana durante las últimas décadas (Salvia, 2012; Poy, Robles y Salvia, 2021), especialmente agravada por la reestructuración económica de la década del noventa: rezago tecnológico, mayor concentración económica y niveles de heterogeneidad estructural más elevados (Wainer y Schorr, 2014; Abeles, Lavarello y Montagu, 2018). Esto se expresaría, de manera persistente, en los niveles de desigualdad distributiva entre los hogares, en desmedro del sector de baja productividad (Poy, 2020).⁴²

El vínculo entre la dinámica distributiva y el mantenimiento de una estructura ocupacional heterogénea adquiere su expresión más grave en la permanencia de contingentes de población bajo condiciones de po-

42 No solo persiste una desigual vinculación con los puestos de trabajo y la estructura productiva, sino que además se mantiene la segmentación laboral, pues una parte importante de la fuerza de trabajo de los hogares no logró acceder a empleos registrados en la seguridad social incluso en el momento de expansión que caracterizó a la primera década del nuevo siglo. Asimismo, son precisamente los hogares con menos recursos los que acceden en menor medida a empleos protegidos (Groisman, 2011).

breza, déficits en la satisfacción de necesidades y la adquisición de bienes básicos para la reproducción de la vida. A pesar de sus limitaciones, en este estudio se utiliza –en el abordaje de la pobreza– el método tradicional de medición por canasta, que contempla la relación entre ingresos percibidos y canasta de bienes alimentarios y no alimentarios (Indec, 2016; Bonfiglio, Salvia y Vera, 2020).⁴³

El mercado de trabajo tiene un papel económico preponderante al ser la principal fuente de ingresos en los hogares. Sin embargo, las políticas públicas orientadas a garantizar ciertos niveles de integración social consagrados en derechos sociales desempeñan un papel no menor en la reproducción de las condiciones de vida (Castel, 1997; Martínez Franzoni, 2008a). Desde el punto de vista estructural, la intervención estatal sobre grupos sociales atiende a dos necesidades regulatorias del proceso de acumulación de capital: el mantenimiento y reproducción en el tiempo de la fuerza de trabajo, y la institucionalización o canalización del conflicto social (Offe, 1990; Poy, 2021). En este sentido, las intervenciones sociales del Estado operan sobre las condiciones y la reproducción de la vida de la población (Cortés y Marshall, 1991; Danani, 2009).⁴⁴

Las políticas sociales son relevantes para este estudio distributivo porque, en el marco de la crisis sanitaria y aislamiento, desempeñaron un papel significativo frente a la desaparición de empleos durante el período. Asimismo, en un nivel microsocioal, las transferencias en dinero permiten a los hogares acceder a ingresos que complementan o reemplazan los derivados de volcar fuerza de trabajo al empleo, y de esta manera preservar, o apuntalar, su satisfacción de necesidades (Torrado, 2006; Comas y Poy, 2020). En paralelo, a nivel agregado o macrosocioal, el sistema de protección social establece una relación recursiva con las pautas de estratificación socioal, y refuerza o atempera las desigualdades económicas que

43 En el cálculo de la línea de pobreza se tiene en cuenta el valor de la canasta básica alimentaria (CBA), a la que se incorporan bienes y servicios no alimentarios, tales como la vestimenta, la salud y la educación, para obtener de este modo la canasta básica total (CBT) (Indec, 2016: 5).

44 La reproducción involucra dimensiones: a) biológicas e intergeneracionales; b) materiales, como el acceso a los recursos requeridos para cubrir las necesidades básicas de los miembros del hogar; y c) de las relaciones sociales, normas y pautas que dan un marco a la forma en que se organiza la vida del hogar (Eguía y Ortale, 2004: 22).

derivan del vínculo que tienen los hogares con el mercado de trabajo, a través de la constitución de un circuito de distribución secundaria del ingreso. Por último, en términos históricos, la región se ha caracterizado por la sucesión y superposición de esquemas de intervención social estatal, lo que deriva en la presencia de un sistema de protección social estratificado y segmentado, que combina diferentes lógicas de acceso, elegibilidad y financiamiento (Filgueira, 2015).

Durante el siglo XXI, las sociedades de América Latina han registrado una paulatina masificación de la protección social a través de diferentes mecanismos. Se fortalecieron, o ampliaron, esquemas de asistencia previos, y/o se flexibilizaron los criterios para el acceso a pensiones (Filgueira, 2015; Poy, 2021). En la Argentina, durante la primera década del siglo XXI, esto se vio reflejado en un incremento de la cobertura previsional, la recomposición de los haberes medios y el aumento del acceso a pensiones no contributivas (Filgueira, 2015). Además, se introdujeron o se extendieron programas de transferencia condicionada de ingreso para familias con hijos sin acceso a esquemas contributivos, como en el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde 2009. La mayor protección social habría colaborado en disminuir la profundidad de los niveles de pobreza y evitar que los hogares más desaventajados dependan en gran medida de dinámicas de autoexplotación forzada e inserción laboral marginal (Comas y Poy, 2020; Cecchini, Villatoro y Mancero, 2021). Sin embargo, la fragmentación, segmentación y estratificación de los sistemas de protección social de la región continúan, y se expresan en el carácter acotado de algunos esquemas –como los seguros de desempleo–, la exclusión de ciertas categorías de población y los montos escasos de las transferencias de ingreso, específicamente del circuito no contributivo (Filgueira, 2015).

En conjunto, estos lineamientos teóricos sirven de pilar para el examen integrado del devenir distributivo y de bienestar económico experimentado por los hogares argentinos en el marco de los ciclos regresivos recientes:

- a) la crisis externa que se desata a principios de 2018;
- b) su profundización bajo las condiciones de la primera ola de la pandemia de covid-19 en 2020; y
- c) la incipiente recuperación posterior, desde finales de 2020.

HOGARES Y MERCADO DE TRABAJO: UN VÍNCULO QUE OSCILA ENTRE LA EXPANSIÓN Y LA EXCLUSIÓN LABORAL

En los años previos a la pandemia de covid-19 en la Argentina se produjo el pasaje de un escenario de estancamiento a una vertiginosa crisis externa. Esto implicó una caída del producto, fuga de capitales, destrucción de empleo y depreciación de los niveles de ingreso real de los hogares en un tiempo muy breve. De allí que la crisis sanitaria que irrumpió en 2020 se encontró con un contexto muy delicado en materia de endeudamiento externo y holgura fiscal, y con un vínculo entre hogares y mercado de trabajo cada vez más precario. Por consiguiente, son dos los elementos a tener en cuenta para contextualizar los últimos años que interesan en este análisis:

- a) la continuidad de problemas irresueltos en la estructura ocupacional y de los ingresos, incluso en un escenario de mayor protección social;⁴⁵ y
- b) el agravamiento con la crisis sanitaria por el covid-19 de tendencias ya presentes en la economía argentina, producto del fallido programa de estabilización orientado a sobreponerse de las problemáticas de inversión y dinamismo macroeconómico.

La información contenida en el cuadro 4.1 permite visualizar de qué manera el despliegue de este escenario contractivo afecta la desigualdad, y el bienestar económico y material de las unidades domésticas, en la antesala y durante la crisis sanitaria.

45 Las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo comenzaron a experimentar un proceso de deterioro desde mediados de los años setenta. A continuación, el empeoramiento en los años noventa de una serie de indicadores asociados con el acceso al mercado de trabajo, y el fin de la convertibilidad, marcaron el inicio de una caída sostenida en el ingreso real que, a pesar de los momentos de crecimiento y expansión que acompañan a la salida de la crisis 2001-2002, se mantiene hasta la actualidad (Kennedy, Pradier y Weksler, 2020).

Cuadro 4.1. Evolución de los principales indicadores distributivos y de bienestar económico de los hogares (total 31 aglomerados urbanos, Argentina, 2019-2021)

	Q5 / Q1 (ing. tot. familiar)	Ing lab. / Ing. total (%)	Evol. del ing. medio familiar	Gini (ing. total familiar)	Pobl. activa sin ingresos (%)	Pobl. bajo línea de pobreza (%)
I-2019	50	71,9	100,0	0,403	8,9	33,1
II-2019	4,7	72,4	87,6	0,393	9,4	35,7
III-2019	5,2	72,3	97,0	0,405	9,1	32,3
IV-2019	4,6	72,4	85,2	0,387	8,0	37,8
I-2020	5,1	69,0	98,4	0,406	9,4	34,4
II-2020	5,2	69,4	76,7	0,387	15,7	46,0
III-2020	5,1	68,5	85,9	0,383	13,9	37,9
IV-2020	4,4	71,0	77,5	0,377	10,8	43,5
I-2021	5,2	74,8	90,1	0,402	9,9	39,6

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

A partir de estos primeros datos, se confirma que la brecha –ya significativa antes de la crisis sanitaria– entre el quintil más alto y el más bajo se amplía conforme se transita la primera parte de la pandemia, y recién experimenta una pequeña reducción al final de 2020, para ampliarse nuevamente a comienzos de 2021. En paralelo, durante los meses más críticos de la crisis sanitaria, la participación del ingreso laboral en el ingreso total cae, pasando del 71,9% en el primer trimestre de 2019 a 69,4% en el segundo trimestre de 2020 y 68,5% en el tercero, y luego comienza a crecer otra vez en torno a los 3 y 6 puntos porcentuales, conforme se relajan las restricciones y se retoman las actividades. Esto último ocurre en un contexto en el que el coeficiente de Gini se mantiene durante inicios de 2020, a pesar de que la cantidad de personas activas sin ingresos y la pobreza suben de manera relevante. En efecto, la población activa sin ingresos pasa de alrededor del 8% y 9% en 2019 a girar en torno al 13% y 15% en 2020, y la población por debajo de la línea de pobreza llega a registrar su valor más alto en el segundo trimestre de 2020, con el 46%.

En suma, este comportamiento observado en los indicadores de desigualdad y pobreza medida por ingresos posee ciertas especificidades, tanto antes como durante el primer ciclo de la pandemia de covid-19. Durante la recesión previa al arribo del covid-19, los efectos contractivos de la crisis externa se traducen mayormente en pérdida de ingresos reales e incremento de la pobreza monetaria, mientras que los indicadores

de desigualdad presentados se mantienen alrededor de valores estables –y elevados–.⁴⁶ Ahora bien, con la pandemia se registran tres procesos sobre dichas tendencias generales: a) el recrudescimiento de los niveles de pobreza monetaria entre la población; b) el salto en la proporción de personas activas sin ingreso y la menor participación de las rentas laborales en la distribución; y c) el vaivén entre la estabilidad y el empeoramiento en los niveles de desigualdad.

La literatura señala que, con la pandemia, la restricción en la movilidad de las personas impactó en el trabajo del hogar y generó pérdidas en los ingresos laborales, como se retoma en el capítulo 6 de este libro, que debieron ser compensados de algún modo; en ese contexto, los instrumentos de protección social no contributivos fueron una herramienta importante (Weller, 2020; Filgueira y otros, 2020). Con el propósito de examinar qué se modificó y qué se mantuvo en la relación entre hogares, mercado de trabajo y protección social durante la pandemia, a continuación se ofrece información detallada acerca de la evolución de las retribuciones monetarias a valores constantes de remuneración laboral y políticas sociales –las principales aportantes al presupuesto de los hogares–,⁴⁷ y de la cantidad de perceptores que los hogares pueden volcar a estos circuitos en cada momento.

Así, el cuadro 4.2 introduce las variaciones en el ingreso promedio por perceptor y el promedio de perceptores, para fuentes laborales, de política social y en total, entre hogares del estrato más rico y más pobre. Estas dimensiones colaboran con la interpretación de los mecanismos subyacentes a la distribución y apropiación de ingresos entre las unidades domésticas.

46 Esta situación es congruente con la acumulación de tendencias regresivas en el mercado laboral, tales como la caída en los empleos asalariados formales y su reemplazo por formas de inserción informales o en modalidades autónomas precarias (Weller, 2020; Poy, Robles y Salvia, 2021).

47 El cuadro A.4.1 del Anexo compila ingresos reales originados en el sistema de protección social a lo largo del período analizado. La información evidencia la paulatina erosión del poder de compra de estas erogaciones que, a pesar de su actualización, no llegan a compensar los saltos inflacionarios del período.

Cuadro 4.2. Variación porcentual de la media de ingreso y de perceptores por hogar, laboral y de política social (total 31 aglomerados urbanos, Argentina, 2019-2021)

Ciclo de trimestre-año	Cambio porcentual del valor en...																	
	Y por perceptor			Y lab. por perceptor			Y pol. social por perceptor			Prom. percep. por hogar			Prom. percep. lab.			Prom. percep. pol. social		
	Total hog.	Q5	Q1	Total hog.	Q5	Q1	Total hog.	Q5	Q1	Total hog.	Q5	Q1	Total hog.	Q5	Q1	Total hog.	Q5	Q1
I-2019 - II-2019	-12,4	-13,7	-10,0	-12,6	-15,6	-15,8	-14,4	-22,4	-5,9	0,3	5,2	-1,4	0,1	7,0	-12,4	0,4	-3,9	-0,7
II-2019 - III-2019	10,7	12,5	1,8	11,7	18,9	0,8	12,1	18,1	5,5	0,2	-2,5	1,5	0,3	-3,7	-10,5	0,3	8,1	3,0
III-2019 - IV-2019	-12,1	-15,4	-4,0	-12,2	-16,0	-0,2	-12,3	-13,6	-9,3	0,2	-1,2	0,6	1,3	-0,1	3,7	-0,8	-7,7	-1,1
IV-2019 - I-2020	15,4	20,6	11,8	12,4	15,5	14,3	26,2	32,7	7,4	-1,3	-0,9	-0,2	-3,1	-3,0	4,6	1,6	5,5	-5,3
I-2020 - II-2020	-22,0	-25,6	-23,1	-14,4	-12,3	-41,8	-14,6	-29,2	-1,2	-4,4	-3,0	-11,2	-18,3	-8,0	-43,7	7,8	4,6	-1,5
II-2020 - III-2020	12,0	11,2	10,8	5,1	5,8	17,2	17,4	26,5	9,2	3,2	0,6	3,5	11,7	5,1	52,7	12,1	7,8	11,4
III-2020 - IV-2020	-9,8	-10,1	-2,4	-8,3	-12,7	9,3	-19,2	-13,9	-8,5	0,1	2,6	5,4	7,2	2,9	5,6	-11,6	-8,4	2,5
IV-2019 - IV-2020	-9,1	-10,2	-7,1	-7,3	-6,4	-14,9	2,2	2,4	6,0	-2,4	-0,8	-3,3	-5,1	-3,5	-5,1	8,6	8,9	6,4
IV-2020 - I-2021	16,2	22,2	6,5	18,2	22,5	20,5	4,1	0,2	-6,4	0,3	2,3	-0,7	4,0	5,5	9,2	-11,4	-12,3	-12,0

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Durante el momento más crítico de la pandemia de covid-19, entre puntas de 2019 y 2020, la situación en la que se encuentra el valor de los ingresos y las posibilidades de inserción laboral de los hogares habría contribuido a incrementar la pobreza y reforzar la desigualdad. Por un lado, el valor constante de la renta por perceptor se deteriora gravemente (9,1%), impulsado por la continua espiral inflacionaria que limita parte de la capacidad compensatoria de las transferencias de política social (2,2%), el recorte de horas trabajadas en el empleo independiente o las suspensiones parciales. Por otra parte, la crisis del año 2020 también es acompañada por la pérdida en las posibilidades de percibir ingresos, hecho que queda demostrado por las caídas en el promedio de perceptores por hogar (-5,1%). Contrario a lo que acontece durante la crisis observada hasta 2019, donde los perjuicios al ingreso de los hogares se concentran en pérdidas del valor del ingreso, con la pandemia y las condiciones que esta impone se agrava la caída de bienestar tanto por disminución de la renta promedio como por la desaparición de las posibilidades de generar ingresos.

En el segundo trimestre de 2020, se verifica de manera nítida la inconsistencia intertemporal entre las necesidades sanitarias, las medidas de aislamiento y la capacidad estatal para acompañar estos requisitos con los sistemas de protección social disponibles para asistir a la población más afectada por la pérdida de ingresos (Filgueira y otros, 2020). Estas

limitaciones, que reflejan las fronteras de la formalidad laboral y los sistemas contributivos, especialmente el seguro de desempleo, se concentran entre los estratos más pobres, donde el vínculo laboral tiene mayores niveles de informalidad y precariedad, y con caídas estrepitosas en el promedio de perceptores laborales (-43,7%). Es aquí donde se pone en evidencia el vínculo pernicioso entre las expresiones ocupacionales de la heterogeneidad estructural y un sistema de protección social fragmentado. A pesar de la ampliación inédita y generalizada de los esquemas de transferencia de política social en el segundo (7,8%) y tercer trimestre (12,1%) de 2020, la pérdida de perceptores e ingresos general que emerge con la pandemia se concentra alrededor de los quintiles inferiores (-11,2% y -41,8% respectivamente), que poseen un vínculo más débil con la seguridad social contributiva y con el sector formal del mercado de trabajo. Los montos promedio de política social para el quintil de hogares más pobres, dada la continuidad de la tendencia alcista de los precios, siguen en descenso (-1,2%) y recién hacia el tercer trimestre de 2020 (9,2%) se observa una variación significativa. Por oposición, la relación de los hogares pertenecientes a los estratos superiores experimenta una caída en sus ingresos (-12,3%) y una reducción en la cantidad de perceptores laborales (-8%) mucho menor a la de los estratos más bajos.

En conjunto, esta configuración disimula los bruscos movimientos en las entradas de dinero de los hogares, que se expresan en la evolución intraanual de la pobreza y en la compensación incompleta entre pérdidas de ingreso laboral y expansión de transferencias sociales, principalmente orientadas a evitar un mayor empobrecimiento de las unidades domésticas vinculadas a los empleos más desventajosos del sector formal y las inserciones en el sector informal. En este sentido, se pudo hacer frente a algunas de las aristas más graves del salto en la desigualdad solo a través de un esfuerzo fiscal muy significativo en condiciones de fragilidad macroeconómica elevada (Filgueira y otros, 2020; Cepal, 2021c). El año 2020 se caracteriza por la masificación de transferencias a grupos antes no cubiertos.⁴⁸ Sin embargo, esto es momentáneo y singular. Desde finales de 2020, se reducen los perceptores de política social (-11,4%). La relajación de las

48 La implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) incorpora a los trabajadores/as solteros/as sin hijos/as informales o extralegales al universo de las transferencias estatales (Rubio y otros, 2020). En el universo del empleo independiente, se introducen programas de crédito blandos para trabajadores autónomos, entre otras políticas laborales y productivas dirigidas a la pequeña empresa y el empleo formal (Heredia Zurita y Dini, 2021).

directrices de aislamiento a fines de 2020 involucra la reanudación de las actividades laborales, sobre todo en el sector microinformal, y la decisión de limitar los esquemas de transferencia a su situación previa, lo que implica el retorno de los mecanismos de protección que siguen los ejes de formalidad/informalidad y contribución/no contribución entre los hogares.

DESIGUALDAD Y POBREZA: UNA MIRADA SOBRE EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

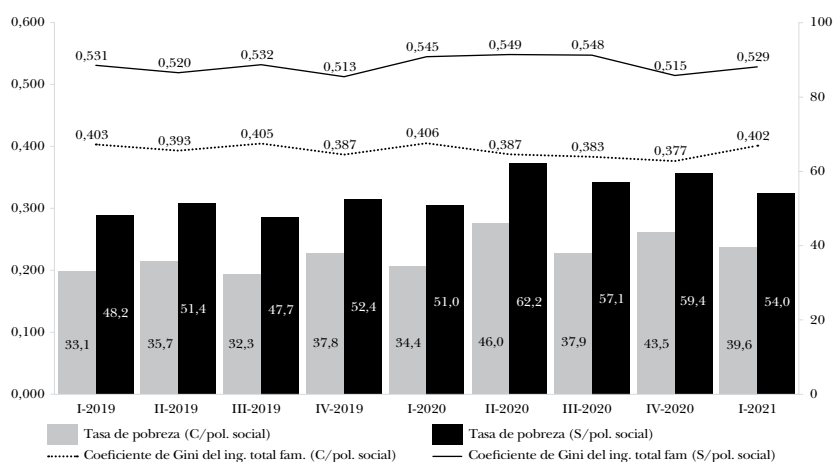
Ahora bien, dado el impacto que tuvieron las transferencias condicionadas de ingreso, principalmente en el momento más crítico de la pandemia, se realizan aquí ejercicios de cálculo de las tasas de pobreza y el coeficiente de desigualdad de Gini trimestrales, con y sin la contribución de las fuentes del sistema de protección social antes evaluadas: pensiones y jubilaciones, seguro de desempleo y distintas transferencias no contributivas.

Los resultados de este ejercicio se pueden observar en el gráfico 4.1, donde destaca el aporte originado por la política social a reducir la pobreza y la desigualdad. En esta línea, las particularidades del momento de mayor restricción de la pandemia se pueden sintetizar del siguiente modo. En el segundo trimestre de 2020 se alcanza la tasa de pobreza más alta del período, la cual se ubica en torno al 46%, pero si se calcula esta misma tasa extrayendo la contribución por política social alcanzaría un valor de alrededor del 62%, es decir, una estimación sustancialmente mayor. En el mismo trimestre de 2020, el coeficiente de desigualdad de Gini experimenta incluso una leve contracción (0,387) con respecto a la medición del primer trimestre (0,406) cuando se contempla la incidencia de la política social, pero sería sensiblemente más elevado, y no experimentaría casi cambios respecto de la medición previa (0,545), si el cálculo de este coeficiente para el segundo trimestre 2020 se realizara sustrayendo el efecto de la política social (0,549).

Las tendencias desarrolladas anteriormente guardan estrecha correspondencia con las que se registran en el gráfico 4.2, donde se aprecian los cambios en la desigualdad y en la pobreza con y sin la contribución de la política social de un trimestre a otro. Los datos presentados en este gráfico aportan evidencia que busca abordar la pregunta por los efectos diferenciales de los circuitos de renta sobre la desigualdad económica entre los hogares, sobre todo a la luz del impacto de los ingresos originados en las políticas sociales. En casi todos los casos, tanto el

nivel transversal de los indicadores como su variación porcentual entre trimestres tienden a morigerarse de manera relevante al considerar la política social. Sin el papel de las transferencias y erogaciones del sistema de protección social las disparidades entre hogares, y la incidencia general de los déficits de satisfacción de necesidades, habrían sido mucho más agudas y se habrían agravado durante el primer ciclo de la pandemia.

Gráfico 4.1. Evolución de la tasa de pobreza y del coeficiente de Gini con y sin la contribución de la política social (total 31 aglomerados urbanos, Argentina, 2019-2021)



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Ahora bien, el gráfico 4.2 también aporta otros datos de interés. En primer lugar, en el primer trimestre de 2020 con respecto al cuarto de 2019, la pobreza cae, pero esta caída es mucho más marcada si se considera el aporte de la política social (-8,9%), y lo mismo sucede en el tercer trimestre de 2020 con respecto al segundo de igual año, aunque en este último caso la reducción de la pobreza es mucho mayor (-17,6%). En segundo lugar, en el segundo trimestre de 2020 la pobreza crece de forma sostenida, aun a pesar del aporte de la política social orientado a sostener el contexto de rápido deterioro económico-social de la pandemia, aporte que habría tenido un efecto mayor en el primer trimestre y menor en el segundo. Por último, con la paulatina salida de las medidas de restricción y la lenta recuperación de la actividad, el primer trimestre de 2021 con respecto al cuarto de 2020 muestra una caída en la pobreza, pero

el aporte o no de la política social no habría sido un elemento decisivo en este comportamiento; esto último es importante porque atiende al carácter excepcional de la relevancia del sistema de protección social. Una vez concluida la primera fase de propagación viral y crisis sanitaria, se retraen rápidamente gran parte de los esquemas de transferencia implementados para sostener las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, en gran medida, los hogares en estratos más bajos de la estructura social se habrían visto impulsados a combinar nuevamente inserción informal, o precaria, con políticas tradicionales de transferencia, más restrictivas.

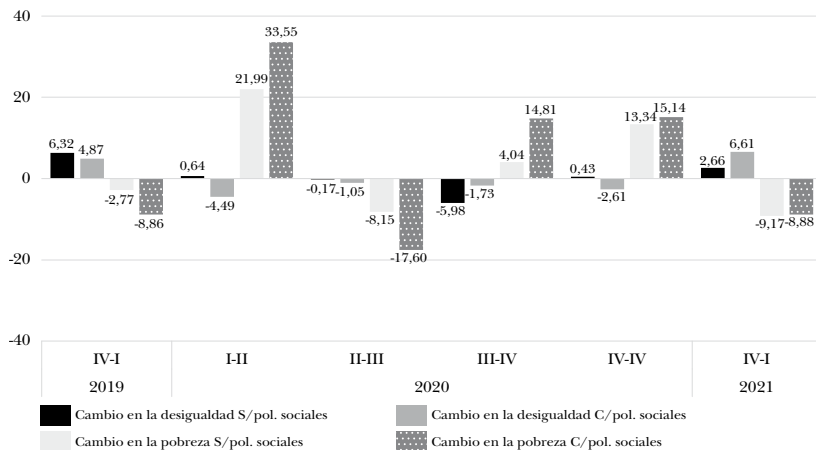
En paralelo, la desigualdad acompasa los cambios en la pobreza de la siguiente forma:

- a) en el momento más crítico de la crisis sanitaria, en el que la pobreza se dispara y alcanza los niveles más altos, la desigualdad no experimenta cambios, o bien, cae cuando se contempla el aporte de las transferencias de ingresos;⁴⁹
- b) en el momento de mayor relajación de las medidas restrictivas, esto es, en el primer trimestre de 2021 con respecto al cuarto de 2020, en el que la pobreza se reduce, la desigualdad varía (6,61) aun a pesar de las políticas sociales, es decir, se incrementa.

Esto es congruente con la tendencia a desigualar del mercado de trabajo y, ante un escenario de retracción de gran parte de las erogaciones no contributivas a la población en estratos bajos, su agravamiento bajo las condiciones de heterogeneidad ocupacional y asimetrías estructurales que lo atraviesan en el caso argentino. Por lo tanto, y a pesar de la reactivación atestiguada, hacia el final del período la desigualdad sintética retoma su carácter ascendente, se considere o no la influencia de la política social.

49 En función de los datos presentados en esta sección, en el segundo trimestre de 2020, comparado con el primer trimestre del mismo año, la variación en el coeficiente de desigualdad de Gini es de 0,64 sin política social, y de -4,49 con política social.

Gráfico 4.2. Evolución del cambio porcentual en la desigualdad y en la pobreza con y sin la contribución de la política social (total 31 aglomerados urbanos, Argentina, 2019-2021)



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

LOS LÍMITES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

La crisis argentina que configura la antesala de la pandemia de covid-19 provocó un proceso de deterioro socioeconómico impulsado por la pérdida del valor real de las remuneraciones y las erogaciones de protección social. La pandemia, sin embargo, no solo impactó en la desigualdad y la pobreza al profundizar la erosión de los ingresos, sino que afectó seriamente la capacidad de las unidades domésticas para preservar sus vínculos con el mercado de trabajo. Además, lo hizo de manera diferencial, concentrando sus tendencias más regresivas en los estratos más bajos, por la fragilidad de sus inserciones laborales y las limitaciones gubernamentales para proteger, en simultáneo y de forma homogénea, las entradas de dinero de los hogares en un mercado de trabajo atravesado por distintas modalidades de inserción laboral y heterogeneidad estructural.

Dado el escenario de fragilidad en el mercado de trabajo, y el alcance acotado de las políticas laborales de protección al empleo, las principales herramientas para afrontar el deterioro distributivo resultaron

las transferencias no contributivas de política social. En la emergencia, sobre todo entre los hogares más pobres, permitieron atravesar el ciclo más astringente de aislamiento sin que la desigualdad y la pobreza se dispararan aún más.

Sin embargo, el carácter temporal y remunerativamente limitado de estas medidas extraordinarias se evidenció en que, tan pronto como retrocedió la primera ola de la pandemia, se volvió a sentir el peso de la desigualdad moldeada por el mercado de trabajo. En particular, por el retorno de los hogares de bajos ingresos a inserciones informales o precarias.

En suma, el contexto de pandemia potenció el proceso de deterioro que ya se observaba en la sociedad argentina desde inicios de la crisis macroeconómica abierta en 2018 a través de viejos conocidos: las fragilidades del mercado de trabajo, específicamente los límites de la formalidad laboral, y el carácter fragmentario de la protección social. A pesar de ciertas innovaciones, sobre todo en el segundo aspecto, los obstáculos a la integración laboral se hicieron sentir, y dispararon –a mediados de 2020– los niveles de pobreza y la pérdida de ingresos entre los hogares. Al mismo tiempo, el carácter remunerativamente escueto y temporalmente breve de estas asistencias refleja, entre otros factores, que el financiamiento y acceso a la protección social continúa favoreciendo al empleo formal, de modalidad asalariada y, por lo tanto, a hogares en los estratos sociales más aventajados.

Esta situación conduce a la necesidad urgente de crear consensos entre actores sectoriales y gubernamentales, para hacer frente a la permanencia de un mercado de trabajo que traduce su segmentación en desigualdades y déficits de bienestar persistentes, y que la fragmentación del sistema de protección social no puede hacer más que contener de manera parcial.

Anexo

Cuadro A.4.1. Evolución del haber medio trimestral de distintos tipos de beneficio del sistema de protección social (en pesos del IV trimestre de 2020)

	Pensión no contrib.	Asignación univ. por hijo	Jubilaciones y pensiones (contrib.)
I-2019	16 270	3311	30 887
II-2019	14 612	3606	27 864
III-2019	16 162	3234	30 811
IV-2019	15 146	2929	27 469
I-2020	16 700	2947	31 280
II-2020	15 666	3052	29 437
III-2020	16 383	2989	30 903
IV-2020	15 711	2916	29 672
I-2021	15 547	2836	29 543

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información publicada regularmente por el Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS-Anses).

5. Movilidad ocupacional: transiciones de la informalidad estructural y la pobreza entre 2018 y 2020

*Miguel Oliva, Diego Masello, Martina Zubarán,
Rodrigo Alejandro Segovia, Nara Alvarez*

En este capítulo abordamos longitudinalmente algunas transformaciones sociales y ocupacionales que sucedieron en la Argentina durante el período comprendido entre 2018 y 2020, en un contexto de crisis económica y social, agravada por la incidencia de la pandemia de covid-19.

En este sentido, el propósito general de este capítulo se focaliza en describir y analizar las trayectorias de los trabajadores estructuralmente informales y, por otro lado, caracterizar la incidencia de la pobreza en la población, entre 2018 y mediados de 2020. Para ello, el análisis se organizará en dos subperíodos: de principios de 2018 a mediados de 2019, donde se pasa de una situación de relativa estabilidad a una de crisis económica declarada, y de mediados de 2019 a mediados de 2020, cuando ya está instalada la pandemia de covid-19 que, como ya se señaló en otros capítulos de este libro, profundiza una crisis preexistente de la economía y del mercado de trabajo, promovida por fracturas estructurales que se han ido consolidando en, al menos, las últimas cuatro décadas.

Ahora bien, haremos estas consideraciones poniendo el acento en el análisis diacrónico, tanto de los procesos e impactos dentro del mercado de trabajo como de las condiciones de vida de la población. En este sentido, nos interesará centrarnos, a partir de una comparación de tipo panel, en los cambios de los trabajadores y trabajadoras con relación al tipo de inserción productiva (los estructuralmente informales, por un lado, y los que se encuentran en el sector moderno, por el otro), y en el comportamiento y en las transiciones de la pobreza durante este período.

BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL ANÁLISIS LONGITUDINAL Y EL CAMBIO ESTRUCTURAL

En las últimas décadas se han realizado importantes esfuerzos de análisis empírico de procesos de cambio, como se evidencia en la multiplicidad de programas de investigación longitudinal en Europa y los Estados Unidos, y en el desarrollo de métodos para el análisis de este tipo de información (Rogosa, Brandt y Zimowski, 1982; Singer y Willet, 2003). De modo que la importancia de los estudios diacrónicos es crecientemente aceptada en la producción académica de la Unión Europea y de los Estados Unidos (Singer y Willet, 2003). Al mismo tiempo, cada vez se reconoce más su posible aplicación a la orientación de políticas públicas para diferenciar el impacto de procesos coyunturales de los factores estructurales de más largo plazo. Por ello, el análisis longitudinal es útil para abordar temas como los tipos de inserción socioproductiva y sociolaboral, la evolución de los ingresos, las trayectorias de pobreza y su transmisión intergeneracional, y para obtener conclusiones sobre la asociación estadística entre eventos del pasado y del presente.

En las investigaciones tradicionales sobre el mercado de trabajo y la pobreza es común encontrar información de determinados *stocks* o proporciones de pobreza o de precariedad laboral a lo largo del tiempo. El problema es que, con este tipo de información, no se pueden detectar los cambios que tuvieron las personas entre diferentes momentos temporales en relación con situaciones como las mencionadas en el párrafo anterior. Por el contrario, con la metodología longitudinal de tipo panel es posible registrar este tipo de modificaciones, lo que permite, en el nivel de políticas, comprender y actuar de manera adecuada sobre los problemas a través de una concepción dinámica de los fenómenos (Félez y otros, 2001).

Este tipo de mirada nos permite mejorar nuestra aproximación sobre el problema de la heterogeneidad de la estructura socioproductiva que, como ya se ha señalado en otras partes de esta obra, es característica de nuestro país y de la mayoría de los países de la región (Esparza-Rodríguez y otros, 2021; Masello y otros., 2021; Jacovkis y otros, 2020). En este sentido, el indicador de informalidad estructural⁵⁰ asocia la calidad del

50 El concepto de informalidad estructural toma de base las nociones sobre sector informal urbano así como sobre empleo en el sector informal de la OIT. Para su cálculo se ha seguido el procedimiento propuesto por Monza con modificaciones que hemos introducido en algunos indicadores. Para

empleo con la composición del aparato productivo; más aún, pone en términos explicativos a las características del empleo en función de la estructura socioproductiva. En segundo lugar, permite distinguir dentro del mercado de trabajo una mayor cantidad de segmentos ocupacionales con diferentes problemas de empleo.

ESTADOS, EVENTOS, TRAYECTORIAS, FLUJOS Y STOCKS

Si bien cada uno de estos conceptos tiene un fuerte contenido técnico, creemos que son relevantes para organizar la lectura de los resultados, de modo que trataremos de presentarlos sintéticamente como una introducción antes del análisis de los datos. Como señalamos, las tasas generales de pobreza o de informalidad estructural no captan la movilidad de las personas en estos aspectos. Por lo tanto, el cálculo de proporciones en un momento dado no permite observar las secuencias, la intensidad y/o la velocidad de los cambios en un período determinado. En todo caso, lo que estas tasas o proporciones muestran son los estados del objeto de estudio en relación con una variable, o sea, el concepto de “estado” refiere al valor que asume una variable en un momento determinado (Maletta, 2012).

Lo primero para introducir como un elemento de la perspectiva longitudinal es el concepto de “evento”. Este implica la modificación o cambio del estado en una variable determinada en, por lo menos, dos momentos temporales. También introduciremos el concepto de “trayectoria”, que hace alusión a un proceso, a una serie de eventos acontecidos (Maletta, 2012). Si los estados posibles para la población económicamente activa son “ocupado” o “desocupado”, un evento implicaría el paso de una situación a otra; por ejemplo, encontrar empleo para un desocupado o quedarse sin trabajo para alguien que estaba trabajando. Por último, varios eventos construyen una trayectoria.

De forma complementaria, es conveniente distinguir entre la estabilidad individual de cada uno de los individuos involucrados y la estabilidad estructural, también llamada estabilidad agregada (Maletta, 2012), que refiere al conjunto de la población bajo estudio como una totali-

antecedentes sobre informalidad, se pueden consultar Tokman (1991), Pérez Sáinz (1991), Mezzera (1983) y Carbonetto (1983).

dad.⁵¹ De modo que, en una tabla de rotación, la estabilidad individual se observará en los cambios que se den o no dentro de las celdas donde se combinan las posiciones que tenían los sujetos en t_0 y que tuvieron luego en t_1 ; en cambio, la estabilidad agregada se observará en las celdas marginales de la tabla.

Por consiguiente, en el análisis de una trayectoria vamos a tener dos componentes: el *stock* de casos para una determinada variable y el flujo de los casos entre diferentes situaciones (determinado por eventos y trayectorias); de modo que tendremos la presencia de alguno de ellos o una combinación de ambos. Si bien el *stock* de una propiedad en un momento determinado es similar al estado de una variable en dicho momento, es conveniente utilizar la distinción entre estado y *stock*, porque esta última la aplicaremos particularmente ligada a los movimientos o trayectorias. En este sentido, “el aumento o variación de una variable de *stock* es una variable de flujo” (Maletta, 2012). O sea, lo más probable es que en un análisis de trayectorias no haya solo *stocks* o flujos puros, sino una combinación de ambos, donde una propiedad conserva un *stock* de “estabilidad” intertemporal y un flujo entre dos situaciones temporalmente distintas.

ALGUNAS OBSERVACIONES METODOLÓGICAS

Para poder analizar diacrónicamente las trayectorias propuestas se emparejaron (o *matchearon*) los individuos en los que fue posible captar información en los distintos estados. Es importante señalar que para determinadas variables los eventos tienen características de irreversibilidad (Oliva, 2018); por ejemplo, nadie es más joven en el futuro, un individuo no puede transicionar desde un nivel educativo secundario a uno primario y la antigüedad en el trabajo solo puede tener una trayectoria creciente. También es de interés señalar que, en los estudios de seguimiento longitudinal de

51 El número de trayectorias depende de la cantidad de estados que se analicen y de la cantidad de momentos que se tomen para analizar dichos estados. Por consiguiente, tanto para la condición de pobreza (pobre/no pobre) como para el tipo de inserción socioproductiva (estructuralmente informal/moderna), tenemos “ k ” estados, tal que $k = 2$ y los vamos a comparar en dos momentos (2018-2019 y 2019-2020), por tanto para ambas variables tendremos $2^2 = 4$ trayectorias posibles, las cuales podrán ser pasar de pobres a no pobres o viceversa y pasar de trabajadores informales a modernos o viceversa.

un individuo, diversas variables contextuales se mantienen constantes a lo largo de ciertas mediciones. Por ejemplo, en cuanto a las propiedades individuales, no se van a observar cambios en el año de nacimiento, las probabilidades de cambio de género son muy bajas, los cambios en aspectos como la religión, el estado civil y las orientaciones políticas también son poco probables en la coyuntura. Asimismo, en el nivel estructural también hay propiedades con ciclos o temporalidades que escapan habitualmente a las coyunturas. De modo que puede pensarse que son propiedades “controladas” al nivel de la trayectoria de un individuo cuando se hace de él un seguimiento longitudinal de corto plazo, como en este caso.

Con el objeto de explorar distintos efectos de la pandemia en el contexto social explicitado, se han procesado y analizado las bases de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) entre el primer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2020. Dado que estas bases de datos no están específicamente diseñadas para estudios longitudinales, fue necesario realizar un proceso de emparejamiento (“*matching*”) entre las distintas mediciones en un trimestre determinado. Cabe destacar que con estos microdatos no es posible realizar un análisis de panel a largo plazo, debido a que la muestra se va renovando por partes de trimestre a trimestre, de modo que la posibilidad de establecer relaciones de asociación entre eventos en un plazo largo está fuertemente limitada.⁵²

Para este trabajo, la identificación y emparejamiento de los respondientes se hizo utilizando las variables que identifican la vivienda y el hogar (“*codusu*” y “*número de hogar*”) y la variable que identifica al individuo (“*componente*”) (Indec, 2003).⁵³ Para calcular los factores de expansión (ponderaciones), se utilizó como base los ponderadores de la EPH,⁵⁴ con los ajustes necesarios para calcular las transiciones. El factor de expansión se realiza en dos etapas:

52 Cada aglomerado se divide en cuatro grupos, y en cada medición, un grupo que representa un 25% de la muestra, sale definitivamente de esta y otro grupo distinto ingresa. El sistema de rotación utilizado tiene un esquema 2-2-2: cada grupo participa en dos mediciones seguidas, descansa dos trimestres y vuelve a participar en dos más, de modo que un caso puede participar en el relevamiento cuatro veces como máximo.

53 Para las variables de la Encuesta Permanente de Hogares y sus codificaciones, véase el documento de diseño de registro y estructura para las bases de microdatos disponible en <www.indec.gob.ar>.

54 La EPH utiliza como marco de referencia el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. En este caso, el último vigente es el que corresponde al año 2010.

- a) cálculo de los factores de expansión de diseño, y
- b) ajuste de los factores utilizando proyecciones de población.

Para la primera etapa, se tuvo en cuenta el peso relativo de la vivienda dentro del área a la que pertenece y el peso del área dentro del aglomerado. De esta manera, se realizó el ajuste por no respuesta. Luego, se hizo un ajuste usando proyecciones poblacionales que provee la Dirección Nacional de Estadísticas Poblacionales (Indec, 2015). Como en cada medición la ponderación de la vivienda es distinta, según la tasa de respuesta del área y de las proyecciones poblacionales, para calcular las transiciones (donde hay que tener en cuenta la representación de esa vivienda tanto en el momento inicial como en el final) se aplicó un promedio de ambos ponderadores. Es decir, un promedio del ponderador de la situación inicial (momento 1) y el ponderador de la situación final (momento 2). Los casos en que uno de los dos ponderadores era de valor igual a 0 se excluyeron del análisis, ya que no se ha podido estimar fehacientemente el valor del factor de expansión.

RESULTADOS: DE LA ESTABILIDAD A LA CRISIS (2018-2019) Y DE LA CRISIS A LA PANDEMIA (2019-2020)

Como hemos señalado, cuando aparece la pandemia a inicios de 2020, la Argentina ya experimentaba múltiples distorsiones en sus variables macroeconómicas y un deterioro importante en su situación social. Así, la inflación había pasado de 48% en 2018 a 54% en 2019, y a 36% en 2020; el tipo de cambio entre el peso y el dólar había variado de alrededor de \$ 18 o \$ 19 en mayo de 2018 a más de \$ 100 a fines de 2020 en su cotización oficial (Masello y otros, 2021).

Con el objeto de diferenciar (de un modo provisorio) el efecto de la pandemia de la crisis que se venía verificando, para el análisis hemos subdividido el período en dos tramos:

- a) de principios de 2018 hasta el segundo trimestre de 2019, y
- b) desde el segundo trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia se encontraba en un pico de severidad en cuanto al aislamiento y la merma de la actividad económica.

No nos es ajeno que el empleo está afectado, también, por cuestiones estacionales; de modo que, en la medida en que se puede, es preferible comparar trimestres equivalentes. De todas formas, como nuestro interés está en supeditar el análisis a la incidencia de eventos exógenos de importante magnitud para el mercado de trabajo, como la crisis socioeconómica y la pandemia, hemos decidido en el primer tramo comparar a partir del primer trimestre de 2018.

DE LA ESTABILIDAD A LA CRISIS (2018-2019)

Si bien la Argentina viene recorriendo un camino signado por la intermitencia entre años electorales con crecimiento de la economía y años no electorales con caída del producto, en enero de 2018 nada hacía prever que pocos meses más tarde se iba a desatar una crisis de proporciones mayúsculas, que sigue afectando la actividad hasta la actualidad. Por ello, el punto de partida de este análisis está puesto en un escenario de relativa estabilidad.

De todos modos, conviene comenzar observando los niveles de pobreza y de informalidad estructural para el primer trimestre de 2018 –el período inicial de nuestra serie–, que en ese momento ya eran altos: la pobreza alcanzaba al 24% de los hogares urbanos, y la informalidad estructural, al 25,4% de los ocupados.

Cuadro 5.1. Condición de pobreza según tipo de inserción socioproductiva

		Tipo de inserción I-2018		
		Moderna	Estructuralmente informal	Total
Condición de pobreza I-2018	No pobre	85,9%	72,0%	82,4%
		64,1%	18,3%	
	Pobre	14,1%	28,0%	17,6%
		10,5%	7,1%	
	Total	100,0%	100,0%	100,0%
		74,6%	25,4%	100,0%

Fuente: Proyecto Pisac Covid-19 n° 14, nodo: CIEA-Untref, sobre la base de datos de la EPH (Indec).

Por otro lado, entre ambas variables (que remiten a niveles diferentes dentro del análisis social) hay cierto grado de asociación. Como se observa en el cuadro 5.1, un 17,6% de los ocupados pertenecen a hogares

en situación de pobreza, pero esta proporción aumenta al 28,0% entre aquellas personas que están en una condición de informalidad estructural y a su vez disminuye al 14,1% entre los trabajadores del sector moderno. Esta diferencia de casi 14 puntos porcentuales podría indicar algún tipo de asociación entre ambos aspectos. La situación de informalidad estructural seguramente tiene consecuencias negativas en muchas cuestiones laborales y extralaborales para los trabajadores y sus hogares; los ingresos son una de ellas. O sea, en este conjunto de trabajadores, con una inserción estructural productiva informal, aumenta la probabilidad de estar en una situación de pobreza por ingreso.

A partir de aquí nos centraremos en analizar las trayectorias de ambas variables, primero en comparación con mediados de 2019, cuando la crisis socioeconómica estaba completamente instalada, y luego con mediados de 2020, en el momento más difícil del aislamiento y de la caída de la actividad productiva.

Cuadro 5.2. Trayectorias del tipo de inserción socioproductiva y de la condición de pobreza (I-2018 – II-2019)

		Tipo de inserción II-2019		
		Moderna	Estructuralmente informal	Total
Condición de pobreza I-2018	Moderna	91,7%	8,3%	77,5%
		0,71	0,06	
	Estructuralmente informal	24,0%	76,0%	22,5%
		0,05	0,17	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	
	76,5%	23,5%	100,0%	

		Tipo de inserción II-2019		
		No pobre	Pobre	Total
Condición de pobreza I-2018	No pobre	78,7%	21,3%	76,6%
		0,60	0,16	
	Pobre	18,3%	81,7%	23,4%
		0,04	0,19	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	
	64,5%	35,5%	100,0%	

Fuente: Proyecto Pisac Covid-19 n° 14, nodo: CIEA-Untref, sobre la base de datos de la EPH (Indec).

En el cuadro 5.2 se ven las primeras trayectorias de pobreza y de informalidad estructural entre el primer trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019. Se trata del escenario que hemos planteado “desde la estabilidad a la crisis”, con la ya mencionada fragilidad que encerraba dicha estabilidad.

En términos generales, si se observan las celdas resaltadas con un color gris, estas registran los individuos (tanto para inserción socioproductiva como para pobreza) sin movilidad; se trata de los casos en que no ha habido cambios en las trayectorias entre las dos ondas, la de principios de 2018 y la de mediados de 2019. En este sentido, esta diagonal nos muestra lo que permanece como *stock* entre las dos mediciones, que es lo que refleja el grado de estabilidad de los individuos dentro del período.

Por la naturaleza de las variables que estamos analizando, los cambios pueden ser positivos o negativos: pasar de una inserción moderna a una informal o viceversa, y pasar de una situación de no pobreza a una de pobreza o viceversa.

La estabilidad agregada, aquella que refiere a la totalidad de los individuos en cada uno de los momentos analizados, en general es elevada, tanto para el caso de la inserción socioproductiva como para la condición de pobreza. La primera ha variado muy poco en términos agregados entre principios de 2018 y mediados del 2019: en el primer período tenemos un 77,5% de trabajadores con una inserción moderna y un 22,5% informal, y esto pasa a ser un 76,5% y un 23,5%, respectivamente, para mediados de 2019. Si bien la informalidad estructural aumentó en algo más de un año, no lo ha hecho de una manera drástica.

Asimismo, los grupos siguen teniendo la misma tendencia, pero con menores niveles de estabilidad agregada, en la condición de pobreza. En este sentido, el grupo de individuos no pobres ha pasado de 76,6% a inicios de 2018 a un 64,5% para mediados de 2019.

Así, el tipo de inserción socioproductiva en el mercado de trabajo presenta menores probabilidades de cambio en el período en comparación con la pobreza. Esto tiene sentido si se piensa que esta variable está construida con una serie de indicadores relativos a la unidad productiva donde se desempeña cada persona e, indirectamente, implica si dicho puesto de trabajo es el producto de la demanda de la propia estructura o si, por el contrario, deviene de las necesidades de los sujetos de autogenerarse un puesto de trabajo para cubrir, aunque sea básicamente, sus necesidades materiales (Masello y Granovsky, 2017).

En segundo lugar, vemos en la condición de pobreza algo más de volatilidad. Ahora bien, si se tiene en cuenta que esta medida se basa en

los ingresos de los hogares, es pertinente considerar que puede tener importantes niveles de fluctuación entre períodos a causa de situaciones que operan en la coyuntura, como por ejemplo procesos devaluatorios que empujan de manera repentina a una cantidad de personas a dicha situación de pobreza o, por el contrario, la incidencia de recomposiciones nominales de salarios que tienen el efecto contrario. O sea, si la canasta básica para un hogar de cuatro individuos fuese de \$ 10 000, y el ingreso familiar total de este hogar fuera de \$ 10 001, ese hogar superaría la canasta básica por un peso y, por ende, sería un hogar no pobre. En los hogares y personas que están en lo que comúnmente se denomina zona de vulnerabilidad (por ejemplo, con ingreso entre un 10% y un 15% por encima o por debajo de la línea de pobreza), las trayectorias suelen ser fluctuantes, muchas veces por razones exógenas o por problemas ocupacionales.

Para evaluar la evidencia empírica respecto de este último punto, primero conviene observar los *stocks* y los flujos. Recordemos que una variación de *stock* se transforma en un flujo, positivo o negativo. En este caso, las celdas diagonales presentan valores elevados, por ejemplo, cerca del 91,7% de quienes tenían una inserción moderna en 2018 tenían esa misma condición para mediados de 2019, mientras que el 76% de los que se insertaban de manera informal en 2018 lo hacían de igual modo para el segundo trimestre de 2019. Si bien ambos grupos conservan importantes *stocks* y tienen probabilidades de transición relativamente bajas, esto es mucho más intenso dentro del sector moderno.

En cambio, el 78,7% de los no pobres en 2018 se mantiene en la misma condición para 2019, mientras que el 81,7% de los pobres de 2018 continúa en una situación de pobreza para mediados de 2019. Si bien es esperable que la mayoría se mantenga en la misma condición (pobre o no pobre), se evidencian algunas trayectorias de transición; por una parte, hay una porción poco significativa de individuos respecto del total que pasan de ser pobres a no pobres (un 18,3%), pero en términos de probabilidad de flujo es solo un 0,04.⁵⁵ Un poco más significativa es la transición negativa, de no pobres a pobres, que es del 21,3%, lo que implica una probabilidad de cambio de 0,16.

55 En este análisis distinguimos entre el porcentaje de transición, que obedece a la proporción obtenida por filas, sobre cada categoría del punto de partida (t_1), y las probabilidades de flujo, que son la resultante del cociente entre los casos de cada celda del espacio de propiedades sobre el total de casos analizados.

Para el tipo de inserción socioproductiva, en cambio, los flujos son pequeños en las dos trayectorias de cambio posibles. Un 8,3% de los individuos pasan de ser estructuralmente informales a ser trabajadores modernos en el período 2018-2019, con una probabilidad de cambio de solo 0,06; y aquellos que entre los dos períodos pasan de estar insertos informalmente a estarlo de manera moderna son un 24%, con una probabilidad de cambio de 0,05.

En este primer tramo podemos concluir que desde principios de 2018 a la crisis de 2019 los sectores informal y moderno se mantuvieron estables, con flujos de cambio mínimos. La situación de pobreza en esta primera parte es algo similar; sin embargo, en términos agregados aumentaron los pobres en más de 500 000 individuos, mientras que los informales solo se incrementaron en algo más de 15 000 ocupados. Es evidente que la crisis se fue manifestando con crudeza en la caída persistente de los salarios e ingresos en términos reales y nominales, con un agravamiento de la situación de la pobreza a mediados de 2019.

Por último, podemos especular que el problema estructural de la informalidad es menos propenso a modificarse en el corto plazo y, además, posiblemente sea uno de los elementos influyentes en la determinación de una situación de pobreza.

DE LA CRISIS A LA PANDEMIA (2019-2020)

Este segundo análisis introduce los efectos de la pandemia, básicamente en el momento más intenso del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

El cuadro 5.3 refleja una multiplicidad de elementos vinculados a la estructura, el empleo y las condiciones de vida. Si observamos los cambios agregados respecto del empleo, podríamos concluir erróneamente que hubo una mejora agregada desde el punto de vista de la inserción socioproductiva de los empleos, ya que la informalidad estructural muestra en general una caída entre 2018 y 2020.

Sin embargo, lo que en realidad sucedió es que, por los efectos de la pandemia y en especial del ASPO, se destruyeron miles de puestos de trabajo de la informalidad estructural (en particular los no registrados, que son mayoría); por el contrario, en los puestos de trabajo del sector moderno, aunque efectivamente los empleados no fueran a trabajar, en general continuaron cobrando sus salarios de manera regular. O sea, como se muestra en el cuadro 5.4, para el segundo trimestre de 2020, mientras que los ocupados modernos disminuyeron en un 16%, los ocupados informales cayeron un 33%.

Cuadro 5.3. Trayectorias del tipo de inserción socioproductiva y de la condición de pobreza (II-2019 – II-2020)

		Tipo de inserción II-2020		
		Moderna	Estructuralmente informal	Total
Condición de pobreza II-2019	Moderna	91,2%	8,8%	80,7%
		0,74	0,07	
	Estructuralmente informal	37,4%	62,6%	19,3%
		0,07	0,12	
	Total	100,0%	100,0%	100,0%
		80,8%	19,2%	100,0%

		Tipo de inserción II-2020		
		No pobre	Pobre	Total
Condición de pobreza II-2019	No pobre	77,5%	22,5%	62,8%
		0,49	0,14	
	Pobre	20,0%	80,0%	37,2%
		0,07	0,30	
	Total	100,0%	100,0%	100,0%
		56,1%	43,9%	100,0%

Fuente: Proyecto Pisac Covid-19 n° 14, nodo: CIEA-Untref, sobre la base de datos de la EPH (Indec).

Cuadro 5.4. Evolución de la informalidad estructural y los empleos modernos antes y durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)

Indicadores del mercado de trabajo	2020		Dif. en cantidad	Dif. %
	I-2020	II-2020		
Ocupados modernos	8 867 580	7 418 091	1 449 489	-16,3
Ocupados estructuralmente informales	3 177 620	2 127 989	1 049 631	-33,0
Total ocupados	12 045 200	9 546 080	2 499 120	-20,7
Tasa de informalidad estructural	26,4	22,3		
Asalariados	8 855 204	7 344 854	1 510 350	-17,1
· Asalariados registrados modernos	5 331 096	5 306 752	24 344	-0,5
· Asalariados no registrados modernos	2 145 209	1 181 236	963 973	-44,9
· Asalariados registrados informales	358 102	287 485	70 617	-19,7
· Asalariados no registrados informales	1 020 797	569 381	451 416	-44,2

Fuente: Proyecto Pisac Covid-19 n° 14, nodo: CIEA-Untref, sobre la base de datos de la EPH (Indec).

Ahora bien, si observamos a los asalariados de cada sector, mientras los no registrados informales disminuyeron en un 44%, aquellos asalariados registrados (que en su mayoría se ubican dentro del sector moderno) lo hicieron en solo un 0,5%. Aquellos con actividades menos productivas, que también son precarias y, muy probablemente, no registradas, han sido mucho más afectados por las políticas de aislamiento (Jacovkis, Masello, Granovsky y Oliva, 2020).

En lo que refiere a las transiciones, se reforzaron las tendencias observadas en el primer escenario. Durante la pandemia, el sector moderno aparentemente tuvo una dinámica propia, tal que un 91,2% de los que estaban insertos de manera moderna en el segundo trimestre de 2019 se encontraban en la misma situación en el momento más difícil del aislamiento (segundo trimestre de 2020). Por otro lado, la informalidad estructural refleja que el 66,2% de los que eran informales en 2019 lo seguían siendo en 2020, pero con un *stock* de casos menor. Los cambios del sector moderno a la informalidad son muy poco significativos, con una probabilidad de flujo del 7%.

Al mismo tiempo, las condiciones de vida en cuanto a pobreza empeoraron. Mientras que a principios de 2018 la incidencia de la pobreza era del 23% (cuadro 5.2), en el segundo trimestre de 2019 pasó al 37%, y por último ascendió a más del 40% en el segundo trimestre de 2020. O sea, en términos agregados hay un incremento de la población pobre a lo largo de los dos años analizados. El punto de partida ya era elevado, con una crisis socioeconómica que indujo a un salto en la cantidad de población pobre, y al final la pandemia significó otro escalón más en el deterioro de la calidad de vida. Así, en el primer semestre de 2021 la pobreza por ingreso alcanzó a más de un 40% de la población.

Al analizar las transiciones, se destaca la diagonal que marca la estabilidad de las trayectorias, en especial para el grupo de los pobres. Para este grupo, un 80% de los que estaban en condición de pobreza en el segundo trimestre de 2019 seguían estándolo en el peor momento del ASPO (segundo trimestre 2020). En contraposición, un 78% de los que no eran pobres en 2019 continuaban en dicha situación en el segundo trimestre de 2020.

De todos modos, a diferencia de lo que sucede con el análisis de la informalidad estructural, un 23% de los que no eran pobres en el segundo trimestre de 2019 pasaron a serlo en el segundo trimestre de 2020 y, a su vez, este grupo implica una probabilidad de flujo de 0,14. En cantidad de personas, esto significó el ingreso de más de 400 000 individuos en la pobreza. Entonces, comparativamente, el flujo entre el sector moderno

y la informalidad estructural (algo más de 15 000 trabajadores) es poco significativo en comparación con las personas que han caído en situación de pobreza.

REFLEXIONES FINALES

Para el diseño de políticas públicas, se requiere una concepción dinámica de los fenómenos. Como hemos señalado, quien hoy es pobre mañana puede no serlo, y a la inversa. Del mismo modo, Piaget (1986) ha planteado de manera muy temprana que “la dificultad esencial inherente a toda teoría sociológica consiste en conciliar la explicación diacrónica de los fenómenos [génesis y desarrollo] con la explicación sincrónica [equilibrio]”. Dada su relevancia explicativa, hemos tratado de apreciar la dinámica y la incidencia de la pobreza y la informalidad estructural en la Argentina entre 2018 y 2020.

En general, en ciencias sociales nos hemos acostumbrado al análisis de la causalidad instantánea⁵⁶ (variación concomitante en términos de Durkheim), pero no a un análisis de los efectos a largo plazo del estado de una variable (Oliva, 2017), o de un acontecimiento particular; por ejemplo, el efecto a diez años de haber terminado de cursar un nivel educativo particular. Al mismo tiempo, existe poca experiencia y aplicación en la Argentina de este tipo de metodologías (que, como se ha mostrado, es muy utilizada en otros países para la evaluación de políticas), por lo que resulta un aporte la indagación desde estas perspectivas.

En este sentido, el análisis diacrónico ha reflejado varios aspectos que merecen ser destacados. En primer lugar, que la pandemia de covid-19, sin dudas, ha tenido una importante incidencia en la vida social dentro de la coyuntura del año 2020, asociada en la Argentina a las restricciones impuestas por el ASPO, que redujeron las actividades económicas y laborales a un piso mínimo. Sin embargo, de ninguna manera es el único ni el más importante de los factores que explican los elevados índices de informalidad estructural, así como los altos niveles de pobreza.

56 Por ejemplo, en una tabulación cruzada entre género e inserción laboral, no consideramos distancia temporal entre la variable independiente (género) y dependiente (inserción laboral). Así, no es muy frecuente el análisis de causas y efectos a largo plazo en las ciencias sociales actuales.

Con lo cual, la pandemia en la Argentina ha sido un elemento que coadyuvó, con otro conjunto de problemas estructurales que tiene el país desde hace muchos años, al deterioro de las condiciones laborales y de vida. En este sentido, el problema de la informalidad estructural, entendido como un aspecto vinculado de manera estrecha a la heterogeneidad de la estructura, tiene una menor propensión a modificarse fuertemente en el corto plazo.

En segundo lugar, en el análisis diacrónico se destaca la estabilidad de los grupos que nos interesaba analizar (informales y pobres), con una presencia elevada de transiciones estables en las diagonales de las tablas de rotación. Ahora bien, en una mirada más detallada, se evidencia que el grupo de los trabajadores del sector moderno constituye el más estable, el que menos probabilidades de transiciones hacia otras categorías tiene. Estos datos confirman los análisis que señalan la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas como un elemento determinante para el mercado de trabajo, dado que corrobora la composición de dos grupos estables en el tiempo, uno ligado a una inserción productiva y laboral más dinámica, con mejores condiciones de trabajo y, muy probablemente, con mejores ingresos directos e indirectos; y otro que necesita autogenerarse un puesto de trabajo, en general en condiciones de precariedad, con escaso o nulo capital cultural involucrado y que se asocia con situaciones de pobreza.

En tercer lugar, el análisis longitudinal de la pobreza ha reflejado cierta estabilidad intertemporal del grupo de pobres y no pobres, lo que ratifica los resultados antes señalados. Sin embargo, es necesario apuntar que en el tiempo han sido relevantes las transiciones negativas, es decir, el pasaje de un importante número de personas de una situación de no pobreza a ser pobres.

Ahora bien, pensando en cómo continuarán estas trayectorias en el futuro, es muy preocupante observar en el pasado la ausencia de trayectorias positivas (pobres que dejan de serlo e informales que pueden pasar al sector moderno) que tengan un carácter significativo, y que esta tendencia continúe.

Como señalamos en otra oportunidad, este tipo de comportamiento, que propende a la estabilidad negativa de segmentos que están en general estancos entre sí, posiblemente siga fortaleciendo lo que Robert Merton bautizó como “el efecto Mateo”. Aplicado al país, implicaría que

cada uno de los sectores en los que está fracturada social y productivamente la Argentina podría retroalimentar su situación,

de modo que los más dinámicos sean cada vez más dinámicos, mientras que los otros estén cada vez más alejados de la posibilidad de mejorar y de poder pensar que, alguna vez, ingresarán en el universo de los más productivos (Masello, 2017).

De continuar esta situación, los pobres que se insertan de un modo estructuralmente informal (que crearon pequeños comercios o microemprendimientos precarios, que venden en calles, trenes o colectivos) tendrán cada vez menos posibilidades de soñar, pensar y alcanzar una vida mejor.

6. Trabajadores pobres en tiempos de pandemia (2019-2021)

Santiago Poy, Camila A. Alfageme

La irrupción de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 ha profundizado los desequilibrios sociales en América Latina y abre interrogantes sobre el patrón de desigualdades en el futuro inmediato (Benza y Kessler, 2020). El objetivo de este capítulo es examinar el modo en que el contexto socioeconómico y sanitario impactó sobre la pobreza entre los ocupados. Aunque existen varios estudios acerca de la evolución de la pobreza monetaria en el período (Bonavida y Gasparini, 2020; Salvia, Bonfiglio y Robles, 2021), lo ocurrido con los trabajadores pobres ha recibido menor atención.

La cuestión de la pobreza entre la población ocupada no es un fenómeno novedoso en nuestro continente. Numerosos antecedentes teóricos –con mayor o menor grado de convergencia– buscaron vincular los procesos de empobrecimiento extendidos y persistentes con las características más generales de las relaciones de producción y la configuración institucional de los países de capitalismo periférico (Nun, 2003 [1969]; Prealc, 1978; Tokman, 2006). Sin embargo, en la coyuntura que atravesamos hay al menos tres elementos que le otorgan renovada importancia a la cuestión. En primer lugar, los efectos del covid-19 en la dinámica ocupacional han puesto de manifiesto la fragilidad de los mercados de trabajo en la región y el carácter limitado de las protecciones frente a la pobreza. La perspectiva de un cambio tecnológico más acelerado y sus consecuencias en términos de demanda de empleo y eliminación de puestos redundantes plantean un desafío novedoso de cara al futuro. En segundo lugar, la cuestión de la pobreza de trabajadores se torna central dado el compromiso asumido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de erradicar la pobreza en el curso de esta década (ONU, 2015). El logro de este objetivo requiere poner en práctica acciones coordinadas por parte de los Estados en niveles macroeconómicos, productivos, laborales y de protección social. En tercer lugar, la discusión sobre trabajadores pobres es mundial y, de forma creciente, pone en diálogo al Norte y al Sur globales acerca de la capacidad que tiene el trabajo

de seguir constituyendo el mecanismo privilegiado de integración socioeconómica (Fraser, Gutiérrez y Peña-Casas, 2011; Comisión Europea, 2019; Horemans, Marx y Nolan, 2016).

El concepto de trabajadores pobres combina el análisis del mercado de trabajo con el estudio de la pobreza y los distintos niveles de determinantes que inciden sobre ella (Crettaz, 2013). Lo empleamos aquí por su utilidad para abordar la intersección entre la desigualdad económico-ocupacional, las políticas de bienestar y las condiciones de vida de los trabajadores. Nuestra hipótesis es que, en el marco de un mercado de trabajo atravesado por condiciones de heterogeneidad estructural, la irrupción de la pandemia aceleró los procesos de empobrecimiento entre trabajadores vinculados al sector informal, y acentuó las desigualdades estructurales previas a la pandemia. La fuente de información de esta investigación fueron los microdatos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), relevada por el Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina.

PERSPECTIVA ANALÍTICA

El concepto de “trabajadores pobres” ha adquirido difusión a escala internacional ante los cambios en los mercados de trabajo, el aumento de la desigualdad y las modificaciones en los regímenes de bienestar (Fraser, Gutiérrez y Peña-Casas, 2011; Horemans, Marx y Nolan, 2016). En los países desarrollados, la discusión sobre los trabajadores pobres tiene como telón de fondo la recuperación posterior a la crisis de 2008-2009, durante la que se crearon numerosos empleos que no han bastado para evitar la pobreza (Comisión Europea, 2019). Como se señaló, en los países periféricos la relación entre pobreza y trabajo se ha vinculado con las características propias de los procesos de desarrollo.

Desde la perspectiva analítica que asumimos en este trabajo, proponemos inscribir la pobreza de ocupados en el marco de los procesos de desigualdad estructural que atraviesan a los mercados de trabajo de los países periféricos. Es posible referirse a una articulación entre la estructura productiva de nuestros países, caracterizada por asimetrías tecnológicas y brechas de productividad entre sectores y ramas (Infante, 2011) y sus consecuencias en materia de segmentación laboral y estratificación socioeconómica (Bárcena y Prado, 2016; Rodríguez, 2001; Salvia, 2012). De acuerdo con este planteo, la heterogeneidad estructural tiene conse-

cuencias en términos de desigualdad económica y pobreza (Pinto, 1976). La insuficiente demanda de fuerza de trabajo por parte de los sectores más dinámicos implica que una porción significativa de los ocupados se desempeña en actividades de baja productividad, ligadas a la subsistencia y a la pobreza. Asimismo, la baja competitividad sistémica y la elevada informalidad en las economías periféricas ponen un límite estructural a la viabilidad financiera de los sistemas de protección y aseguramiento de ingresos frente a la pobreza (Fajnzylber, 1996; Tokman, 2006).

La literatura sobre trabajadores pobres ha permitido complejizar la relación entre desigualdad socioocupacional y pobreza al introducir determinantes de distinto nivel que desempeñan un papel relevante (Maître, Nolan y Whelan, 2012). Por las características sociodemográficas del hogar y por los comportamientos laborales del resto de los integrantes, algunos trabajadores que no tienen bajos ingresos viven en hogares pobres. Lohmann y Crettaz (2018) esquematizan cuatro niveles de determinantes:

- a) el bajo nivel de los ingresos laborales que reportan las ocupaciones de menor calidad del mercado de trabajo;
- b) una baja intensidad laboral, ya sea individual o del conjunto de la fuerza de trabajo disponible en el hogar;
- c) altas demandas de consumo por parte del hogar, lo que en general se deriva del tamaño del hogar o de una alta tasa de dependencia;
- d) un insuficiente acceso a prestaciones sociales, o también un monto insuficiente de estas transferencias para eludir la pobreza.

Las evidencias disponibles señalan que la estructura ocupacional argentina se caracteriza por una segmentación persistente (Beccaria y Maurizio, 2012; Donza, 2021; Salvia y Vera, 2013; Poy, Robles y Salvia, 2020). Es posible identificar, por un lado, un sector que incluye a empleadores de establecimientos formales, profesionales independientes y asalariados protegidos por un sistema que promueve el empleo estable y permanente. Por otro lado, existe una fracción del mercado laboral –que involucra a alrededor del 40% de la fuerza de trabajo– que opera en condiciones irregulares o eludiendo las normativas laborales, que incluye también actividades por cuenta propia de baja calificación (Donza, 2021; Poy, Robles y Salvia, 2020). De allí que sea esperable que la irrupción de la pandemia y de las medidas de restricción implementadas para detener

los contagios hayan acentuado los procesos de empobrecimiento entre trabajadores vinculados al sector informal, agravando las desigualdades estructurales previas a la pandemia.

METODOLOGÍA

La fuente de información fueron los microdatos de la EDSA y el universo de estudio quedó definido por los trabajadores que estaban ocupados al momento del relevamiento o que declararon no estar trabajando por razones asociadas al desarrollo de la pandemia.⁵⁷ Se definió como “trabajador pobre” a quienes vivían en hogares cuyos ingresos por adulto equivalente se encontraban por debajo de la línea de pobreza (Poy, 2022). El diseño combinó el análisis de sección cruzada con datos longitudinales a partir del panel de la EDSA. La EDSA cuenta con un panel que permite seguir a los mismos trabajadores durante un año –con 973 casos para 2019-2020 y 990 casos para 2020-2021– y otro panel más reducido –con 504 casos que alguna vez estuvieron ocupados– que permite seguir al mismo caso durante los tres años considerados.

Una primera parte del análisis se centra en la evolución de la pobreza entre ocupados antes y después de la irrupción del covid-19. La pobreza de trabajadores tiene determinantes relacionados con el ingreso laboral del ocupado/a y con los demás ingresos de sus hogares. Por la relevancia que adquirieron durante la pandemia los instrumentos de política social en el sostenimiento económico de los hogares (con instrumentos como el IFE, la Tarjeta Alimentar, la AUH y otros programas de ayuda social), evaluamos su impacto sobre la pobreza de trabajadores a partir de técnicas de microsimulación. Mediante esta estrategia se recalcula la incidencia de la pobreza cuando los ingresos familiares se toman netos de las transferencias de política social y se considera la diferencia con la tasa observada como el efecto de la intervención (Cortés, 2018; Poy, 2020; Salvia, Poy y Vera, 2018).

En una segunda parte analizamos las dinámicas de empobrecimiento durante la crisis y procuramos examinar en qué medida la situación so-

57 La EDSA incluyó una pregunta destinada a indagar si el encuestado dejó de trabajar debido a una licencia por ser grupo de riesgos, por suspensiones u otras razones asociadas a la pandemia (pregunta 36b).

ciosanitaria acentuó las desigualdades previas. Este análisis se propone reconocer quiénes fueron los trabajadores que tuvieron más probabilidad de entrar en la pobreza a partir de 2020. Con este objetivo, implementamos un modelo de regresión logística binomial, que permite sintetizar cuáles son las covariables que se relacionan con mayor intensidad con la probabilidad de haber entrado en pobreza en 2020 (frente a permanecer afuera en ambos períodos).⁵⁸

Por último, el análisis longitudinal también aporta al estudio de la pobreza en la medida en que permite distinguir situaciones de distinto grado de severidad. Como se adelantó, a partir de la EDSA fue posible seguir a 504 respondientes que estuvieron ocupados en alguno de los relevamientos de 2019, 2020 o 2021. De este modo, se elaboró un panel de trabajadores con tres observaciones. Se decidió implementar un análisis de duración de la pobreza, con el propósito de reconocer distintos perfiles de trabajadores pobres y brindar elementos novedosos para comprender el escenario ocupacional que deja la pandemia de covid-19. Se sigue un enfoque basado en los “episodios” de pobreza (Foster, 2009), en el cual se cuentan las ocasiones en las que una persona o un hogar ha vivido en la pobreza. Conforme a la terminología habitual, se resolvió delimitar situaciones de pobreza “transitoria” (un solo episodio de pobreza), “recurrente” (dos episodios) y “crónica” (tres episodios) (Cantó, Gradín y Del Río, 2012). Finalmente, decidimos agrupar estas trayectorias en tres categorías:

- a) trabajadores que nunca estuvieron en pobreza;
- b) trabajadores *vulnerables a la pobreza* (pobres transitorios o recurrentes);
- c) trabajadores *pobres crónicos*.

En esta instancia, el interés del análisis fue identificar características diferenciales de los trabajadores pobres crónicos y de aquellos que son vulnerables a fluctuaciones de ingresos.

58 Para una discusión más general sobre la forma de cálculo de las probabilidades de transición en los diseños de panel, véase el capítulo 5. En lo que aquí concierne, cabe señalar que, dada una matriz de transición, el interés se concentra en la probabilidad de ser pobre en el tiempo final, condicional a no haberlo sido en el tiempo inicial: $\Pr (P_{t1} = 1 \mid P_{t0} = 0)$.

RESULTADOS**LA POBREZA ENTRE TRABAJADORES ANTES Y DESPUÉS
DE LA IRRUPCIÓN DEL COVID-19**

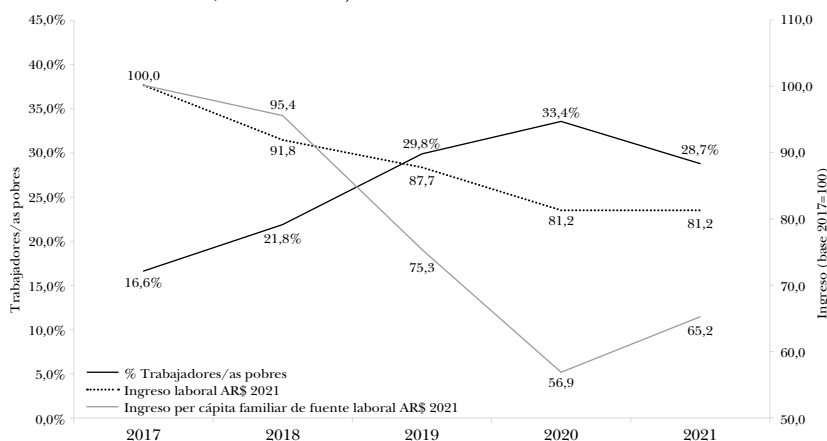
El proceso de empobrecimiento que ha atravesado a la estructura social del trabajo urbana a partir de la crisis económico-financiera de 2018 se profundizó con la irrupción del covid-19. El gráfico 6.1 exhibe que la pobreza entre trabajadores venía incrementándose de manera significativa en los años previos a la pandemia: entre 2018 y 2019 pasó de 21,8% a 29,8%, lo que representaba casi 13 pp más de trabajadores pobres que en 2017.⁵⁹ Las medidas de restricción a la movilidad derivadas de la emergencia sanitaria condujeron al incremento de la pobreza laboral, que alcanzó 33,4%, la cifra más alta del período analizado. La reactivación económica del período posterior a la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) propició una reducción de la pobreza entre trabajadores, que alcanzó 28,7% en 2021.

El gráfico 6.1 aporta elementos para comprender algunos de los factores de nivel agregado que habrían operado sobre el empeoramiento socioeconómico ocurrido antes y después de la pandemia. Se presenta la evolución de dos variables de ingreso: el ingreso promedio de los trabajadores y el ingreso per cápita familiar de fuentes laborales de los hogares en los que viven. Por simplicidad, los ingresos fueron deflactados a pesos de septiembre de 2021 y se toman los valores de 2017 como base para examinar su evolución. Por un lado, la caída del ingreso laboral promedio de los trabajadores (salarios e ingresos de trabajadores por cuenta propia) fue determinante: entre 2019 y 2020 se redujo 7,4% y la pobreza se incrementó de 29,8% a 33,4%. Por otro lado, el incremento de la pobreza de trabajadores tuvo que ver –y quizá de un modo más determinante– con la reducción del ingreso de los demás ocupados que viven en el hogar. Entre 2019 y 2020, el ingreso per cápita familiar de fuente laboral se redujo casi 25%, lo que indica la pérdida de capacidades que tuvieron los hogares para proveerse ingresos provenientes del mercado de trabajo

59 El aumento de la pobreza es solo una de las caras del deterioro laboral entre 2016 y 2019, a lo que cabría agregar el aumento de la precarización y el desempleo (Poy, Robles y Salvia, 2020).

como correlato del aumento de la inactividad forzada y el desempleo.⁶⁰ En el ciclo posterior al ASPO, se recuperó el ingreso per cápita familiar de fuente laboral de los hogares.

Gráfico 6.1. Incidencia de la pobreza entre trabajadores, ingreso laboral promedio y per cápita familiar de fuente laboral (población ocupada de 18 a 64 años, total de aglomerados urbanos, 2017-2021)

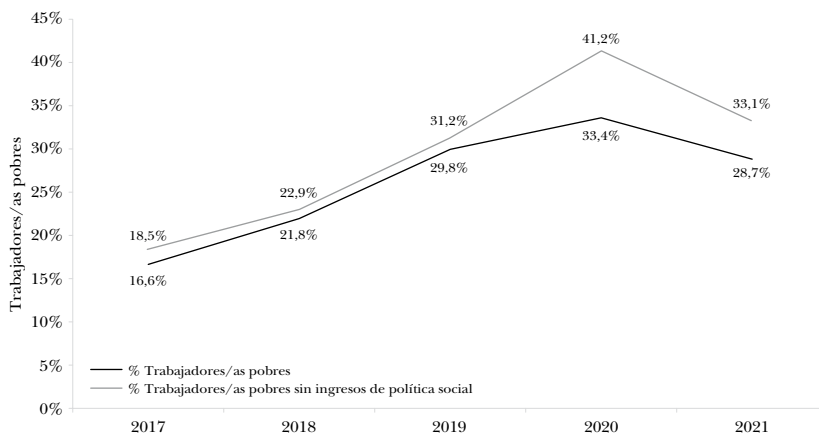


Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

El estudio de la pobreza de ocupados requiere considerar las demás fuentes de ingreso de los hogares, en particular aquellos provenientes de los sistemas de protección social. Recurrimos para ello a un ejercicio de microsimulación y evaluamos qué impacto tuvieron los ingresos de protección social sobre la pobreza de ocupados. El gráfico 6.2 exhibe los resultados de este ejercicio. Como puede apreciarse, entre 2017 y 2019, el efecto de las transferencias de política social sobre la pobreza laboral se estimó entre 1 y 2 pp. En 2020, este efecto se incrementó de manera sustantiva: la pobreza de trabajadores hubiese sido 41,2% –y no 33,4%– si no fuese por las transferencias sociales. A partir de 2021 se observó una fuerte reducción del impacto de la política social de transferencias de ingresos sobre la pobreza de ocupados.

60 Véase el capítulo 2 para un análisis detallado de la dinámica del mercado de trabajo en el contexto de la pandemia.

Gráfico 6.2. Microsimulación de los efectos de la política social en la pobreza de trabajadores (población ocupada de 18 a 64 años, total de aglomerados urbanos, 2017-2021)



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

DINÁMICAS DE EMPOBRECIMIENTO EN LA CRISIS

El análisis precedente exhibió un aumento de la pobreza; por consiguiente, aquí procuramos reconocer quiénes fueron los trabajadores que tuvieron más probabilidad de entrar en la pobreza a partir de 2020. Buscamos encontrar indicios de una acentuación de las desigualdades estructurales en los procesos de empobrecimiento como resultado de la crisis. En particular, conjeturamos que los clivajes derivados de la pauta de segmentación estructural del mercado de trabajo habrían dado lugar a procesos selectivos de empobrecimiento.

Implementamos un modelo de regresión logística binomial para evaluar cuáles son las características de los trabajadores que se asociaron con una mayor probabilidad de entrar en la pobreza. Se introdujeron covariables habituales en el análisis de pobreza de trabajadores. Sin embargo, se eligió un método de especificación por pasos, para incluir únicamente a las variables relevantes y ganar parsimonia.⁶¹

61 Como se aprecia en el cuadro 6.1, las pruebas de bondad de ajuste evidencian una adecuada capacidad explicativa ($R^2 = 0,269$ y porcentaje de aciertos = 70,8%). El análisis se concentra en los odds ratio, los coeficientes de regresión en términos exponenciales que pueden interpretarse como el

En principio, cabe señalar que solo se conservaron dos variables individuales que retienen alta capacidad explicativa. Por un lado, la educación del trabajador resultó un factor estrechamente asociado con la transición: entre quienes no tienen educación secundaria, las chances de haber entrado en pobreza fueron alrededor de 4,4 veces las que registran los trabajadores con educación terciaria o universitaria completa; y entre quienes tienen solo educación secundaria, las chances eran 3 veces mayores. Por otro lado, los trabajadores extranjeros se encontraron más expuestos a la probabilidad de haber entrado en pobreza que los nativos (casi 2,8 veces). Esto último puede asociarse con su sobrerrepresentación en las ramas más afectadas por el confinamiento (Baer y otros, 2011).

Por otra parte, el modelo permite apreciar que la presencia de niños en el hogar constituyó un factor fuertemente asociado con la probabilidad de experimentar una transición a la pobreza. Entre aquellos ocupados que viven en hogares con dos o más niños, las chances fueron 3,4 veces las que registraron los trabajadores en hogares sin niños. Esto confirma que la vulnerabilidad a la pobreza tiene como uno de sus determinantes principales el desajuste entre las demandas de consumo del grupo familiar y los recursos económicos que logran reunir (Crettaz, 2015). Por último, otra variable relevante en el modelo se refiere al aglomerado urbano: los trabajadores del conurbano bonaerense fueron los más afectados en términos de la propensión a entrar a la pobreza, muy por encima de los demás trabajadores. Esto podría explicarse por lo ocurrido en materia de restricciones a la movilidad humana, que fueron más severas y prolongadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.⁶² En contrapartida, los trabajadores de las pequeñas ciudades del interior, que tuvieron restricciones menos severas y prolongadas que los grandes centros urbanos, estuvieron más protegidos frente a la posibilidad de entrar en pobreza.

cociente entre las razones de ocurrencia del evento de interés (en este caso, la pobreza) para las distintas categorías de cada covariable.

62 Nótese que, pese a que las restricciones fueron también significativas en la Ciudad de Buenos Aires, el efecto en la dinámica del empobrecimiento fue muy distinto. Esto puede atribuirse a las características de la fuerza de trabajo y las actividades económicas de la ciudad, que pudieron convertirse más fácilmente a modalidades de teletrabajo. Véanse las diferencias regionales en los efectos de la pandemia en el capítulo 3.

Cuadro 6.1. Factores asociados a la probabilidad de entrar a la pobreza laboral en 2020 (población ocupada de 18 a 64 años, total de aglomerados urbanos, 2019-2020)

	Coef.	Error estándar	Exp(B)
Nivel educativo (ref. = secundaria incompleta)			
Secundaria completa	1,299	0,338	3,665***
Más que secundaria completa	1,057	0,308	2,876***
Origen migratorio (ref. = no migrante)			
Migrante	1,007	0,431	2,739**
Cantidad de niños en el hogar (ref. = sin niños)			
Un niño/a	0,615	0,260	1,849**
Dos o más niños	1,238	0,269	3,449***
Agglomerado urbano (ref. = CABA)			
Conurbano bonaerense	1,033	0,390	2,809***
Otras áreas metropolitanas	0,075	0,423	1,078
Resto urbano interior	-0,074	0,449	0,929
Antigüedad en el puesto (años)	-0,226	0,120	0,798*
Categoría económico-ocupacional (ref. = asalariado/a formal)			
No asalariados formales	0,433	0,440	1,543
Empleados del sector público	0,046	0,429	1,047
No asalariados informales	0,566	0,306	1,761*
Asalariados informales	0,975	0,336	2,651***
Sector de actividad (ref. = industria)			
Comercio y servicios	0,685	0,321	1,984**
Construcción	0,780	0,468	2,181*
Servicios personales	1,383	0,412	3,988***
Otras	0,605	0,405	1,832
Constante	-3,651	0,647	0,026***
Estadísticos del modelo			
Observaciones	748		
R2 de Nagelkerke	0,269		
Hosmer y Lemeshow (p Chi sq.)	0,673		
% de aciertos	70,8		

(*) $p < 0,1$; (**) $p < 0,05$; (***) $p < 0,01$.

Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

El modelo incluye tres variables socioocupacionales relevantes que operaron sobre la dinámica de la pobreza. En primer lugar, los ocupados que tenían empleos de mayor antigüedad resultaron protegidos frente al riesgo de entrar en pobreza. Es razonable asumir que los puestos más estables en el tiempo constituyan también los que más protección brindan: en el caso de los asalariados, debido a las primas y beneficios por antigüedad, y, en el caso de los no asalariados, por una mayor capitalización y desarrollo de clientes. En segundo lugar, los sectores de actividad jugaron un papel importante en la dinámica de la pobreza. Los trabaja-

dores de los servicios personales y comunitarios fueron los más expuestos a la transición; les siguieron los trabajadores de comercio y servicios y de la construcción.⁶³

Tal como plantea nuestra hipótesis, la categoría económico-ocupacional tuvo un lugar clave en las dinámicas del empobrecimiento en el contexto de la pandemia. De manera general, los ocupados en el sector informal fueron los más expuestos al riesgo de entrar en la pobreza: los asalariados del sector informal tuvieron las mayores chances de entrada (una razón de chances 2,7 más alta que entre los asalariados del sector formal), seguidos por los no asalariados informales (cuentapropistas de baja calificación y pequeños empleadores). Como reverso, claramente los asalariados formales y los trabajadores del sector público fueron los más protegidos. Estos resultados evidencian que la segmentación estructural del mercado de trabajo previa a la pandemia se conjugó con iniciativas de política dirigidas a preservar con mayor intensidad el empleo formal (a partir de instrumentos como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP), manteniendo los clivajes de desigualdad. El proceso de “acumulación de desventajas” en términos de empobrecimiento podría explicarse por dos rasgos fundamentales de las actividades informales y el modo en que se procesaron las medidas de aislamiento y restricciones a la movilidad humana:

- En primer lugar, los ocupados en el sector informal se desempeñan en actividades que suelen requerir contacto físico interpersonal con mayor intensidad que el conjunto de los ocupados. Este tipo de contacto es el que se vio más restringido durante la pandemia. A su vez, y ligado con lo anterior, estos trabajadores tuvieron menores posibilidades de reconvertirse a modalidades de empleo remotas o domiciliarias.
- En segundo lugar, los empleos en el sector informal se caracterizan por una mayor inestabilidad relativa (tanto de las horas trabajadas como de los ingresos), lo que restringe las posibilidades de acumulación en estas actividades y limita las capacidades de movilización de recursos en un contexto de interrupción de las actividades económicas.

63 De acuerdo con los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), se trata de los tres sectores que más volumen de empleo perdieron entre 2019 y 2020.

TRABAJADORES POBRES: UNA MIRADA HACIA LA POSPANDEMIA

En este último apartado utilizamos descriptivamente el panel de la EDSA que permitió seguir a los mismos trabajadores durante el período 2019-2020. Se decidió implementar un análisis de duración de la pobreza para reconocer distintos perfiles de trabajadores pobres en términos de severidad y brindar elementos novedosos para comprender el escenario ocupacional que deja la pandemia de covid-19. Como se mencionó, analizamos tres tipos de situaciones:

- a) trabajadores que nunca estuvieron en pobreza;
- b) trabajadores *vulnerables a la pobreza* (pobres transitorios o recurrentes);
- c) trabajadores *pobres crónicos*.

Para esta caracterización descriptiva, se tomaron una serie de indicadores que también empleamos en la sección previa y que favorecen la comprensión de los perfiles de este colectivo de ocupados. Antes de centrarnos en esta caracterización, cabe señalar que 42% de los trabajadores en el panel fueron pobres al menos una vez entre 2019 y 2021; sin embargo, solo el 14% lo ha sido de manera persistente.

Los trabajadores pobres crónicos tienen algunas características que los diferencian del perfil del conjunto de la fuerza de trabajo. Se trata de un colectivo más feminizado y casi preponderantemente constituido por trabajadores de bajo nivel educativo (el 83,2% no terminó la escuela secundaria) y con una sobrerrepresentación de ocupados en edades centrales (el 56,7% tiene entre 30 y 44 años). En cambio, en términos sociodemográficos la población de trabajadores vulnerables se asemeja más a los trabajadores no pobres, aunque siguen predominando los perfiles de baja educación.

Otra serie de rasgos que distingue a los trabajadores pobres crónicos del conjunto de los ocupados es su elevada tasa de dependencia económica. Por un lado, esto se expresa en que el 95,5% de los pobres crónicos reside en hogares con niños, frente al 53,3% del conjunto de los ocupados. Por otro lado, tienen más niños por hogar: en promedio, viven 2,1 niñas/os por hogar, frente a 1,7 en general y 1,3 niños por hogar en el caso de los trabajadores no pobres. Al respecto, la distinción entre la vulnerabilidad y la cronicidad parece estar vinculada con distintos grados de severidad de las estructuras de riesgo de los hogares de trabajadores.

Cuadro 6.2. Características seleccionadas de los trabajadores según trayectoria de pobreza (población ocupada, en 2019, de 18 a 64 años, total de aglomerados urbanos, 2019-2020-2021)

	No pobres	Vulnerables a la pobreza	Pobres crónicos	Total
Características individuales				
% mujeres	42,8	41,2	56,2	44,2
% 30 a 44 años	30,3	28,5	56,7	33,5
% sin secundaria	17,5	33,5	83,2	31,1
% extranjeros	2,2	10,1	4,4	4,7
Características del hogar				
% con niños	40,3	58,9	95,5	53,3
Niños por hogar	1,3	1,8	2,1	1,7
Tasa de dependencia	1,6	2,1	3,2	2,0
% hogar monoparental	18,9	34,7	24,7	24,2
Características laborales				
% jornada parcial	30,0	46,1	62,9	38,9
% construcción	2,7	7,2	17,0	5,9
% comercio y servicios	42,6	46,7	10,8	38,8
% servicios personales	6,3	14,4	48,7	14,7
% sector informal	30,5	56,4	71,6	43,5

Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Lo que sin dudas diferencia a los trabajadores pobres crónicos de los demás ocupados es su perfil socioocupacional. Casi dos tercios de estos ocupados tienen empleos de jornada parcial, frente a solo 39% en el conjunto de los ocupados. Los trabajadores vulnerables a la pobreza también tienen una mayor propensión a la subocupación, aunque en menor grado que los trabajadores pobres crónicos. Asimismo, el perfil de cronicidad de la pobreza se asocia con ciertas ramas de actividad; en particular los servicios personales (como el empleo en casas particulares) y la construcción. En cambio, el perfil de trabajadores vulnerables a la pobreza está más vinculado con otras ramas, como el comercio y los servicios. Por último, el empleo en el sector informal está en estrecha relación con la cronicidad: 7 de cada 10 trabajadores pobres crónicos se ocupan en este sector. En el caso de los trabajadores vulnerables a la pobreza esta proporción es algo menor, e involucra a casi 6 de cada 10 ocupados.

FRAGMENTACIÓN ESTRUCTURAL Y FRAGILIDAD SOCIOECONÓMICA

En este capítulo hemos reunido evidencias que indican que la irrupción de la pandemia de covid-19 y las medidas de aislamiento consolidaron una tendencia previa al incremento de la pobreza entre los ocupados. El capítulo mostró que el factor determinante del incremento entre 2019 y 2020 ha sido la pérdida de ingresos laborales de los hogares de trabajadores, mientras que la política de protección social amortiguó de manera parcial este deterioro. Entre 2020 y 2021, en cambio, una reactivación del mercado de trabajo (por efecto de la gradual apertura de actividades) permitió una reducción de la pobreza entre los ocupados. La política de protección social –que en 2021 ya no incluyó al principal instrumento implementado durante 2020, el IFE– redujo significativamente su efecto compensatorio.

La investigación se centró en la dinámica de los procesos de empobrecimiento para reconocer el grado en que la pandemia agudizó las desigualdades preexistentes. A partir de un modelo de regresión logística binomial sobre la probabilidad de transición a la pobreza entre 2019 y 2020, constatamos que los ocupados del sector informal enfrentaron las mayores desventajas. El análisis de la entrada en la pobreza a partir de la pandemia también reveló que ciertas características de los trabajadores y sus hogares marcan un perfil de vulnerabilidad socioeconómica. La indagación sobre los perfiles de trabajadores pobres reveló que solo un tercio son pobres de manera crónica y que el perfil sociodemográfico y socioocupacional de este colectivo acentúa los rasgos de vulnerabilidad que también están presentes en los trabajadores pobres no crónicos. En particular, se destaca la estrecha asociación entre la pobreza crónica y la informalidad, la insuficiencia horaria, el empleo en actividades de servicios personales y las elevadas demandas de consumo de sus hogares.

De las evidencias recogidas en este capítulo se desprenden una serie de reflexiones de distinto alcance. Las medidas de aislamiento y restricción que debieron implementarse en respuesta a la irrupción del SARS-CoV-2 revelan la fragmentación estructural del mercado de trabajo y la fragilidad socioeconómica en la que se reproduce la vida de una porción significativa de la fuerza de trabajo argentina. La debilidad de los mecanismos de protección de ingresos que caracteriza a la actual configuración institucional del mercado de trabajo se puso de manifiesto especialmente al imponerse restricciones a la movilidad humana. Nuestro capítulo ha pretendido mostrar los riesgos dispares que han enfrentado los trabajadores de distintas posiciones socioocupacionales. Con independencia de que

se superen los riesgos epidemiológicos asociados al SARS-CoV-2, la situación de fragilidad estructural de una amplia fracción de los ocupados y sus hogares continuará siendo una de las mayores deudas pendientes del actual régimen de bienestar.

En una perspectiva de mayor duración, los resultados de este capítulo dan cuenta de la relación entre la heterogeneidad ocupacional y la pobreza persistente como un rasgo sistémico del funcionamiento del capitalismo periférico argentino. La persistencia de diferenciales de productividad entre unidades económicas y la permanencia de un amplio y heterogéneo sector microinformal son rasgos duraderos de la estructura económica argentina que se expresan en las condiciones de vida de los trabajadores y, en particular, en la vulnerabilidad a la pobreza. Este patrón inhibe la convergencia socioeconómica, a la vez que se ha venido profundizando durante el último decenio de bajo crecimiento. Sin la integración productiva de las actividades económicas hoy subordinadas, un fuerte crecimiento del empleo de calidad y mejoras en los sistemas de protección social será difícil revertir las dinámicas de empobrecimiento que hoy atraviesan a la estructura social del trabajo en nuestro país.

7. Dinámicas de la estructura de clases

Jésica Lorena Pla, Manuel Riveiro, Eugenia Dichiera

Las medidas excepcionales de aislamiento y distanciamiento social que se adoptaron durante la pandemia de covid-19 implicaron la posibilidad de observar transformaciones en la estructura social en un período corto de tiempo.

Si bien los países más desarrollados, como los Estados Unidos y los de Europa occidental, atravesaron –y siguen atravesando– fuertes consecuencias económicas debido a la crisis sanitaria, sus economías presentaron una mayor capacidad para enfrentar la crisis, debido al mayor margen de acción fiscal y las menores limitaciones en el acceso al crédito (Levy Yeyati y Valdés, 2020), así como a una posición privilegiada en términos de la organización del capitalismo a nivel global. No es el caso de los países latinoamericanos, en los cuales la inédita situación que impuso la pandemia vino a solaparse con una posición periférica a nivel mundial y consecuentemente con la presencia de una economía heterogénea en términos de su estructura.

Weller (2020) señala que, si bien se aprecia una caída del empleo registrado en todos los países, en ningún caso esta es tan abrupta como en el sector informal. Para el caso de México, por ejemplo, la situación de informalidad en que se encuentra una gran parte de los trabajadores fue uno de los factores determinantes del deterioro de sus condiciones de vida durante la pandemia (Jiménez-Bandala y otros, 2020; Triano Enríquez, 2021), debido al retiro de los trabajadores del mercado. Por su parte, Triano Enríquez (2021) plantea que, en este contexto, los indicadores de desempleo ya no resultan adecuados para dar magnitud a la crisis causada por la pandemia, sino que es más adecuada la observación sobre las tasas de actividad.⁶⁴

64 Por ejemplo, la proporción de inactivos en Chile aumentó de un 13% a un 32,3% y en México, de un 14,3% a un 34,8% si se compara el segundo trimestre de 2019 con el mismo período de 2020 (Weller, 2020).

Para el caso argentino, en el período prepandémico se registraba una nueva fase del proceso de desalarización y, como consecuencia, un engrosamiento de las posiciones informales (Maceira, 2021). El proceso de precarización y consecuente caída del ingreso consolidó una tendencia relativamente constante en los últimos veinte años en el país, a pesar de las fluctuaciones de los distintos ciclos políticos de esos años, en el marco de un mercado de trabajo volátil e inestable (Roude y Arce, 2020). Esta heterogeneidad en el mercado de trabajo tuvo incidencia en la manera en la cual los trabajadores y trabajadoras atravesaron la pandemia: el empleo formal tuvo una capacidad de retención mucho mayor al informal durante el período de aislamiento, que se explica no solo por la situación regular de los trabajadores, sino también por las líneas de intervención llevadas adelante por el gobierno nacional, tales como la prohibición de despidos y la ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) (Dalle, 2021; Maceira, 2021; CEM, 2020). De esta manera, muchas de las intervenciones sobre el mercado de trabajo tendieron a paliar la crisis para los trabajadores y las trabajadoras del sector formal, pero desprotegeron a las personas que reproducen su vida cotidiana en el sector informal, y generaron así un efecto desigualador sobre el mercado de trabajo. En este punto, la vinculación con la posición ocupacional es clave: aun en contexto de pérdida de ingresos, esta siempre es mayor entre quienes se encuentran en situación de informalidad; la interacción entre la clase y la informalidad es un factor explicativo clave para la propensión a la pobreza (Pla, Poy y Salvia, 2022).

Tomar en cuenta la vinculación de los análisis sobre la estructura ocupacional y la calidad de los empleos resulta de suma importancia en un contexto de núcleos de informalidad amplios y muy arraigados como el descripto más arriba y como se ha observado en los diversos capítulos de este libro.

Como decimos, entonces, la situación de depresión económica que causó la pandemia tuvo su correlato en el mercado laboral: la tasa de empleo para el segundo trimestre de 2020 alcanzó su nivel más bajo desde 2001 (33,4%), casi 9 pp por debajo del trimestre anterior (Indec, 2020b). Por su parte, el nivel de actividad también descendió, al pasar de un 47,1% en el primer trimestre de 2020 a un 38,4% en el segundo trimestre del mismo año, momento en el que se decretó el aislamiento (Indec, 2020b). Esta retracción en la tasa de empleo y de actividad se dio de manera forzosa, en un contexto donde buscar y conseguir otro puesto de trabajo resultaba imposible (Poy y otros, 2021).

Como efecto directo de estas dinámicas relacionadas con la inserción laboral de los diferentes miembros del hogar, los niveles de pobreza e

indigencia se incrementaron durante el período de aislamiento de manera significativa (ODSA, 2021); uno de los fenómenos que se visualizan durante el período es el de los trabajadores y las trabajadoras –es decir, personas ocupadas– en situación de pobreza.⁶⁵ Cabe mencionar, a su vez, que la concentración de ingresos y el aumento de la desigualdad en su distribución generaron un contexto en el que no solo se observan más hogares bajo la línea de pobreza, sino que el ingreso promedio de los hogares se encuentra cada vez más lejos del valor de la canasta básica, lo que implica un empeoramiento de sus condiciones de vida (CEM, 2020).

El objetivo de este capítulo es analizar la dinámica por la cual atravesó la estructura de clases, tanto en su composición y morfología durante la pandemia como en relación con las estrategias de reproducción social de los hogares ante la contracción del mercado de trabajo. Somos conscientes de que es un objetivo ambicioso en el sentido de que pretende encontrar variaciones en una serie de indicadores que, dada su característica estructural, son refractarios al cambio en períodos cortos. Sin embargo, asumimos la empresa porque consideramos que la situación pandémica se coloca como un escenario ideal para poner a prueba la permeabilidad de las clases y las fracciones de clase a los escenarios imprevistos. Al hacerlo, podremos evaluar la consistencia de la clase y su capacidad de hacer frente a las situaciones inciertas, y aportar evidencia empírica para futuros análisis, pero también para el debate teórico sobre la capacidad explicativa de la clase medida bajo esquemas aceptados en general en otros países pero poco utilizados en la Argentina.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

En este capítulo se observan dinámicas de la estructura de clases que permiten analizar su homogeneidad/heterogeneidad interna, y evaluar la pertinencia del esquema Erikson, Goldthorpe y Portocarero (EGP), presentado en la introducción de este libro, para la comparación internacional entre países industrializados.⁶⁶ Está pendiente aún una com-

65 Para mayor detalle sobre este fenómeno, véanse los capítulos 4 y 6 de este libro.

66 Algunas limitaciones del esquema en este sentido habían sido avizoradas en Xie (1995), quien señalaba que se agregaban en grandes clases grupos heterogéneos.

paración entre países de diversas regiones del mundo, y al interior de América Latina, aunque existen algunas contadas excepciones (Solís y Boado, 2016; Muñiz Terra, Pla y Riveiro, 2019).

La difusión que ha adquirido el esquema EGP se sustenta en la posibilidad de utilizar, dentro del campo de los estudios de estructura y clase social, un mismo esquema de forma regular; lo que facilita su interpretación en diferentes contextos. Cabe señalar que diversos autores han indicado las dificultades de este esquema para capturar las particularidades de la estructura social de la región (Solís, Chávez Molina y Cobos, 2020). Varios estudios locales han encarado minuciosos exámenes de validez (Pla, Poy y Salvia, 2021), al examinarlo con relación a la informalidad y la precariedad laboral desde la perspectiva de la heterogeneidad estructural, así como a partir de una adecuación de los supuestos teóricos de los que parte el esquema a las características propias de la realidad argentina (Gómez Rojas y Riveiro, 2018).

Se trabaja en este capítulo con dos fuentes de datos. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada por el Indec, y la Encuesta de la Deuda Social Argentina. La triangulación de fuentes aporta no solo evidencia empírica novedosa en el campo de la estratificación social, sino también la posibilidad de observar indicadores que no se encuentran disponibles en la EPH.

Se analiza la composición y morfología con relación a variables demográficas. Luego observaremos la evolución de las variables de la estabilidad, la seguridad y la perspectiva, acorde a la línea propuesta por Goldthorpe y McKnight (2006). En cuanto a la seguridad, se centran en la permanencia en el empleo y en el riesgo de estar desempleado y del desempleo a largo plazo. Con respecto a la estabilidad, analizan las fuentes de fluctuaciones a corto plazo en los ingresos recibidos, con foco en la composición del ingreso (sueldo fijo versus horas extras, pago por resultados u horarios nocturnos, etc.) más que en el monto. Por último, en relación con las perspectivas, describen la relación desigual entre ingresos y edad para los diferentes estratos de clase, y dan cuenta de las curvas desiguales que se trazan para cada uno de ellos.

En este sentido, el esquema aquí utilizado, de raíz neoweberiana, se nutre de las posiciones y las relaciones de empleo para su construcción, que se validan y/o contrastan a partir de los indicadores de seguridad, estabilidad y perspectivas.

Sobre la base de estas coordenadas y la información disponible en la fuente de datos, se construyeron los indicadores a partir de estas indicaciones operativas:

- *Seguridad*: considera segura aquella ocupación que tiene aportes jubilatorios y no tiene término de finalización.
- *Estabilidad*: se considera que cuentan con trabajo estable aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen una antigüedad en el empleo mayor de cinco años, y cuyas propinas y comisiones no superan el 25% de los ingresos de la ocupación principal.
- *Perspectivas*: considera la brecha de ingresos en la ocupación principal, en un mismo estrato o posición de clase, entre aquellos de 40 a 55 años sobre los que tienen 20 a 35 años.

A continuación, se utilizan indicadores objetivos (horas trabajadas mensualmente) y subjetivos (deseo de trabajar más horas), así como situación de estabilidad laboral al comienzo de la pandemia, en pos de aportar evidencia más flexible para medir las transformaciones de las clases sociales en un período corto de tiempo. Esta información se complementa con el análisis de los ingresos laborales por clase social y su variación para el período 2019-2020.

RESULTADOS

SOBRE LAS TRANSFORMACIONES EN LA MORFOLOGÍA Y LA COMPOSICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CLASES

En primer lugar, analizamos la evolución de la estructura de clases durante el período 2019-2021, según las variaciones en el peso de las diferentes fracciones al interior de cada gran clase social y en la estructura en general. Lo primero que se pone en evidencia es el fuerte peso de la clase trabajadora (alrededor de cuatro de cada diez personas activas), en el total de la estructura social, y dentro de esta, la fuerte incidencia de la fracción trabajadora no calificada, que representa alrededor de la mitad de la gran clase.

Cuadro 7.1. Morfología de las clases sociales y sus estratos (Argentina, 2019-2021)

	IV-2019		I-2020		II-2020		III-2020		IV-2020		I-2021	
CS	3 169 150	25,0	2 963 023	23,3	2 674 556	25,7	2 706 100	23,7	2 885 470	23,6	3 145 386	25,1
I	1 201 698	9,5	1 120 206	8,8	849 424	8,2	938 242	8,2	1 030 678	8,4	1 204 551	9,6
II	1 967 452	15,5	1 842 817	14,5	1 825 132	17,5	1 767 858	15,5	1 854 792	15,2	1 940 835	15,5
CI	4 185 402	33,0	4 166 811	32,8	3 400 728	32,6	4 069 575	35,6	4 245 074	34,7	4 433 630	35,4
IIIa+V	1 666 099	13,1	1 723 719	13,6	1 585 868	15,2	1 549 010	13,6	1 569 778	12,8	1 843 533	14,7
IVa	360 550	2,8	301 529	2,4	171 581	1,6	232 100	2,0	217 504	1,8	301 169	2,4
IVbc	2 158 753	17,0	2 141 563	16,9	1 643 279	15,8	2 288 465	20,0	2 457 792	20,1	2 288 928	18,3
CT	5 317 435	42,0	5 576 178	43,9	4 341 263	41,7	4 641 839	40,7	5 102 111	41,7	4 957 886	39,5
VI	895 849	7,1	953 627	7,5	753 544	7,2	787 595	6,9	745 080	6,1	887 247	7,1
IIIb	1 658 701	13,1	1 687 029	13,3	1 338 054	12,8	1 529 088	13,4	1 676 023	13,7	1 582 770	12,6
VIIab	2 762 885	21,8	2 935 522	23,1	2 249 665	21,6	2 325 156	20,4	2 681 008	21,9	2 487 869	19,8
Total	12 671 987	100,0	12 706 012	100,0	10 416 547	100,0	11 417 514	100,0	12 232 655	100,0	12 536 902	100,0

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14. Base personas activas con ocupación previa.

Como síntesis general, la pandemia implicó la pérdida de un 20% de ocupaciones, que se fueron recuperando lentamente en los trimestres posteriores, sin alcanzar los niveles de 2019, período prepandémico. Esta primera observación nos ubica en el hecho inédito de una retracción en términos de la estructura de clases sociales, de relativa importancia, en un breve período de tiempo, como es el de un trimestre a otro. Este hecho se explica íntegramente por las medidas de aislamiento social tomadas para la prevención de los contagios.

Es durante el segundo trimestre de 2020 que se presenta un descenso en el peso relativo de las personas con ocupación cuenta propia del estrato IVbc, de quienes poseen pequeños establecimientos, así como de la clase trabajadora en general, y la no calificada en particular. En el caso de las posiciones no asalariadas, esto se relaciona con procesos de inactividad forzada frente al escenario pandémico y, en el caso de las ocupaciones no calificadas, con la dificultad para mantener la fuente de empleo.

De manera contraria, es posible evidenciar un incremento en el peso de la fracción más baja de la clase de servicios y de las personas asalariadas que componen las clases intermedias (IIIa y V). Ahora bien, este hecho se explica más por un cambio relativo ante la reducción de las fracciones de clase antes mencionada que por un incremento en términos absolutos en las fracciones analizadas. Se puede sintetizar entonces que no hubo incremento de la demanda de empleo en ningún sector.

Un primer dato es entonces la reducción de la estructura de clases en términos absolutos, y su lenta recuperación posterior, que implicó un rápido cambio en el peso que las fracciones de clase asumen en la totalidad de esa estructura. En este sentido, se hace pertinente poner la mirada en la composición de las clases y los perfiles de sus fracciones. Esta podrá dar cuenta de las desigualdades demográficas al interior de las clases, y su permanencia o variación a lo largo del contexto pandémico.

Cuadro 7.2. Clases sociales según características demográficas (Argentina, 2019-2021)

		CS	I	II	CI	IIIa+V	IVa	IVbc	CT	VI	IIIb	VIIab	Total
IV-2019	Mujer	52,0	47,8	54,6	44,0	50,8	31,8	40,7	40,7	54,1	7,7	56,1	44,6
	H. 24 años	5,8	3,0	7,6	8,8	10,7	1,8	8,5	19,1	21,8	13,4	21,6	12,4
	60 y más	10,8	16,3	7,4	13,8	7,9	23,5	16,8	7,3	5,5	7,8	7,6	10,3
I-2020	Mujer	52,2	46,9	55,5	43,9	48,3	24,0	43,2	41,7	53,5	8,6	56,9	44,9
	H. 24 años	5,5	2,7	7,2	10,2	11,6	3,9	9,9	18,5	24,6	9,5	21,7	12,8
	60 y más	11,6	16,7	8,4	13,1	7,3	27,7	15,7	7,5	5,0	7,6	8,2	10,3
II-2020	Mujer	54,1	46,8	57,5	41,7	46,2	32,7	38,3	39,7	55,2	7,7	53,6	44,0
	H. 24 años	5,5	1,0	7,7	9,5	11,0	1,8	8,8	13,7	17,9	6,8	16,4	10,2
	60 y más	10,3	15,2	8,1	9,3	6,9	18,4	10,6	4,4	2,8	5,1	4,6	7,5
III-2020	Mujer	53,9	46,4	57,8	42,4	48,8	26,8	39,6	40,1	52,9	8,5	56,6	44,2
	H. 24 años	4,3	1,3	6,0	8,9	8,7	2,1	9,7	15,4	17,7	10,3	18,0	10,5
	60 y más	8,7	13,3	6,3	11,5	8,2	25,3	12,3	5,6	5,9	6,3	5,0	8,4
IV-2020	Mujer	53,7	48,2	56,7	46,4	50,3	31,6	45,2	38,5	59,4	7,6	52,0	44,8
	H. 24 años	4,4	2,4	5,5	11,9	10,8	2,7	13,4	18,8	20,5	14,7	20,8	13,0
	60 y más	11,2	18,0	7,3	11,3	7,1	21,4	13,1	6,2	4,0	6,7	6,4	9,1
I-2021	Mujer	51,2	49,6	52,2	42,1	44,9	28,1	41,6	39,5	58,1	6,7	53,7	43,3
	H. 24 años	4,2	1,3	6,0	10,2	10,8	3,5	10,5	19,0	23,1	12,3	21,7	12,1
	60 y más	10,8	15,6	7,8	11,5	5,6	20,1	15,2	6,9	5,4	7,1	7,4	9,5

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14. Base personas activas con ocupación previa.

Siguiendo los datos del cuadro 7.2, la clase con mayor preponderancia femenina es la de servicios, con valores por encima de la media, mientras que en las clases intermedia y trabajadora se ubican entre 5 y 10 puntos por debajo de la mitad del total de cada clase. Ahora bien, en la clase de servicios esa mayor presencia femenina solo se da en la fracción más baja, mientras que en la más alta es a la inversa, hay una mayor preponderancia masculina.

Durante el período del ASPO, se observó una mayor presencia femenina en la clase de servicios que en los períodos anteriores, aunque leve, probablemente por la mayor flexibilidad de los empleos de esta clase para acceder a la modalidad de trabajo “en casa” o “*home office*”, como el caso de las trabajadoras de la educación de todos los niveles. Esta situación tendió a estabilizarse y volver a instancias anteriores en 2021.

Entre las clases intermedias las tendencias por fracciones son divergentes. En el estrato IIIa, entre empleados y empleadas no manuales rutinarios de nivel superior (empleos administrativos, etc.), en el período prepandemia la distribución por género era relativamente equitativa, pero durante los primeros meses de la pandemia descendió la participación femenina. Otras investigaciones (Pla, 2022) demuestran que en este estrato las mujeres tienen una mayor prevalencia de informalidad que los varones, por lo cual es esperable que las mujeres informales del estrato hayan sido las más afectadas, dado que los sectores formales estuvieron atendidos por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (Decretos 332/2020 y 376/2020).⁶⁷

En el caso de los estratos IVa y IVb, que se corresponden con posiciones no asalariadas, ya sean propietarias o cuenta propia, las mujeres tienen una participación menor que los hombres (sobre todo en el estrato correspondiente a propietarios). En el caso del estrato cuenta propia la participación no solo es menor, sino que disminuye durante los primeros seis meses de pandemia y recién hacia fines de 2020 tiende a estabilizarse.

Diversas investigaciones, tanto a nivel nacional (Dalle, 2021; Pla, Poy y Salvia, 2022; Maceira, 2021) como regional (Triano Enriquez, 2021), han puesto en evidencia el fuerte impacto que ha tenido la pandemia sobre las ocupaciones cuenta propia del sector informal, mayoritariamente femenino, a partir de las medidas de aislamiento y prohibición de la circulación que hicieron que estos trabajadores y trabajadoras no pudieran desplegar sus habituales estrategias de subsistencia. La disminución entre el primer trimestre de 2020 y el segundo, de 5 puntos porcentuales en la participación femenina en este estrato, pone en evidencia que el impacto fue mayor entre las mujeres.

Por último, en la clase trabajadora la incidencia de las mujeres es mayor en la fracción VI (trabajadores y trabajadoras manuales calificados) y

67 Como se señala en la introducción de este libro, por medio de este programa el Estado se hizo cargo de hasta el 50% del salario neto de las personas trabajadoras, por un monto de hasta dos salarios mínimos.

VIIa (trabajadores y trabajadoras manuales no calificados), mientras que en la fracción IIIb (empleados no manuales rutinarios de nivel inferior) es muy baja, inferior al 10%. En este caso, la participación de las mujeres durante la pandemia fue mucho más estable que en otras clases, aunque en el segundo trimestre de 2020 se observa una leve disminución.

De manera general la distribución por edad muestra que la clase de servicios y las clases intermedias son las de mayor preponderancia de población adulta y adulta mayor. La excepción la configuran los estratos no asalariados de las clases intermedias, con una distribución más parecida a la clase trabajadora: mayor peso de las franjas etarias más bajas y menor de la población adulta mayor. Las tendencias se profundizaron durante la pandemia de manera regresiva: en la clase de servicios la fracción más alta perdió mucha población joven, probablemente la menos estable, como analizaremos más adelante, mientras que en la clase trabajadora la más afectada fue la población de edad adulta mayor.

Hasta aquí hemos dado cuenta de las transformaciones que se observan en la estructura de clases de la población activa, durante el período corto 2019-2021, atravesado por la pandemia de covid-19. Los principales cambios se dan por retracción de la demanda en algunas fracciones, y, como consecuencia, incremento del peso de otras fracciones, aunque en ningún caso por incremento absoluto de alguna de ellas. En términos demográficos, los grupos al interior de las fracciones de clase fueron desigualmente afectados: en general los jóvenes de las clases mejor posicionadas en la estructura social y la población adulta de la clase trabajadora fueron las personas más afectadas ante las medidas de aislamiento y prohibición de la circulación.

SOBRE LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS CLASES DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

En este apartado, analizamos las dinámicas de la estructura de clases durante el período pandémico sobre la base de tres indicadores de las relaciones de empleo: la seguridad, la estabilidad y las perspectivas.

Cuadro 7.3. Clases sociales y condiciones laborales
(Argentina, 2019-2021)

		CS	I	II	CI	IIIa-V	IVa	IVbc	CT	VI	IIIb	VIHb	Total
IV-2019	Desocupados/as	2,7	2,4	2,9	4,7	2,7	1,3	7,2	9,0	8,7	6,6	10,4	6,1
	Seguridad	80,6	80,2	80,9	80,9	80,9	-	-	40,2	52,6	53,4	27,2	58,7
	Estabilidad	33,1	32,1	33,8	38,7	34,7	18,1	45,8	54,2	54,4	43,7	61,3	43,0
	Perspectivas	1,61	1,67	1,50	1,26	1,30	1,26	1,44	1,32	1,51	1,29	1,20	1,71
	Trabajo domicilio	6,5	7,8	5,6	10,8	0,6	4,3	20,2	1,1	1,2	1,4	0,8	5,7
I-2020	Desocupados/as	3,4	2,4	3,9	5,6	2,8	3,1	8,8	10,2	9,9	7,4	11,8	7,2
	Seguridad	79,2	77,1	80,2	81,1	81,1	-	-	41,9	51,7	55,9	29,8	58,7
	Estabilidad	30,6	26,0	33,6	38,4	34,0	21,9	45,0	53,7	52,8	46,3	58,9	42,5
	Perspectivas	1,50	1,50	1,43	1,32	1,38	1,65	1,47	1,31	1,52	1,33	1,19	1,70
	Trabajo domicilio	6,6	8,8	5,2	11,5	0,7	9,0	21,3	1,2	1,2	2,1	0,7	5,9
II-2020	Desocupados/as	4,5	3,4	4,9	7,5	3,3	0,5	12,4	15,4	13,3	12,0	17,9	10,0
	Seguridad	85,0	80,7	86,5	86,9	86,9	-	-	52,8	56,3	68,7	40,6	69,7
	Estabilidad	30,3	26,5	32,3	41,6	30,4	29,0	55,4	51,7	55,8	40,9	58,0	42,2
	Perspectivas	1,47	1,49	1,31	1,48	1,65	1,47	1,26	1,41	1,54	1,51	1,16	1,83
	Trabajo domicilio	44,3	42,3	45,3	22,6	21,5	11,7	25,1	4,8	20,7	1,2	1,4	21,7
III-2020	Desocupados/as	3,6	3,5	3,7	6,0	3,6	2,1	8,6	10,6	9,7	7,9	12,5	7,3
	Seguridad	85,9	82,2	87,3	84,6	84,6	-	-	47,7	59,2	59,5	34,2	65,8
	Estabilidad	29,6	29,6	29,5	43,6	31,5	24,5	54,9	55,1	50,9	47,3	62,5	44,1
	Perspectivas	1,47	1,46	1,41	1,15	1,26	1,71	1,19	1,28	1,59	1,26	1,25	1,70
	Trabajo domicilio	44,3	35,2	49,1	24,1	21,0	13,8	27,5	4,3	16,7	2,4	1,2	21,6
IV-2020	Desocupados/as	3,1	2,5	3,4	5,2	3,0	0,0	7,5	10,0	9,3	6,3	12,3	6,7
	Seguridad	83,7	78,4	85,9	83,9	83,9	-	-	41,9	55,0	54,5	29,2	61,3
	Estabilidad	31,9	31,0	32,4	47,4	38,4	20,1	56,7	54,6	56,1	42,4	63,0	45,9
	Perspectivas	1,54	1,67	1,47	1,27	1,25	1,55	1,32	1,23	1,30	1,19	1,29	1,88
	Trabajo domicilio	39,6	36,8	41,1	23,5	19,0	5,4	28,3	4,6	13,6	5,2	1,8	20,1
I-2021	Desocupados/as	3,3	2,8	3,5	5,3	3,3	0,0	7,7	9,6	11,6	6,1	11,0	6,7
	Seguridad	82,4	82,2	82,5	82,1	82,1	-	-	42,2	53,0	55,3	28,6	62,0
	Estabilidad	32,1	31,5	32,5	43,5	33,3	26,9	54,5	54,1	58,8	44,1	59,8	44,0
	Perspectivas	1,53	1,63	1,38	1,28	1,24	2,04	1,43	1,69	1,59	1,73	1,51	1,88
	Trabajo domicilio	30,7	33,0	29,2	20,8	15,5	10,9	26,6	4,0	13,0	2,9	1,6	17,0

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.
Base: personas ocupadas.

Como ya señalamos, usamos dos indicadores para medir la seguridad: la proporción de desocupados dentro de la clase, por un lado, y una conjunción entre la antigüedad del empleo y el no tener un empleo a término. Con relación al desempleo se suele encontrar una fuerte división manual/no manual (partiendo a la clase intermedia). En el análisis de la Argentina

en período pandémico observamos, como tendencia general, una muy baja prevalencia del desempleo en la clase de servicios, que aumenta casi al doble en las clases intermedias y al triple en la clase trabajadora. Sin embargo, el sector no asalariado dentro de la clase intermedia tiene una incidencia de la desocupación similar a la de la clase trabajadora, mientras que la fracción IIIb de la clase trabajadora tiene un comportamiento un poco más similar al de la clase intermedia que al de su propia clase. La pandemia tiene un efecto esperado de incremento de la desocupación mayor en la clase trabajadora y en particular entre los trabajadores y trabajadoras sin calificación (fracción VIIab). También es fuerte el impacto de la pandemia en esta tasa en el sector cuenta propia de las clases intermedias y, en menor medida, en el sector más bajo de la clase de servicios.

Con relación a la seguridad, medida por la presencia de aportes jubilatorios y no tener una ocupación a término, la estructura se dicotomiza: es muy similar en la clase de servicios y en las intermedias (81%) y muy diferente en la clase trabajadora (40%, la mitad que en las otras clases). Una mirada rápida al segundo trimestre de 2020, correspondiente con el comienzo de la pandemia y el período de mayores restricciones a la movilidad y la circulación, podría hacernos pensar que esta tuvo un efecto “positivo” sobre las condiciones de empleo, pues en todos los casos la incidencia de la seguridad laboral se incrementa en todas las clases sociales, fenómeno que persiste durante el año 2020 y recién en el primer trimestre de 2021 los valores tienden a asentarse en los que se observaban antes de la pandemia. Sin embargo, una mirada más atenta nos permite dar cuenta de que el fenómeno que está alumbrando es otro: pérdida de puestos de trabajo sin seguridad en el empleo, es decir, de condiciones precarias y/o informales, como mencionamos más arriba.

El indicador de estabilidad tiene un comportamiento diverso. Recordemos que se considera trabajo estable aquel que tiene una antigüedad en el empleo mayor a cinco años y en el que las propinas y comisiones no superan el 25% de los ingresos de la ocupación principal. Es un indicador muy exigente, atento a las condiciones de la estructura productiva argentina y regional. Al igual que el análisis de la seguridad, la clase de servicios es la que presenta las mayores tasas de estabilidad, y particularmente el estrato I dentro de la clase (se distancia del estrato II alrededor de 5 puntos porcentuales todo el período).

Las clases intermedias, como promedio general, presentan tasas de estabilidad similares a la de la clase de servicios, pero alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo, mientras que la clase trabajadora se ubica mucho más abajo, con una incidencia de este indicador dentro de la cla-

se que no alcanza a la mitad de los trabajadores y las trabajadoras de esta clase. Ahora bien, estas dos últimas clases son muy heterogéneas en su interior, en el caso de las clases intermedias con una prevalencia mucho mayor entre las clases asalariadas y los y las propietarios/as y muy por debajo, casi 20 puntos porcentuales de distancia, el estrato cuenta propia.

En la clase trabajadora, la fracción IIIb tiene un comportamiento más parecido al de las clases intermedias, y la fracción trabajadora calificada una posición más ventajosa con relación a los trabajadores y las trabajadoras en puestos no calificados. Asimismo, en las posiciones no asalariadas este indicador de estabilidad disminuyó fuertemente durante los primeros meses de pandemia, mientras que en el resto de las clases no fue tan significativo el movimiento, incluso en los estratos más bajos de la estructura social.

Por último, el indicador de perspectivas busca analizar la desigual asociación entre ingresos y edad para los diferentes estratos de clase, dando cuenta de las trayectorias laborales desiguales de cada estrato. En el caso analizado los resultados no muestran grandes diferencias por clase social, en particular entre la clase de servicios y las clases intermedias, mientras entre la clase trabajadora el indicador cercano a 1 muestra que no hay divergencias entre ciclo vital e ingresos al interior de la clase, lo que pone en evidencia un amesetamiento de los ingresos a lo largo de todos los ciclos vitales y, en consecuencia, carencia de perspectiva. Se observa un leve estancamiento a partir de la pandemia, pero sin ser demasiado marcado, y con mayor fuerza en los estratos de la clase trabajadora.

Un indicador final indaga sobre la proporción de personas que realizan su trabajo en el domicilio, de escasa exploración previa dentro de los estudios de mercado de trabajo, pero de gran relevancia durante la pandemia. Solo la fracción no asalariada, IVbc, presentaba una incidencia relevante de este indicador en el período prepandémico (alrededor del 20%), y alguna incidencia la fracción IVa y I, aunque por debajo del 10%. A partir de marzo de 2020 esto se incrementa fuertemente entre ambas fracciones de la clase de servicios (en promedio pasa del 6,6% al 44,3%), se duplica en las clases intermedias (11,5% a 22,6%) y se triplica en la clase trabajadora, que partiendo de un valor tan bajo como 1,2% pasa a un 4,8%, explicado sobre todo por el comportamiento de la fracción VI, mientras que los trabajadores y las trabajadoras manuales presentan indicadores muy estancos. En la clase intermedia el mayor movimiento fue de la fracción IIIa+V, ya que los otros sectores de la clase se mantuvieron sin variaciones.

Esto pone en evidencia que quienes pudieron mantener sus condiciones de empleo y pasaron a una modalidad “en casa” o *home office* fueron aquellos que tenían ocupaciones profesionales o técnicas, con cierta estabilidad

y seguridad laboral y en los que, además, la naturaleza no manual de sus ocupaciones permitió el cambio de modalidad laboral. En los sectores que ya lo desempeñaban, particularmente IVbc, la incidencia aumentó, pero con lo visto antes esto se explica más por la destrucción de puestos dentro de este estrato que por el pasaje a una modalidad virtual. Para las clases trabajadoras en cambio quedó el incremento del desempleo y la inactividad.

SOBRE LAS OPORTUNIDADES DE VIDA DE LAS CLASES

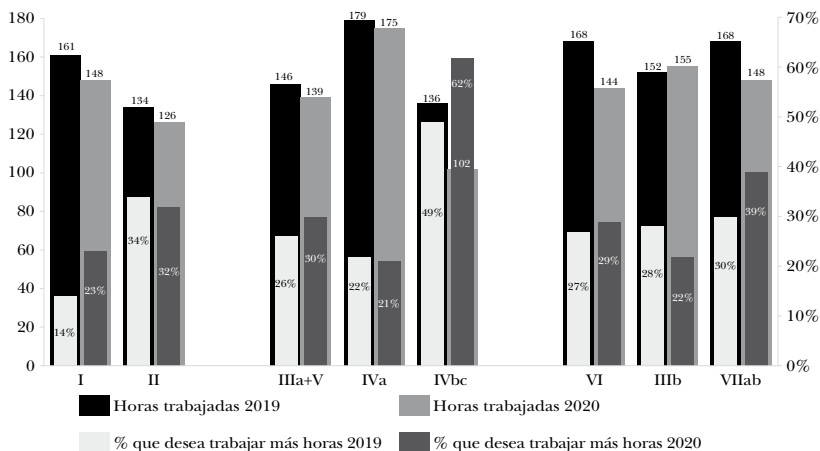
La Encuesta de la Deuda Social Argentina, años 2019 y 2020, permite un análisis de las clases y sus fracciones, al poner en relación indicadores objetivos (horas trabajadas) con indicadores subjetivos (deseo de trabajar más horas), así como un indicador sobre la continuidad laboral, no ya en un período de largo alcance, como el de estabilidad observado anteriormente, sino en concreto durante las primeras etapas de la pandemia en 2020. En este apartado complementamos la información desarrollada en el anterior con el análisis de dichos indicadores, así como de los resultados obtenidos por las personas ocupadas en términos de los ingresos laborales.

Todas las fracciones de clase trabajaron menos horas durante el período 2020 que en el mismo período del año anterior, con excepción de la fracción pequeña propietaria, que presenta una media similar.

Los y las cuentapropistas (Ivb) redujeron las horas trabajadas un 25%, y son a su vez quienes más declaran en el año pandémico el deseo de trabajar más horas: lo hacen 6 de cada 10 personas ocupadas en esta clase.

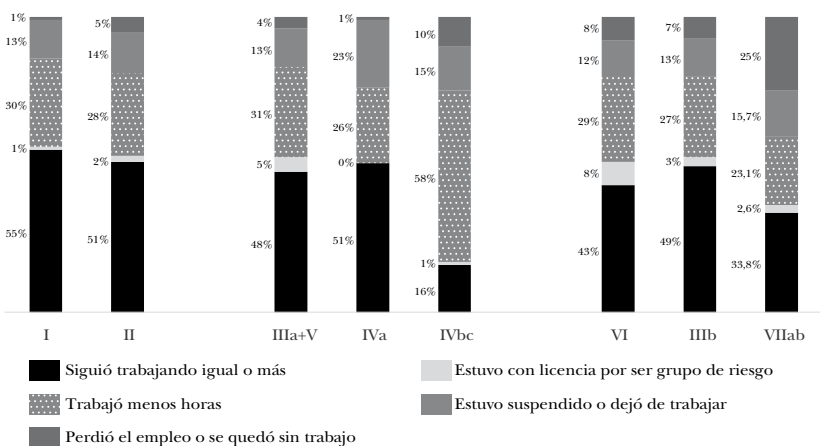
En líneas generales podemos distinguir tres grupos. Un primer grupo es aquel que mantuvo relativamente estable la cantidad de horas trabajadas entre el período 2019-2020, y que no incrementa de manera considerable el deseo de trabajar más horas; se trata de las fracciones asalariadas de las clases intermedias, la ya mencionada clase propietaria de pequeños establecimientos. Son fracciones de clase que, como vimos, o bien pudieron mantener su posición ocupacional por medio de la modalidad *home office* o por ser ocupaciones esenciales. Un segundo grupo podría ser el que integra la clase trabajadora calificada (VI y IIIb), que disminuyó un 15% el porcentaje de horas trabajadas, pero en el cual la proporción de personas que desean trabajar más horas se mantiene relativamente estable. En el caso de las personas clasificadas dentro de la clase trabajadora no calificada, la disminución en las horas trabajadas es similar a la de quienes están en la fracción calificada de la misma clase, pero en este caso el incremento del deseo de trabajar más horas es mucho más alto (9 puntos porcentuales para el período 2019-2020).

Gráfico 7.1. Horas mensuales trabajadas y deseo de trabajar más horas por clase social (Argentina, 2019-2020)



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Gráfico 7.2. Continuidad laboral durante el período de cuarentena (Argentina, 2020)



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

El gráfico 7.2 resume la información del gráfico anterior para 2020, y al hacerlo permite medir el impacto de la pandemia en términos de la continuidad laboral al interior de cada clase.

En este caso se hace visible que la clase de servicios, la fracción asalariada y la pequeña propietaria de las clases intermedias y la fracción de personas dedicadas a los servicios o comercio en la clase trabajadora (IIIb) mantuvieron la cantidad de horas trabajadas (o la incrementaron) durante los primeros meses de la pandemia: en el caso de la clase de servicios y las intermedias que realizan modalidad de trabajo en casa, y en el caso de la fracción IIIb, por pertenencia a una de las ramas consideradas esenciales (comercio). En esta última fracción, sin embargo, alrededor de 1 de cada 10 perdió el empleo, lo que no se observa en las otras dos con las cuales comparte grupo.

Las fracciones calificada y no calificada manual de la clase trabajadora presentan comportamientos similares: la proporción que pudo mantener el empleo o incrementar las horas trabajadas se ubica entre el 30 y el 40%, más bajo entre quienes tienen ocupaciones no calificadas. Es entre estas últimas personas asalariadas que se observa la proporción mayor de quien tuvo que dejar de trabajar o perdió el empleo: un cuarto del total de la población.

La fracción cuenta propia (IVb) de las clases intermedias presenta, como es esperable con lo analizado hasta el momento, la peor situación en términos de continuidad laboral durante la pandemia: solo 16% mantuvo su trabajo con la misma cantidad de horas que en el período anterior, y 6 de cada 10 personas de la clase debieron trabajar menos horas.

Un rasgo compartido es que alrededor de un 15% de la población en cada una de las fracciones de clase fue suspendido temporariamente.

Para finalizar, cabe preguntarse sobre el impacto que estos movimientos en relación con las clases y las condiciones laborales han tenido en el ordenamiento de los ingresos.

Hasta el momento la clase de servicios en su conjunto, y en particular la fracción más alta, presentaba los indicadores laborales más favorables dentro del período analizado en términos de estabilidad, seguridad y perspectivas. Por el contrario, al observar la media de ingresos laborales al interior de cada una de las fracciones de clase, se advierte que la fracción I presentó la caída más fuerte en sus ingresos. A pesar de esta situación, mantuvo la brecha de ingresos laborales más alta dentro de la estructura social.

Cuadro 7.4. Clases sociales e ingresos laborales^(*) (2019-2020)

Clase	2019		2020		Variación anual
	Media	Brecha	Media	Brecha	
CS					
I	73 093	2,2	59 082	1,9	-24%
II	42 312	1,3	42 827	1,4	1%
CI					
IIIa+V	36 595	1,1	38 421	1,2	5%
IVa	62 295	1,9	69 165	2,2	10%
IVbc	23 076	0,7	20 199	0,6	-14%
CT					
VI	34 196	1,0	29 820	1,0	-15%
IIIb	29 766	0,9	26 867	0,9	-11%
VIIab	28 982	0,9	26 212	0,8	-11%

(*) Valores estandarizados en pesos argentinos 2020.

Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

En general todas las fracciones de clase tendieron a disminuir sus ingresos durante el período 2019-2020, pero en proporción similar, con la excepción de la clase pequeña propietaria. De esta forma, las brechas entre clases y fracciones se mantuvieron, y tendió a suavizarse aquella entre la clase de servicios alta y el resto. Por el contrario, partiendo de situaciones más desventajosas, las fracciones cuenta propia y trabajadora no calificada (por debajo de la media de ingresos laborales total) pierden aún más participación en el período.

De manera sintética, entonces, hemos podido observar mutaciones en la estructura de clases sociales, en relación con la composición y la morfología y las condiciones laborales, pero también en términos distributivos, en tanto tuvieron efectos sobre los ingresos laborales.

CONCLUSIONES

Observar la estructura de clases es un proceso que debe hacerse en el largo plazo: como lo indica el propio concepto, estructura es lo que da forma, lo que permanece. Sin embargo, la pandemia impuso, como dijimos, un escenario inédito, en el que se alteraron las dinámicas “conocidas” que dan lugar a esa estructura de clases inherentemente desigual. Cabría esperar entonces que se hayan producido, sino transformaciones radicales, al menos dinámicas observables en el corto plazo en la composición y la morfología de las clases sociales, así como en las estrategias de

reproducción social y/o supervivencia que se dan las personas de diversas clases sociales para hacer frente a la situación social.

La evidencia hallada en este capítulo permite sostener que la clase tiene un poder explicativo en las oportunidades de vida de las personas activas. En términos sintéticos logramos identificar que la pandemia tuvo efecto sobre la estructura de clases en tanto y en cuanto provocó inactividad forzada entre las fracciones no asalariadas y entre trabajadores y trabajadoras no calificados, lo que produjo una reducción en el peso de estas fracciones al interior de la estructura social.

Las fracciones con mayor presencia femenina durante la pandemia fueron la más baja dentro de la clase de servicios y las fracciones asalariadas de la clase intermedia. En estas disminuyó la presencia femenina, lo que deja en evidencia que las mujeres cuentan con posiciones laborales más frágiles ante las coyunturas.

Del mismo modo, las personas jóvenes dentro la clase de servicios evidenciaron una fragilidad ante el contexto de incertidumbre pandémica, al perder posiciones y peso relativo dentro de la clase. Se observa, de manera complementaria, un incremento de la desocupación, que fue mayor entre la clase trabajadora, en el sector cuenta propia de las clases intermedias y, aunque en menor medida, en el sector más bajo de la clase de servicios.

Asimismo, se redujo la estabilidad laboral y las perspectivas de casi todas las fracciones de clase social, pero en particular del sector cuenta propia de la clase intermedia y del no calificado de la clase trabajadora.

Las condiciones laborales precarias e informales se profundizaron durante la pandemia, y dejaron a los trabajadores antes desprotegidos aún más desprotegidos. Quienes pudieron mantener sus condiciones de empleo pasando a una modalidad “en casa” o *home office* fueron aquellos que tenían ocupaciones profesionales o técnicas, con cierta estabilidad y seguridad laboral y en los que, además, la naturaleza no manual de sus ocupaciones permitió el cambio de modalidad laboral. Para las clases trabajadoras, en cambio, el principal mecanismo de afectación durante la pandemia fue el incremento del desempleo y la inactividad.

Hemos podido observar que la capacidad explicativa de la clase se mantiene, en tanto que, asociada a otras variables de análisis, permite trazar un mapa de la forma en la cual diversos grupos sociales se van conformando y armando una trama de activos y oportunidades o tejiendo una red de desigualdades. De esas interacciones, la de posición no asalariada y la precariedad laboral evidencian la existencia de un sector de la población, y los hogares que lo componen, que vive en la incerti-

dumbre de la reproducción cotidiana de su vida personal y familiar, y que un fenómeno como la pandemia y las medidas sociales que obligó a tomar deja al descubierto. En el otro extremo, si bien las personas y los hogares definidos como clase de servicios, y en especial el estrato I, son afectados de manera global por las tendencias macro, en relación con los indicadores analizados pudieron mantener su posición y las oportunidades asociadas a esta.

Queda en evidencia que las desigualdades sociales que la pandemia expuso no son propias de las medidas excepcionales que se tomaron para evitar la propagación del virus y que tuvieron fuerte impacto en las dinámicas económicas, sino que se insertan en las particularidades de nuestro continente, la dualidad de su estructura productiva y la escasa capacidad de los gobiernos para atender la cuestión social. Esperemos que estos resultados arrojen alguna luz para bregar por sociedades más justas.

8. El trabajo doméstico de varones y mujeres

Gabriela Gómez Rojas, Danila Borro, Sofía Jasín, Manuel Riveiro

La pandemia de covid-19 llevó al centro de la escena pública a los hogares y los cuidados. Las diferentes medidas de aislamiento y restricción de la circulación, el teletrabajo, el cierre de las instituciones educativas, espacios de socialización y de cuidados, y el creciente número de personas que contrajeron el coronavirus generaron un aumento en la demanda de trabajo de cuidados a nivel global (Kabeer, Razavi y Rodgers, 2021). Estudios previos a la pandemia (Rodríguez Enríquez, 2019) señalan que en el ámbito urbano de la Argentina un 87% de las mujeres participa en quehaceres domésticos, mientras que solo lo hace un 51% de los varones. Pero además ellas dedican un 88% más de tiempo a las tareas domésticas, de cuidado y apoyo escolar que ellos. El incremento de la carga global de tareas domésticas y de cuidado dentro de los hogares que supuso la pandemia no parece haberse distribuido equitativamente, sino que, una vez más, la mayor responsabilidad recayó sobre las espaldas de las mujeres. En la Argentina, durante la pandemia, la mitad de ellas percibió una recarga en las tareas de cuidados (Unicef, 2020), y más de la mitad (61%) declaró que no le fue posible conciliar sus responsabilidades de trabajo remunerado y no remunerado. Esta imposibilidad se dio sobre todo entre quienes adoptaron la modalidad de teletrabajo (Maceira y otros, 2020). A su vez, Robles, Macrini y Robledo (2021) encuentran que cerca de la mitad de los varones (42%) asegura que no modificó su participación en las tareas domésticas, mientras que una gran mayoría de las mujeres (82%) considera que aumentó la cantidad de trabajo doméstico y de cuidados a raíz de las medidas de ASPO, y aprecian además que son ellas quienes reciben la mayor carga entre las personas corresponsables de dichas tareas dentro del hogar (Bidaseca y otros, 2020).

En este capítulo caracterizamos las pautas de participación de cada género en las labores domésticas, antes y durante la pandemia de covid-19. Las preguntas que orientaron nuestra indagación son: ¿de qué manera se distribuían las tareas domésticas entre los géneros antes de la pande-

mia? ¿Qué cambios se observan, o no, al comparar esa situación con los momentos de mayor aislamiento, a mitad de 2020, y al disminuir estas restricciones a comienzos de 2021? ¿Cómo se conjuga esa distribución con otros factores estructurales? ¿Cómo impacta la externalización de las tareas y la demanda de cuidado de cada hogar? ¿Qué pasa con el repliegue a los hogares con el teletrabajo? Por último, ¿qué factores se vinculan con el abandono de la pauta tradicional de la división del trabajo doméstico en las parejas heterosexuales? Este capítulo tiene como hipótesis central que, a pesar del confinamiento en los hogares, no se produjeron variaciones sustanciales en el reparto de tareas domésticas entre varones y mujeres, ya que este reparto responde a patrones históricos de inequidad plasmados en las relaciones de géneros.

La pandemia reactualizó el debate sobre la organización social del trabajo doméstico y de cuidados (Esquivel, 2011; Batthyány, 2020a). En sus inicios, los estudios feministas indagaron en los procesos de trabajo doméstico –entendido como el conjunto de tareas de cocina, limpieza, compras y arreglo del hogar para su sostenimiento cotidiano y en el tiempo–, en estrecho diálogo con las categorías marxistas. Luego fueron incorporados los trabajos de cuidado –entendidos, centralmente, como la atención de dependientes, niños/as, personas mayores, con discapacidad, etc.– como categoría autónoma, aunque en tensión con el trabajo doméstico.⁶⁸ Son las relaciones de género⁶⁹ el articulador central de la organización social del trabajo doméstico y de cuidados, a la vez que el modelo tradicional de división sexual del trabajo contribuye a feminizar la principal unidad laboral doméstica –el hogar familiar– y a masculinizar el espacio y el trabajo extradoméstico, y, al mismo tiempo, reproducir los valores asociados típicamente a cada género.⁷⁰

68 Seguimos a Razavi (2007) en su consideración de la productividad analítica de no escindir el trabajo doméstico y de cuidados, aunque manteniendo la especificidad de ambos trabajos. En ese sentido, este capítulo estará concentrado en el trabajo doméstico.

69 Entendidas como la estructura social, jerárquica, históricamente situada y contingente que organiza los afectos y la sexualidad de todos, todes y todas nosotras (Mattio, 2012).

70 El lugar central del hogar familiar en el trabajo doméstico no debe opacar el hecho de que, tal como lo señalan las teóricas del cuidado y de la reproducción social, buena parte del trabajo doméstico y de cuidados se da de forma extradoméstica, en términos de mercantilización, externalización y provisión pública y social de bienes y servicios consumidos con fines repro-

La capacidad de este modelo tradicional para dar cuenta de las tendencias actuales es discutida a partir del incremento de la participación laboral femenina, tanto de aquellas mujeres de clase media –con el sostenido aumento en su participación en los estudios superiores– como de las de clase trabajadora –a quienes las crisis económicas y el desmantelamiento de las políticas sociales de bienestar recargan de trabajo doméstico y extradoméstico– (Treas y Drobnič, 2010; Arriagada y Sojo, 2012; Águila y Kennedy, 2016). El modelo tradicional comienza a competir con el modelo de “dos proveedores”, aunque estos cambios en el trabajo extradoméstico de las mujeres no estuvieron acompañados por una democratización en la división de las tareas domésticas y de cuidados (Wainerman, 2003).

La importancia de articular ejes de desigualdad ha sido señalada por los estudios interseccionales, los cuales destacan que la experiencia de la desigualdad debe ser abarcada desde la combinación de diferentes ejes y niveles de análisis (Viveros Vigoya, 2016), lo que constituye una crítica pertinente al feminismo liberal y al análisis de clases –androcéntrico y anclado en el Norte Global–. Diversos estudios (Gómez Rojas, 2009; Gómez Rojas y Borro, 2019; Riveiro, 2020) observan que la clase social condiciona los comportamientos de ambos géneros en la participación en las tareas domésticas y de cuidado. La clase de servicios presenta las mayores diferencias con las otras clases: reparto menos desigual en parejas heterosexuales, menor carga para las mujeres y mayor externalización. Otros estudios dan cuenta de la incidencia de otros factores como el número y la edad de las/os menores, la condición de actividad, el lugar de residencia, el tipo de hogar, la edad, el nivel educativo (véase Batthyány, 2020b, entre otros).

La fuente de datos utilizada en este capítulo es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Se comparan los cambios ocurridos –o no– entre el semestre intermedio de 2018, el semestre intermedio de 2020 y el primer trimestre de 2021. La unidad geográfica seleccionada es el total de aglomerados urbanos de la Argentina relevados, mientras que se trabaja con un recorte etario de 14 a 65 años –habitual por tratarse de población económicamente activa–, y dos sujetos de estudio: personas y parejas heterosexuales. Para medir la participación en el trabajo doméstico utilizamos el bloque de preguntas del cuestionario hogar, que mide

ductivos, tanto en los hogares como fuera de ellos (Razavi, 2007; Arruzza y Bhattacharya, 2020).

desde 2003 la participación en las tareas del hogar de sus miembros y otros ajenos –remunerados o no–. En este caso, trabajamos con tres categorías: no participa, realiza y ayuda.⁷¹ En cuanto a la clase social, se opta por el esquema de Goldthorpe (2010), detallado en la introducción del libro. Se trata de una clasificación relacional de las posiciones en el mercado de trabajo, aunque, en su forma más reducida (clases de servicios, intermedia y trabajadora), implica además un ordenamiento jerárquico.

Con respecto a la demanda de cuidado, se toma la Escala de Madrid (Durán Heras, 2012): se imputa una unidad de cuidado a cada persona del hogar dependiendo de su edad, y se aumenta su valor a medida que se van alcanzando las edades extremas.⁷² Si bien esta escala permite cuantificar y resumir en un único valor la demanda de cuidado de los hogares, su transformación en una variable categórica resulta dificultosa, y además no considera a las personas con discapacidad. Asimismo, suele pesar más la cantidad de integrantes de un hogar –en términos relativos– que la estructura de sus edades, lo que de todas formas es coherente con una visión del cuidado no reducida a la dependencia.

71 Se clasifica a los y las integrantes del hogar en dos preguntas: ¿quién realiza la mayor parte de las tareas de la casa? y ¿qué otras personas ayudan en las tareas de la casa?. En ejercicios propios de validez de criterio, con datos del Módulo de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo (tercer trimestre 2013), se observan diferencias significativas entre las categorías señaladas: quienes realizan tareas del hogar ocupan 3 horas y 36 minutos promedio en quehaceres domésticos al día, el doble que quienes ayudan (01:52), los que a su vez emplean el doble de tiempo en quehaceres domésticos frente a quienes no participan en las tareas del hogar (solo 49 minutos). Según este ejercicio, las preguntas mencionadas explican el 27% de la variación del tiempo de tareas domésticas ($\eta^2 = 0,27$).

72 Esta escala asigna una unidad de cuidado a las personas en edades centrales (18 a 64 años). Para los/as niñas de 0 a 4 años asigna 2 unidades; de 5 a 14 años, 1,5 unidades; de 15 a 17 años, 1,2 unidades. Por otro lado, a las personas de 65 a 74 años se les asignan 1,2 unidades; de 75 a 84, 1,7 unidades; y los/as mayores de 85 años, 2 unidades. Una vez imputados los valores a cada uno de los integrantes, estos se suman para obtener el nivel de demanda del hogar, el cual hemos agrupado en 3 categorías: bajo (hogares con hasta 3,5 unidades), medio (de 3,6 a 5,5 unidades) y alto (5,6 y más unidades).

TASAS DE OCUPACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS TAREAS DEL HOGAR

En primer lugar, se presentan curvas de participación en el trabajo doméstico y extradoméstico –ocupación en el mercado de trabajo–, por género y edad, para describir el escenario general de la carga de estos trabajos, así como los posibles cambios ocurridos durante la pandemia. De esta forma, el gráfico 8.1 muestra que la distribución de la participación de las mujeres en las tareas no remuneradas al interior del hogar resulta similar en los tres períodos, con un leve aumento durante 2020. Sin embargo, en el gráfico 8.2 se observa que la intervención de los varones en labores relacionadas con el trabajo no remunerado se acrecienta durante el período de mayor aislamiento social –2020– y recae de manera leve en 2021, a causa, posiblemente, del aumento en la tasa de ocupación respecto del año anterior. En relación con este último efecto, si bien en 2021 las mujeres también retoman valores de ocupación fuera del hogar similares a 2018, no disminuye su participación en las tareas del hogar –como en el caso de ellos–; es decir, la dinámica al interior de los hogares no se ha modificado de manera sustantiva.

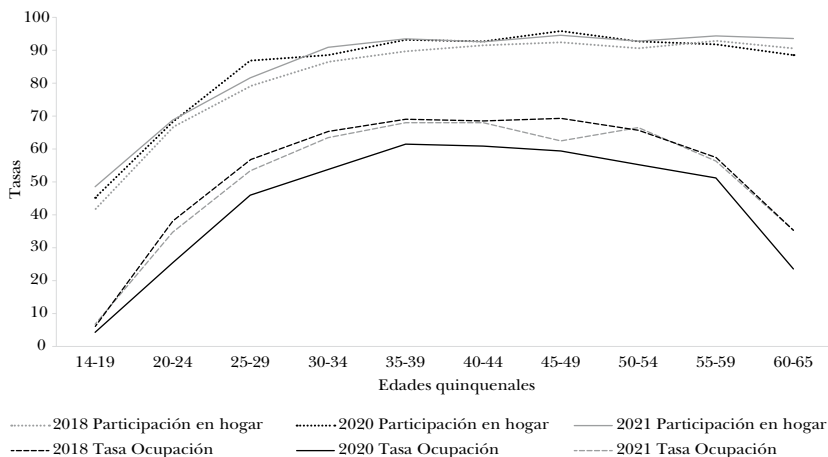
A su vez, la brecha entre varones y mujeres en el mercado de trabajo resulta menor que la correspondiente a la participación en las tareas domésticas. Aun con actividades laborales restringidas a causa del ASPO en 2020, y con tasas de actividad reactivadas en 2021, la carga en las tareas del hogar es responsabilidad de la mujer.⁷³

Al observar la estructura por edad, interpretada como momento del ciclo vital, la diferencia mencionada respecto de las tareas no remuneradas ocurre desde la adolescencia: entre los 14 y los 19 años⁷⁴ la mayor contribución ya es por parte de ellas, en los tres momentos estudiados. De todas maneras, se puede apreciar que la mayor carga de tareas domésticas para ambos géneros se encuentra en las edades centrales –a partir de los 30 años–, y se mantiene hasta la vejez inclusive, con la característica sustancial de que, aun en edades avanzadas o próximas al retiro del mercado laboral (60 a 65 años), la diferencia de género en las tasas de participación en las tareas en el hogar persiste de manera notoria.

73 La tasa de crecimiento anual de las mujeres entre 2020 a 2021 prácticamente no se modificó (0,8%), como sí ocurrió con los varones (-2,9%).

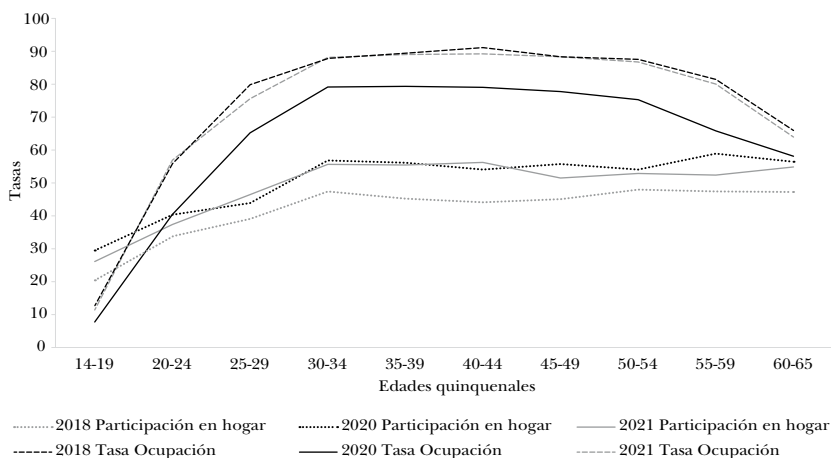
74 Si bien las tasas de crecimiento específicas por edad –entre 2018 y 2020– muestran un aumento del 43,9% en dicho grupo etario, las mujeres participaron en un 45,4% en 2020, mientras los varones lo hacían en un 29,8%.

Gráfico 8.1. Tasas de ocupación y de participación en las tareas del hogar por edades quinquenales (mujeres, de 14 a 65 años, de los principales aglomerados de la Argentina, 2018, 2020 y 2021)



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Gráfico 8.2. Tasas de ocupación y de participación en las tareas del hogar por edades quinquenales (varones, de 14 a 65 años, de los principales aglomerados de la Argentina, 2018, 2020 y 2021)



Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

De manera resumida, los gráficos 8.1 y 8.2 muestran la vigencia del modelo tradicional de participación en el trabajo –remunerado y no remunerado– entre los géneros. Esto deja de manifiesto, una vez más, que los cambios ocurridos en la estructura del mercado laboral en las últimas décadas –sobre todo el aumento de la tasa de actividad de las mujeres– no han sido acompañados por una distribución equitativa en las tareas al interior del hogar. En ese sentido, y prestando especial atención al contexto de emergencia sanitaria, resulta relevante preguntarnos si los cambios ocurridos al interior del hogar, representados –en parte– por una mayor participación de los varones en las tareas domésticas y de cuidado, constituyen un fenómeno que continuará o si se trata de una excepción producto del efecto del aislamiento. Las primeras observaciones durante 2021 dan cuenta de que, al insertarse nuevamente en las actividades económicas remuneradas, disminuye el compromiso de ellos con las tareas no remuneradas. Entre 2020 y 2021, los varones reducen su participación en las tareas domésticas (con excepción de aquellos de entre 40 y 44 años, con una suba del 4,1%) y las mujeres mantienen el aumento –el grupo de 25 a 29 años es el único en decrecer–. En tal sentido, parecería ser que la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados que sacudió a los hogares argentinos durante la pandemia –con su visibilización y valorización– no ha concluido para las mujeres, mientras que se da un camino de regreso a valores prepandémicos para los varones.

CONDICIONANTES INDIVIDUALES

Como se observa en el cuadro 8.1, a medida que aumenta el nivel educativo todas las personas incrementan su participación en las tareas domésticas en todos los períodos considerados. En línea con lo señalado por Meil (1999), las concepciones ideológicas sobre la distribución del trabajo doméstico se vinculan estrechamente con el nivel educativo de las personas; aquellas de mayor educación presentan una menor adhesión a concepciones tradicionalistas. Sin embargo, mientras que en los varones el efecto de la educación es más escalonado, en las mujeres se concentra en terminar o no el nivel superior. Asimismo, a medida que el nivel educativo aumenta, las diferencias de participación en las tareas domésticas entre los géneros se reducen. Ahora bien, es posible advertir algunas variaciones a lo largo de los distintos períodos analizados: aunque los varones habían incrementado su participación en las tareas del

hogar durante el ASPO, se aprecia un retroceso al momento del DISPO, cuando vuelven a ampliarse las diferencias entre géneros, y dentro de estos por nivel educativo, especialmente en aquellas personas que no terminaron los estudios superiores.⁷⁵

Focalizando ahora en la intensidad laboral (resumen de la cantidad de horas trabajadas), se encuentran grandes diferencias de participación de mujeres y varones, donde la intensidad laboral incide, pero de forma no directa y totalmente subsumida a las relaciones de género. Así, en 2021, mientras tres cuartas partes de las mujeres sobreocupadas (76%) realizan tareas del hogar, solo lo hace una cuarta parte de los varones (26%). Con la pandemia, en 2020 aumenta la participación, en especial en quienes no trabajan. Si bien los valores caen en 2021, en líneas generales no retroceden a valores de 2018. Son claramente desiguales por género, y se observa un efecto techo en las mujeres, que no aumentan tanto su participación como los varones, que parten de un piso más bajo. Se amplían las diferencias entre varones y mujeres subocupados; ellas mantienen todo el aumento, mientras que ellos vuelven a valores de 2018. En la comparación 2018 y 2021 también aumentan las diferencias entre sobreocupados/as, que es mayor entre ellas (pasan del 70% al 76%) que entre los varones (24% a 26%).⁷⁶

75 La lectura porcentual se complementa con la interpretación de la asociación de algunas relaciones mediante el coeficiente V de Cramer. Por falta de espacio estos datos no se presentan en su conjunto. Se observa un aumento de la asociación dentro de cada género para el nivel educativo y la participación doméstica, que pasa de 0,10 a 0,12 en mujeres y 0,11 a 0,16 en varones –entre 2018 y 2021–, aunque se observa una caída de 0,42 a 0,37 para el nivel superior completo.

76 Estos cambios y otros menores llevan al leve fortalecimiento de la asociación de la intensidad laboral y la participación en las tareas del hogar, que se duplica del 0,04 al 0,08 en mujeres y del 0,03 al 0,07 en varones, que son igualmente valores muy bajos al estar controlado el efecto de las relaciones de género.

Cuadro 8.1. Participación en tareas del hogar según nivel educativo, intensidad laboral, clase social, externalización de tareas del hogar y nivel de demanda de cuidados, por género (personas de 14 a 65 años, Argentina urbana, 2018, 2020, 2021)

		2018						2020						2021					
		Varón			Mujer			Varón			Mujer			Varón			Mujer		
		NP	A	R	NP	A	R	NP	A	R	NP	A	R	NP	A	R	NP	A	R
Total		59	17	24	20	14	66	50	21	28	17	14	70	52	20	28	17	14	69
Nivel educativo	Hasta secundario incompleto	66	15	19	25	14	61	60	20	21	23	14	63	62	19	20	22	15	63
	Secundario completo o superior incompleto	56	18	26	18	16	66	45	24	31	16	16	69	50	21	29	16	16	68
	Superior completo	46	18	36	12	11	76	31	21	48	7	9	84	33	18	49	8	8	83
Intensidad laboral	No trabajó	66	16	18	25	16	60	53	23	24	20	15	65	55	22	23	21	16	63
	Subocupado	53	16	31	13	12	75	47	19	34	10	11	79	55	14	31	10	12	78
	Ocupado pleno	55	17	28	15	13	72	47	21	32	11	11	78	48	19	33	10	12	77
	Sobrecupado	60	16	24	16	14	70	50	18	32	12	10	79	54	20	26	11	13	76
Trabajo en su vivienda	No	60	17	24	20	15	65	52	21	26	18	14	67	54	20	26	18	14	68
	Sí	47	14	38	8	11	81	29	21	50	7	10	84	34	16	50	7	13	80
Clase social	De servicios	47	18	36	14	13	73	32	21	46	8	11	82	38	20	42	9	9	82
	Intermedia	53	18	29	13	12	74	45	21	34	10	9	81	51	16	33	8	13	78
	Trabajadora	63	16	22	16	14	70	55	19	26	13	11	76	54	20	26	12	12	76
Externalización	Sin	59	17	24	19	14	67	50	22	28	16	13	70	52	20	28	16	14	70
	Con	69	10	21	34	17	49	62	8	29	30	19	51	64	8	28	31	17	52
Demanda de cuidados	Bajo	41	17	43	12	10	78	31	21	48	10	10	81	36	18	46	9	10	81
	Medio	66	18	16	25	17	58	58	22	20	19	17	64	60	22	19	23	16	61
	Alto	71	16	13	23	16	61	63	21	17	21	15	64	64	20	17	19	16	65

Nota: El promedio de casos por celda es de 2781. Solo 2 celdas cuentan con menos de 100 casos (66 y 68). NP: no participa; A: ayuda; R: realiza.

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Asimismo, nos interesa analizar el impacto que el trabajo remunerado realizado en la propia vivienda tiene en la participación en las tareas domésticas, ya que es un indicador posible –en esta fuente de datos– sobre el aumento del teletrabajo y el trabajo en el domicilio impuestos por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia. En todos los casos, quienes trabajan fuera del hogar presentan menores niveles de participación, pero sobre todo los hombres. Además, los varones fueron quienes más aumentaron su involucramiento en las tareas domésticas con la irrupción de la pandemia, en particular los que trabajan desde su

hogar, aunque se aprecia la misma tendencia que señalamos anteriormente: aumento en 2020 y reducción en 2021.⁷⁷ Las diferencias de género observadas en 2018 –de 40 puntos porcentuales tanto para quienes trabajaban dentro como para quienes lo hacían fuera de sus hogares– bajaron durante 2020, pero en 2021 se mantienen en 27 puntos entre varones y mujeres que trabajan en sus hogares, contra 36 de quienes lo hacen fuera de ellos. En otras palabras, la llegada de la pandemia puede haber significado un avance en el abandono de las pautas tradicionales de división del trabajo doméstico, al menos en relación con los varones que trabajan en sus viviendas.

Cabe señalar que para los varones se observan distintos niveles de participación en las tareas domésticas según su clase social; los de clase de servicios son quienes mayormente participan y aquellos de clase trabajadora quienes menos lo hacen –tanto antes como durante la pandemia–. Estas diferencias de clase se reducen entre las mujeres. En la clase trabajadora se encuentran las mayores diferencias de género, algo observado antes (Gómez Rojas, 2013). En 2018, las diferencias porcentuales a favor de las mujeres en la participación (como contracara de la no participación) son de 33 puntos porcentuales en la clase de servicios, 40 en clase intermedia y 47 en clase trabajadora. En 2020, dichas diferencias cayeron, mientras que en 2021 aumentaron de nuevo a 29, 43 y 42 puntos porcentuales respectivamente. Por un lado, es destacable que en todos los escenarios las menores brechas se encuentran en la clase de servicios. Por otro lado, cabe mencionar que si bien en todas las clases se redujeron las desigualdades de género durante el ASPO y luego volvieron a aumentar durante el DISPO, en las clases de servicios y trabajadora se observan desigualdades menores a las de 2018. Sin embargo, para las clases intermedias las desigualdades de género son mayores que antes de la pandemia. A su vez, es destacable que las personas de las clases de servicios y trabajadora fueron las que más aumentaron su participación en las tareas domésticas entre 2018 y 2021, tanto varones como mujeres.⁷⁸

77 Para los varones la asociación aquí pasa del 0,05 a 0,15 entre 2018 y 2021.

78 Estos cambios en la participación de las mujeres antes y durante la pandemia llevan a un fortalecimiento de la asociación entre clase social y participación en las tareas domésticas, cuyo valor pasa de 0,11 a 0,16, mientras que en los varones pasa de 0,11 a 0,13.

CONDICIONANTES DEL HOGAR

Se observa en todos los casos que quienes residen en hogares que cuentan con externalización –la realización o ayuda de tareas del hogar por parte de personas que no viven en ella, de forma remunerada o no– participan en menor medida de las tareas domésticas. Cabe señalar que se observan mayores diferencias entre las mujeres que externalizan tareas con respecto a las que no lo hacen que entre los varones que se encuentran en cada una de estas situaciones. Es decir, se puede pensar un trasvase de tareas entre mujeres desde adentro del hogar hacia afuera. Asimismo, las diferencias de género –que en 2018 rondaban los 40 puntos porcentuales entre quienes no contaban con externalización y 35 entre quienes sí lo hacían– se redujeron de forma leve en 2020 y aumentaron una vez más en 2021, alcanzando 36 y 33 puntos respectivamente. Es decir que aun en el contexto de aislamiento social de la pandemia, cuando las estrategias de externalización de los hogares se vieron drásticamente reducidas, el involucramiento de los varones en las tareas del hogar no alcanzó altos niveles ni consiguió permanecer en el tiempo, a la vez que nunca se frenó del todo la externalización.

Por último, interesa analizar el impacto de la demanda de cuidado en la participación en las tareas del hogar. En los varones, y en menor medida en las mujeres, baja la participación a medida que aumenta la demanda de cuidado. Esto se relaciona con la composición de la demanda de cuidado, vinculada a la cantidad de integrantes del hogar. Es decir, a medida que aumenta el tamaño del hogar es posible que las tareas domésticas sean distribuidas entre más miembros –sobre todo mujeres, pero también niñas y niños– antes que caer sobre los varones jóvenes y adultos. Las diferencias entre géneros aumentan a medida que aumenta el nivel de demanda de cuidado. Mientras que en 2018 hay una diferencia porcentual de 29, 41 y 48 puntos para hogares de demanda baja, media y alta respectivamente, se reduce en 2020 y aumenta en 2021, cuando casi alcanza los valores previos a la pandemia –27, 37 y 45 puntos respectivamente–. Si bien la irrupción de la pandemia parece haber incidido en una mayor participación masculina, los hogares con alta demanda de cuidados continúan siendo los que presentan las mayores desigualdades de género en el reparto de las tareas domésticas en los tres momentos.⁷⁹

79 Se mantiene constante y relevante la asociación entre demanda de cuidado y participación en las tareas del hogar y aumenta junto con el aumento de la demanda: 0,37 con baja demanda, 0,45 en media y 0,51 en alta demanda.

FACTORES ESTRUCTURALES QUE INCIDEN EN EL ABANDONO DE LA PAUTA TRADICIONAL DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO EN PAREJAS HETEROSEXUALES

El eje de estudio pasa ahora de las personas a las parejas heterosexuales, uno de los núcleos centrales de las relaciones de género predominantes.⁸⁰ Se indaga en el peso de los factores analizados en el abandono de la pauta tradicional de la división de tareas domésticas⁸¹ mediante la aplicación de una regresión logística múltiple. En el cuadro 8.2 se muestran tres modelos de regresión logística binaria, que presentan los efectos de los factores en el abandono de la pauta tradicional por una igualitaria. En 2018, las parejas igualitarias representan casi un cuarto del total, mientras que este porcentaje aumenta al 28% en 2020 y se mantiene en 2021. En términos generales, no hay grandes cambios en los resultados globales del modelo en los tres momentos. Se observa una capacidad explicativa baja –de entre el 9% y 13% según el pseudo R^2 de Nagelkerke– aunque relevante, con un porcentaje de aciertos en la predicción del tipo de pareja del 62% al 64%, mientras que las pruebas de Hosmer y Lemeshow no son significativas en ninguno de los momentos.

En 2018 observamos que las parejas en aquellos hogares que externalizan tareas domésticas tienen 1,7 más chances de ser igualitarias, mientras que por cada unidad de cuidado que aumenta la Escala de Madrid esa chance se reduce en un 10%. En cuanto a las mujeres, por cada año cumplido se reducen las chances de tener una pareja igualitaria en un 1% y cada año de educación alcanzado agrega 1,03 más chances de lograrlo. La externalización reduce el monto total de trabajo de la pareja, y equipara algo más la carga de trabajo, mientras que el aumento de

80 Salvo trabajos sobre travestis y mujeres y varones trans, son muy escasos los estudios en la Argentina sobre la participación en tareas del hogar de personas del colectivo LGTBQ+, así como sobre su perfil sociodemográfico y en la estructura social. Las fuentes existentes no suelen relevar preguntas al respecto y la indagación sobre parejas del mismo sexo en las fuentes oficiales se ha demostrado problemática aunque promisoria (Riveiro, 2018). En cambio, a nivel internacional se cuenta con una importante bibliografía al respecto (Goldberg, 2013).

81 En términos de nuestros indicadores, en una pauta tradicional la jefa o cónyuge del jefe realiza y su pareja varón ayuda o no participa, o ella ayuda y él no participa. El resto de los casos han sido categorizados como igualitarios, ya que, si bien hay situaciones no tradicionales (en las que el varón u otra persona externa al hogar tiene mayor carga), estas son minoritarias.

la demanda de cuidado refuerza modelos tradicionales de división del trabajo doméstico. A mayor edad –o quizás antigüedad de la cohorte de nacimiento– se espera encontrar parejas más tradicionales. Con la educación sucede lo contrario: una mayor educación se vincula con parejas más igualitarias en términos de trabajo doméstico.

Cuadro 8.2. Factores estructurales asociados a la probabilidad de tener una pareja igualitaria en el reparto de las tareas del hogar (parejas heterosexuales de 14 a 65 años, Argentina urbana, 2018, 2020, 2021)

Variable dependiente: tipo de pareja según reparto de tareas del hogar. 0: Tradicional; 1: Igualitaria		2018			2020			2021		
		Coef.	Error estándar	Exp.(B)	Coef.	Error estándar	Exp.(B)	Coef.	Error estándar	Exp.(B)
Hogar	Externalización (referencia: sin)									
	Externalización de las tareas del hogar	0,52	0,07	1,68***	0,47	0,11	1,61***	0,34	0,13	1,40***
	Demanda de cuidado (E. de Madrid)	-0,09	0,01	0,91***	-0,10	0,01	0,91***	-0,14	0,02	0,87***
Mujer	Edad (años)	-0,01	0,00	0,99***	-0,01	0,00	0,99***	-0,01	0,00	0,99***
	Años de educación	0,03	0,01	1,03***	0,05	0,01	1,05***	0,05	0,01	1,05***
	Intensidad laboral (referencia: 0 horas)									
	Subocupada	0,22	0,11	1,25**	0,02	0,08	1,02	0,17	0,11	1,19
	Ocupada plena	0,71	0,12	2,02***	0,43	0,09	1,54***	0,51	0,12	1,66***
	Sobrecupada	0,75	0,12	2,12***	0,44	0,10	1,56***	0,42	0,13	1,52***
	Clase social (referencia: no ocupada)									
	Clase de servicios	0,76	0,12	2,13***	0,64	0,09	1,90***	0,73	0,12	2,07***
	Clase intermedia	0,44	0,12	1,56***	0,45	0,09	1,57***	0,44	0,12	1,56***
Clase trabajadora	0,64	0,12	1,90***	0,55	0,08	1,74***	0,55	0,12	1,73***	
Varón	Clase social (referencia: no ocupado)									
	Clase de servicios	-0,36	0,07	0,70***	-0,35	0,07	0,71***	-0,39	0,10	0,68***
	Clase intermedia	-0,50	0,06	0,60***	-0,53	0,06	0,59***	-0,49	0,09	0,61***
	Clase trabajadora	-0,60	0,06	0,55***	-0,65	0,06	0,52***	-0,57	0,09	0,56***
Constante	-0,96	0,15	0,38***	-0,63	0,16	0,53***	-0,50	0,23	0,60***	
Estadísticos del modelo	Cantidad de casos		16 198			10 816		6352		
	R2 de Nagelkerke		0,133			0,099		0,113		
	Hosmer y Lemeshow (χ^2)		0,323			0,207		0,224		
	% de aciertos		64,0			61,7		62,8		

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14; (***) p < 0,01; (**) p < 0,05.

En cuanto a los aspectos laborales, a medida que aumenta la intensidad laboral de las mujeres aumentan sus chances de estar en una pareja igualitaria frente a aquellas que no trabajan. Sin embargo, hay un salto, en términos de significación y chances, entre las subocupadas y el resto. Así, las primeras tienen 1,3 más chances que las no ocupadas, mientras que las ocupadas plenas, 2, y las sobreocupadas, 2,1 más chances. Con respecto a la clase social,⁸² no emerge una tendencia lineal: son las mujeres de las clases de servicios y trabajadora las que presentan mayores chances de estar en una pareja igualitaria, frente a aquellas no ocupadas -2,1 y 1,9, respectivamente-. En cuanto a los varones, todos los ocupados tienen una menor chance de estar en parejas igualitarias -sin importar su clase social- que aquellos no ocupados. Por la información presentada, tiene más peso la intensidad laboral de la mujer que su clase social, y la clase social de la mujer lo tiene más que la de su pareja a la hora de pasar a un reparto igualitario de las tareas domésticas.

Al comparar el escenario de 2018 con el de 2020 y el de 2021, asombran la similitud y estabilidad de los modelos. Los principales contrastes, aunque muy leves, se encuentran en la intensidad laboral de las mujeres. De esta forma, retomando la hipótesis presentada, podemos afirmar que los leves cambios observados no han alterado el peso relativo de los factores estructurales a la hora de determinar el reparto de las tareas del hogar.

TRANSFORMACIONES EFÍMERAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO ENTRE GÉNEROS

Las relaciones de género son centrales para la distribución del trabajo doméstico en la sociedad, en los hogares y en las parejas. Señalamos en este capítulo que las mujeres participan del trabajo doméstico en mayor medida que los varones desde muy temprana edad y, a su vez, a medida

82 Como categoría de referencia para la clase social, se toma a las personas no ocupadas. Esto permite observar el efecto de tener una clase ocupacional directa a no tenerla, retomando la crítica de obviar a las personas sin empleo que realizan los estudios feministas a los análisis de clase convencionales. Además, se toma esta decisión por el peso conceptual y empírico de la dedicación exclusiva de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados (las amas de casa).

que las personas crecen también lo hacen las desigualdades de género en este reparto.

Tanto antes como durante la pandemia las mujeres fueron quienes realizaron la mayor proporción de tareas al interior de los hogares, incluso cuando trabajan a tiempo completo. De hecho, la desigualdad de género en la participación en el mercado de trabajo es considerablemente menor que en la participación en el trabajo del hogar. Las transformaciones que impulsó la pandemia –un aumento generalizado de la carga de trabajo doméstico y ciertos movimientos en dirección de una división del trabajo doméstico más igualitaria– no han impactado de lleno en esta participación, más que para causar estos corrimientos cuya perduración, como vimos, no está garantizada. Estos leves cambios encontrados son matizados tanto por los primeros datos del DISPO (2021) como por los modelos de regresión presentados. Se refuerza así nuestra hipótesis de trabajo: las leves reducciones en las desigualdades de género en el trabajo doméstico al calor de las más duras restricciones de la pandemia, cuando encontradas, no alteran la estructura de condicionantes anterior a ella, en tanto responden a modelos familiares y roles de géneros de larga raigambre, parte sustantiva de las relaciones de género tales como las definimos. Si se focaliza en el trabajo extradoméstico, se observa que a medida que aumenta la intensidad laboral de los varones baja la participación doméstica, mientras que cuando aumenta la de las mujeres crecen sus chances de tener una pareja igualitaria en cuanto al reparto de las tareas del hogar. Pero no solo importa la cantidad de horas trabajadas. En la intersección de clase social y género se observa que las mujeres de clase de servicios son las que cuentan con mayores probabilidades de que su pareja sea igualitaria, seguidas por aquellas de clase trabajadora, lo que nos recuerda la no linealidad de las clases sociales relacionales. En este sentido, interesa a futuro complementar el estudio de la división del trabajo doméstico y de cuidados con la extensión a todos los y las integrantes del hogar y su inserción laboral, así como con los estudios de homogamia y heterogamia (véase Gómez Rojas, 2009).

Los perfiles que cuentan con externalización, trabajo desde la propia vivienda, un mayor nivel educativo, una menor edad y una mayor intensidad laboral femenina son los que presentan más chances de un reparto más democrático entre varones y mujeres del núcleo del hogar. En este mismo sentido, y teniendo en cuenta que con el aumento de la demanda de cuidados bajan la participación de los varones y las probabilidades de que la pareja sea más igualitaria, es probable que la carga de tareas domésticas que no cae sobre las mujeres de las parejas heterosexuales sea repartida entre otras mujeres, pero también niñas/os, tanto del hogar

como externas a él, remuneradas o no, antes que entre los varones jóvenes y adultos del propio hogar.

Queda abierta la indagación a partir de variables que midan aspectos valorativos/ideológicos respecto del reparto de tareas (véanse Domínguez, Muñiz Terra y Rubilar, 2019; Bornatici y Heers, 2020), ausentes en esta fuente de datos y que permiten obtener modelos con más capacidad predictiva. Aquí, otra consideración es necesaria. Si las relaciones de género son centrales para la distribución del trabajo doméstico, también se puede decir lo inverso: el trabajo doméstico y su reparto son centrales a las relaciones de género, su configuración y su reproducción. Si el feminismo local ha reproducido la consigna “eso que llaman amor es trabajo no pago”, lo hizo tanto para dar cuenta del valor del trabajo doméstico como para problematizar la lógica afectiva del trabajo doméstico y de cuidados.

El modelo patriarcal de reparto de tareas domésticas gozó de buena salud en el marco del aislamiento social a causa de la pandemia de covid-19. Los desafíos para revertirlo no pueden descansar en negociaciones personales y de pareja: requieren del involucramiento de las agencias públicas y organizaciones feministas, sociales y políticas para generar estrategias específicas. Son necesarios cambios en materia de cuidado (instituciones universales, públicas y gratuitas de cuidado de menores y mayores, licencias familiares pagas), de trabajo remunerado (flexibilidad y reducción del horario laboral remunerado para ambos géneros, políticas de conciliación de la vida laboral y familiar) y de trabajo doméstico (mejorar el equipamiento doméstico de los hogares, y de los servicios públicos y sociales de los barrios). Se trata centralmente de promover prácticas tendientes a un reparto más democrático de las tareas del hogar entre sus miembros y nuestras comunidades, y un cuestionamiento a los roles de género tradicionales, su valoración ideológica y material.

9. Clases sociales y brechas digitales

Silvana Galeano Alfonso, Jérica Lorena Pla

El problema de la desigualdad en el acceso y el uso de las tecnologías digitales comenzó a plantearse hacia fines del siglo pasado, y se complejizó al tiempo que las tecnologías de la información y de la comunicación se fueron desarrollando y expandiendo a nivel global (Hoffman y Novak, 1998; De Marco, 2017; Van Deursen y Van Dijk, 2014).

La pandemia de covid-19 impuso un nuevo contexto. Las medidas de aislamiento y distanciamiento social posicionaron a las tecnologías digitales como herramientas centrales para la organización y mantenimiento de la economía, del sistema educativo, del sistema sanitario y de la sociedad en general. Las diversas tecnologías digitales permitieron teletrabajar, impartir/recibir educación en todos sus niveles, acceder a diversos servicios públicos (como la salud), al tiempo que se incorporaron en actividades sociales y cotidianas donde anteriormente estaban excluidas o no se utilizaban con la misma intensidad (Cepal, 2020; iClaves-Esade, 2021; ITU, 2021; Pedraza Bucio, 2021; Van Deursen, 2020).

Datos para América Latina y el Caribe indican que en los primeros dos trimestres de 2020 la utilización de aplicaciones de teletrabajo aumentó un 324%, las de comercio electrónico un 157% y las de educación en línea un 62%. En ese sentido, la conectividad adecuada y el acceso a dispositivos tecnológicos se convirtieron en condicionantes centrales para el ejercicio de la ciudadanía (Cepal, 2020). Se revelaron como un “derecho de intermediación” (Benza y Kessler, 2020) para realizar distintas actividades primordiales que ya mencionamos, como trabajar o educarse, pero también para acceder a la información, la comunicación y la participación política y ciudadana, en tanto las redes sociales digitales conformaron aún más un espacio público para la interacción social.

Frente a este panorama, los gobiernos adoptaron diversas medidas en relación con las tecnologías digitales. En la Argentina se destacan: la creación de una aplicación (Cuid.Ar) para el autodiagnóstico, la difusión de información y la posibilidad de acceder a certificados de circula-

ción; un servicio de teleconsultas de salud a nivel nacional (TeleCovid); programas para el acceso a TIC en barrios populares e instituciones; el establecimiento legal de los servicios digitales como servicios públicos esenciales y estratégicos, y el desarrollo de una plataforma oficial para combatir la infodemia (Confiar) (Finkelievich y Odena, 2021). El uso intensivo de tecnologías digitales también formó parte de la campaña de vacunación.

Por lo tanto, indagar las desigualdades digitales en un contexto de pandemia se volvió un análisis urgente. Pero no desde una mirada aislada y mucho menos desde el determinismo tecnológico, sino dentro de una comprensión compleja e histórica de la sociedad, sus procesos y estructuras en las que se conforman e intersecan las distintas desigualdades. En una región tan desigual como América Latina y el Caribe, una de las principales preocupaciones sobre la revolución digital es que acreciente desigualdades preexistentes (Martínez, Palma y Velásquez, 2020). Según Van Dijk (2020), los estudios empíricos demuestran que, en gran medida, las desigualdades digitales reflejan y refuerzan las desigualdades sociales.⁸³

Al posicionarnos desde una perspectiva multidimensional de las desigualdades, reconocemos que tanto las dimensiones como los indicadores a considerar, al relacionar desigualdades digitales y sociales, son variados. Para analizar el acceso y el uso de tecnologías digitales se han considerado principalmente variables sociodemográficas y socioculturales, como el género, la edad, la zona geográfica de residencia (rural/urbano), la etnia/raza y variables socioeconómicas, como los ingresos, el nivel educativo o la ocupación (Martínez, Palma y Velásquez, 2020; Norris, 2001; Rotondi y otros, 2020; Scheerder, Van Deursen y Van Dijk, 2017). Sin embargo, algunos investigadores sostienen que el análisis sistemático de las desigualdades digitales en relación con las teorías de la estratificación, la desigualdad y las clases sociales es un área de va-

83 A nivel mundial, mientras en 2004 había 150 millones de suscriptores a internet de banda ancha fija, para 2009 esa cifra había aumentado a 500 millones. Pero mientras en Europa, para 2009, había 200 suscriptores cada 1000 personas, en África ese valor era de 1 cada 1000. En relación con la penetración del teléfono móvil, los países de la periferia global para 2008 habían alcanzado el nivel de Suecia diez años atrás. Por último, se estimaba que en 2009 más de un cuarto de la población mundial tenía acceso a una computadora en el hogar (ITU, 2009). En 2021, alrededor del 63% de la población mundial utiliza internet. Mientras en los países desarrollados el porcentaje llega a 90%, en los países en desarrollo el valor es de 57% (ITU, 2021).

cancia, aunque se han realizado algunos avances (Blank y Groselj, 2015; Ragnedda y Muschert, 2013; Witte y Mannon, 2010).

El objetivo de este capítulo es analizar el acceso y el uso de las TIC según la clase social, el género y la edad en el momento previo a la pandemia y durante ella (2019/2020). Al hacerlo buscamos aportar evidencia empírica que permita poner en discusión que el acceso y el uso de las TIC se encuentra condicionado por las desigualdades sociales preexistentes en nuestra región y que afectan diversos planos del ejercicio pleno de la ciudadanía. El caso de la pandemia y la importancia que asumieron las TIC en este escenario se conforma como un momento analítico central, pues permite ver tanto continuidades en las desigualdades digitales como transformaciones motorizadas por el escenario pandémico.

En la literatura especializada, se discuten las metodologías pertinentes para analizar las diferentes desigualdades digitales en vinculación con otro tipo de desigualdades. Mientras la mayoría de los estudios realizan análisis estadísticos (De Marco, 2017; Rivoir y Escuder 2018; Van Deursen y Van Dijk, 2014, 2019), otros remarcan la necesidad de adoptar abordajes cualitativos o cuali-cuantitativos (Cabello, 2014; Benítez Larghi y otros, 2013; Scheerder, Van Deursen y Van Dijk, 2019; Zapata y otros, 2017). A grandes rasgos, se considera que los estudios cuantitativos pueden ofrecer un panorama general, descriptivo y representativo sobre acceso, uso y resultados obtenidos a partir de las tecnologías digitales (Van Dijk, 2020).

Aquí se utilizan dos fuentes de datos, que aportan robustez al análisis: por un lado, la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA), para medir el acceso a TIC por medio del módulo bienes del hogar, y por otro lado, el Módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Encuesta Permanente de Hogares –que se realiza periódicamente los cuartos trimestres– en el período 2019-2020.

El análisis se realiza tanto a nivel de los hogares como de las personas.⁸⁴ En el caso del hogar, se asignó como clase la de mayor dominancia entre todos los activos. Cabe aclarar que cuando se toma la unidad de análisis hogar, se sintetiza la información de todos los integrantes y no solo de los activos. Por eso, es una manera de acercarse al componente

84 El acceso a los dispositivos y servicios se analiza a nivel hogar porque es este espacio el que adquiere relevancia en el contexto de pandemia, mientras que el uso se da de manera particular por las personas.

familia de la triada de bienestar, como ha sido vastamente analizado en otras investigaciones (Donza y otros, 2008; Salvia, 2010). Como variable independiente se utiliza la clase social, basada en el esquema de clases de Erikson, Goldthorpe y Portocarero (Goldthorpe y Heath, 1992).⁸⁵ Luego, al análisis de clase social se incorporan las variables género y edad.

BRECHAS DIGITALES, DESIGUALDADES DE CLASE, GÉNERO Y EDAD

Si bien en las últimas dos décadas ha aumentado progresivamente el acceso a internet y a diversos dispositivos, se siguen observando desigualdades digitales relacionadas con otras variables, como el territorio, el ingreso, el género, la edad y la pertenencia étnico-racial (ITU, 2021; Martínez Domínguez, Gómez Navarro y Morales López, 2021). En Latinoamérica y el Caribe también se observan ambas tendencias. Por un lado, un gran crecimiento en inclusión digital, sobre todo a través del acceso y uso de teléfonos inteligentes (GSMA, 2021) Por el otro, brechas entre zonas rurales y urbanas, sectores de altos y bajos ingresos, distintas generaciones y géneros (Martínez, Palma y Velásquez, 2020; Martínez Domínguez, Gómez Navarro y Morales López, 2021; Trucco y Palma, 2020). Se destaca que en estas latitudes aún son preponderantes las brechas materiales, y que las posibilidades de teletrabajo también están condicionadas por los niveles de informalidad, la infraestructura y las habilidades digitales (Cepal, 2020). Por ejemplo, un estudio en México ha demostrado que “las entidades con mayores grados de desigualdad de ingreso y pobreza son las que se encuentran con mayor brecha digital de acceso” (Gómez Navarro y otros, 2018: 56).

Desde la propuesta teórica de Van Dijk (2020), las categorías diferenciales de las personas proporcionan accesos desiguales a los recursos que, a la vez, permiten o dificultan la apropiación de las tecnologías digitales. En términos relativos, algunas personas y algunas clases sociales se benefician más y de manera más rápida que otras de los resultados generados

⁸⁵ Conforme a la operacionalización y criterios recopilados en la introducción del libro. Para la construcción de los estratos se partió de la recomendación de Ganzeboom y Treiman (1996), que utiliza el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones versión 2008 (ISCO, por sus iniciales en inglés). Para ello, se procedió a corresponder las ocupaciones del Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO), a partir de las sugerencias del Indec (2018).

a partir de tecnologías digitales y, en términos absolutos, algunas quedan directamente excluidas de ciertos beneficios.

En las últimas décadas, ha tomado preponderancia otra vez la discusión sobre la naturaleza y el concepto de clase social y las formas de medirla (Erickson y Goldthorpe, 1992; Goldthorpe, 2010; Savage y otros, 2013, 2015). Sin embargo, estas discusiones no han sido ampliamente incorporadas a los estudios sobre desigualdades digitales. Por lo general, se han utilizado las variables estatus socioeconómico, nivel educativo, ingresos, ocupación, para realizar indagaciones empíricas, pero los aportes que ofrecen las teorías de la estratificación, las desigualdades y las clases sociales recibieron una menor atención; aunque algunos autores han comenzado este camino.⁸⁶ Estos estudios identifican accesos y usos diferenciados según clase (operacionalizada generalmente por ingresos), pero también incorporan otros indicadores sobre estatus. Otros estudios concluyen que las clases ubicadas en la base de la estructura social presentan menos acceso, usos menos frecuentes, menos variados y orientan sus prácticas digitales en menor medida a la búsqueda de información (Van Dijk, 2020; Yates, Kirby y Lockley, 2015).

Incorporar el concepto de clase social permite poner de relieve desigualdades estructurales y partir de discusiones y concepciones teóricas primarias para analizar las desigualdades digitales. En este capítulo, retomamos el concepto de clase social como una variable diferenciada que se define por las relaciones de empleo. Focalizar en el ámbito socioocupacional permite una comprensión más detallada de la relación entre la estructura productiva y las desigualdades digitales. El esquema de clases logrado a partir de las relaciones de empleo “diferencia varias categorías de clase a partir de estas relaciones, y se puede aplicar a la investigación mediante información sobre el estatus del empleo y la ocupación”⁸⁷ (Goldthorpe, 2010: 363).

86 Luego de identificar una vacancia respecto del análisis de las desigualdades digitales desde las teorías sociológicas, Witte y Mannon (2010) retoman a Durkheim, Marx y Weber para intentar explicarlas en la sociedad estadounidense; Ragnedda y Muschert (2013) recopilan distintos estudios empíricos que realizan el mismo esfuerzo; y Blank y Groselj (2015) llevan a cabo un análisis empírico operacionalizando clase, estatus y poder.

87 Para Goldthorpe (2010), las diversas ocupaciones tienden a estar asociadas con diferencias en las relaciones de empleo de una forma que implica distintas posiciones de clase. El autor realiza una distinción básica entre empleadores, autónomos y empleados. Sin embargo, argumenta que la categoría de empleados es la que predomina numéricamente en las sociedades del mundo moderno (porcentaje que para el autor oscila entre el 85 y 90%).

Por último, el género y la edad han sido analizados en relación con las desigualdades digitales de forma más sistemática y en algunos casos se han relacionado con las clases sociales (Benítez Larghi y otros, 2013; Yates, Kirby y Lockley, 2015) También se han relacionado otras variables, como la zona de residencia en términos de rural/urbano. A nivel mundial, el 62% de los hombres utiliza internet frente a un 57% de las mujeres, y el 71% de los jóvenes (entre 15 y 24 años) usa internet frente al 57% en otros grupos etarios. La brecha de género se ha venido reduciendo a lo largo de los años y en el conjunto de los países desarrollados se han alcanzado paridades. En los países desarrollados las brechas digitales según la edad y las zonas geográficas de residencia también son menos pronunciadas (ITU, 2021). Las mujeres en países desarrollados o con gran desarrollo tecnológico suelen estar más motivadas, tener un mayor acceso y habilidades que las de los países en desarrollo. Una de las razones que se suelen esgrimir son los entornos culturales más patriarcales, las tareas de cuidado realizadas por las mujeres, el acceso a nivel hogar, los niveles educativos y los tipos de inserción laboral femenina (Martínez, Palma y Velásquez, 2020; Van Dijk, 2020).

Los datos para varios países de América Latina y el Caribe también evidencian desigualdades digitales en relación con el género, la edad, la zona geográfica de diferencia. En términos de género la región se encuentra mejor posicionada que otras. Datos del período 2017-2018 indican que “el porcentaje de acceso a internet en la región fue del 63% para hombres y el 57% para mujeres, mientras que el acceso y uso del teléfono móvil fue del 83% para hombres y el 80% para mujeres”. Sin embargo, existen grados diferenciales entre países, por ejemplo, en la Argentina algunos datos muestran valores positivos para las mujeres en el acceso a internet y el teléfono móvil (Agüero, Bustelo y Viollaz, 2020). Los tipos de uso también suelen ser diferenciados según el género. Los hombres en general utilizan los dispositivos digitales de forma más intensiva y variada, y en mayor medida que las mujeres para cuestiones laborales, administrativas y financieras (Agüero, Bustelo y Viollaz, 2020).

Por ende “lo que es crucial en este esquema de clases es el nivel ulterior de distinción que se introduce, y que atañe en particular a las relaciones de *los empleados*. Esto apunta al modo en que se regula su empleo o, expresado de otro modo, a la naturaleza explícita e implícita de sus contratos de empleo” (p. 365). Especificaciones más detalladas sobre el esquema utilizado se encuentran en la introducción de esta publicación, motivo por el cual no se ahonda en esta sección.

Para la Argentina, destaca la investigación de Benítez Larghi y otros (2013), que desde una mirada cuali-cuantitativa incorpora el concepto de clase social (tomando como *proxy* la inserción socioeconómica de distintas escuelas de La Plata) y el género para analizar la apropiación de TIC en jóvenes, y demuestra que ambos son factores explicativos para los usos diferenciales de las tecnologías digitales de los estudiantes. Otro estudio (Moyano, 2020) observa que entre 2011-2017 hubo un crecimiento del acceso y uso de las tecnologías digitales, sobre todo debido a la incorporación de teléfonos inteligentes, pero con valores desiguales según áreas geográficas (regiones, provincias, ciudades), edad, pobreza medida de forma unidimensional, nivel educativo del hogar y nivel socioeconómico. Encuentra que el nivel socioeconómico, al incluir el nivel educativo, produce cambios de mayor intensidad. En particular, en los niños de 6 a 8 años que viven en “hogares que poseen un menor bienestar socioeconómico, la variedad y complejidad de usos se ve reducida a una cantidad acotada de usos básicos, especialmente YouTube”.

ANÁLISIS DE LA BRECHA DIGITAL DE ACCESO Y USO SEGÚN CLASE SOCIAL A NIVEL HOGAR

En este primer apartado presentamos el análisis de acceso por hogares de diversas clases sociales a computadora, servicio de internet en el hogar y teléfono móvil con acceso a internet, tipo *smartphone*.⁸⁸

La brecha digital se define como aquella que existe entre los que tienen y los que no tienen acceso a las TIC (primer nivel de la brecha digital). Aquí nos centraremos en este primer nivel, mientras que en el segundo apartado haremos referencia a las brechas en el uso (segundo nivel).⁸⁹

88 La EDSA mide de manera diferenciada el acceso a servicio de internet dentro de la vivienda y el acceso a internet por medio de un teléfono móvil (*smartphone*). Esta diferenciación no es posible de realizar con el módulo TIC de la EPH. Al constituirse en una explicación relevante en términos de las oportunidades de conexión y uso que presenta cada una de estas opciones, la EDSA resulta una fuente de análisis más idónea. Sin embargo, cabe aclarar que las tendencias por clase social del hogar en el acceso y los cambios y mutaciones entre 2019 y 2020 son similares en ambas fuentes.

89 En la literatura especializada se han diversificado las dimensiones en que pueden estudiarse en el primer y segundo nivel, y se distingue un tercer nivel, que es aquel que observa los resultados (positivos o negativos) obtenidos a partir de la utilización de tecnologías digitales (DiMaggio y otros, 2001;

Una primera mirada al gráfico 9.1 permite observar que existen brechas de acceso según clase social del hogar; las clases mejor posicionadas en la estructura social presentan un mayor acceso, el cual disminuye a medida que se desciende en la estructura de clases. Las líneas, en cada clase, del gráfico 9.1 sintetizan esta información, que presenta la media de TIC que tiene la clase en cada año. Es en ese dato que se pueden observar tanto las brechas entre clases como el impacto desigual que ha tenido la pandemia de covid-19 en términos de mejorar el acceso: la clase de servicios y las clases intermedias no solo parten de un mejor acceso, sino que además incrementan la media entre 2019 y el período de comienzo de la pandemia en 2020. Los pequeños propietarios y personas con ocupación por cuenta propia también mejoran la media durante el período, pero lo hacen a partir de una proporción de acceso menor. En este caso, el aumento se explica en proporción relevante por el incremento en la posesión de teléfono móvil y servicio de internet en la vivienda (suben cada uno 8 y 12 puntos porcentuales), y en menor medida por el aumento de acceso a computadora (variación mínima de 2 puntos porcentuales).

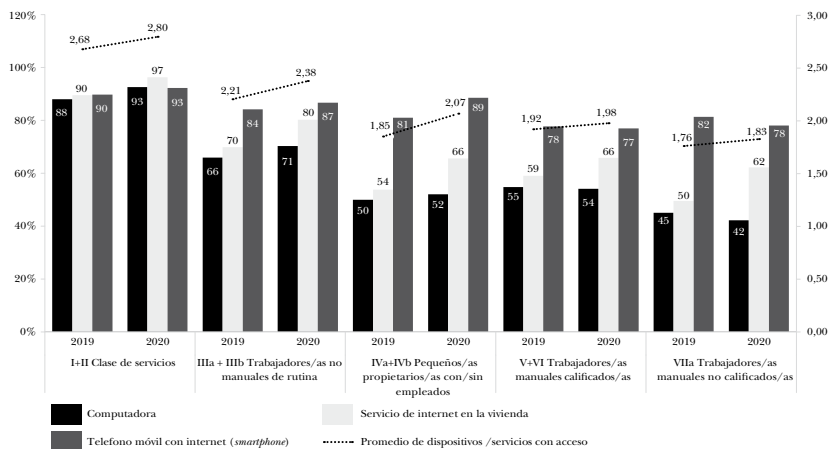
En el caso de las clases trabajadoras, hay un breve incremento en el período en la media de acceso, pero de menor intensidad que en los casos anteriores y explicado fuertemente por la incorporación de servicio de internet a la vivienda, mientras que el acceso a dispositivos permanece más bien invariable en el período.

Podríamos decir que el acceso a cada tipo de tecnología tiene sus especificidades y temporalidades. Las brechas de acceso del hogar a una computadora son mayores y han aumentado, mientras las brechas de acceso del hogar a internet son menores y han disminuido a lo largo de los años.

El acceso a una computadora es el doble en la clase de servicios que en las clases trabajadoras, el acceso a servicio de internet en la vivienda mejoró en la clase de pequeños propietarios y cuentapropistas, pero no tanto como para alcanzar la proporción de las clases de servicios e intermedias. La posesión de al menos un *smartphone* por hogar es el indicador con un comportamiento más igualitario, pues en todo caso la proporción se ubica alrededor de 8 de cada 10 hogares.

Helsper, Van Deursen y Eynon, 2015; Van Deursen y Van Dijk, 2019; Van Dijk, 2006, 2013, 2020). Sin embargo, no serán analizados en este capítulo, dada la limitación de las fuentes de datos.

Gráfico 9.1. Porcentaje de hogares con acceso a PC e internet y promedio de acceso^(*) desagregado por año (2019-2020)



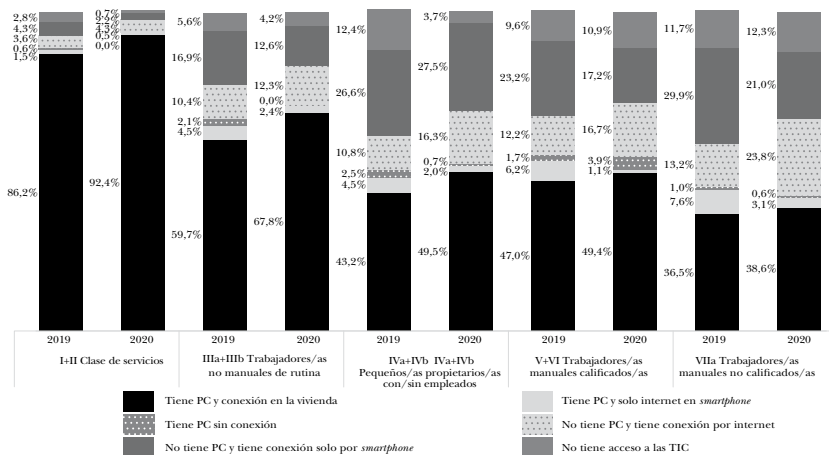
(*) Se compone de la suma, para cada hogar, del total de acceso a los servicios/dispositivos analizados; 3 es el valor máximo y 0 el mínimo. Se realizó una prueba de medias entre los estratos de clase, diferenciada por año, y en todos los casos las medias de cada grupo son significativas al 0,05%.

Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto PISAC Covid-19 n° 14.

De este modo podemos decir que el acceso a internet en todas las clases sociales ha tendido a aumentar durante el transcurso de los años comparados y sigue los patrones de crecimiento vistos a nivel regional y para la Argentina en años anteriores (Agüero, Bustelo y Viollaz, 2020; Moyano, 2020; GSMA, 2021). Ahora bien, la brecha de acceso físico es una primera forma de aproximación al fenómeno, pero limitada si se cae en metáforas simplificadoras y dicotómicas. Por ejemplo, el acceso no implica necesariamente el uso y tampoco se pueden construir solo dos grupos de hogares como incluidos/excluidos, ya que los límites son porosos, yuxtapuestos y relativos. Nuevos estudios (Van Deursen y Van Dijk, 2019) han remarcado que aun en países con altas tasas de penetración de internet y acceso a las TIC, el nivel material y las condiciones de acceso siguen siendo relevantes. Deben considerarse aspectos como los medios necesarios para el mantenimiento de la tecnología, el acceso a nuevos dispositivos y a equipos complementarios, así como las oportunidades que ofrece cada uno ellos. Dentro de la categoría analítica de oportunidades del dispositivo, Van Deursen y Van Dijk (2019) consideran como grupos con oportunidades distintas a aquellos que solo utilizan computadoras de es-

critorio y *laptops* o teléfonos inteligentes y *tablets* frente a quienes pueden usar ambos tipos de dispositivos combinados. En este sentido, en el gráfico 9.2 indagamos la forma en la cual se combina el acceso de las TIC ya estudiadas al interior de cada clase social.

Gráfico 9.2. Distribución del tipo de acceso a TIC según clase socioocupacional del hogar, desagregado por año (2019-2020)



Fuente: EDSA-Serie Agenda para la Equidad 2017-2025, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA - Proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Como dijimos anteriormente, mientras los *smartphones* ofrecen acceso a internet, movilidad y precios más económicos no sustituyen a las computadoras en términos de memoria, capacidad de almacenamiento, velocidad y diversidad de uso. Se considera que las computadoras permiten a las personas participar en mayores actividades que otros dispositivos o realizarlas con mayor profundidad. Pero los *smartphones* son propicios para la comunicación continua, el entretenimiento y otras actividades basadas en la localización. En la Argentina (gráfico 9.2), los porcentajes de acceso por clase social tienden a disminuir a medida que se desciende en el esquema de clases. En términos analíticos podríamos construir cuatro grupos:

- Un primer grupo presenta un porcentaje alto de acceso tanto a computadora como a internet en la vivienda, indicador que además se incrementó entre el año prepandémico y 2020.

Este grupo lo componen los hogares de clase de servicios, donde otras combinaciones de TIC son marginales.

- Un segundo perfil es el de la clase intermedia, similar al anterior, con predominancia de acceso tanto a PC como a internet en la vivienda y *smartphone*, pero con una proporción de alrededor de un cuarto que no tiene PC, aunque sí tiene algún tipo de conexión a internet (en la vivienda o por celular).
- Un tercer perfil lo delimitan los hogares de pequeños propietarios y cuentapropistas y hogares catalogados dentro de la clase trabajadora calificada. Alrededor de la mitad tiene PC y conexión a internet de algún tipo. Este indicador presenta un leve incremento entre 2019 y 2020. En promedio, aproximadamente, un 40% no tiene PC, pero sí algún tipo de conexión a internet (principalmente por *smartphone*), y un 10% no tiene acceso a TIC (aunque en el caso de los hogares de clase pequeña propietaria o cuentapropista esta proporción disminuyó de manera notoria en el contexto de la pandemia).
- El último grupo es el de los hogares de clase trabajadora no calificada. Solo un poco menos del 40% tiene acceso a la combinación óptima de computadora y conexión a internet en el hogar, mientras que un porcentaje similar, aunque mayor, no tiene PC, y para casi un cuarto su único acceso a TIC se da por medio del *smartphone*. En este grupo, aproximadamente 1 de cada 10 hogares no tiene ningún tipo de acceso a TIC, proporción que se mantuvo estable ante la irrupción de la pandemia.

De esta manera, hemos podido dar cuenta de la relevancia de analizar no solo el acceso a las TIC, sino cómo se combinan al interior de los hogares. Este punto se volvió central en el contexto pandémico: hogares sin computadora se vieron más limitados al momento del teletrabajo y particularmente de la educación de niños, niñas y adolescentes por medios virtuales. Más complejo aún fue el escenario de quienes no tienen acceso a internet, o que solo lo hacen por medio de un *smartphone*, pues al ser estos los hogares ubicados en lo más bajo de la estructura social la posibilidad de conexión por medio de datos se dificulta.

ANÁLISIS DE LA BRECHA DIGITAL DE USO SEGÚN CLASE SOCIAL, GÉNERO Y EDAD, A NIVEL PERSONAS

En este apartado analizamos las brechas de uso de género, a la luz de la clase social de las personas, y las brechas de uso según la edad, teniendo como variable de corte la clase social del hogar, y con el marco de las brechas digitales de clase presentadas en el apartado anterior.

El supuesto que subyace a la forma de construcción de los datos aquí presentados es que la clase tiene un poder explicativo relevante, en tanto la desigual posición en la estructura social genera desigual acceso a los recursos que se disputan en la sociedad, y las TIC son uno de esos. Ahora bien, sobre la base de la teoría mencionada, este factor se solapa con una serie de múltiples variables, entre las cuales el género y la edad se constituyen como centrales, y por eso las analizamos en conjunto. Asimismo, el contexto pandémico llevó al interior del hogar tareas que antes estaban fuera, por lo cual suponemos que la relación con las tecnologías digitales se transformó en tanto se transformaron roles y/o actividades por género y edad.

En el cuadro 9.1, para el año 2020, podemos observar que son las mujeres de todas las clases sociales quienes más utilizan el teléfono móvil frente a los hombres (excepto en la clase trabajadora no manual de rutina, en la que hombres y mujeres presentan el mismo porcentaje). Las mujeres también utilizan en mayor medida internet y la computadora, excepto en la clase trabajadora no manual.

Cuadro 9.1. Porcentaje de personas que utilizan TIC según clase y sexo, desagregado por año

		Uso de....					
		Internet		PC		Móvil	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
I+II. Clase de servicios	Varón	98,1%	98,7%	77,0%	76,5%	99,3%	99,4%
	Mujer	97,9%	99,4%	77,0%	79,9%	99,6%	99,7%
IIIa + IIIb. Trabajadores/as no manuales de rutina	Varón	94,5%	96,2%	62,2%	65,5%	98,6%	98,7%
	Mujer	95,5%	95,5%	61,4%	64,6%	98,2%	98,7%
IVa+IVb. IVa+IVb. Pequeños/as propietarios/as con/sin empleados	Varón	81,9%	86,5%	32,8%	26,7%	93,7%	94,5%
	Mujer	87,3%	88,5%	36,0%	33,3%	95,8%	95,7%
V+VI. Trabajadores/as manuales calificados/as	Varón	84,8%	86,6%	28,2%	26,0%	95,7%	95,0%
	Mujer	84,7%	94,1%	40,9%	35,2%	95,5%	98,5%
VIIa. Trabajadores/as manuales no calificados/as	Varón	80,9%	85,2%	26,3%	19,6%	91,8%	94,3%
	Mujer	80,1%	89,4%	23,3%	20,9%	93,6%	96,9%

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto PISAC Covid-19 n° 14.

Más allá de estas tendencias identificadas “en favor de las mujeres”, si bien tanto las mujeres de clase trabajadora semicalificadas o no calificadas como las de clase de servicios utilizan en mayor medida que los hombres, por ejemplo, la computadora, presentan porcentajes muy desiguales: en 2020 un 20,9% las primeras y un 79,9% las segundas.

En segundo lugar, agregamos la variable edad a nuestro análisis. A nivel regional, los datos indican que los grupos etarios que tienen menor conectividad “son los de los niños de 5 a 12 años y el de las personas adultas mayores de 65 años, mientras que los más conectados son los grupos etarios de 21 a 25 años y de 26 a 65 años” (Cepal, 2020). Otros estudios en países del Norte Global indican que la edad es una variable explicativa relevante sobre el tipo de uso (Yates, Kirby y Lockley, 2015). Sin embargo, la edad interactúa con otros ejes de la desigualdad. ¿Qué sucede al evaluar los porcentajes de uso de distintos grupos etarios a la luz de las brechas de clase en la Argentina?

Una de las medidas que más afectó a las niñas, niños y adolescentes fue el cierre de las escuelas y la implementación de educación en línea. Es de esperar que sean un grupo etario que ha aumentado el uso de tecnologías digitales en 2020.

Los datos presentados (cuadro 9.2) muestran que, en 2020, esa franja etaria en todas las clases aumentó el porcentaje de uso del teléfono móvil y de internet, y que esta última tecnología fue la más utilizada. Sin embargo, los porcentajes son diferentes según la clase social. No solo hay una tendencia general a disminuir el porcentaje de uso a medida que se desciende en el esquema de clases,⁹⁰ sino que los principales aumentos de 2019 a 2020 los registran las niñas, niños y adolescentes de la clase trabajadora manual no calificada. A su vez, en la mayoría de las clases utilizan en menor medida el teléfono móvil e internet que el grupo etario de 45 a 59 años. La excepción se produce en la clase trabajadora manual no calificada, en la cual utilizan internet en mayor medida que los adultos de esa franja etaria.

90 Considerando a la clase pequeña propietaria o cuenta propia, la trabajadora manual tanto calificada como no calificada como un bloque que presenta porcentajes similares pero menores a la clase de servicios y la clase de trabajadores no manuales.

Cuadro 9.2. Porcentaje de personas que utilizan TIC según clase social del hogar y edad, desagregado por año.

		PC		Internet		Móvil	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
I+II. Clase de servicios	Menor de 18 años	63%	71%	90%	92%	81%	86%
	18 a 29	69%	69%	92%	92%	92%	91%
	30 a 44	65%	68%	88%	89%	84%	87%
	45 a 59	70%	73%	93%	95%	92%	94%
	60 y más	61%	58%	84%	87%	88%	92%
IIIa + IIIb. Trabajadores/as no manuales de rutina	Menor de 18 años	49%	57%	83%	89%	79%	82%
	18 a 29	56%	53%	87%	89%	89%	90%
	30 a 44	54%	57%	84%	90%	83%	87%
	45 a 59	56%	60%	87%	92%	93%	93%
	60 y más	39%	42%	77%	79%	87%	87%
IVa+IVb. Pequeños/as propietarios/as con/sin empleados	Menor de 18 años	37%	34%	78%	82%	75%	78%
	18 a 29	39%	35%	80%	80%	83%	84%
	30 a 44	36%	30%	79%	84%	80%	81%
	45 a 59	41%	37%	82%	84%	88%	88%
	60 y más	30%	28%	69%	71%	83%	79%
V+VI. Trabajadores/as manuales calificados/as	Menor de 18 años	30%	29%	74%	83%	73%	78%
	18 a 29	28%	25%	75%	79%	80%	80%
	30 a 44	34%	30%	77%	82%	78%	81%
	45 a 59	30%	31%	78%	84%	87%	89%
	60 y más	23%	19%	62%	71%	81%	80%
VIIa. Trabajadores/as manuales no calificados/as	Menor de 18 años	24%	19%	71%	82%	72%	81%
	18 a 29	23%	22%	73%	84%	79%	86%
	30 a 44	25%	25%	75%	83%	78%	84%
	45 a 59	22%	25%	72%	80%	82%	89%
	60 y más	17%	19%	61%	76%	78%	86%

Fuente: EPH-Indec procesada en el marco del proyecto Pisac Covid-19 n° 14.

Por otro lado, en 2020, el uso de la PC en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años aumenta únicamente en la clase de servicios y la intermedia; en las demás clases, disminuyen. Los porcentajes de uso de PC también son menores a medida que se desciende en el esquema de clases, y presentan brechas más elevadas que en el caso de internet y el teléfono móvil.

Por último, queremos centrarnos en el grupo etario de personas mayores de 59 años, que suele considerarse menos familiarizado con el uso de las tecnologías digitales. En todos los años y para todas las clases, los adultos de 60 años o más utilizan en mayor medida el teléfono móvil, en

segundo lugar, internet y por último la PC. De 2019 a 2020 los principales aumentos se presentan en el uso de internet, sobre todo en las clases ubicadas en las posiciones menos aventajadas, y llegan a valores elevados de 15 puntos porcentuales en la clase trabajadora manual no calificada. Los porcentajes de uso de internet en ese grupo etario, para 2020, son menores a medida que se desciende en el esquema de clases hasta llegar a las personas que habitan hogares de clase trabajadora calificada, donde comienzan a aumentar otra vez. Con el uso del teléfono móvil sucede algo similar; los porcentajes descienden en el esquema de clases hasta llegar a la clase pequeña propietaria y a partir de allí vuelven a elevarse. El uso de la PC tiende a disminuir y si aumenta lo hace en un máximo de los 3 puntos porcentuales. Asimismo, presenta brechas de clase mucho más pronunciadas que las apreciadas en las otras tecnologías. Al comparar con los adultos más jóvenes, encontramos que utilizan en menor medida la PC en todas las clases sociales, internet también en menor medida en casi todas las clases, mientras el uso del teléfono móvil presenta valores similares e incluso mayores a los de los adultos más jóvenes.

CONCLUSIONES

Consideramos que las desigualdades digitales son múltiples, que los estudios sobre la temática se han ido corriendo de los análisis exclusivamente sobre acceso y han incorporado nuevas dimensiones como los usos diferenciados y los beneficios alcanzados. Sin embargo, sumar dimensiones de análisis no vuelve irrelevante comprender qué sucede con el acceso, ya que tiene implicancias en el uso y los tipos de resultados que se pueden obtener de las tecnologías digitales. Como evidenciamos, los tipos de acceso a las TIC no se distribuyen de manera equitativa en todos los hogares, sino que se generan grupos desiguales en términos de oportunidades de dispositivos. Por otra parte, nuestras fuentes de datos no nos han permitido analizar otros aspectos del acceso material, como el que se relaciona con los medios necesarios para el mantenimiento de las tecnologías digitales, los equipos complementarios, la calidad de internet, de los dispositivos y la ubicuidad del acceso.

Si bien gran parte de los estudios sobre desigualdades digitales las indagan en vinculación con factores sociodemográficos y socioeconómicos, varios autores resaltan que es necesario seguir profundizando en el análisis sistemático de las desigualdades digitales en relación con las

teorías de la estratificación, las desigualdades y las clases sociales. En ese sentido, este capítulo pretende sumar un aporte empírico desde el caso argentino. Nuestro trabajo evidenció lo productivo que resulta incorporar la variable clase social, ya que permite reconocer especificidades relacionadas con los hogares insertos en estructuras socioproductivas y ofrecer la descripción de una base estructural a partir de la cual seguir pensando. A su vez, el análisis comparativo de 2019-2020 reconstruyó una temporalidad que se vio influida por la pandemia y pretendió comprender las reconfiguraciones que pudo haber producido la crisis sanitaria, económica y social.

Logramos identificar brechas digitales de acceso y uso entre hogares de diferentes clases sociales, las dinámicas y tendencias propias de los diferentes tipos de tecnologías y el impacto desigual que ha tenido la pandemia de covid-19 en términos de mejorar el acceso. Se evidencia, principalmente, una tendencia a la reducción de la brecha en relación con el acceso a internet. Lo que quiere decir que las clases que se ubican en las posiciones con menos ventajas asociadas han ido incorporando internet en sus hogares y utilizado en mayor medida los teléfonos móviles. Las clases de servicios e intermedias se benefician en el acceso y la utilización de la computadora.

Sobre la base de los datos, conformamos grupos desiguales, según el tipo de acceso y las clases sociales. De acuerdo con ese análisis, nos preguntamos: ¿el tipo de tareas realizadas por los ocupados de cada clase determina cierta forma de acceso y pautas de uso de determinadas tecnologías? En una sociedad basada en el conocimiento y la información es esperable que las tareas de mayor calificación impliquen la necesidad de mayores competencias tecnológicas, que esas tareas sean más valoradas en el mercado de trabajo y que la capacitación en el ámbito laboral también sea mayor en esas áreas. Según Van Dijk (2020), en términos históricos, fueron los trabajos de oficina y las posiciones directivas los primeros en incorporar computadoras a sus ámbitos laborales en la década del noventa. En la actualidad, las tecnologías digitales básicas (internet y computadora) son elementos necesarios para los trabajos administrativos, y los trabajadores manuales y no calificados son los que tienen menor acceso.

Por ende, serían las personas que realizan tareas de mayor complejidad y calificación las que tienen mayor acceso y uso de las tecnologías digitales y presentan mayores habilidades digitales que puedan extenderse a otros ámbitos personales. Es decir, podemos pensar que la clase socioocupacional estaría determinando cierto tipo de acceso y uso, que

en el hogar se transformaría en mayores oportunidades para todos sus miembros en general y para otras actividades que exceden lo laboral. Asimismo, es un proceso que se retroalimenta, ya que lo más probable es que para acceder a trabajos que ofrezcan mayores oportunidades de acceso y uso a las tecnologías digitales se necesite tener previamente un buen nivel de acceso, uso y habilidades digitales. La clase socioocupacional también suele estar relacionada con el nivel educativo y el ingreso. Para futuras investigaciones, estas vinculaciones deberían ser analizadas con mayor detenimiento, ya que son variables incluidas de manera constante en los estudios de desigualdad digital.

En relación con la pandemia, los datos a nivel internacional demuestran que la adopción de internet se ha acelerado durante 2020.⁹¹ Es probable que las necesidades de equipamiento en los hogares para tareas laborales, sumadas a los precios elevados de las computadoras, hayan generado una mayor incorporación de computadoras en las clases mejor posicionadas en la estructura social. Por el contrario, a medida que se desciende en la estructura de clases la computadora pierda relevancia y aumenta la incorporación de internet y el *smartphone* para otras actividades que fueron digitalizadas a partir de la crisis sanitaria. Sin embargo, con los datos que tenemos no es posible observar los tipos diferenciales de uso (ej. entretenimiento, educación o actividades laborales) según clase social. No nos es posible observarlo con los datos disponibles, pero es muy probable que puedan encontrarse tendencias asociadas a estilos de vida, patrones, estrategias, y hábitos de producción y reproducción social.

En sentido complementario, es esperable que las diferencias en el acceso físico y material impacten en el tipo de uso y las apropiaciones que se puedan realizar en cada caso. Como sostienen ciertos organismos internacionales, las brechas digitales se entrelazan con el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, la salud y la información. En tiempos de educación en línea, ¿es lo mismo tener acceso a uno o a varios dispositivos en un hogar, o realizar las clases y tareas desde un teléfono móvil que desde una computadora? ¿Las funcionalidades y potencialidades son las mismas? ¿Qué beneficios se obtienen del uso de

91 En 2020 el número de usuarios creció un 10,2%, el mayor aumento en una década, impulsado por los países en desarrollo, donde el uso de internet aumentó 13,3%. En 2021 ha vuelto a un más modesto 5,8%, similar a las tasas anteriores a la crisis (ITU, 2021).

las tecnologías digitales, qué grupos los están aprovechando en mayor medida y por qué?

En el análisis sobre el uso incorporamos las variables de género y edad, como categorías que se intersecan con la clase social. Al centrarnos en las brechas de género, observamos que son las mujeres de todas las clases sociales las que presentan tendencias favorables en la utilización de las TIC frente a los hombres. Sin embargo, las desigualdades entre clases son notorias. Es probable que una mujer de la clase de servicios utilice en mayor medida una computadora en su trabajo que una mujer trabajadora manual no calificada como, por ejemplo, una trabajadora que realiza tareas de limpieza.

Por otro lado, también se presentan tendencias diferenciadas según la edad. Los niños, niñas y adolescentes de todas las clases utilizan en mayor medida internet, mientras los adultos de 60 años o más usan en mayor medida el teléfono móvil. Sin embargo, ambas franjas etarias tienden a aumentar el uso de internet. Los principales aumentos se presentan en las clases manuales, sobre todo en la clase trabajadora no calificada. Cabría preguntarse si la pandemia tuvo para esta clase social un mayor impacto en la necesidad de modificar sus prácticas e incorporar la utilización de internet en sus vidas cotidianas y, si ha sido así, por qué. Si nos centramos en el uso de la PC, las brechas de clase son mucho más pronunciadas entre los grupos etarios analizados, aspecto que probablemente esté asociado al acceso del hogar según la clase.

Por último, en futuras investigaciones sería relevante incorporar la perspectiva teórica de la heterogeneidad estructural, para seguir indagando en procesos estructurales que delimitan la desigualdad digital, teniendo en cuenta que uno de los componentes de la heterogeneidad estructural es el acceso diferenciado a tecnología moderna. Un análisis sobre el impacto de la clase social individual y del hogar, en clave de la heterogeneidad estructural, sobre la brecha digital y los condicionantes de uso de las TIC podría aportar nueva claridad para el examen de nuestras desiguales sociedades desde una dimensión central para la construcción de ciudadanía actual.

Epílogo

Las páginas que nos preceden han puesto en evidencia, a partir de la construcción de información estadística bajo un enfoque teórico-metodológico compartido, el fuerte y desigual impacto que tuvo la pandemia de covid-19 sobre casi todos los indicadores sociales y laborales y, en consecuencia, sobre las condiciones de bienestar y de reproducción de los hogares. Las limitaciones a la circulación de las personas durante las diversas fases de aislamiento y distanciamiento social provocaron transformaciones en la demanda de fuerza de trabajo, de bienes y servicios, pero también en la oferta. Los requerimientos de cuidados se colocaron en el centro de la escena ante la falta de disponibilidad de los servicios a los que recurren las familias para el cuidado de las personas menores de edad y de los adultos mayores, así como de quienes necesitan atenciones especiales. La necesidad de internalizar en el hogar múltiples actividades productivas y reproductivas tensó la vida cotidiana de las familias, con un peso particular sobre las mujeres. En síntesis, de un día para otro se vieron trastocadas las dimensiones centrales de la reproducción social: el mercado de trabajo y los cuidados.

Este libro aportó elementos para comprender cómo estos fenómenos —que, sin duda, se han verificado en casi todos los países del mundo— se procesaron en el marco de una sociedad atravesada por condiciones de fragmentación estructural. Las restricciones de movilidad impuestas como parte de las políticas sanitarias afectaron en forma directa el desempeño del mercado laboral, como se señala en el capítulo 2, a cargo de Eduardo Donza. Pero lo hicieron con mayor ímpetu sobre aquellos puestos del sector microinformal y, en menor grado, sobre los empleos de menor calificación del sector formal, que no podían realizarse de forma remota. La caída en la demanda de empleo, el efecto desaliento concomitante y el temor al contagio, tuvieron como resultado que la tasa de desempleo —que suele ser un indicador clave del mercado de trabajo— dejase de representar de manera adecuada la dinámica laboral, dado el

pasaje a una inactividad forzada de una porción importante de la fuerza de trabajo.

Si bien la dinámica señalada afectó a todas las regiones del país, los impactos observados no fueron similares. Como se exhibió en el capítulo 3, a cargo de María Albina Pol, Valentina Ledda y Lucía Bagini, la contracción de los niveles de actividad fue más fuerte durante el primer año de la pandemia en aquellas regiones con mayor peso estructural del sector informal (como el NOA y el NEA) y en las que se aplicaron las restricciones más severas a la circulación (como en el GBA). La dinamización de estas regiones se dio, de manera complementaria, por un incremento de la participación relativa del sector informal y el empleo desprotegido, lo que reforzó la heterogeneidad regional que caracteriza a nuestro país.

Esta situación puede ser comprendida bajo la idea de la consolidación de la subutilización absoluta de fuerza de trabajo. Este proceso no se explica solo por la irrupción de la pandemia, sino que se inserta, como se sostuvo desde la introducción de este libro, en un proceso regresivo iniciado con la crisis económica de 2018, del que la pandemia parece constituir un nuevo escalón. La subutilización de fuerza de trabajo se expresa en las formas de una mayor inactividad forzada (desaliento), consolidación de la informalidad de subsistencia (actividades en el sector informal de muy bajos ingresos), aumento del empleo de asistencia (bajo programas de empleo) y desocupación abierta. Sin duda, el efecto observado en 2020 no fue mayor por las limitaciones de los instrumentos habituales para capturar los impactos depresores sobre los niveles de actividad. La reactivación de 2021 parece haber puesto un límite a las tendencias previas, aunque partiendo de un deterioro muy severo, como se observa en este libro.

¿Cómo impactó este escenario en el bienestar económico de los hogares? Las evidencias presentadas permiten concluir que los ingresos laborales se vieron profundamente afectados durante el período de vigencia del ASPO, como resultado de las restricciones a la movilidad, sus consecuencias sobre las horas trabajadas y dada la imposibilidad de muchas actividades de reconvertirse a modalidades virtuales y/o remotas. En este marco, distintos capítulos del libro aportaron evidencia de que los puestos del sector formal y aquellos con mayores calificaciones tuvieron más estabilidad y continuidad de ingresos. El resultado global de la irrupción de la pandemia y de las medidas de aislamiento se traduce en una gran pérdida de ingresos para todos los sectores, pero con mayor intensidad relativa en el sector microinformal (incluso cuando la pérdida de los puestos de peor calidad induce una “mejora” en los indicadores agrega-

dos de este sector). La consecuencia es una acentuación de las brechas estructurales en un mercado laboral fragmentado, que parecen persistir más allá de recuperaciones coyunturales.

Precisamente, el deterioro del mercado de trabajo fue el factor explicativo principal del empeoramiento de la distribución del ingreso. En el capítulo 4, Ramiro Robles y María Noel Fachal documentaron que entre 2019 y 2020 aumentó de forma importante la pobreza monetaria, debido a la contracción del ingreso por receptor laboral y del número de ocupados de los hogares, en particular en los deciles inferiores de la estructura socioeconómica. Al mismo tiempo, la ampliación de las brechas de ingreso entre quintiles deja en evidencia el carácter regresivo de la crisis económica y sanitaria. En este contexto, como se evidenció en los capítulos 5 (de Miguel Oliva, Diego Masello, Martina Zubarán, Rodrigo Alejandro Segovia y Nara Alvarez) y 6 (de Santiago Poy y Camila Alfageme), aumentó la pobreza por ingresos entre los trabajadores ocupados y los trabajadores del sector informal tuvieron mayor probabilidad que los demás de entrar en la pobreza a partir de la irrupción de la pandemia.

Las intervenciones estatales implementadas por el gobierno argentino para mitigar los efectos de la pandemia en el mercado de trabajo y la distribución del ingreso parecen dejar dos conclusiones. Por un lado, las medidas dirigidas a proteger los empleos de los sectores formales (en particular, el ATP) tuvieron un efecto positivo para alcanzar ese cometido, lo que se evidencia en la mayor estabilidad de ese sector. En la misma línea se comportó el sostenimiento del empleo público. Como reverso, se agudizó la brecha estructural con el sector informal del mercado de trabajo, en términos de ocupación y de remuneraciones. Esto evidencia el papel “modelador” (aunque no necesariamente reductor) de la desigualdad por parte de la intervención del Estado durante la pandemia. Por otro lado, la implementación de medidas de asistencia, como los bonos especiales para destinatarios de la AUH, jubilados y pensionados, o el IFE, tuvieron un importante efecto de amortiguación sobre las condiciones de vida. Como se destacó en el capítulo 4, el comportamiento de la desigualdad y la pobreza hubiese sido dramáticamente distinto en 2020 sin la mediación de estas herramientas: en el momento más severo del ASPO, se hubiese registrado una tasa de pobreza casi 12 pp superior y un Gini casi 16 pp mayor al observado. En el caso de las personas ocupadas, como se documentó en el capítulo 5, de no mediar las transferencias se habría verificado una tasa de pobreza casi 8 pp más alta. Este componente destaca el papel “moderador” de la desigualdad que tuvo la intervención social estatal en el singular contexto aquí analizado.

Así, durante el período más severo del ASPO las tasas de indigencia y pobreza alcanzaron niveles similares a los que se registraron casi tres lustros atrás (entre 2005 y 2007). A pesar de que la economía registró una importante recuperación durante 2021 que compensó la caída del PBI de 2020, los resultados en materia de condiciones de vida no fueron tan lineales. De acuerdo con las evidencias presentadas en este libro, al menos durante los primeros tres trimestres del año no había indicios de una fuerte reducción de los niveles de pobreza e indigencia con respecto al promedio de 2020. Esto se habría debido a un doble proceso: la corrosión de ingresos laborales resultante de la inflación (que amortiguó el efecto positivo de una “normalización” de la participación de los hogares en el mercado de trabajo) y la eliminación de los programas de sostenimiento de ingresos que se habían implementado durante la pandemia.

La pandemia colocó de manera inédita en el centro de la escena a los hogares y las dinámicas familiares. Como se exhibe en el capítulo 7, de Jéscica Lorena Pla, Manuel Riveiro y Eugenia Dichiera, las condiciones de estabilidad y seguridad económica se distribuyeron de manera desigual en la estructura social, al tiempo que las clases más aventajadas tuvieron más capacidad de continuar con sus actividades laborales, al trasladarlas a una modalidad virtual o remota en la propia vivienda. Por consiguiente, la dinámica del mercado de trabajo y la distribución del ingreso –discutida previamente– acentuó clivajes en las capacidades de reproducción social de las distintas clases socio-ocupacionales. Pero la dimensión económica de la reproducción social no agota el fenómeno, y el análisis presentado en el capítulo 8 por Gabriela Gómez Rojas, Danila Borro, Sofía Jasín y Manuel Riveiro permitió exhibir la relevancia adquirida por la cuestión de la distribución del trabajo doméstico y de cuidados durante la pandemia. Las mayores desigualdades en la distribución de tareas de cuidado se dieron en los hogares ubicados en lo más bajo de la estructura socio-ocupacional. Las mujeres de estos sectores vieron incrementar más intensamente las demandas de cuidado sin que se democratice la distribución de tareas. En cambio, aquellos hogares cuyos integrantes pudieron realizar *home office* y tenían mayor nivel educativo son los que durante la pandemia presentaron la mayor probabilidad de alcanzar una distribución más democrática del trabajo doméstico y de cuidados.

En el mismo sentido, el proceso pandémico reveló la desigualdad de recursos con los que contaron los hogares para encarar una “virtualización” forzosa. Durante los momentos más álgidos de aislamiento social, las TIC se usaron para trabajar, acceder a la educación y solicitar consul-

tas médicas; pero también para obtener permisos de circulación y, más adelante, para acceder a la vacunación contra el covid-19. La evidencia presentada en el capítulo 9, de Silvana Galeano Alfonso y Jéssica Lorena Pla, mostró que la centralidad de las TIC se correspondió con fuertes desigualdades preexistentes que limitaron las capacidades de los hogares más desaventajados de ejercer múltiples derechos. Si bien existe una tendencia a la reducción de la brecha en el acceso entre clases, las desigualdades por grupos sociales se mantienen y deben tenerse en cuenta para el diseño futuro de las políticas públicas.

* * *

Pasado lo peor de la crisis económico-sanitaria, durante 2021, en un contexto de avances importantes en los procesos de vacunación, con reducción en pérdidas de vidas por la pandemia, sin duda resultó una buena noticia que la economía emprendiera una fuerte reactivación con recuperación del empleo. Sin embargo, como hemos podido apreciar, esto no ha sido suficiente para revertir el deterioro social generado por la pandemia y la crisis precedente que transitaba nuestro país. En efecto, a pesar de la fuerte recuperación, la crisis social continúa, con tasas de precariedad, informalidad y niveles de pobreza e indigencia muy elevados.

Los factores que parecen explicar la pobreza crónica, las persistentes brechas distributivas y la marginalidad estructural que afectan a la sociedad argentina desde hace décadas son más profundos, incluso en gran medida independientes de la inestabilidad socioeconómica que generan situaciones particulares de *shock*, sean de origen externo o interno. De acuerdo con nuestro enfoque, la explicación debe buscarse en el desequilibrado sistema de acumulación del capital, que estratifica la reproducción social de la vida, segmenta el funcionamiento de las instituciones e impone un modelo de gestión política del Estado incapaz de salir de la trampa del “desarrollo del subdesarrollo”.

Desde esta perspectiva, esta obra nos ha permitido establecer una serie de conjeturas según las cuales la pandemia constituyó un *shock* externo de claros efectos regresivos sobre las condiciones de reproducción social, que se han visto hasta el momento poco permeables a recomponerse pasada la pandemia. Sus efectos habrían profundizado las desigualdades emergentes de la heterogeneidad productiva, la segmentación de los mercados de trabajo y un sistema fragmentario de protección y seguri-

dad social. En este sentido, cabe formular algunas conclusiones parciales y mencionar líneas de investigación pertinentes para profundizar:

- La pandemia de covid-19 es un fenómeno de alcance global, pero ha operado en nuestro país a través del tamiz que imponen sus particulares condiciones macroeconómicas, distributivas, institucionales y sociales. Al respecto, se ha podido ver, a la manera de un “experimento natural”, cómo se desarrolló una particular estructura social ante un *shock* externo.
- La pandemia vino a acentuar un proceso de deterioro distributivo e informalización de la estructura social del trabajo, que en mayor o menor grado atravesó a todos los sectores sociales. Durante los años 2019-2021 hemos asistido a una fuerte acentuación de los procesos de marginación socioeconómica que se observan hace al menos cuatro décadas en nuestro país. Si bien la intensidad con que se recrean los excedentes de población es variable en el tiempo, parece persistir una dinámica sistémica que los genera.
- El proceso subyacente detrás de estos procesos de marginación socioeconómica es la heterogeneidad de la estructura productiva, que configura un mercado de trabajo crecientemente fragmentado y da lugar a dinámicas de reproducción socioeconómica desiguales. El *shock* de la pandemia puso en evidencia descarnada la relación entre la segmentación estructural del mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las condiciones de vida.
- Aunque está en curso una reactivación económica, los resultados alcanzados son insuficientes en materia de condiciones de vida. El balance provisional es que está en camino una parcial recomposición de los efectos más regresivos de la pandemia, pero incluso en ese caso el balance sería el de una sociedad altamente fragmentada y empobrecida. En efecto, a pesar de que se está recuperando el nivel de empleo, no solo en el sector formal, los niveles de pobreza resultan menos elásticos a la recuperación. Esto es el resultado del proceso inflacionario que estamos atravesando y de que una parte de la población activa ha sido desplazada a actividades de baja productividad.

La pandemia no nos dejó mejores y, por el contrario, cabe argumentar que nos encontramos ante un escenario social tan fragmentado y desigual como el que teníamos dos años atrás. Las evidencias presentadas en este libro han mostrado que las transformaciones regresivas a las que asistimos no pueden explicarse solo en el marco de la irrupción de la pandemia. Deben explicarse en contextos históricos, económicos y políticos de mayor alcance. En todo caso, la pandemia se constituyó como un catalizador que puso de manifiesto la fragilidad en la que reproduce su vida una gran parte de los hogares de nuestro país. En esta clave tanto teórica como empírica, cabe postular que la dinámica del desarrollo periférico argentino parece indisociable de la recreación sostenida de las múltiples pobreza que hoy atraviesan la estructura social. Y si esta conclusión pudiese fungir a la vez como una advertencia sobre el horizonte pospandemia, cabe recordar aquella prevención de José Nun acerca de que el mayor éxito que pueden alcanzar las advertencias en las ciencias sociales es el de inspirar soluciones para evitar que se cumplan.

AGUSTÍN SALVIA, SANTIAGO POY, JÉSICA LORENA PLA
Buenos Aires, abril de 2022

Referencias

- Abeles, M.; Lavarello, P. y Montagu, H. (2013), “Heterogeneidad estructural y restricción externa en la economía argentina”, en R. Infante y P. Gerstenfeld (eds.), *Hacia un desarrollo inclusivo. El caso de la Argentina*, Santiago de Chile, Cepal-OIT.
- (2018), “Brechas tecnológicas y restricción externa en Argentina durante los tempranos 2000: un análisis heurístico”, *Semestre Económico*, 21(47), pp. 123-146.
- Acevedo, I.; Castellani, F.; Lotti, G. y Székely, M. (2021), *Informalidad en los tiempos del covid-19 en América Latina. Implicaciones y opciones de amortiguamiento*, BID.
- Acosta, L. y Jorrat, J. (1991), “Escala de prestigio ocupacional”, *Desarrollo Económico*, 120(30), pp. 120-145.
- Agüero, A.; Bustelo, M. y Viollaz, M. (2020), *¿Desigualdades en el mundo digital? Brechas de género en el uso de las TIC*, BID.
- Águila, N. y Kennedy, D. (2016), “El deterioro de las condiciones de reproducción de la familia trabajadora argentina desde mediados de los años setenta”, *Realidad Económica*, 297, pp. 93-123.
- Alsan, M.; Chandra, A. y Simon, K. (2021), “The Great Unequalizer: Initial Health Effects of covid-19 in the United States”, *Journal of Economic Perspectives*, 35(3), pp. 25-46.
- Anses (2020), *Acceso al IFE. Ingreso Familiar de Emergencia*, Buenos Aires, disponible en <n9.cl/ogt9>.
- Arriagada, I. y Sojo, A. (2012), “Las clases medias en América Latina: algunas conjeturas desde la perspectiva de género”, *Pensamiento Iberoamericano*, 10, pp. 221-244.

- Arruzza, C. y Bhattacharya, T. (2020), “Teoría de la reproducción social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista”, *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda*, 16, pp. 37-69.
- Baer, G.; Benítez, N.; Contartese, D. y Schleser, D. (2011), “El trabajo inmigrante en una etapa de recuperación del empleo e integración sudamericana”, en OIT, *La inmigración laboral de sudamericanos en Argentina*, Buenos Aires, OIT, pp. 55-73.
- Bárcena, A. y Prado, A. (2016), *El imperativo de la igualdad. Por un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe*, Buenos Aires, Siglo XXI-Cepal.
- Bargados, A. (2021), “Impacto del covid-19 en las pymes argentinas”, *Trabajo y Sociedad*, 22(36), pp. 123-145.
- Batthyány, K. (2009), “Autonomía de las mujeres y resistencias a la división sexual del trabajo al interior de las familias”, seminario regional “Las familias latinoamericanas interrogadas. Hacia la articulación del diagnóstico, la legislación y las políticas”, Santiago de Chile, Cepal.
- (2020a), “Covid-19 y la crisis de cuidados”, en B. Bringel y G. Pleyers (eds.), *Alerta global*, Buenos Aires, Clacso.
- (comp.) (2002b), *Miradas latinoamericanas a los cuidados*, México, Siglo XXI-Clacso.
- Beccaria, L. y Maurizio, R. (2012), “Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010”, *Desarrollo Económico*, 52(206), pp. 205-228.
- (2020), “Los impactos inmediatos de la pandemia. Cuando la diferencia es entre quienes continúan percibiendo ingresos y quienes lo perdieron”, *Alquimias Económicas*, 24 de abril.
- Benitez, J.; Courtemanche, C. y Yelowitz, A. (2020), “Racial and Ethnic Disparities in Covid-19: Evidence from Six Large Cities”, *NBER Working Paper*, 27 592.

- Benítez Larghi, S.; Moguillansky, M.; Lemus, M. y Welschinger Lascano, N. (2013), TIC, clase social y género. La constitución de desigualdades sociales y digitales en *las juventudes argentinas*, X Jornadas de Sociología de la UBA: 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI, 1 al 6 de julio de 2013, Buenos Aires, en Memoria Académica, disponible en: <www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.7537/ev.7537.pdf>
- Benza, G. y Kessler, G. (2020), *La ¿nueva? estructura social de América Latina. Cambios y persistencias después de la ola de gobiernos progresistas*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- Bertranou, F.; Casanova, L.; Jiménez, M. y Jiménez, M. (2013), “Informalidad, calidad del empleo y segmentación laboral en Argentina”, *Documento de Trabajo*, n° 2, OIT, Buenos Aires, Oficina de País de la OIT para la Argentina.
- Bidaseca, K.; Aragão Guimarães Costa, M.; Brighenti, M. y Ruggero, S. (2020), *Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de covid-19*, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Conicet y Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
- Birdsall, N.; De la Torre, A. y Menezes, R. (2008), *Fair Growth. Economic policies for Latin America's Poor and Middle-Income majority*, Washington DC, Center for Global Development.
- Birdsall, N.; De la Torre, A. y Valencia, F. (2010), “The Washington Consensus: Assessing a damage brand”, *Working Paper*, 213.
- Birdsall, N.; Lustig, N. y McLeod, D. (2013), *Declining inequality in Latin America: some economics, some politics*, en P. Kingstone y D. Yashar (eds.), *Routledge Handbook of Latin American Politics*, Routledge.
- Blank, G. y Groseelj, D. (2015), “Examining Internet Use Through a Weberian Lens”, *International Journal of Communication*, 9, pp. 2763-2783.

- Boffi, S. (2015), “Precariedad laboral y estructura productiva en las regiones argentinas (2003-2013)”, *Avances de Investigación*, 28.
- Bonavida, C. y Gasparini, L. (2020), “Asimetrías en la viabilidad del trabajo remoto. Estimaciones e implicancias en tiempos de cuarentena”, *Revista Económica La Plata*, 16(1), pp. 115-140.
- Bonfiglio, J.; Robles, R.; Salvia, A. y Vera, J. (2021), *Efectos de la pandemia covid-19 sobre la dinámica del bienestar en la Argentina urbana. Una mirada multidimensional acerca del impacto heterogéneo de la crisis tras una década de estancamiento económico (2010-2020)*, Documento Estadístico-Barómetro de la Deuda Social Argentina, Buenos Aires, Educa.
- Bonfiglio, J.; Salvia, A. y Vera, J. (2020), *Deterioro de las condiciones económicas de los hogares y desigualdades sociales en tiempo de pandemia*, Buenos Aires, ODSA-UCA.
- Bornatici, C. y Heers, M. (2020), “Work-Family Arrangement and Conflict: Do Individual Gender Role Attitudes and National Gender Culture Matter?”, *Social Inclusion*, 8(4), pp. 46-60.
- Bull, B. y Robles Rivera, F. (2020), “El covid-19, las élites y el futuro de la economía política de la reducción de la desigualdad en América Latina”, *Revista de la Cepal*, 162, pp. 79-94.
- Cabello, R. (2014), “Reflexiones sobre inclusión digital como modalidad de inclusión social”, VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, 3-5 de diciembre, Ensenada, Argentina.
- CAME (2020), “Producción de la industria pyme”, resultados del mes de mayo 2020, comunicado 20 de junio, Buenos Aires, disponible en <www.redcame.org.ar/sitio/prensa>.
- Canales, A. (2021), “La desigualdad social frente al covid-19 en el Área Metropolitana de Santiago (Chile)”, *Notas de Población*, 111, pp. 13-42.

- Cantó, O.; Gradín, C. y Del Río, C. (2012), “Pobreza crónica, transitoria y recurrente en España”, *Revista de Economía Aplicada*, 20(58), pp. 69-94.
- Carbonetto, D. y Kritz, E. (1983), “El sector informal urbano”, *Socialismo y Participación*, 21, Cedep, Lima.
- Castel, R. (1997), *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado*, Buenos Aires, Paidós.
- Castells, M. J. y Schorr, M. (2015), “Cuando el crecimiento no es desarrollo. Algunos hechos estilizados de la dinámica industrial en la posconvertibilidad”, *Cuadernos de Economía Crítica*, 1(2), pp. 49-77.
- Cecchini, S.; Villatoro, P. y Mancero, X. (2021), “El impacto de las transferencias monetarias no contributivas sobre la pobreza en América Latina”, *Revista de la Cepal*, 134, pp. 7-32.
- CEM (2020), “Situación social y del mercado de trabajo en Argentina. Un análisis del impacto de la pandemia en el segundo trimestre de 2020”, *Documento CEM*, 32, octubre, disponible en <estudiosmetropolitanos.com.ar>.
- Cepal (2010), *La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir*, Santiago de Chile, Cepal.
- (2011), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
- (2012a), *Panorama social de América Latina 2012*, Santiago de Chile.
- (2012b), *Eslabones de la desigualdad. Heterogeneidad estructural, empleo y protección social*, Santiago de Chile.
- (2014), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
- (2016a), *Desarrollo social inclusivo. Una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile.
- (2016b), *La matriz de la desigualdad social en América Latina*, en I Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, Santo Domingo.

- (2016c), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
 - (2017), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
 - (2019a), *Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2019*, Santiago de Chile.
 - (2019b), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
 - (2020), *Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del Covid-19*, Informe especial, agosto, Santiago de Chile, disponible en <www.cepal.org/es/publicaciones/45938-universalizar-acceso-tecnologias-digitales-enfrentar-efectos-covid-19>.
 - (2021a), *Estudio económico de América Latina y el Caribe*, Santiago de Chile.
 - (2021b), *La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad*, Informe Especial Covid-19, n° 9, disponible en <repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46633/5/S2000740_es.pdf>.
 - (2021c), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
 - (2021d), *Seguimiento de la evolución de las medidas covid-19. Argentina*.
 - (2022), *Panorama social de América Latina*, Santiago de Chile.
- CEP-XXI (2020), *Informe de panorama productivo. Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva. Junio 2020*, Buenos Aires, CEP-XXI.
- (2022), *Informe de panorama productivo. Evolución de los principales indicadores de la actividad productiva. Enero 2022*, Buenos Aires, CEP-XXI.
- Chena, P. y Pérez Candreva, L. (2008), “Heterogeneidad estructural en Argentina”, en F. Toledo y J. Neffa (coords.), *Interpretaciones heterodoxas de las crisis económicas en Argentina y sus efectos sociales*, Buenos Aires, Miño y Dávila-CEIL-Piette.
- Cimoli, M.; Porcile, G.; Primi, A. y Vergara, S. (2005), *Cambio estructural, heterogeneidad productiva y tecnología en América Latina*, Santiago de Chile, Cepal.

- Comas, G. y Poy, S. (2020), “Capacidades de subsistencia y estrategias económicas de los hogares durante etapas de expansión y crisis. Una mirada dinámica de la pobreza”, *Revista de La Carrera de Sociología*, 10(10), pp. 35-63.
- Comisión Europea (CE) (2019), “European Economic Forecast”, *European Economy Institutional Papers*, 108, Luxemburgo, disponible en <doi.org/10.2765/3931>.
- Cord, L. J.; Cabanillas, O. B.; Lucchetti, L.; Rodríguez-Castelán, C.; Sousa, L. D. y Valderrama, D. (2014), “Inequality Stagnation in Latin America in the Aftermath of the Global Financial Crisis”, *Policy Research Working Paper*, 7146, Washington DC, World Bank.
- Cortés, F. (2013), “Medio siglo de desigualdad en el ingreso en México”, *Economía UNAM*, 10(29), pp. 12-34.
- (2018), “La relación entre el gasto social y la pobreza a debate”, en F. Cortés (coord.), *Temas de política social de México y América Latina*, México, El Colegio de México-UNAM, pp. 117-155.
- Cortés, F. y Cuéllar, O. (1990), *Crisis y reproducción social. Los comerciantes del sector informal*, México, Flacso-Porrúa.
- Cortés, F. y Salvia, A. (2019), “Introducción. La desigualdad en la distribución del ingreso en Argentina y México”, en F. Cortés y A. Salvia (comps.), *Argentina y México: ¿igualmente desiguales?*, México, Siglo XXI.
- Cortés, R. y Marshall, A. (1991), “Estrategias económicas, intervención social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo”, *Estudios del Trabajo*, 1, pp. 21-46.
- Crettaz, E. (2013), “A State-of-the-Art Review of Working Poverty in Advanced Economies: Theoretical Models, Measurement Issues and Risk Groups”, *Journal of European Social Policy*, 23(4), pp. 347-362, disponible en <doi.org/10.1177/0958928713507470>.
- (2015), “Poverty and material deprivation among European workers in times of crisis”, *International Journal of Social Welfare*, 24(4), pp. 312-323.

- Dalle, P. (2021), “Repensar el desarrollo. Estructura de clases y desigualdades en la doble crisis del retorno neoliberal y la pandemia de covid-19 en Argentina”, presentado en VI Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina, México.
- Danani, C. (2009), “La gestión de la política social: un intento de aportar a su problematización”, en M. Chiara y M. Di Virgilio (eds.), *Gestión de la política social. Conceptos y herramientas*, Buenos Aires, Prometeo, pp. 25-51.
- De Ípola, E. y Torrado, S. (1976), *Teoría y método para el estudio de la estructura de clases sociales*, Santiago de Chile, Programa de Actividades Conjuntas ELAS-Celade (Proelce)-Flasco.
- De Marco, E. (2017), “La revolución de Internet. Los usos beneficiosos y avanzados de Internet como la nueva frontera de la desigualdad digital”, *Panorama Social*, 25, pp. 99-116.
- Delfini, M.; Drolas, A.; Montes Cató, J. y Spinosa, L. (2020), “Lidiando con el trabajo. Impacto del covid-19 sobre el trabajo productivo y reproductivo”, *Revista Trabajo y Sociedad*, 35(21), invierno, pp. 67-82.
- Di Filippo, A. (2009), “Estructuralismo latinoamericano”, *Revista de la Cepal*, 98, pp. 181-202.
- DiMaggio, P.; Hargittai, E.; Celeste, C. y Shafer, S. (2001), “From Unequal Access to Differentiated Use: A Literature Review and Agenda for Research on Digital Inequality”, Russel Sage Foundation, disponible en <www.russellsage.org>.
- Domínguez, M.; Muñiz Terra, L. y Rubilar, G. (2019), “El trabajo doméstico y de cuidados en las parejas de doble ingreso. Análisis comparativo entre España, Argentina y Chile”, *Papers. Revista de Sociología*, 104(2), pp. 337-374.
- Donza, E. (2021), “Situación laboral urbana de la última década”, en *Efectos de la pandemia covid-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana. Una mirada crítica sobre el impacto heterogéneo del actual escenario tras una década de estancamiento económico (2010-2020)*, Buenos Aires, Educa.

- Donza, E.; Philipp, E.; Pla, J.; Salvia, A. y Vera, J. (2008), “Estrategias familiares y políticas públicas en auxilio del aumento de la desigualdad distributiva durante el período de reformas estructurales y la gran crisis de la convertibilidad. Gran Buenos Aires, 1992-2003”, *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, 4, pp. 4-44.
- Donza, E.; Poy, S. y Salvia, A. (2019), *Heterogeneidad y fragmentación del mercado de trabajo (2010-2018)*, Documento de Investigación, Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Buenos Aires, Educa.
- (2021), *Efectos de la pandemia covid-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana. Una mirada crítica sobre el impacto heterogéneo del actual escenario tras una década de estancamiento económico (2010-2020)*, Documento Estadístico-Barómetro de la Deuda Social Argentina, Buenos Aires, Educa.
- Dornbusch, R. y Edwards, S. (1991), “The macroeconomics of populism”, en *The Macroeconomics of Populism in Latin America*, Chicago y Londres, University of Chicago Press, pp. 7-13.
- Durán Heras, M. (2012), *El trabajo no remunerado en la economía global*, Bilbao, Fundación BBVA.
- Dvoskin, N. (2022), “Heterogeneidad estructural, subdesarrollo y dependencia. Los entramados histórico-teóricos del desarrollismo tardío latinoamericano”, *Cuadernos de Economía Crítica*, 8(15), pp. 61-84, disponible en <cec.sociedadeconomiacritica.org/index.php/cec/article/view/280>.
- Eguía, A. y Ortale, M. S. (2004), “Reproducción social y pobreza urbana”, *Cuestiones de Sociología*, 2, pp. 21-49.
- Erikson, R. (1984), “Social class of men, women and families”, *Sociology*, 18(4), pp. 500-514.
- Erikson, R. y Goldthorpe, J. H. (1992), *The Constant Flux. A Study of Class Mobility in Industrial Societies*, Óxford, Clarendon Press.

- Ernst, C. y López Mourelo, E. (2020), *El covid-19 y el mundo del trabajo en Argentina. Impacto y respuestas de política*, Buenos Aires, OIT.
- Ernst, C.; López Mourelo, E.; Pizzicannella, M.; Rojo, S. y Romero, C. (2020), *Argentina. Los retos en las respuestas a la pandemia y sus impactos socioeconómicos*, Panorama Laboral en tiempos de la covid-19, Nota técnica país, OIT, Buenos Aires.
- Esparza-Rodríguez, R.; Martínez-Arroyo, J. y Sánchez-Vargas, A. (2021), “Perfiles socioeconómicos y estructurales del sector informal en la pandemia de la covid-19”, *Nova Scientia*, 13.
- Espina Prieto, M. P. (2007), “Recuperando la ‘cuestión social’. El contexto teórico metodológico del debate y la experiencia cubana”, *Caderno CRH*, 20(50), pp. 213-230.
- Esping-Andersen, G. (1999), *Social Foundations of Post-Industrial Societies*, Nueva York, Oxford University Press.
- Esquivel, V. (2011), “El marco conceptual”, en *La economía del cuidado en América Latina*, PNUD.
- Esquivel, V.; Faur, E. y Jelin, E. (2012), *Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado*, Buenos Aires, IDES.
- Fajnzylber, F. (1996 [1990]), *Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria del desarrollo de América Latina y el Caribe en los años noventa*, Santiago de Chile, Cepal.
- Federici, S. (2013), “La reproducción de la fuerza de trabajo en la economía global y la inacabada revolución feminista”, en *Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas*, Madrid, Traficantes de Sueños.
- Félix, M.; Deledicque, L.; Sergio, A. y Storti, M. (2001), “De cómo evitar pasar de vulnerables a pobres. Estrategias familiares frente a la incertidumbre en el mercado de trabajo”, presentado en XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Antigua, Guatemala.

- Ferreira, F.; Messina, J.; Rigolini, J.; López-Calva, L. F.; Lugo, M. A. y Vakis, R. (2013), *La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina*, Washington DC, Banco Mundial.
- Ffrench-Davis, R. (2015), *Neoestructuralismo y macroeconomía para el desarrollo. Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI*, Santiago de Chile, Cepal.
- Filgueira, F. (2015), “Modelos de desarrollo, matriz del Estado social y herramientas de las políticas sociales latinoamericanas”, en S. Cecchini (ed.), *Instrumentos de protección social. Caminos latinoamericanos hacia la universalización*, Santiago de Chile, Cepal, pp. 49-126.
- Filgueira, C. y Kaztman, R. (1999), *Marco conceptual sobre activos, vulnerabilidad y estructuras de oportunidades*, Montevideo, Cepal.
- Filgueira, C. y Peri, A. (2004), *América Latina. Los rostros de la pobreza y sus causas determinantes*, Santiago de Chile, Cepal-Serie Políticas Sociales n° 54.
- Filgueira, F.; Galindo, L.; Giambruno, C.; Blofiels, M. (2020), *América Latina ante la crisis del covid-19. Vulnerabilidad socioeconómica y respuesta social*, Santiago de Chile, Cepal-Serie Políticas Sociales.
- Finkelievich, S. y Odena, M. B. (2021), “Tecnologías digitales y pandemia: duelo de titanes”, *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 12(22), pp. 71-90.
- Fondo Monetario Internacional (FMI) (2021), *Monitor fiscal. Abril 2021*, Washington DC, FMI, en www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2021/03/29/fiscal-monitor-april-2021.
- Foster, J. (2009), “Una clase de medidas de pobreza crónica”, en T. Addison; D. Hulme y R. Kanbur (eds.), *Dinámica de la pobreza. Perspectivas interdisciplinarias*, Nueva York, Oxford University Press, pp. 59-76.

- Francés García, J. (2009), “Elementos para el estudio de la estratificación social en las sociedades avanzadas: estrategias operativas”, *Obets*, 3, pp. 43-57.
- Fraser, N.; Gutiérrez, R. y Peña-Casas, R. (2011), “Introduction”, en N. Fraser; R. Gutiérrez y R. Peña-Casas (eds.), *Working Poverty in Europe*, Nueva York, Palgrave Macmillan, pp. 1-14.
- Ganzeboom, H. y Treiman, D. (1996), “Internationally Comparable Measures of Occupational Status for the 1988 International Standard Classification of Occupations”, *Social Science Research*, 25, pp. 201-239.
- García, G. V. (2002), *Pensar al tiempo desde las ciencias sociales*, Xalapa, Veracruz, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana.
- Gasparini, L. y Lustig, N. (2011), “The rise and fall of income inequality in Latin America”, *Documento de Trabajo*, n° 118, La Plata, Universidad Nacional de La Plata-Cedlas.
- Gasparini, L.; Cicowiez, M. y Sosa Escudero, W. (2013), *Pobreza y desigualdad en América Latina. Conceptos, herramientas y aplicaciones*, Buenos Aires, Temas.
- Gasparini, L.; Cruces, G. y Tornarolli, L. (2016), “Chronicle of a Deceleration Foretold. Income Inequality in Latin America in the 2010s”, *Revista de Economía Mundial*, 43, pp. 25-46.
- Germani, G. (1963), “La movilidad social en Argentina”, en S. Lipset y R. Bendix, *Movilidad social en la sociedad industrial*, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Goldberg, A. E. (2013), “‘Doing’ and ‘Undoing’ Gender: The Meaning and Division of Housework in Same-Sex Couples”, *Journal of Family Theory and Review*, 5, pp. 85-104.
- Goldthorpe, J. H. (2010), “La clase social y la diferenciación de los contratos de empleo”, en *De la sociología. Números, narrativas e integración de la investigación y la teoría*, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas y Boletín Oficial del Estado, pp. 363-388.

- Goldthorpe, J. H. y Heath, A. F. (1992), *Revised class schema 1992*, Social and Community Planning Research.
- Goldthorpe, J. H. y McKnight, A. (2006), “The economic basis of social class”, en S. Morgan; D. Grusky y G. Fields, *Mobility and Inequality: Frontiers of Research in Sociology and Economics*, Stanford, Stanford University Press, pp. 109-136.
- Gómez Navarro, D. A.; Alvarado López, R. A.; Martínez Domínguez, M. y Díaz de León Castañeda, C. (2018), “La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para su estudio en México”, *Entreciencias. Diálogos en la sociedad del conocimiento*, 6(16), pp. 47-62.
- Gómez Rojas, G. (2009), *Estratificación social, hogares y género. Incorporando a las mujeres*, tesis de doctorado no publicada, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
- (2013), “Clase social, género y división del trabajo doméstico”, en F. Nievas (ed.), *Mosaico de sentidos. Vida cotidiana, conflicto, y estructura social*, Buenos Aires, Estudios Sociológicos Editora.
- Gómez Rojas, G. y Borro, D. (2019), “Articulaciones entre clase y género en el trabajo doméstico y extradoméstico en el Área Metropolitana de Buenos Aires”, *Unidad Sociológica*, 15(4), pp. 19-29.
- Gómez Rojas, G. y Riveiro, M. (2018), “Análisis de validez del esquema de clases sociales de Goldthorpe y colaboradores según género, Argentina urbana”, presentando en el VI Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales, Cuenca, Ecuador.
- Groisman, F. (2011), “Argentina: los hogares y los cambios en el mercado laboral (2004-2009)”, *Revista de la Cepal*, 104, pp. 81-102.
- GSMA (2021), *The Mobile Economy. Latin America 2021*, Londres, GSM Association.
- Gutiérrez, A. B. (2004), *Pobre como siempre. Estrategias de reproducción social en la pobreza*, Córdoba, Ferreyra.

- Helsper, E. J.; Van Deursen, A. J. y Eynon, R. (2015), *Tangible Outcomes of Internet Use. From Digital Skills to Tangible Outcomes project report*, Óxford, Oxford Internet Institute.
- Heredia Zurita, A. y Dini, M. (2021), *Análisis de las políticas de apoyo a las pymes para enfrentar la pandemia de covid-19 en América Latina*, Santiago de Chile, Naciones Unidas.
- Hintze, S. (2004), “Capital social y estrategias de supervivencia. Reflexiones sobre el ‘capital social de los pobres’”, en C. Danani (comp.), *Políticas sociales y economía social. Debates fundamentales*, Buenos Aires, UNGS-Fundación OSDE-Altamira, Colección de Lecturas sobre Economía Social.
- Hoffman, D. L. y Novak, T. P. (1998), “Bridging the racial divide on the Internet”, *Science*, 280, pp. 390-391, disponible en <www.sciencemag.org>.
- Horemans, J.; Marx, I. y Nolan, B. (2016), “Hanging in, but only just: Part-time employment and in-work poverty throughout the crisis”, *IZA Journal of European Labor Studies*, 5(5), pp. 1-19, disponible en <dx.doi.org/10.1186/s40174-016-0053-0056>.
- iClaves-Esade (2021), *Study on post Covid measures to closet the digital divide. Final report*, Body of European Regulators for Electronic Communications (Berec), disponible en <ber.ec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/ber.ec/reports/10076-study-on-post-covid-measures-to-close-the-digital-divide>.
- Infante, R. (2011), “América Latina en el ‘umbral del desarrollo’. Un ejercicio de convergencia productiva”, proyecto Desarrollo Inclusivo, *Documento de Trabajo*, n° 14, Santiago de Chile, Cepal, junio, disponible en <repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/35447/1/Infanteumbraldesarrollo_es.pdf>.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) (2003), *La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina*, Buenos Aires, Indec.

- (2016), *La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina (Metodología Indec n° 22)*, Buenos Aires, Indec.
 - (2018), *Correspondencias entre el CNO-17 y la CIUO-08*, Buenos Aires, Indec.
 - (2020a), *Índice de precios al consumidor, diciembre de 2019*, Informes Técnicos, v. 5, n° 7), Buenos Aires, Indec.
 - (2020b), *Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH), segundo trimestre de 2020*, Informes Técnicos, v. 4, n° 174, Buenos Aires, Indec, disponible en <www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-58>.
 - (2021a), *Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos, segundo semestre de 2020*, Informes Técnicos, v. 5, n° 59, Buenos Aires, Indec, disponible en <www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46>.
 - (2021b), *Informe de avance del nivel de actividad, cuarto trimestre de 2020*, Informes Técnicos, v. 5, n°51, Buenos Aires, Indec, disponible en <www.indec.gov.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-47>.
 - (2021c), *Índice de precios al consumidor, diciembre de 2020*, Informes Técnicos, v. 4, n° 7, Buenos Aires, Indec.
 - (2021d), *Estimador mensual de actividad económica, septiembre 2021*, Informes Técnicos, v. 5, n° 214, Buenos Aires, Indec.
 - (2021e), *Índice de precios al consumidor, noviembre de 2021*, Informes Técnicos, v. 5, n° 226, Buenos Aires, Indec.
 - (2021f), *Informe de avance del nivel de actividad, tercer trimestre de 2021*, Informes Técnicos, v. 5, n° 22, Buenos Aires, Indec.
- International Telecommunication Union (2009), *The World in 2009: ICT Facts and Figures*.
- (2021), *Measuring digital development. Facts and Figures*.
- Isla, A.; Lacarrieu, M. y Selby, H. (1999), *Parando la olla. Transformaciones familiares, representaciones y valores en tiempos de Menem*, Buenos Aires, Flacso-Norma.
- Jacovkis, P.; Masello, D.; Granovsky, P. y Oliva, M. (2020), “La pandemia desnuda nuestros problemas más estructurales”, *Trabajo y Sociedad*, 22(36), enero-junio, pp. 9-28, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes).

- Jiménez, M. (2010), “El empleo informal y la estructura del mercado laboral en las regiones argentinas”, *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, 6, pp. 139-175, en Memoria Académica, disponible en <www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4538/pr.4538.pdf>.
- (2014), “Las condiciones laborales y la segmentación del mercado de trabajo. Un análisis regional en la Argentina”, ponencia en III Jornadas Nacionales sobre Estudios Regionales y Mercados de Trabajo, Universidad Nacional de Jujuy y Red Simel, San Salvador de Jujuy, 4 y 5 de septiembre.
- Jiménez-Bandala, C. A.; Peralta, J. D.; Sánchez, E.; Olvera, I. M. y Aceves, D. A. (2020), “La situación del mercado laboral en México antes y durante la covid-19”, *Revista Internacional de Salarios Dignos*, 2(2), pp. 1-14.
- Kabeer, N.; Razavi, S. y Rodgers, Y. (2021), “Feminist economic perspectives on the covid-19 pandemic”, *Feminist Economics*, 27(1-2), pp. 1-29.
- Kennedy, D.; Pradier, C. y Weksler, G. (2020), “En torno a la diferenciación de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo según atributos productivos. Evidencias preliminares en la Argentina actual (2016-2019)”, *Revista Laboratorio*, 30, pp. 112-137.
- Kessler, G. (2014), *Controversias sobre la desigualdad. Argentina 2003-2013*, Buenos Aires, FCE.
- Lavagna, M. (2020), *EPH. Consideraciones metodológicas sobre el tratamiento de la información del segundo trimestre de 2020*, Buenos Aires, Indec.
- Ledda, V.; Robles, R.; Poy, S. y Salvia, A. (2021), “Procesos sociales estructurales subyacentes a la desigualdad distributiva en la Argentina. Efectos del último ciclo de estancamiento y crisis agravada por la pandemia covid-19 (2014-2020)”, ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, 1 al 3 de diciembre.

- Levy Yeyati, E. y Valdés, R. (2020), “Covid-19 en Latinoamérica: diferencias respecto a las economías desarrolladas”, *International Development Policy*, disponible en <journals.openedition.org/poldev/3532>.
- Lohmann, H. y Crettaz, E. (2018), “Explaining Cross-Country Differences in in-Work Poverty”, en H. Lohmann e I. Marx (eds.), *Handbook on In-Work Poverty*, Cheltenham, Edward Elgar, pp. 50-69.
- Lombardi, C.; Riveiro, M.; Vargas, C.; Azcarate, J.; Jasín, S. y Rivero, P. (2016), “Género y clase social. Una doble mirada a los cambios en la estratificación social. Argentina 2003-2013”, *Unidad Sociológica*, 7(2), junio-septiembre, pp. 52-61.
- Longhi, F. y Osatinsky, A. (2016), “Estructura productiva, pobreza y problemas de empleo en las provincias pampeanas y nortenas de Argentina en los primeros años del siglo XXI”, *Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía*, 26 (1), 77-99, disponible en <[dx.doi.org/10.15446/rcdg.v26n1.51011](https://doi.org/10.15446/rcdg.v26n1.51011)>.
- Lustig, N. y López-Calva, L. F. (2010), “Explaining the Decline in Inequality in Latin America: Technological Change, Educational Upgrading, and Democracy”, en N. Lustig y L. F. López-Calva, *Declining Inequality in Latin America: A decade of Progress?*, Nueva York-Washington, UNDP- Brookings Institution Press.
- Maceira, V. (2021), “Cambios en la estructura socio-ocupacional en Argentina en el período 2016 -2020: entre la restauración neoconservadora y la crisis sociosanitaria”, *Realidad Económica*, 51 (344).
- Maceira, V.; Ariovich, A.; Crojetthovic, M.; Jiménez, C. y Founier, M. (2020), *El Conurbano en la cuarentena. Condiciones de vida y estrategias de los hogares*, “Prevención y monitoreo del covid-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”, proyecto de investigación apoyado por la Agencia I+D+i, UNGS.

- Maître, B.; Nolan, B. y Whelan, C. (2012), “Low Pay, In-Work Poverty And Economic Vulnerability: A Comparative Analysis Using EU-SILC”, *Manchester School*, 80(1), pp. 99-116, disponible en <doi.org/10.1111/j.1467-9957.2011.02230.x>.
- Maletta, H. (2012), *Análisis de panel con variables categóricas*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero.
- Manzanelli, P.; Calvo, D. y Basualdo, E. M. (2020), *Un balance preliminar de la crisis económica en la Argentina en el marco del Coronavirus* [en línea], *Documento de Trabajo*, n°17, Flacso-Cifra, disponible en <www.flacso.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/Crisis-coronavirus_DT-FLACSO_AEYTCIFRA_junio2020.pdf>.
- Martínez, R.; Palma, A. y Velásquez, A. (2020), *Revolución tecnológica e inclusión social. Reflexiones sobre desafíos y oportunidades para la política social en América Latina*, Santiago de Chile, Cepal-Serie Políticas Sociales n° 233 (LC/TS.2020/88).
- Martínez Domínguez, M.; Gómez Navarro, D. A. y Morales López, J. (2021), “Determinantes de la brecha digital en comunidades indígenas de Oaxaca”, *Controversias y Concurrencias Latinoamericanas*, 12(22), pp. 45-69.
- Martínez Franzoni, J. (2008a), “Bienestar y regímenes de bienestar. ¿Qué son y por qué abordarlos?”, en J. Martínez Franzoni (ed.), *¿Arañando bienestar? Trabajo remunerado, protección social y familias en América Central*, Buenos Aires, Clacso, pp. 23-51.
- (2008b), *Domesticar la incertidumbre en América Latina. Mercado laboral, política social y familias*, San José, Editorial UCR.
- Masello, D. (2017), “Los problemas estructurales, sus vínculos con el mercado de trabajo y las incertidumbres del desarrollo argentino”, *La Gaceta*, San Miguel de Tucumán.
- (2021), “Problemas actuales de la economía informal. Desventajas de una definición generalista del empleo informal para sociedades desequilibradas”, *Revista Interdisciplina*, 9(23), enero-abril.

- Masello, D. y Granovsky, P. (2017), “La estructura socioproductiva, los problemas del mercado de trabajo y los desafíos de la formación profesional”, *Revista Latinoamericana de Investigación Crítica*, IV(7), julio-diciembre.
- (2021), “Problemas estructurales, mercado de trabajo y el covid-19”, en A. Salvia (coord.), *Efectos de la pandemia covid-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana, Observatorio de la Deuda Social. Una mirada crítica sobre el impacto heterogéneo del actual escenario tras una década de estancamiento económico (2010-2020)*, Documento Estadístico-Barómetro de la Deuda Social Argentina, Buenos Aires, Educa.
- Masello y otros (2021), “Una teoría del potencial dinámico como un aporte al desarrollo argentino”, *Dossier sobre Calidad del Empleo y Estructura Socio-productiva*, n° 11, Buenos Aires, Untref-Fundación Uocra.
- Mattio, E. (2012), “¿De qué hablamos cuando hablamos de género? Una introducción conceptual”, en J. M. Morán Faúndes; M. C. Sgró Ruata y J. M. Vaggione (eds.), *Sexualidades, desigualdades y derechos. Reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos*, Córdoba, Ciencia, Derecho y Sociedad Editorial.
- Maurizio, R. (2021), *Empleo e informalidad en América Latina y el Caribe. Una recuperación insuficiente y desigual*, nota técnica, Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2021, Ginebra, OIT, disponible en <www.ilo.org/americas/publicaciones>.
- Meil, G. (1999), *La postmodernización de la familia española*, Madrid, Acento.
- Messina, J. y Silva, J. (2018), *Wage Inequality in Latin America: Understanding the Past to Prepare for the Future. Latin American Development Forum*, Washington DC, World Bank.
- (2019), “Twenty Years of Wage Inequality in Latin America”, *Policy Research Working Paper*, 8995, Washington DC, World Bank.

- Mezzer, J. (1983), “Medición e interpretación del sector informal urbano”, Prealc.
- Milanovic, B. (2020), “A great equalizer”, *International Politics and Society Journal*, disponible en <www.ips-journal.eu/regions/global/a-great-equaliser-4135/>.
- Ministerio de Desarrollo Productivo (MDP) (2020), *Informe técnico. El impacto económico del coronavirus en Argentina*, 8 de mayo, IF-2020-2022030888204-APN-UGA#MDP, Buenos Aires, Ministerio de Desarrollo Productivo.
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MjyDH) (2020), *Medidas del Estado argentino para la protección de los derechos humanos durante la pandemia del covid-19*, Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) (2020), “Estado de la negociación colectiva. Segundo trimestre de 2020”, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponible en <www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/negociacioncolectiva/202002T_negociacionColectiva.pdf>.
- (2021), “Indicadores de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), Evolución del empleo registrado del sector privado en los principales centros urbanos”, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponible en <www.trabajo.gob.ar/estadisticas/eil/index.asp>.
- (2022), “Panorama mensual del trabajo registrado. Informe técnico. Datos a noviembre y diciembre de 2021”, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponible en <www.trabajo.gob.ar/downloads/estadisticas/panorama/panorama_del_trabajo_registrado_2202.pdf>.
- Mora, J. (2021), “Análisis del desempleo y la ocupación después de una política estricta de confinamiento por covid-19 en Cali”, *Lecturas de Economía*, 94, pp. 165-193.

- Moyano, R. (2020), “Tecnologías y estructura social. Condiciones estructurales de inclusión digital en la población infantil de Argentina”, *Revcom. Revista Científica de la Red de Carreras de Comunicación Social*, 10, Universidad Nacional de La Plata.
- Muñiz Terra, L.; Pla, J. y Riveiro M. (2019), “Estructuras sociales en perspectivas comparadas: un análisis de las desigualdades de clase en Europa y América Latina a principios del siglo XXI”, presentado en el XIII Congreso Español de Sociología, Valencia.
- Naciones Unidas (2015), *Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015*, Nueva York, Naciones Unidas.
- Neffa, J. (2020), “Modo de desarrollo y relación salarial en crisis. Argentina en el período 2015-2019”, en J. C. Neffa y E. de la Garza Toledo (coords.), *Trabajo y crisis de los modelos productivos en América Latina*, Buenos Aires, Clacso, pp. 275-340.
- Niembro, A. y Calá, C. D. (2020), “El (desigual) impacto económico territorial de la pandemia de covid-19 en Argentina. Una propuesta de medición a partir de la estructura productiva y la movilidad local”, 25° Reunión Anual Red Pymes Mercosur, pp. 172-185, disponible en <nulan.mdp.edu.ar/3466/1/niembro-cala-2020.pdf>.
- (2021), “El potencial impacto económico de la pandemia por covid-19 en las regiones argentinas y sus patrones productivos sectoriales en el período abril-junio de 2020”, *Estudios Gerenciales*, 37(159), pp. 210-225.
- Nolan, B.; Esping-Andersen, G.; Whelan, C.; Maitre, B. y Wagner S. (2010), “The role of social institutions in intergenerational mobility”, *Demosoc Working Paper*, 36, Barcelona, disponible en <www.researchgate.net/publication/46467644_The_Role_of_Social_Institutions_in_Inter-Generational_Mobility>.
- Norris, P. (2001), *Digital Divide. Civic Engagement, information poverty and the internet worldwide*, Cambridge, Cambridge University Press.

- Nun, J. (1969), “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”, *Revista Mexicana de Sociología*, 5(2).
- (1999), “El futuro del empleo y la tesis de la masa marginal”, *Desarrollo Económico*, 38(152), pp. 985-1004.
- (2001), *Marginalidad y exclusión social*, Buenos Aires, FCE.
- (2003 [1969]), “La teoría de la masa marginal” [versión original: “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”], en J. Nun (comp.), *Marginalidad y exclusión social*, Buenos Aires, FCE, pp. 35-140.
- Nun, J.; Marín, J. C. y Murmis, M. (1968), “La marginalidad en América Latina. Informe preliminar”, *Documento de Trabajo*, n° 35, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, CIS.
- Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) (2021), “Crisis del empleo, pobreza de ingreso y privaciones estructurales. Argentina Urbana 2010-2021. Informe de avance”, archivo PDF, presentación de PowerPoint.
- Offe, C. (1990), “La política social y la teoría del Estado”, en C. Offe (ed.), *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, Madrid, Alianza, pp. 72-104.
- Oliva, M. (2017), *Desafíos del análisis del tiempo en las ciencias sociales*, Buenos Aires, TeseoPress, disponible en <www.teseopress.com/desafiosdelanalisisdeltiempo>.
- (2018), “Transiciones en la pobreza por ingresos en el partido de Tres de Febrero en el período 2000-2005. El tiempo en las ciencias sociales”, *Laboratorio*, 18(28), primer semestre.
- Oliveira, O. y Salles, V. (2000), “Reflexiones teóricas para el estudio de la reproducción de la fuerza de trabajo”, en E. de la Garza Toledo (coord.), *Tratado latinoamericano de sociología del trabajo*, México, El Colegio de México-Flacso-UNAM-FCE, pp. 619-643.
- OIT (2020a), *Covid-19 y el mercado de trabajo en Argentina* [en línea], Informe técnico, OIT, disponible en <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/-ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_754620.pdf>.

- (2020b), *Panorama laboral en tiempos de covid. Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe*, disponible en <www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_749659/lang-es/index.htm>.
 - (2020c), *Panorama laboral 2020. América Latina y el Caribe* [en línea], edición Covid-19, OIT, disponible en <www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-americas/-ro-lima/documents/publication/wcms_764630.pdf>.
 - (2021), *Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2021*, Ginebra, OIT, disponible en <www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends2021/lang-es/index.htm>.
- ONU (2015), *Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030*, Nueva York, ONU.
- Pedraza Bucio, C. I. (2021), “La brecha digital de género como vértice de las desigualdades de las mujeres en el contexto de la pandemia por covid-19”, *Logos*, XLIX(136), enero-junio, pp. 9-22.
- Pegoraro, J. (1995), “Teoría social, control social y seguridad. El nuevo escenario de los años noventa”, en M. Pavarini y J. S. Pegoraro, *El control social en el fin del siglo*, Buenos Aires, Secretaría de Posgrado, Facultad de Ciencias Sociales, Oficina de Publicaciones, CBC.
- Pérez Sáinz, J. P. (1991), *Informalidad urbana en América Latina. Enfoques, problemáticas e interrogantes*, Nueva Sociedad-Flacso.
- Piaget, J. (1986), “La explicación en sociología”, en *Estudios sociológicos*, Buenos Aires, Planeta Agostini.
- Pinto, A. (1970a), “Heterogeneidad estructural y modelo de desarrollo reciente de la América Latina”, en *Inflación. Raíces estructurales*, México, FCE.
- (1970b), “Notas sobre la naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de América Latina”, en *Dos polémicas sobre el desarrollo de América Latina*, Santiago de Chile, Ilpes.
 - (1970c), *Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina*, México, FCE.

— (1976), “Naturaleza e implicaciones de la heterogeneidad estructural de América Latina”, *El Trimestre Económico*, 37(145), pp. 83-100.

Pitch, T. (1996), “¿Qué es el control social?”, *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, 8, pp. 51-72.

Pla, J. (2022-en prensa), “Entre la producción y la reproducción: estructura de clases y tareas de cuidados en Argentina”, en S. Ruesga y M. Cebollada Gray, *Debates sobre socioeconomía. Precariedad laboral, informalidad y mujer. Políticas de cuidados*, México, Editorial Instituto Belisario Domínguez (IBD), Senado de la República.

Pla, J.; Poy, S. y Salvia, A. (2021), “La estructura de clases socioocupacionales y la calidad del empleo en la Argentina (1998-2020)”, trabajo presentado en el VI Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina, México.

— (2022), “Structural informality and occupational classes in a peripheral country: precariousness and in-work poverty in Argentina 2003-2020”, *Revista de Economía Mundial*, 60, pp. 221-243.

Poy, S. (2019), *Mercado de trabajo, políticas sociales y condiciones de vida*, Buenos Aires, TeseoPress, disponible en <www.teseopress.com/condicionesdevida>.

— (2020), “Heterogeneidad laboral y procesos de empobrecimiento de los hogares en Argentina (2003-2017)”, *Problemas del Desarrollo*, 51(201), pp. 3-28.

— (2021), “Política social y cambios en el balance reproductivo de los hogares en Argentina”, en *Estudios Sociológicos*, 39(116), pp. 433-466.

— (2022, en prensa), “Trabajadores pobres ante la irrupción de la pandemia de covid-19 en un mercado laboral segmentado: el caso argentino”, *Estudios del Trabajo*, 62.

- Poy, S.; Robles, R.; Alfageme, C. y Salvia A. (2021), “Fragmentación y heterogeneidad de la estructura económico-ocupacional urbana argentina ante la crisis por la pandemia de covid-19”, trabajo presentado en el VI Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina, México.
- Poy, S.; Robles, R. y Salvia, A. (2020), “La estructura ocupacional urbana argentina durante las recientes fases de expansión y estancamiento (2004-2019)”, *Trabajo y Sociedad*, 36(22), pp. 231-249.
- (2021), “¿Una misma desigualdad? Heterogeneidad estructural, protección social y distribución del ingreso en clave comparada”, en *Revista Española de Sociología*, 30(3), pp. 1-21.
- Prebisch, R. (1949), *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*, Santiago de Chile, Naciones Unidas.
- (1981), “Introducción”, en *Capitalismo periférico, crisis y transformación*, México, FCE.
- (1984 [1981]), *Capitalismo periférico. Crisis y transformación*, México, FCE.
- Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe (Prealc) (1978), *Sector informal. Funcionamiento y políticas*, Santiago de Chile, OIT.
- Ragnedda, M. y Muschert, G. W. (2013), “Introduction”, en M. Ragnedda y G. W. Muschert (eds.), *The digital divide: The Internet and social inequality in international perspective*, Abingdon, Routledge, pp. 1-14, disponible en <doi:10.4324/9780203069769>.
- Razavi, S. (2007), “The Political and Social Economy of Care in a Development Context. Conceptual Issues, Research Questions and Policy Options”, *Gender and Development Programme Paper*, n° 3.

- Riveiro, M. (2018), “La desigualdad social en la diversidad sexual. Aproximaciones a partir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Argentina 2010”, presentado en X Jornadas de Sociología de la UNLP, Ensenada.
- (2020), “Las relaciones de género y clase social en la reproducción de los hogares”, en J. Moreno y M. Martínez (eds.), *Amores ilícitos, diversidad, desigualdad y filiación*, Alicante, Universidad Miguel Hernández.
- Rivoir, A. y Escuder, S. (2018), “Dispositivos digitales en el hogar: incidencia de las desigualdades y las políticas públicas de acceso partir de un análisis multivariado”, *Observatorio Journal*, 12(3), pp. 295-311.
- Robles, C.; Macrini, P. y Robledo, S. (2021), “‘Las tareas que son de mujer, ahora las hago yo también’. Masculinidades y cuidados en tiempos de pandemia”, *ConCienciaSocial*, 4(8).
- Rodríguez, O. (1998), “Heterogeneidad estructural y empleo”, *Revista de la Cepal*, número extraordinario, octubre, pp. 315-321.
- (2001), “Prebisch: actualidad de sus ideas básicas”, *Revista de La Cepal*, 75, 41-52.
- Rodríguez-Castelán, C.; López-Calva, L. F.; Lustig, N. y Valderrama, D. (2016), “Understanding the Dynamics of Labor Income Inequality in Latin America”, *Policy Research Working Paper*, 7795, Washington DC, World Bank.
- Rodríguez Enríquez, C. (2019), “Trabajo de cuidados y trabajo asalariado: desarmando nudos de reproducción de desigualdad”, *Theomai*, 39, pp. 78-99.
- Rogosa, D., Brandt, D. y Zimowski, M. (1982), “A growth curve approach to the measurement of change”, *Psychological Bulletin*, 92(3), 726.

- Rotondi, V.; Billari, F.; Pesando, L. M. y Kashyap, R. (2020), *Desigualdad digital de género en América Latina y el Caribe*, Banco Interamericano de Desarrollo, disponible en <socialdigital.iadb.org/es/gdi/solutions/acceso-y-conectividad/desigualdad-digital-de-genero-en-america-latina-y-el-caribe>.
- Roude, C. y Arce, R. A. (2020), “El impacto de la pandemia sobre el mercado laboral”, Informe Ciefce n° 36: Mercado laboral, disponible en <www.fceco.uner.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/Informe-CIEFCE-n%C2%B036.-El-impacto-de-la-pandemia-sobre-el-mercado-laboral.pdf>.
- Rubio, M.; Escaroz, G.; Machado, A.; Palomo, N.; Vargas, L.; Cuervo, M. (2020), *Protección social y respuesta al covid-19 en América Latina y el Caribe*, Unicef.
- Salvia, A. (2007), Consideraciones sobre la transición a la modernidad, la exclusión social y la marginalidad económica. Un campo abierto a la investigación social y al debate político. En Salvia, Agustín y Chávez Molina, Eduardo (comps.), *Sombras de una marginalidad fragmentada. Aproximaciones a la metamorfosis de los sectores populares de la Argentina*. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- (2010), “De marginalidades sociales en transición a marginalidades económicas asistidas”, *Revista Encrucijadas*, 48.
- (2012), *La trampa neoliberal. Un estudio sobre los cambios en la heterogeneidad estructural y la distribución del ingreso en la Argentina: 1990-2003*, Buenos Aires: Eudeba.
- (2013), “Heterogeneidad estructural y desigualdad social en la Argentina de las últimas dos décadas de historia económica”, *Revista de Investigación en Ciencias Sociales*, 84, pp. 46-55.
- (2015a), “Heterogeneidad estructural, desigualdad económica y globalización en América Latina”, en E. Hernández Gómez y M. Ramírez Urquidy (comps.), *Bienestar y pobreza en América Latina. Una visión desde la frontera norte de México*, Mexicali, Universidad Autónoma de Baja California-Ediciones Once Ríos.

- (2015b), “Reflexiones finales. Algunas claves para entender el subdesarrollo persistente argentino”, en J. Lindenboim y A. Salvia (comps.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014*, Buenos Aires, Eudeba.
 - (2019), “Las economías sociales de la pobreza y acciones colectivas en la clave de la tesis de la masa marginal”, en M. Heredia; S. Pereyra y M. Svampa (2019) (coords.), *José Nun y las ciencias sociales. Aportes que perduran*, Buenos Aires, Biblos.
- Salvia, A. y Chávez Molina, E. (2007), *Sombras de una marginalidad fragmentada. Aproximaciones a la metamorfosis de los sectores populares de la Argentina*, Buenos Aires, Miño y Dávila.
- Salvia, A y Poy, S (2020), “Presentación del estudio: impacto social de las medidas de aislamiento obligatorio por COVID-19 en el AMBA. Informe de Avance”. Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.
- Salvia, A. y Vera, J. (2011), “Cambios en la estructura ocupacional y en el mercado de trabajo durante fases de distintas reglas macroeconómicas (1992-2010)”, *Estudios del Trabajo*, 41-42, pp. 21-25.
- (2013), “Heterogeneidad estructural y distribución de los ingresos familiares en el Gran Buenos Aires (1992-2010)”, *Desarrollo Económico*, 52(207), pp. 427-462.
- Salvia, A.; Bonfiglio, J. y Robles, R. (2021), *Efectos de la pandemia covid-19 sobre la dinámica del bienestar en la Argentina urbana*, Buenos Aires, Educa.
- Salvia, A.; Fachal, M. y Robles, R. (2018), “Estructura social del trabajo”, en J. Piovani y Salvia, A. (comps.), *La Argentina en el siglo XXI. Cómo somos, vivimos y convivimos en una sociedad desigual. Encuesta Nacional sobre la Estructura Social*, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 113-146.

- Salvia, A.; Poy, S. y Vera, J. (2018), “Políticas sociales, pobreza y bienestar. Argentina: análisis comparado de distintos regímenes socioeconómicos (1992-2012)”, en F. Cortés (comp.), *Temas de política social de México y América Latina*, México, Colmex-UNAM, pp. 159-231.
- (2020), “Heterogeneidad de la estructura ocupacional, desigualdad distributiva y obstáculos a la equidad en la Argentina (1974-2014)”, *Papel Político*, 25.
- Salvia, A.; Vera, J. y Poy, S. (2015), “Cambios y continuidades en la estructura ocupacional urbana argentina”, en J. Lindenboim y A. Salvia (coords.), *Hora de balance: proceso de acumulación, mercado de trabajo y bienestar. Argentina, 2002-2014*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 133-172.
- Salvia, A.; Robles, R. y Fachal, M. N. (2019), “Empleo, educación e ingresos: el caso del Gran Buenos Aires (1974-2016)”, en M. Domínguez Amorós; T. Fernández Aguerre e I. Tuñón (2019), *Nuevos y viejos clivajes de la desigualdad educativa en Iberoamérica*, Buenos Aires, Clacso.
- Sautú, R. (1992), “Teoría y medición del estatus ocupacional: escalas ocupacionales objetivas y de prestigio”, *Cuadernos del Instituto de Investigaciones FCS*, n° 10.
- Savage, M.; Devine, F.; Cunningham, N.; Friedman, S.; Laurison, D.; Miles, A.; Snee, H. y Taylor, M. (2015), “On Social Class, Anno 2014”, *Sociology*, 49(6), pp. 1011-1030, disponible en <doi.org/10.1177/0038038514536635>.
- Savage, M.; Devine, F.; Cunningham, N.; Taylor, M.; Li, Y.; Hjellbrekke, J.; Le Roux, B.; Friedman, S. y Miles, A. (2013), “A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s Great British Class Survey Experiment”, *Sociology*, 47(2), pp. 219-250, disponible en <doi.org/10.1177/0038038513481128>.
- Scheerder, A.; Van Deursen, A. y Van Dijk, J. A. (2017), “Determinants of Internet Skills, Use and Outcomes. A Systematic Review of the Second and Third Level Digital Divide”, *Telematics and Informatics*, 34(8), pp. 1607-1624, disponible en <dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.007>.

- (2019), “Taking advantage of the Internet: A qualitative analysis to explain why educational background is decisive in gaining positive outcomes”, *Poetics*, 80, disponible en <doi.org/10.1016/j.poetic.2019.101426>.
- Singer, J. y Willet, J. (2003), *Applied Longitudinal Data Analysis: Modeling Change and Event Occurrence*, Óxford, Oxford University Press.
- Solís, P. y Boado, M. (eds.) (2016), *Y sin embargo se mueve... Estratificación social y movilidad intergeneracional de clase en América Latina*, Centro de Estudios Espinosa Iglesias-/Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
- Solís, P.; Chávez Molina, E. y Cobos, D. (2020), “Class Structure, Labor Market Heterogeneity and Living Conditions in Latin America”, *Latin American Research Review*, 54.
- Svampa, M. (2005), *La sociedad excluyente*, Buenos Aires, Taurus.
- Tokman, V. E. (1991), “El sector informal en América Latina”, OIT.
- (2006), *Inserción laboral, mercados de trabajo y protección social*, Santiago de Chile, Cepal-Serie Financiamiento del Desarrollo n° 170.
- (2007), *Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina*, Santiago de Chile, Cepal.
- Torche, F. (2014), “Intergenerational Mobility and Inequality: The Latin American Case”, *Annual Review of Sociology*, 40, pp. 619-642.
- Torrado, S. (1992), *Estructura social de Argentina. 1945-1983*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.
- (2006), “El enfoque de las estrategias familiares de vida en América Latina. Orientaciones teórico-metodológicas”, en S. Torrado (ed.), *Familia y diferenciación social*, Buenos Aires, Eudeba, pp. 15-32.

- Treas, J. y Drobnič, S. (eds.) (2010), *Dividing the Domestic. Men, Women, and Household Work in Cross-National Perspective*, Stanford, Stanford University Press.
- Triano Enríquez, M. (2021), “Estructura de clases y precariedad laboral durante la pandemia por covid-19”, trabajo presentado en el VI Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina, México.
- Trucco, D. y Palma, A. (2020), *Infancia y adolescencia en la era digital. Un informe comparativo de los estudios de Kids Online del Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay*, Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/18/REV.1), Santiago de Chile, Cepal.
- Trujillo Salazar, L. y Villafañe, S. (2021), *La dimensión territorial del riesgo de informalidad laboral en la Argentina*, Documentos de Proyectos, Santiago de Chile, Cepal.
- Unicef (2020), *Actualización estimación pobreza infantil*.
- Van Deursen, A. J. (2020), “Digital Inequality During a Pandemic: Quantitative Study of Differences in covid-19. Related Internet Uses and Outcomes Among the General Population”, *Journal of Medical Internet Research*, 22(8): e20073, disponible en: <www.jmir.org/2020/8/e20073/>.
- Van Deursen, A. J. y Van Dijk, J. A. (2014), “The digital divide shifts to differences in usage”, *New Media & Society*, 16(3), pp. 507-526, disponible en <journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444813487959>.
- (2019), “The first-level digital divide shifts from inequalities in physical access to inequalities in material access”, *New Media & Society*, 21(2), pp. 354-375, disponible en <journals.sagepub.com/doi/10.1177/1461444818797082>.
- Van Dijk, J.A. (2006), “Digital divide research, achievements and shortcomings”, *Poetics*, 34(4-5), pp. 221-235, disponible en <doi.org/10.1016/j.poetic.2006.05.004>.

- (2013), “Inequalities in the Network Society”, en K. Orton-Johnson y N. Prior (eds.), *Digital sociology: critical perspectives*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, pp. 105-124, disponible en <link.springer.com/chapter/10.1057/9781137297792_8>.
- (2020), *The Digital Divide*, Wiley, disponible en <www.perlego.com/book/1536601/the-digital-divide-pdf>.
- Viveros Vigoya, M. (2016), “La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación”, *Debate Feminista*, 52, pp. 1-17.
- Wainer, A. (2021), “Una nueva ‘década perdida’ en la Argentina y su crónica crisis en el balance de pagos”, *Cuadernos de Economía Crítica*, 7(14), pp. 53-79.
- Wainer, A. y Schorr, M. (2014), “La economía argentina en la posconvertibilidad: problemas estructurales y restricción externa”, *Realidad Económica*, 286, pp. 137-174.
- Wainerman, C. (2003), “La reestructuración de las fronteras de género”, en C. Wainerman (comp.), *Familia, trabajo y género*, Buenos Aires, FCE.
- Weller, J. (2020), *La pandemia del covid-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales*, Santiago de Chile, CEPAL.
- Williamson, J. (1990), “What Washington means by policy reform?”, en J. Williamson, *Latin American Adjustment. How Much has Happened?*, Washington, Institute for International Economics.
- (2003), “An agenda for restarting growth and reform”, en P. P. Kuczynski y J. Williamson, *After the Washington Consensus: Restarting Growth and Reform in Latin America*, Washington, Institute for International Economics.
- Witte, J. y Mannon, S. (2010), *The Internet and social inequalities*, Londres, Routledge.
- World Inequality Lab (2022), *World Inequality Report 2022*, PNUD.

- Xie, Y. (1995), "Review of *The constant flux: a study of class and mobility in industrial societies* by Robert Erikson and John Goldthorpe", *Sociological Inquiry*, 65, pp. 114-117.
- Yates, S.; Kirby, J. y Lockley, E. (2015), "Digital Media Use: Differences and Inequalities in Relation to Class and Age", *Sociological Research Online*, 20(4), pp. 71-91, disponible en <doi.org/10.5153/sro.3751>.
- Zapata, C. B.; Arraíza, P. M.; Da Silva, E. F. y Das Chagas Soares, E. (2017), "Desafíos de la inclusión digital: antecedentes, problemáticas y mediciones de la brecha digital de género", *Psicología, Conocimiento y Sociedad*, 7(2), pp. 162-198.

Acerca de las y los autores

Camila Alfageme. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Nara Alvarez. Investigadora en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Lucía Bagini. Investigadora y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Danila Borro. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Eugenia Dichiera. Auxiliar de investigación del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Eduardo Donza. Investigador del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina y del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza.

María Noel Fachal. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto

de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Silvana Galeano Alfonso. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad de Buenos Aires.

Gabriela Gómez Rojas. Investigadora del Centro de Estudios Sociales y Políticos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad de Buenos Aires.

Sofía Jasín. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) con sede en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Valentina Ledda. Becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo.

Diego Masello. Investigador en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Miguel Oliva. Investigador en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Jésica Lorena Pla. Investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad de Buenos Aires.

María Albina Pol. Investigadora en el Instituto de Trabajo y Producción y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Santiago Poy. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en el Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). Docente de la UCA y de la Universidad de Buenos Aires.

Manuel Riveiro. Investigador y docente del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Ramiro Robles. Becario doctoral del Fondo de Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) en el Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Agustín Salvia. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Director de investigación del Programa Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Pontificia Universidad Católica Argentina y Director del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Rodrigo Segovia. Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) / Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Martina Zubarán. Investigadora en el Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados (CIEA) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

agustín salvia, santiago poy, jésica lorena pla
la sociedad argentina en la pospandemia

Mientras se van moderando los ecos de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, sus consecuencias económicas y sociales más profundas están todavía lejos de haberse revelado por completo. ¿Qué cambios fueron coyunturales y cuáles significaron transformaciones duraderas que modificarán nuestra imagen y nuestra experiencia de la sociedad argentina? Este libro, que reúne los hallazgos de un verdadero experimento de ciencias sociales en tiempo real, busca establecer los alcances del impacto del covid-19 en la estructura social y el mercado de trabajo en la Argentina, marcados desde hace décadas por desigualdades que parecen imperturbables.

A partir de datos recopilados entre 2019 y 2021 por el Indec y el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, investigadores e investigadoras de todo el país muestran en estas páginas cómo el covid-19 marcó un nuevo ciclo de acumulación de desventajas para los más vulnerables y, al hacerlo, puso de manifiesto la fragilidad en la que gran parte de los hogares de nuestro país reproducen sus vidas.

Sin embargo, no cabe culpar solo al virus. La pobreza crónica, las persistentes brechas distributivas y la marginalidad estructural afectan a la sociedad argentina desde hace décadas, y se han vuelto en buena medida independientes de las crisis periódicas. Sobre ese andamiaje de desigualdad, esta radiografía de la Argentina en la pospandemia describe un mercado de trabajo heterogéneo y crecientemente informalizado, pone en evidencia las disparidades en la organización del trabajo doméstico y de cuidados, muestra las desigualdades regionales y analiza el impacto positivo pero insuficiente de las políticas implementadas por el Estado para contener la emergencia.

Este libro, necesario y urgente, viene a enriquecer con números confiables y análisis fundados un debate actualizado por la pandemia. Y aspira así a hacer honor a aquella prevención del politólogo José Nun, inspirador del marco conceptual que guió la escritura de estas páginas: “El mayor éxito que puedan alcanzar las advertencias en las ciencias sociales es el de inspirar soluciones para evitar que se cumplan”.